

CONSORCIO ECO-AMÉRICAS

Bogotá, D.C., 05 de julio de 2011

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
Rad No. 2011-409-018554-2
Fecha: 05/07/2011 15:15:48->201
OEM: CONSORCIO ECOAMERICAS
Anexos:95 FOLIOS



Señores
Instituto Nacional de Concesiones-INCO
Atn. Dr. Hernán Santana Ferrín
Coordinador Grupo Interno de Trabajo Jurídico
Edificio Ministerio de Transporte
Avenida El Dorado CAN, Tercer Piso, Bogotá D.C., Colombia
Correo electrónico: mgalindo@inco.gov.co; lruiz@inco.gov.co
Fax: (+ 57 1) 3240800

Referencia: Documento de Convocatoria No. SEA-CM-001-2011

INTERESADO No. 13 CONSORCIO ECO-AMÉRICAS

2.1. CAPACIDAD JURIDICA

Solicitud aclaración:

"El interesado de folios 282 a 288 aporta los documentos mediante los cuales acredita la experiencia general a los cuales no se acompaña la fianza requerida en el documento de convocatoria, conforme al cual: "Así mismo, los miembros del Consorcio o Unión Temporal que sean MAP y acrediten experiencia, deberán, cada uno, suscribir una Fianza, cuya única condición suspensiva válida será la Adjudicación. (...) Cualquier condición adicional a las aquí establecidas para la Fianza, dará lugar a que la Manifestación de Interés sea rechazada." Numeral 3.3.2 Requisitos Habilitantes Exigidos, (b) Existencia, vigencia, representación legal y Capacidad Jurídica, (iii) Particularidades de las Estructuras Plurales, (1) Consorcios o Uniones Temporales, octava viñeta."

Respuesta:

Improcedencia de la exigencia de fianza al miembro del Consorcio Eco-américas que acredita la experiencia.

1. La Evaluación parece considerar que la estructuración de las reglas del proceso de selección está regida por la libre autonomía de la voluntad y por la posibilidad del libre ejercicio por la administración de prerrogativas excepcionales. Ello desconoce la normatividad de orden público, general y especial, aplicable al caso, y que el proceso de selección contractual es reglado.

CONSORCIO ECO-AMÉRICAS

En ese sentido, la exigencia de la fianza –que estaría en función del contrato de interventoría, en caso de ser adjudicado–, en particular con respecto al Consorcio Eco-américas, implica la violación directa de distintas normas, como se evidencia a continuación:

-La fianza, que en sí misma es un contrato accesorio, se convertiría para el adjudicatario, de manera general, en un elemento relevante de toda la relación contractual con la entidad. En ese contexto, el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 prevé:

"Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza.

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, **siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración. (...)** (negritas nuestras)

Por consiguiente, la autonomía de la voluntad que puede ejercer la administración tiene como límites las disposiciones legales, en especial las de orden público y los principios de la propia ley de contratación, entre los cuales están que la administración sólo puede imponer cláusulas o hacer exigencias contractuales excepcionales en los precisos casos autorizados por las leyes, y que las estipulaciones de los contratos serán aquellas que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y la propia ley de contratación correspondan a su esencia y naturaleza.

Además, se recuerda i) que entre los deberes de las entidades estatales está, conforme al artículo 4, numeral 9º, de la Ley 80 de 1993, actuar de tal modo que por causas a ellas imputables no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, debiendo corregir los desajustes que pudieren presentarse, y ii) que las potestades excepcionales están precisamente reglamentadas en los artículos 14 a 19 de misma ley. Fuera de esos casos de ejercicio de potestades excepcionales, rige el principio de interpretación previsto en el artículo 28 ibídem, conforme al cual:

"En la interpretación de las normas sobre contratos estatales, relativas a procedimientos de selección y escogencia de contratistas y en la de las cláusulas y estipulaciones de los contratos, se tendrá en consideración los fines y los principios de que trata esta ley, los mandatos de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos" (negritas nuestras).

Por último, conforme al artículo 24 ibídem, en desarrollo del principio de transparencia, en los pliegos o convocatorias "no se incluirán condiciones o exigencias de imposible cumplimiento" (numeral 5, literal d), imposibilidad que se refiere no sólo al aspecto material sino también al jurídico, y "las autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder" (numeral 8).

CONSORCIO ECO-AMÉRICAS

2. En ese contexto normativo, de obligatorio cumplimiento, se destaca que el numeral 1 del artículo 7 de la Ley 80 de 1993 define el consorcio en los siguientes términos:

“Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, **respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.** En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman” (negritas nuestras)

Es decir, que un rasgo jurídico esencial del consorcio es el régimen de solidaridad que se establece, para efectos de responsabilidad, con respecto a sus miembros. Eso de por sí hace improcedente la pretensión de exigir fianza a uno o a todos los consorciados, dado el carácter subsidiario de ésta y que la entidad ya está asegurada en más alto grado con la responsabilidad solidaria.

Pero, sobre todo, tal exigencia con respecto a los miembros de consorcios viola de manera directa la regulación legal de la fianza. En efecto, el artículo 2361 del Código Civil define la fianza en los siguientes términos:

“La fianza es una obligación accesorias, en virtud de la cual **una o más personas responden de una OBLIGACIÓN AJENA**, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o parte, si el deudor principal no la cumple.
La fianza puede constituirse no sólo a favor del deudor principal, sino de otro fiador” (negritas, mayúsculas y subrayado nuestros)

Es claro, entonces, que legalmente lo que se garantiza con una fianza es una **obligación ajena**, no una obligación propia; es decir, que el fiador es un tercero con respecto a la obligación.

Contrario a eso, en el caso en análisis, esto es, la exigencia de fianza a un consorciado por el hecho de haber acreditado la experiencia, no estamos frente a un tercero ajeno a la obligación, sino frente a uno de los obligados, y no en cualquier grado: cada uno de los consorciados es deudor solidario “de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato”. Por consiguiente, la exigencia de fianza al miembro del Consorcio Eco-américas que acredita la experiencia resulta manifiestamente violatoria de lo previsto en el artículo 2361 del Código Civil.

Por lo demás, se destaca que tal exigencia de fianza es inocua, ésta nace muerta, por cuanto al ser el consorciado deudor solidario y no tercero, se genera, por ministerio de la ley, la extinción de la fianza por confusión de calidades. En efecto, dispone el artículo 2408 del Código Civil:

“**Se extingue la fianza por la confusión de las calidades** de acreedor y fiador, o de deudor y fiador; pero en este segundo caso la obligación del subfiador subsistirá” (negritas nuestras)

Así las cosas, resulta del todo improcedente y contrario a las normas imperativas reseñadas la exigencia de fianza en cuestión.

CONSORCIO ECO-AMÉRICAS

-Además de lo anterior, como se dijo el proceso contractual público es reglado y en él la administración sólo puede imponer cláusulas o exigencias contractuales excepcionales en los eventos legales que se lo permitan. En ese sentido, el régimen de garantías exigibles a los oferentes y contratistas está expresamente regulado (Ley 1150 de 2007, artículo 7, y Decretos 4828 de 2008 y 2493 de 2009), lo cual, además de asegurar la protección adecuada de los intereses de la administración, constituye a la vez una seguridad jurídica para los oferentes y contratistas, quienes están obligados a otorgar las garantías pero en el marco de tal regulación.

En el caso de los consorcios, ello se complementa con el régimen de solidaridad que les impone directamente la ley, régimen de por sí exigente, que la administración no puede hacer más gravoso sin fundamento y contra la ley, pues, se reitera, el consorciado que se pretende sea fiador no es un tercero sino en sí mismo deudor solidario.

3. En conclusión, la entidad incurre en error jurídico al exigir la constitución de fianza al miembro del Consorcio Eco-américas que acredita la experiencia, por cuanto la exigencia de dicha fianza en el caso concreto viola las normas generales y especiales reseñadas en este escrito. Por consiguiente, la evaluación debe modificarse en este punto, lo cual se solicita.

En todo caso, informamos que estamos haciendo llegar la Fianza requerida (ANEXO 1: Formato Anexo 2A), con el fin de que la administración considere los argumentos planteados, corrija la evaluación, determine la no obligatoriedad de la fianza en nuestro caso y, en ese evento, nos devuelva la fianza presentada por no poder ser requisito de participación.

En caso de que la administración persista en el error y en ese sentido mantenga la exigencia de la Fianza, dejamos en firme la presentación de la fianza que estamos allegando, sin renunciar a lo previsto en las normas reseñadas en este escrito y a las demás que fueren aplicables.

Con fundamento en todo lo anterior, solicitamos al Comité Asesor y Evaluador la calificación de HÁBIL al Consorcio Eco-Américas en cuanto a la Capacidad Jurídica.

2.2.- CAPACIDAD FINANCIERA

A.- Capacidad financiera

Solicitud aclaración:

"a. Euroconsult S.A.: Se requiere que adjunte acta de aprobación de los Estados Financieros por parte de la asamblea de accionistas, junta de socios o el órgano social competente, según lo dispuesto en el literal (z) numeral 1.2 del Documento de Convocatoria. Así mismo, La tasa de conversión Euro Dólar Norteamericano (EUR/USD) utilizada en los Estados Financieros no es la correcta de acuerdo a las registradas por el Banco Central Europeo (ECB). Se requiere diligenciar nuevamente el Formato 1, utilizando las tasas que, de acuerdo al ECB, a 31 de Diciembre de 2009 es 1,4406."

Respuesta:

CONSORCIO ECO-AMÉRICAS

Anexamos Acta de Aprobación E.E.F.F. a diciembre 31 de 2009 (ANEXO 2) Y Formato 1 (ANEXO 3) nuevamente diligenciado.

En cuanto a la conversión de monedas, se aclara que en la página web del Banco de la República se señala para el día 31 de diciembre del año 2009, como valor de la tasa de cambio, 1,43425 dólares por cada euro y tasa representativa del mercado 2.044, 23 pesos por dólar, valores con los cuales se realizó la conversión presentada, por cuanto se entendió que se podía utilizar esa metodología.

No obstante lo anterior, anexamos nueva conversión de los estados financieros de EUROCONSULT S.A. (Ver ANEXO 3). Las tasas de cambio utilizadas para la conversión de euros a dólares americanos han sido las tasas oficiales del Banco Central Europeo, que para el 31 de diciembre de 2009 eran de 0,6942 euros por dólar y de 1,4406 dólares por euro (se adjuntan los soportes de las tasas utilizadas en el ANEXO 4).

Solicitud aclaración:

"b. Instituto Técnico de Materiales y Construcciones S.A. INTEMAC: Se requiere que adjunte acta de aprobación de los Estados Financieros por parte de la asamblea de accionistas, junta de socios o el órgano social competente, según lo dispuesto en el literal (z) numeral 1.2 del Documento de Convocatoria. Así mismo, se toma para la evaluación únicamente la información registrada en los E.E.F.F. a 31 dic 2009 aportado. No coinciden las cifras entre el Formato 1 y los E.E.F.F por lo que se requiere diligenciar nuevamente el Formato 1, y especificar las tasas utilizadas para la conversión."

Respuesta:

Anexamos Acta de Aprobación de E.E.F.F. (ANEXO 5) junto con Formato 1 nuevamente diligenciado (ANEXO 6).

En cuanto a la conversión de monedas, se aclara que en la página web del Banco de la República se señala para el día 31 de diciembre del año 2009, como valor de la tasa de cambio, 1,43425 dólares por cada euro y tasa representativa del mercado 2.044, 23 pesos por dólar, valores con los cuales se realizó la conversión presentada, por cuanto se entendió que se podía utilizar esa metodología.

No obstante lo anterior, anexamos nueva conversión de los estados financieros de INTEMAC S.A. (Ver ANEXO 6). Las tasas de cambio utilizadas para la conversión de euros a dólares americanos han sido las tasas oficiales del Banco Central Europeo, que para el 31 de diciembre de 2009 eran de 0,6942 euros por dólar y de 1,4406 dólares por euro (Ver ANEXO 4).

Solicitud aclaración:

B.- Capital de trabajo

CONSORCIO ECO-AMÉRICAS

"a. Estructuradora Colombia S.A.S.: Se toman datos del RUP a 2009, porque los actualizados a 2010 en el RUP no están Vigentes ni en Firme, así mismo, no coinciden los valores del Formato 2 por que se toman los datos registrados del RUP 2010 y se deben tomar los datos a fecha de 2009. Se requiere diligenciar el formato 2 nuevamente."

Respuesta:

La renovación del RUP es una obligación legal y en el mismo certificado la Cámara de Comercio identifica las fechas de inscripción y renovación con los datos incluidos en esta, por lo cual existe plena claridad de qué información está en firme y cuál no. En ese sentido debe tomarse en cuenta la información en firme certificada.

En consecuencia nos identificamos con la apreciación de la entidad, la cual, en la evaluación financiera, vemos ajustó la información financiera incorporada en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente presentado y en firme, para los obligados a inscribirse, con los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2009, por lo cual remitimos nuevo Formato 2 diligenciado con cifras de balance de 2009 (ANEXO 7).

Solicitud aclaración:

"b. Euroconsult S.A.: Las cifras del Formato 2 no coinciden con las registradas en los E.E.F.F. una vez realizada la conversión de monedas. Se requiere diligenciar nuevamente el Formato 2 de acuerdo a las cifras de los E.E.F.F."

Respuesta:

Anexamos formato 2 solicitado de EUROCONSULT S.A (ANEXO 8).

En cuanto a la conversión de monedas, se aclara que en la página web del Banco de la República se señala para el día 31 de diciembre del año 2009, como valor de la tasa de cambio, 1,43425 dólares por cada euro y tasa representativa del mercado 2.044, 23 pesos por dólar, valores con los cuales se realizó la conversión presentada, por cuanto se entendió que se podía utilizar esa metodología.

No obstante lo anterior, anexamos nueva conversión de los estados financieros de EUROCONSULT S.A. (Ver ANEXO 3). Las tasas de cambio utilizadas para la conversión de euros a dólares americanos han sido las tasas oficiales del Banco Central Europeo, que para el 31 de diciembre de 2009 eran de 0,6942 euros por dólar y de 1,4406 dólares por euro (Se adjuntan los soportes de las tasas utilizadas en el ANEXO 4).

Solicitud aclaración:

CONSORCIO ECO-AMÉRICAS

"c. Instituto Técnico de Materiales y Construcciones S.A. INTEMAC: Las cifras del Formato 2 no coinciden con las registradas en los E.E.F.F. una vez realizada la conversión de monedas. Se requiere diligenciar nuevamente el Formato 2 de acuerdo a las cifras de los E.E.F.F.."

Respuesta:

Anexamos formato 2 solicitado junto con conversión de cifras de estados financieros a 31 de diciembre de 2009 de INTEMAC S.A. (ANEXO 9).

En cuanto a la conversión de monedas, se aclara que en la página web del Banco de la República se señala para el día 31 de diciembre del año 2009, como valor de la tasa de cambio, 1,43425 dólares por cada euro y tasa representativa del mercado 2.044, 23 pesos por dólar, valores con los cuales se realizó la conversión presentada, por cuanto se entendió que se podía utilizar esa metodología.

No obstante lo anterior, anexamos nueva conversión de los estados financieros de INTEMAC S.A. (Ver ANEXO 6). Las tasas de cambio utilizadas para la conversión de euros a dólares americanos han sido las tasas oficiales del Banco Central Europeo, que para el 31 de diciembre de 2009 eran de 0,6942 euros por dólar y de 1,4406 dólares por euro (Ver ANEXO 4).

Igualmente, anexamos el Formato 2 de las empresas SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA S.A. e I.V. INGENIEROS CONSULTORES S.A. corrigiendo los valores del Capital de Trabajo de la Estructura Plural (ANEXO 10).

Con fundamento en todo lo anterior, solicitamos al Comité Asesor y Evaluador la calificación de HÁBIL al Consorcio Eco-Américas en cuanto a la Calificación Financiera.

2.3. CAPACIDAD TECNICA

A. Capacidad de Organización

Solicitud aclaración:

"Euroconsult S.A.: La tasa de conversión Euro Dólar Norteamericano (EUR/USD) utilizada en los Estados Financieros no es la correcta de acuerdo a las registradas por el Banco Central Europeo (ECB). Se requiere diligenciar nuevamente el Formato 1, utilizando la tasa de Euro Dólar Norteamericano (EUR/USD) que, de acuerdo al (ECB), a 31 de Diciembre de 2006 es 1,3170 y para el 31 de Diciembre de 2008 es 1,3917."

Respuesta:

Anexamos Formato 1 (Ver ANEXO 3) nuevamente diligenciado.

EXPERIENCIA GENERAL.

CONSORCIO ECO-AMÉRICAS

Experiencia General en Diseño de Infraestructura Vial o Experiencia en Supervisión o Interventoría de Diseño de Infraestructura Vial.

Solicitud aclaración:

"b. Verificación participación del miembro del consorcio en estructuras plurales anteriores con porcentaje mínimo del 20% tanto al inicio como al final del contrato (Literal c "Participación en estructuras plurales anteriores" del numeral 3.1.1 "Generalidades"): De acuerdo con la documentación aportada por el interesado, se evidencia que el miembro del consorcio ejecutó el contrato sin ninguna estructura plural anterior al finalizar el contrato por lo tanto su participación fue del 100%. Sin embargo, no se evidencia la participación del miembro al iniciar el contrato por lo que se debe suministrar uno de los documentos establecidos en el numeral (1) Experiencia en Diseño de Infraestructura Vial o Experiencia en Supervisión o Interventoría de Diseño de Infraestructura Vial para acreditar dicha participación ."

Respuesta:

Se observa que la Evaluación se refiere a un supuesto que no corresponde al de la propuesta del Consorcio Eco-Américas. En efecto, el citado literal c del numeral 3.1.1 da la posibilidad de que "para acreditar la Experiencia General requerida en el presente Documento de Convocatoria, se podrá acreditar experiencia obtenida bajo Estructuras Plurales en contratos anteriores". Ese de ningún modo es el supuesto del Consorcio Eco-Américas, pues en parte alguna de la Manifestación de Interés se indica o pretende hacer uso de dicha posibilidad. Tal vez, por el entendimiento que se le dio a la forma de llenar los formatos 3A y 3B, en las casillas "% de participación en la forma de asociación" se incluyó información, cuando podía haberse aclarado "no aplica" y señalarse que se trataba de contratista único, no de una asociación. De todos modos en dicha casilla se incluyó "100%", lo que indica el carácter único del contratista, por sustracción de materia.

Ahora bien, en concordancia con ello, la certificación de ADIF presentada en parte alguna alude a una asociación y determina claramente como contratista a una persona única, "la empresa I.V. INGENIEROS CONSULTORES S.A.", de quien se dice que "ha llevado a cabo los trabajos referentes al Contrato...".

Es claro, entonces, que se trata de un contratista único, tanto por lo indicado en la certificación misma, como porque en los formatos se indicó que la participación era del "100%". Al ser un contratista único, no se requiere acreditar participación alguna, dato que, además, sólo tiene relevancia cuando la experiencia acreditada deviene de una estructura plural anterior.

No siendo ese el caso, basta que el MAP del consorcio propuesto para acreditar la experiencia sea el contratista indicado en la certificación, lo cual se cumple en la propuesta presentada.

No obstante, adjuntamos certificación complementaria expedida por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y copia simple del Boletín Oficial del Estado Español (BOE) donde se hace pública la adjudicación del contrato (ANEXO 11). La copia apostillada y autenticada

CONSORCIO ECO-AMÉRICAS

de este último documento se encuentra en la documentación aportada al proceso No. SEA-CM-003-2010 y obra en los archivos de la entidad.

Solicitud aclaración:

"c. Verificación fecha de suscripción y de inicio: Se certifica la fecha de inicio de la etapa de diseño pero no la fecha de suscripción del contrato. Se solicita certificar dicha fecha mediante los documentos establecidos en el numeral (1) Experiencia en Diseño de Infraestructura Vial o Experiencia en Supervisión o Interventoría de Diseño de Infraestructura Vial, literal (iii)."

Respuesta:

Adjuntamos certificación complementaria (Ver ANEXO 11), lo mismo que el formato 3A (ANEXO 12). Se aclara que las obligaciones dinerarias se adquieren en la fecha de adjudicación del contrato, conforme al régimen legal en el que se produjo dicha adjudicación, vigente para entonces (Real Decreto 2 de 2000, artículo 53), por lo cual tomamos esa fecha para realizar el cálculo previsto en el Formato 3A, en concordancia con el numeral 3.2.3 de la Convocatoria que prevé que se tomará como tasa de referencia aquella tasa de cambio del día en el cual se suscribió el DOCUMENTO que contenga la respectiva obligación dineraria. Se adjunta copia del BOE en el que está el Real Decreto 2 de 2000. La copia apostillada y autenticada de este último documento se encuentra en la documentación aportada al proceso No. SEA-CM-003-2010 y obra en los archivos de la entidad.

Solicitud aclaración:

"d. Verificación fecha de terminación y de liquidación: se certifica la fecha de terminación de la etapa de diseño pero no la fecha de liquidación del contrato. Se solicita certificar dicha fecha mediante los documentos establecidos en el numeral (1) Experiencia en Diseño de Infraestructura Vial o Experiencia en Supervisión o Interventoría de Diseño de Infraestructura Vial, literal (iii)."

Respuesta:

Adjuntamos certificación complementaria (Ver ANEXO 11), lo mismo que el formato 3A (Ver ANEXO 12).

Solicitud aclaración:

"e. Valor total del contrato: Se requiere diligenciar nuevamente el Formato 3A indicando que tasa de cambio fue utilizada, ya que el valor total del contrato correspondiente a diseño no coincide con el valor revisado una vez realizada la conversión de monedas de acuerdo con las tasas de cambio establecidas en el documento de convocatoria, las cuales se listan a continuación:

Tasa USDEUR: 0,81813 €

Tasa USDCOL: \$ 2290,02

CONSORCIO ECO-AMÉRICAS

SMMLV (2005): \$ 381.500

Cabe aclarar que la fecha que se tomó para realizar el cambio de monedas del contrato fue la fecha de inicio. Sin embargo, el interesado debe certificar que la fecha de suscripción del contrato es la misma que la fecha de inicio, según lo establecido anteriormente."

Respuesta:

Adjuntamos certificación complementaria (Ver ANEXO 11), lo mismo que el formato 3A (Ver ANEXO 12).

Experiencia General en Supervisión o Interventoría de construcción de Infraestructura Vial

Solicitud aclaración:

"b. Verificación participación del miembro del consorcio en estructuras plurales anteriores con porcentaje mínimo del 20% tanto al inicio como al final del contrato (Literal c "Participación en estructuras plurales anteriores" del numeral 3.1.1 "Generalidades"): De acuerdo con la documentación aportada por el interesado, se evidencia que el miembro del consorcio ejecutó el contrato sin ninguna estructura plural anterior al finalizar el contrato por lo tanto su participación fue del 100%. Sin embargo, no se evidencia la participación del miembro al iniciar el contrato por lo que se debe suministrar uno de los documentos establecidos en el numeral (2) Experiencia General en Supervisión o Interventoría de construcción de Infraestructura Vial para acreditar dicha participación ."

Respuesta:

Se observa que la Evaluación se refiere a un supuesto que no corresponde al de la propuesta del Consorcio Eco-Américas. En efecto, el citado literal c del numeral 3.1.1 da la posibilidad de que "para acreditar la Experiencia General requerida en el presente Documento de Convocatoria, se podrá acreditar experiencia obtenida bajo Estructuras Plurales en contratos anteriores". Ese de ningún modo es el supuesto del Consorcio Eco-Américas, pues en parte alguna de la Manifestación de Interés se indica o pretende hacer uso de dicha posibilidad. Tal vez, por el entendimiento que se le dio a la forma de llenar los formatos 3A y 3B, en las casillas "% de participación en la forma de asociación" se incluyó información, cuando podía haberse aclarado "no aplica" y señalarse que se trataba de contratista único, no de una asociación. De todos modos en dicha casilla se incluyó "100%", lo que indica el carácter único del contratista, por sustracción de materia.

Ahora bien, en concordancia con ello, la certificación de ADIF presentada en parte alguna alude a una asociación y determina claramente como contratista a una persona única, "la empresa I.V. INGENIEROS CONSULTORES S.A.", de quien se dice que "ha llevado a cabo los trabajos referentes al Contrato...".

Es claro, entonces, que se trata de un contratista único, tanto por lo indicado en la certificación misma, como porque en los formatos se indicó que la participación era del "100%". Al ser un

Página 10 de 12

CONSORCIO ECO-AMÉRICAS

contratista único, no se requiere acreditar participación alguna, dato que, además, sólo tiene relevancia cuando la experiencia acreditada deviene de una estructura plural anterior.

No siendo ese el caso, basta que el MAP del consorcio propuesto para acreditar la experiencia sea el contratista indicado en la certificación, lo cual se cumple en la propuesta presentada.

No obstante, adjuntamos certificación complementaria expedida por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y Boletín Oficial del Estado Español (BOE), donde se hace pública la adjudicación del contrato (Ver ANEXO 11). La copia apostillada y autenticada de este último documento se encuentra en la documentación aportada al proceso No. SEA-CM-003-2010 y obra en los archivos de la entidad.

Solicitud aclaración:

"c. Verificación fecha de suscripción y de inicio: Se certifica la fecha de inicio de la etapa de interventoría pero no la fecha de suscripción del contrato. Se solicita certificar dicha fecha mediante los documentos establecidos en el numeral (2) Experiencia General en Supervisión o Interventoría de construcción de Infraestructura Vial, subnumeral 3. PENDIENTE."

Respuesta:

Adjuntamos certificación complementaria (Ver ANEXO 11), lo mismo que el formato 3B (ANEXO 13). Se aclara que las obligaciones dinerarias se adquieren en la fecha de adjudicación del contrato, conforme al régimen legal en el que se produjo dicha adjudicación, vigente para entonces (Real Decreto 2 de 2000, artículo 53), por lo cual tomamos esa fecha para realizar el cálculo previsto en el Formato 3B, en concordancia con el numeral 3.2.3 de la Convocatoria que prevé que se tomará como tasa de referencia aquella tasa de cambio del día en el cual se suscribió el DOCUMENTO que contenga la respectiva obligación dineraria. Se adjunta copia del BOE en el que está el Real Decreto 2 de 2000. La copia apostillada y autenticada de este último documento se encuentra en la documentación aportada al proceso No. SEA-CM-003-2010 y obra en los archivos de la entidad.

Solicitud aclaración:

"d. Verificación fecha de terminación y de liquidación: se certifica la fecha de terminación de la etapa de interventoría pero no la fecha de liquidación del contrato. Se solicita certificar dicha fecha mediante los documentos establecidos en el numeral (2) Experiencia General en Supervisión o Interventoría de construcción de Infraestructura Vial, subnumeral 3."

Respuesta:

Adjuntamos certificación complementaria (Ver ANEXO 11), lo mismo que el formato 3B (Ver ANEXO 13).

Solicitud aclaración:

CONSORCIO ECO-AMÉRICAS

"e. Valor total del contrato: Se requiere diligenciar nuevamente el Formato 3B indicando que tasa de cambio fue utilizada, ya que el valor total del contrato correspondiente a interventoría no coincide con el valor revisado una vez realizada la conversión de monedas de acuerdo con las tasas de cambio establecidas en el documento de convocatoria, las cuales se listan a continuación:

Tasa USDEUR: 0,81813 €

Tasa USDCOL: \$ 2290,02

SMMLV (2005): \$ 381.500

Cabe aclarar que la fecha que se tomó para realizar el cambio de monedas del contrato fue la fecha de inicio de la etapa de diseño, ya que por ser un mismo contrato tendrá una sola fecha de suscripción. Sin embargo, el interesado debe certificar que la fecha de suscripción del contrato es la misma que la fecha de inicio de la etapa de diseño, según lo establecido anteriormente."

Respuesta:

Adjuntamos certificación complementaria (Ver ANEXO 11), lo mismo que el formato 3B (Ver ANEXO 13).

Solicitud aclaración:

"f. Verificación facturación anual promedio: El valor cancelado promedio por año calculado por el interesado difiere del valor revisado y calculado por la entidad. Por lo tanto se requiere que el interesado diligencie de nuevo el formato 3B con la correspondiente corrección. Se aclara que para el cálculo de facturación anual promedio, se tomo el periodo del desarrollo del contrato en meses enteros, es decir, la diferencia entre la fecha de finalización y la fecha de inicio dividida entre treinta (30) y redondeada a cero decimales."

Respuesta:

Adjuntamos certificación complementaria (Ver ANEXO 11), lo mismo que el formato 3B (Ver ANEXO 13).

Con fundamento en todo lo anterior, solicitamos al Comité Asesor y Evaluador la calificación de HÁBIL al Consorcio Eco-Américas en cuanto a la Capacidad Técnica.

Cordialmente,



MAURICIO GOMEZ CACEDO
Representante Legal
CONSORCIO ECO-AMÉRICAS



CONSORCIO ECO-AMERICAS

ANEXO 1

Calle 103 No. 45 A – 29 (Bogotá D.C.)
(57)(1) 634 89 96
licitaciones@estructuradorcolombia.com

ANEXO 2A
MODELO FIANZA OTORGADA POR LA MATRIZ DEL PROPONENTE O DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE PLURAL O DE LA SOCIEDAD CONTROLADA POR LA MATRIZ DEL PROPONENTE O DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE PLURAL SEGÚN NUMERAL 3.4. DEL DOCUMENTO DE CONVOCATORIA.

Se hace constar por el presente documento que I.V. **INGENIEROS CONSULTORES, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad comercial domiciliada en Valencia, España, con sucursal en Colombia, y representada por **RICARDO SERRANO LÓPEZ**, en su condición de Mandatario General de I.V. **INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A.**, tal como consta en el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Bogotá, quien en adelante y para todos los efectos se denominará el "Fiador", se compromete a garantizar las obligaciones del **CONSORCIO ECO-AMÉRICAS** (el "Garantizado") derivadas de la adjudicación al Garantizado en su condición de Interesado del Concurso de Méritos No. 001-2011 abierto por el Instituto Nacional de Concesiones -INCO, incluyendo el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría (las "Obligaciones Garantizadas"), en las condiciones indicadas en el presente documento (en adelante la "Fianza").

CLÁUSULA PRIMERA – DEFINICIONES

Para una adecuada interpretación de la presente Fianza siempre que la letra inicial de un término aparezca en mayúscula tendrá el significado que se le asigna en la presente Fianza, y si en minúsculas, tendrá el significado que se establece en el Documento de Convocatoria, en los Anexos de Condiciones, o en el Contrato de Interventoría.



CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

El Fiador, por medio del presente documento, otorga fianza irrevocable a favor del Interesado del Concurso de Concesiones -INCO para asegurar el cumplimiento de todas y cada una de las Obligaciones Garantizadas. En relación con las obligaciones de dar derivadas del cumplimiento de las Obligaciones Garantizadas la presente Fianza estará limitada a la participación del Garantizado en el Interesado, participación que para los efectos de la presente Fianza no podrá ser en ningún caso inferior al veinte por ciento (20%). En relación con las obligaciones de hacer se aplicará lo señalado en la cláusula cuarta de la presente Fianza.

CLÁUSULA TERCERA – CUANTÍA

La cuantía de la presente Fianza se atiene a las cuantías de las Obligaciones Garantizadas.

CLÁUSULA CUARTA – PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA FIANZA.

El procedimiento para la ejecución de la presente Fianza se sujetará a lo señalado en la Sección 5.04 del Contrato de Interventoría. En todo caso, cuando el INCO notifique al Fiador que debe honrar la Fianza por el incumplimiento del Interventor de una o varias de las Obligaciones Garantizadas, el Fiador procederá a: (i) pagar las sumas a que haya lugar cuando se trate de una Obligación Garantizada de dar, según el porcentaje señalado en la cláusula segunda de la presente Fianza; y (ii) si se trata de una obligación de hacer, el Fiador podrá ejecutar la obligación de hacer directamente o a través de terceros contratados para el efecto, o

INGENIEROS CONSULTORES S.A. (Vertical stamp)

asumir el costo de las sanciones pactadas en el Contrato de Interventoría por el incumplimiento de la(s) Obligación(es) Garantizada(s) incumplida(s). El plazo para honrar la Fianza estará determinado por el INCO, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) Días Hábiles.

CLÁUSULA QUINTA – CESIÓN POR PARTE DEL GARANTIZADO DE SU POSICIÓN EN EL INTERVENTOR.

Si el Garantizado cedere a cualquier título su posición o participación en el Interventor, en los términos y condiciones previstos en el Contrato de Interventoría, se entenderá que la presente Fianza termina cuando se perfeccione la cesión. Para todos los efectos, se entenderá que la cesión incluye cualquier forma de enajenación de la participación del Garantizado en el Interventor. Lo anterior, salvo que la cesión se produzca a un mismo beneficiario real del Garantizado, según este término se define en la Ley Aplicable, caso en el cual la presente Fianza no terminará.

CLÁUSULA SEXTA – DECLARACIONES ESPECIALES DEL FIADOR.

La presente Fianza constituye para el Fiador una obligación autónoma y totalmente vinculante y el Fiador cuenta con las autorizaciones y capacidad para suscribir el presente documento. El Fiador declara irrevocablemente que el INCO podrá exigirle de manera inmediata y directa el cumplimiento de las Obligaciones Garantizadas, sin necesidad de exigir primero el cumplimiento de las Obligaciones Garantizadas al Garantizado.

CLÁUSULA SÉPTIMA – CONDICIÓN SUSPENSIVA Y VIGENCIA

La vigencia de la presente Fianza estará condicionada únicamente a que el Garantizado en su condición de Proponente resulte Adjudicatario del Contrato de Interventoría. Si se verifica la condición, iniciará la vigencia de la presente Fianza hasta la terminación de las Obligaciones Garantizadas, en los términos y condiciones señalados en el Contrato de Interventoría. Si no se verifica la condición, la presente Fianza nunca ha nacido la obligación del Fiador.

CLÁUSULA OCTAVA – TERMINACIÓN

La Fianza terminará a la expiración de su vigencia.

CLÁUSULA NOVENA – NOTIFICACIONES

Toda notificación que se deba dar para el ejercicio de los derechos o acciones contemplados en la presente Fianza deberá ser efectuada por escrito dirigido así:

Al Instituto Nacional de Concesiones INCO
Atn. Gerente General
Dirección Edificio Ministerio de Transporte
Avenida El Dorado CAN, Tercer Piso.
Bogotá D.C.
Colombia





INGENIEROS CONSULTORES S.A.

Avda. Primado Reig, 129, Ent. 1º D
46020 VALENCIA (ESPAÑA)
Telf. +34 96 339 18 70 - Fax +34 96 362 91 61
www.ivicsa.es E-mail: iv@ivicsa.es

Al Fiador
Atn. Ricardo Serrano López / I.V. INGENIEROS CONSULTORES S.A.
Dirección Calle 103 No. 45A - 29
Ciudad Bogotá, D.C.
País Colombia.

Al Garantizado
Atn. Mauricio Gómez Caicedo / Consorcio Eco-Américas
Dirección Calle 103 No. 45A - 29
Ciudad Bogotá, D.C.
País Colombia.

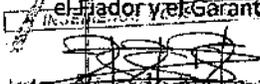
CLAUSULA DÉCIMA – LEY APLICABLE

La presente Fianza es un contrato atípico que se regirá por sus cláusulas y únicamente cuando sea pertinente y de manera subsidiaria por la Ley Aplicable.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA – RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Cualquier conflicto que surja con ocasión de la interpretación, ejecución y/o terminación de la presente Fianza, será dirimido según el procedimiento acordado en el Contrato de Interventoría suscrito por el Garantizado y que el Fiador expresamente acepta aplicar para los efectos del presente instrumento.

Para constancia, se firma en la ciudad de Valencia, España, a los dos (02) días del mes de junio de dos mil once (2011), en tres (3) ejemplares del mismo tenor destinados al Instituto Nacional de Concesiones (INCO), el Fiador y el Garantizado.


I.V. INGENIEROS CONSULTORES S.A.
RICARDO SERRANO LÓPEZ
DNI 22513275-R
Mandatario General I.V. INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A.



CERTIFICADO
ISO 9001

CERTIFICADO
ISO 14001

911-23558

DON ANTONIO DE LA REINA MONTERO, Secretario del Consejo de Administración de EUROCONSULT, S.A., con domicilio en San Sebastián de los Reyes (Madrid) Avda. Camino de lo Cortao, s/nº, con C.I.F. A-28/217735, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 2.396, general 1.741 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 70 de la hoja nº 15.078, inscripción 1ª.



CERTIFICO

Que en el Libro de Actas figura los siguientes acuerdos, cuyo certificado original fue depositado en el Registro Mercantil con las Cuentas Anuales de 2009 :

* En San Sebastián de los Reyes (Madrid), el 15 de Junio de 2010, siendo las 12 horas, en el domicilio social se reúne con carácter ordinario la Junta General de Accionistas de EUROCONSULT, S.A., previa convocatoria por el Consejo de Administración publicada en el diario "CINCO DÍAS" del día 6 de mayo de 2.010 y en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, del día 11 de mayo de 2.009.

Preside la sesión el Presidente del Consejo de Administración DON BJÖRNULF BOUNATIAN BENATOV, asistido por DON ANTONIO DE LA REINA MONTERO, como Secretario, por serlo también del Consejo, procediéndose a formar la lista de asistentes que queda unida al Acta y arroja el siguiente resultado 99'90 del capital social entre presentes y representados.

En consecuencia el Presidente declara validamente constituida la Junta en segunda convocatoria .

También asisten todos los miembros del Consejo de Administración.

Seguidamente por el Secretario, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 97 del Reglamento del Registro Mercantil se da lectura del texto íntegro de la convocatoria y orden del día en el que entre otros puntos figuran los siguientes :



PRIMERO.- Aprobación, si procede de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Euroconsult SA, correspondientes al ejercicio de 2009, así como aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante ese mismo ejercicio.

[Handwritten signatures]



SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2009.



NOVENO.- Aprobación del Acta de la Junta.

Previa deliberación de cada uno de los puntos del Orden del Día por los asistentes, sin que se solicitará por ninguno de ellos se dejara constancia en acta de su intervención, por **unanimidad** de los socios concurrentes se adoptaron entre otros los siguientes :

ACUERDOS

PRIMERO.- Analizados los documentos correspondientes y el informe de los Auditores de Cuentas, se aprueba el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión de Euroconsult SA, del ejercicio correspondiente al año 2009. También se aprueba la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio.

SEGUNDO.- Aprobado el Balance al 31 de Diciembre de 2009, se aprueba a su vez la aplicación de resultados siguientes;

Base de reparto de resultado :

Pérdidas y Ganancias neto impuestos, SIN integración de UTES.....	803.308'28 Euros
Aportación a pérdidas y ganancias neto impuestos de las UTES.....	9.186'58 Euros
Resultado total con integración de UTES	812.494'86 Euros

Distribución del Resultado

Reserva legal	0 Euros
Reservas voluntarias	812.494'86 Euros
TOTAL	812.494'86 Euros





NOVENO.- No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose Acta de la Junta, figurando en ella el nombre y apellidos de todos los asistentes que una vez leída por el Secretario es aprobada por unanimidad siendo firmada en prueba de conformidad en el lugar y fecha al principio señalados por el Presidente y el Secretario.



Y para que conste a los efectos de su depósito en el Registro Mercantil, expido la presente Certificación con el Vº Bº del Presidente, haciéndola extensiva a lo siguiente :

- a) Que el Informe de Gestión y Cuentas Anuales de Euroconsult SA (folios 1 al 33 ambos inclusive) que se acompaña con esta certificación son las aprobadas por la Junta de accionistas, adjuntándose también el Informe de Auditoría de MV Auditores que fue el que se puso a disposición de los socios (2 folios) de las Cuentas Anuales.
- b) Que las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Euroconsult SA han sido firmadas por todos los miembros del órgano de administración.
- c) Que las cuentas auditadas son las que se adjunta para su depósito y coinciden con las formuladas por los administradores dando así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 366, apartado 7 del Reglamento del Registro Mercantil.
- d) Que la sociedad no ha realizado operaciones con acciones propias durante el ejercicio 2.009."

San Sebastian de los Reyes, a 21 de junio de 2010".

Expido este nuevo certificado con el Vº Bº del Presidente.

En San Sebastian de los Reyes a 22 de junio

Vº Bº

El Presidente

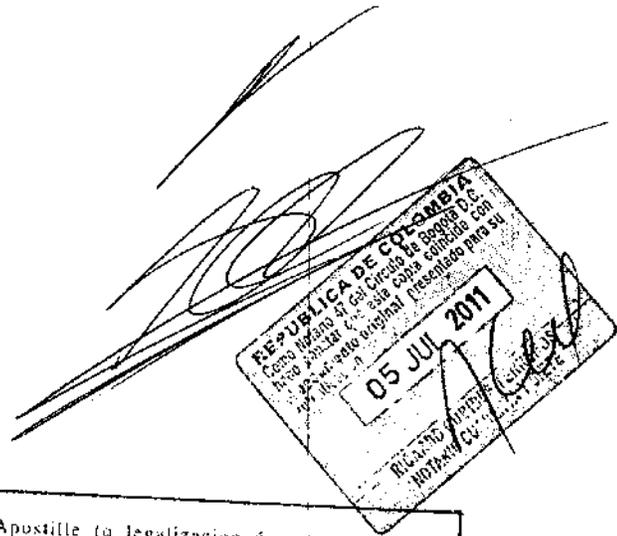
Dña Josefina Vega Calleja

El Secretario

D. Antonio de la Reina Montero



Yo, JUAN ROMERO-GIRON DELEITO, Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio, con residencia en esta Capital,
 LES FIZIMO las firma/s que antecede/n de Doña Inejina Vega Calleja y Don Antonio de la Reina Montero
 por cotejo con su/s firma/s original/es indubitada/s. Dicha/s firma/s se encuentra/n es ampada/s en el último folio de una certificación extendida en 3 folios de papel común, los cuales rubrico y sello con el de mi Notaría.
 Madrid, a 27 de Junio de 2011 . DOY FE.



Apostille (o legalizacion única)
 (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
 (Real Decreto 2433/1978, de 2 de octubre)

1. País: España
2. El presente documento público
3. Ha sido firmado por Juan Romero-Giron Deleito
4. Actuando en calidad de NOTARIO
5. Se halla sellado/timbrado con el de su Notaría
6. En Madrid el día 27 JUN, 2011
7. CERTIFICADO
8. Por el Decano del Colegio Notarial de Madrid
9. Con el número 50103
10. Sello/Timbre: VEINTE CENTIMOS
11. Firma: [Signature]



Don Carlos Solis Villa
 Firma delegada del Decano

FORMATO 1

CERTIFICADO DE EXPERIENCIA Y CAPACIDAD

Madrid, 6 de junio de 2011

2. IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL INTERESADO O MIEMBRO DE LA ESTRUCTURA PLURAL: **EUROCONSULT, S.A.**

MAP: SI [] NO []

REQUISITO(S) HABILITANTE(S) QUE ACREDITA1: **EXPERIENCIA**

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: **AV. CAMINO DE LO CORTAO, 17.**

CIUDAD Y PAÍS: **28700 - SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, MADRID, ESPAÑA.**

TELÉFONO: **+34 916597800** FAX: **+34 916597810**

CORREO ELECTRÓNICO: **sluquiv@euroconsult.es**

NOTIFICACIONES:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: **CALLE 103 No 45 A - 29**

CIUDAD Y PAÍS: **BOGOTÁ (COLOMBIA).**

TELÉFONO: **634 8996** FAX: **634 8996**

CORREO ELECTRÓNICO: **licitaciones@estructuradorcolombia.com**

3. REPRESENTACIÓN LEGAL

NOMBRES DEL(LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES): **MAURICIO GÓMEZ CAICEDO**

Documento de identificación:

C.C: C.E: Pasaporte: País: **Colombia** No. **79.150.916**

1 Este campo denominado "Requisito Habilitante que Acredita" solamente deberá ser diligenciado por quien haya marca una equis [X] en el "SI" frente a "MAP" los demás campos deberá ser diligenciados por todos los interesado y miembros de Estructuras Plurales sin importar si tienen o no la condición de MAP.

Facultades del representante legal:

MAURICIO GÓMEZ CAICEDO:

1.- Presentar propuestas y ofertas técnico-económicas con entidades públicas y privadas dentro del territorio colombiano, así como para representarla judicial y extrajudicialmente, conforme lo dispone el Artículo 22.4 del Estatuto General de CONTRATACIÓN (Ley 80 de 1993).

2.- Establecer pactos y condiciones con otras sociedades, físicas o jurídicas, consorcios, uniones temporales, uniones transitorias de empresas o cualquier otra forma de asociación necesarias para presentar propuestas en territorio colombiano.

3.- Presentar cuanta otra documentación sea menester para la presentación de propuestas y ofertas técnico-económicas y su adjudicación.

4.- En general, y para el mejor ejercicio de las facultades anteriores llevar a cabo, firmar, suscribir y formalizar cuantos actos, escritos, instancias y documentos públicos o privados sean necesarios para la presentación de ofertas y hasta la completa terminación del procedimiento de licitación o de los trabajos o servicios que le sean encomendados.

4. CLASIFICACIÓN:

Certifico que como parte de las actividades que desarrollo como parte de mi objeto empresarial se encuentran: **la consultoría en materia de infraestructura para el transporte vial y la interventoría de proyectos.**

5. CALIFICACIÓN:

5.1 Capacidad Financiera

Nombre del MAP que acredita la Capacidad Financiera (valores de Razón de Endeudamiento, Índice de Liquidez, Patrimonio): _____

Fecha de corte de la información relacionada: _____

(a) Razón de Endeudamiento

$$\text{Endeudamiento} = \left(\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}} \right) = \frac{\$ \text{-----}}{\$ \text{-----}} * 100 = \text{-----} \%$$

(b) Índice de Liquidez

$$\text{Liquidez} = \left(\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} \right) = \frac{\$ \text{-----}}{\$ \text{-----}} = \text{-----}$$

(c) Patrimonio

Patrimonio en \$: _____

Nombre de los miembros del Interesado (valores de Razón de Endeudamiento e Índice de Liquidez):

EUROCONSULT, S.A.

[Cada uno de los miembros del Interesado deberá acreditar estos indicadores]

Fecha de corte de la información relacionada: 31 de diciembre de 2009

(d) Razón de endeudamiento

$$\text{Endeudamiento} = \frac{\text{Pasivo Total} (*)}{\text{Activo Total}} = \frac{\$ 20.436.121.843,40}{\$ 66.430.844.474,33} * 100 = \mathbf{30,76\%}$$

(*) Se ha considerado como pasivo total el pasivo financiero (Préstamos, Pólizas de Crédito, Arrendamiento financiero derivado, y otros pasivos financieros).

(e) Índice de liquidez

$$\text{Liquidez} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} = \frac{\$ 55.094.476.930,11}{\$ 16.728.980.616,79} = \mathbf{3,29}$$

(f) Patrimonio

Patrimonio en COP\$: 45.994.722.630,92

Patrimonio en SMMLV (del respectivo año del patrimonio acreditado): 92.563,34

5.2 Capacidad de Organización (Co)

[Los miembros del Interesado que contribuyan a determinar la Capacidad de Organización, deberán completar la tabla que se adjunta a continuación. De esta forma, para determinar la Capacidad de Organización del Interesado se tomará en consideración durante el proceso de evaluación, el porcentaje de participación de cada miembro del Interesado, de acuerdo con lo establecido en los numerales 3.4.3 (c) y el 3.4.4 (c) del Documento de Convocatoria. Al menos un MAP deberá acreditar el mínimo establecido en los mencionados numerales.]

Nombre del miembro del Interesado: EUROCONSULT S.A.

MAP: [SI]

Porcentaje de participación: 20 %

Indicar los dos mejores años de los últimos cinco años considerados: primer año considerado 2008 y segundo año considerado 2006.

	Ingreso Bruto Operacional en Pesos	SMMLV	Ingreso Bruto Operacional expresado en SMMLV	Copiar los dos mayores valores
2005	COP\$ 90.071.345.285,69	COP\$ 381.500,00	236.097,89	
2006	COP\$ 115.137.001.383,54	COP\$ 408.000,00	282.198,53	282.198,53
2007	COP\$ 122.335.928.856,55	COP\$ 433.700,00	282.075,00	
2008	COP\$ 134.770.149.473,46	COP\$ 461.500,00	292.026,33	292.026,33
2009	COP\$ 103.994.328.402,78	COP\$ 496.900,00	209.286,23	
				Total de los dos mayores valores
				574.224,86
				Promedio (Total/2)
				287.112,43

Co= (Ingresos brutos operacionales del primer año considerado 282.198,53 SMMLV + ingresos brutos operacionales del segundo año considerado 292.026,33 SMMLV)/2

Co= 287.112,43 SMMLV

NOTA: Los ingresos brutos operacionales deberán expresarse en SMMLV correspondientes al mismo año de la facturación de dichos ingresos. Se deberán anexar los Estados Financieros en copia auténtica de los años diferentes a 2009 que se relacionen como los dos (2) mejores de los últimos cinco (5) años.

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO ES CIERTA Y QUE CONOZCO LAS SANCIONES LEGALES QUE ACARREARÍA CUALQUIER INFORMACIÓN O DOCUMENTO NO AJUSTADO A LA REALIDAD.

FIRMA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL INTERESADO: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN NO. 79.150.916

FIRMA:

NOMBRE DEL AUDITOR CONTABLE:

M.V. AUDITORES S.L. No. ROAC (Registro Oficial de Auditores de Cuentas): S-312

REPRESENTADA POR:

IUSTO ESTIVAL FRAILE

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN NO. 51.375.447-W



BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL A 31 DE DICIEMBRE
EUROCONSULT, S.A.

ACTIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008 EN US\$	EJERCICIO 2008 EN COP\$	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2008 EN US\$	EJERCICIO 2008 EN COP\$
A) ACTIVO NO CORRIENTE						
I. Inmovilizado intangible	3.448.718,89 €	6.546.644,07	11.338.567.544,22	5.304.619,51 €	4.738.570,10	10.631.273.885,70
1. Desarrollo	381.986,36 €	530.187,21	1.124.708.198,02	237.785,85 €	322.697,98	723.777.606,23
2. Concesiones	47.802,00 €	68.810,52	140.051.261,51	-	-	-
3. Patentes, licencias, marcas y similares	218.889,00 €	390.860,56	815.362.720,35	440.029,93 €	204.498,32	458.675.761,25
4. Fondo de comercio	-	-	-	-	-	-
5. Aplicaciones informáticas	67.480,36 €	82.876,13	169.295.224,95	64.897,72 €	118.459,67	265.101.844,98
6. Investigación	-	-	-	-	-	-
7. Otro inmovilizado intangible	-	-	-	-	-	-
II. Inmovilizado material	2.173.447,22 €	3.130.064,21	6.400.270.623,69	1.323.395.891,80	3.233.675,58	7.255.042.150,10
1. Terrenos y construcciones	1.173.447,22 €	1.742.872,13	2.745.343.809,62	711.670,81 €	890.495,35	2.222.265.465,51
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.000.000,00 €	1.387.191,98	2.654.927.014,07	611.724,99 €	890.495,35	2.222.265.465,51
3. Inmovilizado en curso y anticipos	173.447,22 €	3.130.066,21	6.400.270.623,69	2.323.824,00 €	3.233.675,58	7.255.042.150,10
III. Inversiones inmobiliarias	-	-	-	-	-	-
1. Terrenos y construcciones	-	-	-	-	-	-
2. Construcciones	-	-	-	-	-	-
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	2.252.281,25 €	1.242.872,13	2.745.343.809,62	711.670,81 €	890.495,35	2.222.265.465,51
1. Instrumentos de patrimonio	928.291,29 €	1.242.872,13	2.745.343.809,62	711.670,81 €	890.495,35	2.222.265.465,51
2. Cédulas a empresas	-	-	-	-	-	-
3. Valores representativos de deuda	-	-	-	-	-	-
4. Derivados	-	-	-	-	-	-
5. Otros activos financieros	-	-	-	-	-	-
6. Otras inversiones	-	-	-	-	-	-
V. Inversiones financieras a largo plazo	132.678,00 €	191.124,46	390.702.354,49	125.182,60 €	174.227,70	390.896.517,79
1. Instituciones de patrimonio	-	-	-	-	-	-
2. Créditos a terceros	-	-	-	-	-	-
3. Valores representativos de deuda	-	-	-	-	-	-
4. Derivados	-	-	-	-	-	-
5. Otros activos financieros	132.678,00 €	191.124,46	390.702.354,49	125.182,60 €	174.227,70	390.896.517,79
6. Otras inversiones	-	-	-	-	-	-
VI. Activos por traspaso diferido	229.379,56 €	330.384,07	875.401.459,72	12.663,46 €	17.593,56	39.293.748,47
VII. Deudas comerciales no corrientes	-	-	-	-	-	-
B) ACTIVO CORRIENTE	18.708.631,85 €	26.951.212,40	65.094.478.390,71	22.883.287,87 €	31.570.352,08	70.830.926.224,79
A. Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-	-	-	-	-
II. Existencias	-	-	-	-	-	-
1. Comerciales	-	-	-	-	-	-
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-

574

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2009		EJERCICIO 2008 EN US\$		EJERCICIO 2009 EN COP\$		EJERCICIO 2008		EJERCICIO 2008 EN US\$		EJERCICIO 2008 EN COP\$	
A) PATRIMONIO NETO												
A-1) Fondos propios	16.109.981,28 €	22.499.778,71	23.200.739,12	47.427.739,309,51	18.806.784,40 €	21.596.308,14	49.355.184.184,23					
I. Capital	6.000.000,00 €	8.643.042,35	8.643.042,35	17.658.366,465,00	6.000.000,00 €	8.350.730,69	18.735.616.656,39					
1. Capital estructurado	8.000.000,00 €	8.643.042,35	8.643.042,35	17.658.366,465,00	8.000.000,00 €	8.350.730,69	18.735.616.656,39					
II. Prima de emisión												
III. Reservas	9.293.486,42 €	13.387.347,19		27.366.816.748,28	9.293.486,42 €	11.690.885,97	26.228.554.855,17					
1. Legal y estatutarias	1.206.000,00 €	1.724.008,47		3.333.673.293,00	600.000,00 €	835.073,07	1.873.567.598,64					
2. Otras reservas	8.087.486,42 €	11.663.338,72		23.833.143.455,28	8.693.486,42 €	10.855.812,90	24.355.987.256,53					
IV. (Acreos y pasaciones en patrimonio propio)												
V. Resultados de ejercicios anteriores												
1. Remanente												
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)												
VI. Otras aportaciones de socios												
VII. Resultado del ejercicio	1.170.404,88 €			2.392.576.156,23			4.408.223.132,07					
VIII. (Dividendo a cuenta)												
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto												
A-2) Ajuste por cambios de valor	486.644,42 €	(701.015,41)		(1.433.036.738,59)	1.412.036.600,00 €	1.965.253,51						
I. Activos financieros disponibles para la venta												
II. Operaciones de cobertura												
III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos												
IV. Diferencia de conversión												
V. Otros												
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos												
B) PASIVO NO CORRIENTE												
I. Provisiones a largo plazo	1.508.807,07 €	1.813.465,82		3.707.141.228,01	1.508.807,07 €	1.809.889,87	4.284.984.938,65					
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	15.025.238,58	21.644,07		44.245.447,22	15.025.238,58	874.345,58	1.961.673.002,24					
2. Actuaciones mercantiles												
3. Provisiones por reestructuración												
4. Otras provisiones	15.025.238,58	21.644,07		44.245.447,22	15.025.238,58	874.345,58	1.961.673.002,24					
II. Deudas a largo plazo	630.830,22 €	1.352.119,07		2.766.086.483,41	387.778,10 €	553.822,96	1.242.102.946,94					
1. Obligaciones y otros valores negociables												
2. Deudas con entidades de crédito	120.063,22 €	172.951,92		353.553.994,99	397.778,10 €	553.822,96	1.242.102.946,94					
3. Acreos por arrendamiento financiero	695.207,00 €	1.201.450,59		2.007.195.240,84								
4. Derivados	124.085,09 €	178.716,51		365.337.647,58								
5. Otros pasivos financieros												
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	304.547,44 €	438.702,74		896.809.295,98	346.246,10 €	481.901,32	1.081.188.987,47					
IV. Pasivos por impuesto diferido												
V. Reestructuraciones a largo plazo												
VI. Acreos conexos no corrientes												
VII. Deuda con entidades financieras especiales a largo plazo												
C) PASIVO CORRIENTE												
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	5.680.993,99 €	8.183.511,94		16.728.980.616,79	8.808.891,58 €	12.400.604,16	27.822.051.009,01					
II. Provisiones a corto plazo												
III. Deudas a corto plazo	939.630,18 €	1.353.535,45		2.766.878.647,57	2.542.701,04 €	3.538.907,93	7.939.844.997,42					
IV. Obligaciones y otros valores negociables												

2. Deudas con entidades de crédito	628.123,34 €	\$	304.614,10	\$	1.849.652.226,05	2.164.580,42 €	\$	3.072.628,02	\$	6.759.124.543,50
3. Acreedores por arrendamiento financiero	371.874,85 €	\$	448.759,34	\$	917.326.421,51	378.120,92 €	\$	526.263,97	\$	1.150.720.447,94
4. Deuda		\$		\$			\$		\$	
5. Otros pasivos financieros	56.354,00 €	\$	81.778,33	\$	165.947.187,29	35.629,88 €	\$	49.398,03	\$	111.250.713,07
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		\$		\$			\$		\$	
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	4.685.001,20 €	\$	6.748.778,18	\$	13.796.054.761,83	6.331.562,98 €	\$	8.812.188,21	\$	18.770.956.304,82
1. Proveedores	1.298.855,26 €	\$	2.534.792,94	\$	5.181.698.774,83	2.098.281,16 €	\$	2.803.692,02	\$	6.514.627.067,17
a) Proveedores a largo plazo	1.759.651,26 €	\$	2.634.792,94	\$	5.181.698.774,83	2.098.281,16 €	\$	2.803.692,02	\$	6.514.627.067,17
b) Proveedores a corto plazo		\$		\$			\$		\$	
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	2.385.149,92 €	\$	2.948.052,80	\$	6.022.409.710,40	2.611.610,11 €	\$	3.534.808,78	\$	8.155.020.635,62
3. Acreedores varios	4.685.93 €	\$	6.271,33	\$	13.739.952,42	116.208,72 €	\$	160.346,17	\$	358.751.053,73
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.262.329,79 €	\$	3.802,64	\$	7.773.462,85		\$		\$	
5. Pasivos por impuesto corriente	300.437,51 €	\$	432.182,35	\$	894.706.871,08	1.240.038,44 €	\$	1.725.871,18	\$	3.872.147.311,90
6. Otras deudas con las administraciones públicas	4.572.456,37 €	\$	824.626,00	\$	1.685.725.210,34	228.153,53 €	\$	387.509,07	\$	969.409.236,10
7. Anticipos de obreros		\$		\$			\$		\$	
VI. Periodificaciones a corto plazo		\$		\$			\$		\$	
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		\$		\$			\$		\$	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	22.650.246,75 €	\$	32.486.769,47	\$	68.430.844.474,33	26.087.917,44 €	\$	36.308.862,19	\$	81.482.200.109,89

Tasa de Cambio a 31 Diciembre de: 2009: Euro/US\$ 0,6842 TRM; COP\$ 2.044,33 - 2008: Euro/US\$ 0,7185 TRM; COP\$ 2.243,59
 La conversión de los Estados Financieros de Euros a Pesos Colombianos es el resultado de multiplicar el valor del Euro por la Tasa de Cambio a Dolares certificado por el European Central Bank, y este resultado multiplicado por la TRM en Colombia certificada por el Banco de la Republica de Colombia a la fecha de Corte.


LUZ ESPERANZA MORALES ROJAS
CONTADOR PÚBLICO
 C.C. 51.921.650
 T.P. 90177-T

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS NORMAL A 31 DE DICIEMBRE
EUROCONSULT, S.A.

	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2008 EN US\$	EJERCICIO 2008 EN COP\$	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2008 EN US\$	EJERCICIO 2008 EN COP\$
A) OPERACIONES CONTINUADAS						
1. Ingreso neto de la cota de negocios	35.315.439,84 €	50.872.127,11	103.994.328.402,78 €	43.159.557,85 €	60.068.974,04	134.770.149.473,46
a) Ventas	121.280,52 €	174.705,45	357.138.112,07 €	-	-	-
b) Prestaciones de servicios	35.100.150,12 €	50.697.421,67	103.637.190.290,71 €	43.159.557,85 €	60.068.974,04	134.770.149.473,46
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	3.750,00 €	-	-	-	-	-
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	13.010.578,94 €	66.570,52	140.051.251,51 €	-	-	-
4. Aprovisionamientos	12.474.650,18 €	(18.747.830,80)	38.312.612.772,28 €	15.107.483,81 €	(21.826.424,23)	(47.174.675.140,51)
a) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	12.474.650,18 €	(1.221.331,20)	2.496.681.881,80 €	965.177,14	(7.348.750,37)	(3.026.042.839,99)
b) Trabajos realizados por otras empresas	12.474.650,18 €	(17.526.499,60)	35.815.930.890,48 €	14.139.406,67	(19.877.673,86)	(44.148.632.300,52)
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
5. Otros ingresos de explotación	2.280,00 €	3.723,71	7.612.121,22 €	60,97 €	95,99	215.365,90
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.280,00 €	574,76	1.174.946,37 €	60,97 €	95,99	215.365,90
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	-	6.437.174,85 €	-	-	-
6. Gastos de personal	(12.850.491,81) €	(18.280.310,88)	(37.389.150.901,89) €	(15.268.811,85) €	(21.251.003,27)	(47.670.538.428,12)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(10.160.000,00) €	(14.667.257,59)	(29.983.241.586,22) €	(12.090.057,18) €	(16.829.896,50)	(37.768.689.728,48)
b) Indemnizaciones	(2.690.491,81) €	(3.813.053,29)	(7.385.911.915,48) €	(2.178.754,67) €	(4.421.417,77)	(9.919.848.701,64)
c) Seguridad social a cargo de la empresa	-	-	-	-	-	-
d) Retribuciones a larga plazo mediante sistemas de aportación o prestación diferida	-	-	-	-	-	-
e) Retribuciones mediante instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-
f) Otros gastos sociales	-	-	-	-	-	-
g) Provisiones	-	-	-	-	-	-
7. Otros gastos de explotación	8.261.728,89 €	(11.901.078,77)	(24.328.542.247,71) €	8.807.327,40 €	(13.649.724,98)	(30.824.386.473,72)
a) Servicios externos	7.925.962,60 €	(11.417.455,49)	(23.339.805.032,81) €	8.618.621,99 €	(13.649.724,98)	(30.824.386.473,72)
b) Tributos	335.766,29 €	(483.623,28)	(1.088.707,26) €	188.705,41 €	(227.911,24)	(286.980.703,89)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones contractuales	269.999,12 €	(382.460,66)	(781.837.340,35) €	95.801,68 €	(733.335,67)	(209.150.579,31)
d) Otros gastos de gestión corriente	-	-	-	-	-	-
B. Amortización del inmovilizado	(484.200,82) €	(711.889,94)	(1.455.285.982,43) €	(810.486,92) €	(1.128.040,17)	(2.550.859.513,41)
9. Impulsión de subvenciones de inmovilizado no financiero y otros	-	-	-	-	-	-
10. Exceso de provisiones	198.353,99 €	285.701,51	584.039.602,96 €	-	-	-
11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado	50.109,21 €	72.182,67	147.557.980,93 €	-	-	-
a) Deterioro y pérdidas	-	-	-	-	-	-
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	50.109,21 €	72.182,67	147.557.980,93 €	-	-	-
13. Otros resultados	-	-	-	408,58 €	(668,69)	(1.275.832,99)
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	1.167.319,89 €	1.657.125,74	3.407.988.455,29 €	2.166.042,38 €	3.073.308,78	6.760.629.450,62
14. Ingresos financieros	181.130,13 €	260.919,23	533.378.919,12 €	58.112,40 €	80.880,17	181.461.933,81
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	175.000,00 €	252.089,74	515.327.356,23 €	-	-	-
a.1) En empresas del grupo y asociadas	175.000,00 €	252.089,74	515.327.356,23 €	-	-	-

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL
EUROCONSULT S.A.

ACTIVO	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2006 EN US\$	EJERCICIO 2006 EN COP\$
A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.568.433,25 €	\$ 4.699.635,52	\$ 10.521.497.004,83
0. Gastos de establecimiento	44.403,79 €	\$ 58.479,90	\$ 130.924.221,01
I. Inmovilizado Intangible	1.219.318,16 €	\$ 1.605.845,07	\$ 3.595.149.879,40
5. Aplicaciones Informaticas	171.936,48 €	\$ 226.440,77	\$ 506.953.341,31
7. Otro inmovilizado Intangible	1.047.381,68 €	\$ 1.379.404,29	\$ 3.088.196.538,08
II. Inmovilizado material	1.151.026,69 €	\$ 1.515.905,03	\$ 3.393.793.024,24
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.151.026,69 €	\$ 1.515.905,03	\$ 3.393.793.024,24
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	1.040.739,25 €	\$ 1.370.656,20	\$ 3.068.611.386,16
1. Instrumentos de patrimonio	1.040.739,25 €	\$ 1.370.656,20	\$ 3.068.611.386,16
V. Inversiones financieras a largo plazo	89.010,51 €	\$ 117.227,06	\$ 262.446.779,51
5. Otros activos financieros	89.010,51 €	\$ 117.227,06	\$ 262.446.779,51
VI. Activos por impuesto diferido	23.934,85 €	\$ 31.522,26	\$ 70.571.714,52
		\$ -	\$ -
B) ACTIVO CORRIENTE	21.624.695,86 €	\$ 28.479.778,58	\$ 63.760.243.440,55
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	20.163.839,12 €	\$ 26.555.826,58	\$ 59.452.918.982,57
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	17.785.550,92 €	\$ 23.423.615,07	\$ 52.440.555.174,75
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto	17.785.550,92 €	\$ 23.423.615,07	\$ 52.440.555.174,75
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	2.187.643,83 €	\$ 2.881.132,40	\$ 6.450.250.401,90
3. Deudores varios	71.822,54 €	\$ 94.590,46	\$ 211.768.186,92
4. Personal	5.933,69 €	\$ 7.814,68	\$ 17.495.437,69
5. Activos por impuesto corriente	112.888,14 €	\$ 148.673,96	\$ 332.849.781,31
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a	299.999,99 €	\$ 395.100,74	\$ 884.547.580,16
2. Créditos a empresas	299.999,99 €	\$ 395.100,74	\$ 884.547.580,16
V. Inversiones financieras a corto plazo	4.151,41 €	\$ 5.467,42	\$ 12.240.399,31
5. Otros activos financieros	4.151,41 €	\$ 5.467,42	\$ 12.240.399,31
VI. Periodificaciones a corto plazo	95.815,07 €	\$ 126.188,69	\$ 282.509.970,45
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.060.890,27 €	\$ 1.397.195,14	\$ 3.128.026.508,06
1 Tesorería	1.060.890,27 €	\$ 1.397.195,14	\$ 3.128.026.508,06
TOTAL ACTIVO (A + B)	25.193.129,11 €	\$ 33.179.414,08	\$ 74.281.740.445,38

Tasas de Cambio a 31 Diciembre de 2006: Euro/US\$ 0,7593 TRM; COP\$2.238,79

La conversión de los Estados Financieros de Euros a Pesos Colombianos es el resultado de multiplicar el valor del Euro por la Tasa de Cambio a Dolares certificado por el European Central Bank, y este resultado multiplicado por la TRM en Colombia certificada por el Banco de la República de Colombia a la fecha de Corte.

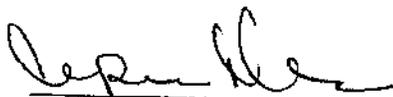


LUZ ESPERANZA MORALES ROJAS
CONTADOR PÚBLICO
C.C. 51.921.650
T.P. 90177-T

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2006 EN US\$	EJERCICIO 2006 EN COP\$
A) PATRIMONIO NETO	13.220.674,41 €	\$ 17.411.661,28	\$ 38.981.053.157,33
A-1) Fondos propios	13.220.674,41 €	\$ 17.411.661,28	\$ 38.981.053.157,33
I. Capital	3.000.000,00 €	\$ 3.951.007,51	\$ 8.845.476.096,40
1. Capital escriturado	3.000.000,00 €	\$ 3.951.007,51	\$ 8.845.476.096,40
III. Reservas	8.533.971,39 €	\$ 11.239.261,68	\$ 25.162.346.645,88
1. Légal y estatutarias	200.000,00 €	\$ 263.400,50	\$ 589.698.406,43
2. Otras reservas	8.333.971,39 €	\$ 10.975.861,17	\$ 24.572.648.239,45
VII. Resultado del ejercicio	1.688.703,02 €	\$ 2.221.392,10	\$ 4.973.230.415,05
B) PASIVO NO CORRIENTE	880.173,45 €	\$ 1.159.190,64	\$ 2.595.184.404,22
I. Provisiones a largo plazo	628.217,30 €	\$ 827.363,76	\$ 1.852.293.703,50
4. Otras provisiones	628.217,30 €	\$ 827.363,76	\$ 1.852.293.703,50
II. Deudas a largo plazo	251.956,15 €	\$ 331.826,88	\$ 742.890.700,72
3. Acreedores por arrendamiento financiero	251.956,15 €	\$ 331.826,88	\$ 742.890.700,72
C) PASIVO CORRIENTE	11.092.281,25 €	\$ 14.608.562,16	\$ 32.705.502.883,82
II. Deudas a corto plazo	3.071.066,45 €	\$ 4.044.602,20	\$ 9.055.014.957,98
2. Deudas con entidades de crédito	2.691.005,52 €	\$ 3.412.360,75	\$ 7.639.559.130,94
3. Acreedores por arrendamiento financiero	480.060,93 €	\$ 632.241,45	\$ 1.415.455.827,04
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8.021.214,80 €	\$ 10.563.959,96	\$ 23.650.487.925,84
1. Proveedores	3.099.749,04 €	\$ 4.082.377,24	\$ 9.139.585.346,06
b) Proveedores a corto plazo	3.099.749,04 €	\$ 4.082.377,24	\$ 9.139.585.346,06
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	2.728.395,07 €	\$ 3.593.303,13	\$ 8.044.651.124,41
3. Acreedores varios	867,28 €	\$ 1.142,21	\$ 2.557.168,17
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	21.495,46 €	\$ 28.309,57	\$ 63.379.192,54
5. Pasivos por impuesto corriente	1.978.505,37 €	\$ 2.605.696,52	\$ 5.833.607.318,98
7. Anticipos de clientes	192.202,58 €	\$ 253.131,28	\$ 566.707.775,69
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	25.193.129,11 €	\$ 33.179.414,08	\$ 74.281.740.445,38

Tasas de Cambio a 31 Diciembre de 2006: Euro/US\$ 0,7593 TRM: COP\$2.238,79

La conversión de los Estados Financieros de Euros a Pesos Colombianos es el resultado de multiplicar el valor del Euro por la Tasa de Cambio a Dolares certificado por el European Central Bank, y este resultado multiplicado por la TRM en Colombia certificada por el Banco de la República de Colombia a la fecha de Corte.



LUZ ESPERANZA MORALES ROJAS
CONTADOR PÚBLICO
C.C. 51.921.650
T.P. 90177-T

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS NORMAL			
EUROCONSULT S.A.			
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2006 EN US\$	EJERCICIO 2006 EN COP\$
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>	39.049.453,12 €	\$ 51.428.227,47	\$ 115.137.001.383,54
a) <i>Ventas</i>	39.049.453,12 €	\$ 51.428.227,47	\$ 115.137.001.383,54
4. <i>Aprovisionamientos</i>	- 15.308.199,42 €	\$ (20.160.936,94)	\$ (45.136.104.016,20)
b) <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	- 991.423,81 €	\$ (1.305.707,64)	\$ (2.923.205.204,25)
c) <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	- 14.316.775,61 €	\$ (18.855.229,30)	\$ (42.212.898.811,95)
5. <i>Otros ingresos de explotación</i>	720,00 €	\$ 948,24	\$ 2.122.914,26
b) <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	720,00 €	\$ 948,24	\$ 2.122.914,26
6. <i>Gastos de personal</i>	- 12.591.790,21 €	\$ (16.583.419,22)	\$ (37.126.793.104,50)
a) <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	- 9.879.752,89 €	\$ (13.011.659,28)	\$ (29.130.372.675,63)
c) <i>Seguridad social a cargo de la empresa</i>	- 2.554.752,01 €	\$ (3.364.614,79)	\$ (7.532.665.945,57)
f) <i>Otros gastos sociales</i>	- 157.285,31 €	\$ (207.145,15)	\$ (463.754.483,31)
7. <i>Otros gastos de explotación</i>	- 7.403.574,30 €	\$ (9.750.525,88)	\$ (21.829.379.832,87)
a) <i>Servicios exteriores</i>	- 7.278.107,61 €	\$ (9.585.285,93)	\$ (21.459.442.297,11)
b) <i>Tributos</i>	- 125.466,69 €	\$ (165.239,94)	\$ (369.937.535,76)
8. <i>Amortización del inmovilizado</i>	- 833.391,24 €	\$ (1.097.578,35)	\$ (2.457.247.430,79)
10. <i>Exceso de provisiones</i>	- 197.605,04 €	\$ (260.246,33)	\$ (582.636.885,95)
11. <i>Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado</i>	8.498,82 €	\$ 11.192,97	\$ 25.058.703,05
b) <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>	8.498,82 €	\$ 11.192,97	\$ 25.058.703,05
13. <i>Otros resultados</i>	- 43.934,97 €	\$ (57.862,47)	\$ (129.541.908,98)
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	2.680.176,76 €	\$ 3.529.799,50	\$ 7.902.479.821,57
14. <i>Ingresos financieros</i>	8.636,43 €	\$ 11.374,20	\$ 25.464.445,04
a) <i>De participaciones en instrumentos de patrimonio</i>	8.636,43 €	\$ 11.374,20	\$ 25.464.445,04
a 1) <i>En empresas del grupo y asociados</i>		\$ -	\$ -
a 2) <i>En terceros</i>	8.636,43 €	\$ 11.374,20	\$ 25.464.445,04
15. <i>Gastos financieros</i>	- 90.144,77 €	\$ (118.720,89)	\$ (265.791.136,08)
b) <i>Por deudas con terceros</i>	- 90.144,77 €	\$ (118.720,89)	\$ (265.791.136,08)
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	81.508,34 €	\$ (107.346,69)	\$ (240.326.691,04)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	2.598.688,42 €	\$ 3.422.452,81	\$ 7.662.153.130,53
20. <i>Impuestos sobre beneficios</i>	- 811.965,40 €	\$ (1.201.060,71)	\$ (2.688.922.715,48)
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES	1.686.703,02 €	\$ 2.221.392,10	\$ 4.973.230.415,05
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		\$ -	\$ -
21. <i>Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</i>		\$ -	\$ -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	1.686.703,02 €	\$ 2.221.392,10	\$ 4.973.230.415,05

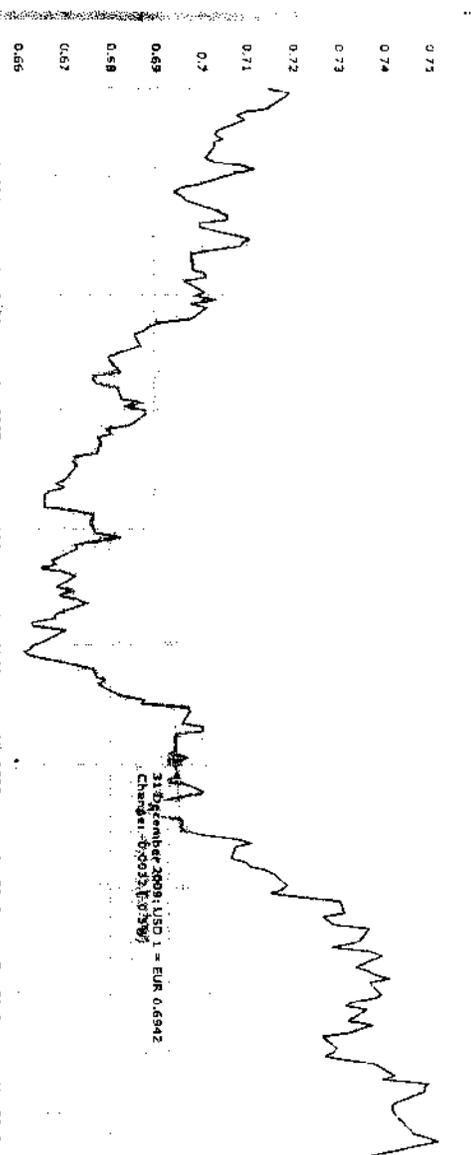
Tasas de Cambio a 31 Diciembre de 2006: Euro/US\$ 0,7593 TRM: COP\$2.238,79

La conversión de los Estados Financieros de Euros a Pesos Colombianos es el resultado de multiplicar el valor del Euro por la Tasa de Cambio a Dolares certificado por el European Central Bank, y este resultado multiplicado por la TRM en Colombia certificada por el Banco de la República de Colombia a la fecha de Corte.

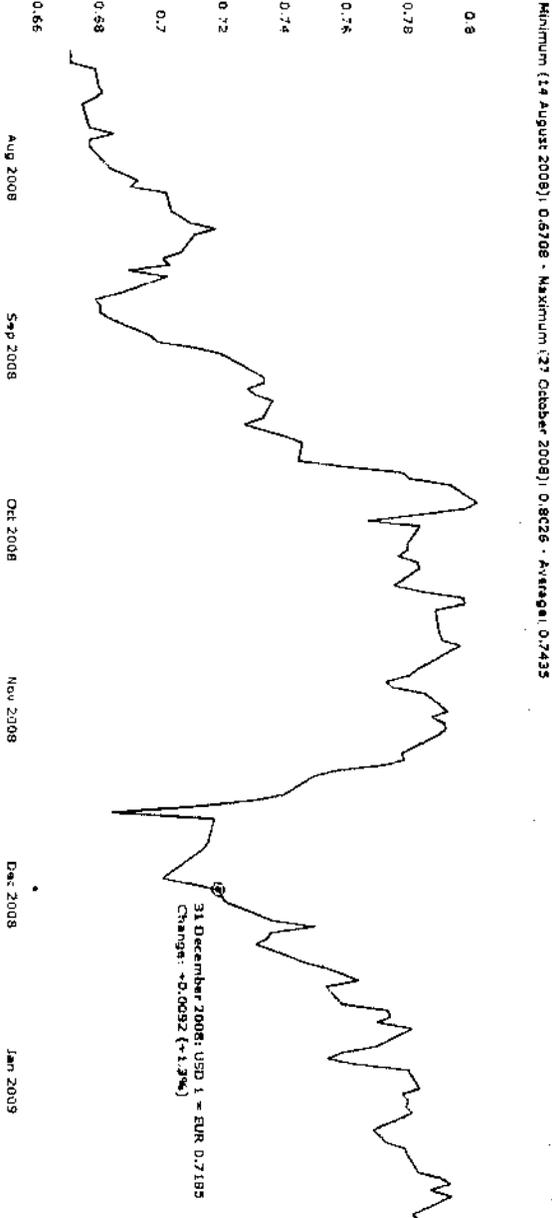

LUZ ESPERANZA MORALES ROJAS
CONTADOR PÚBLICO
C.C. 51.921.650
T.P. 90177-T

TASAS DE CAMBIO OFICIALES EUR/USD (BANCO CENTRAL EUROPEO)

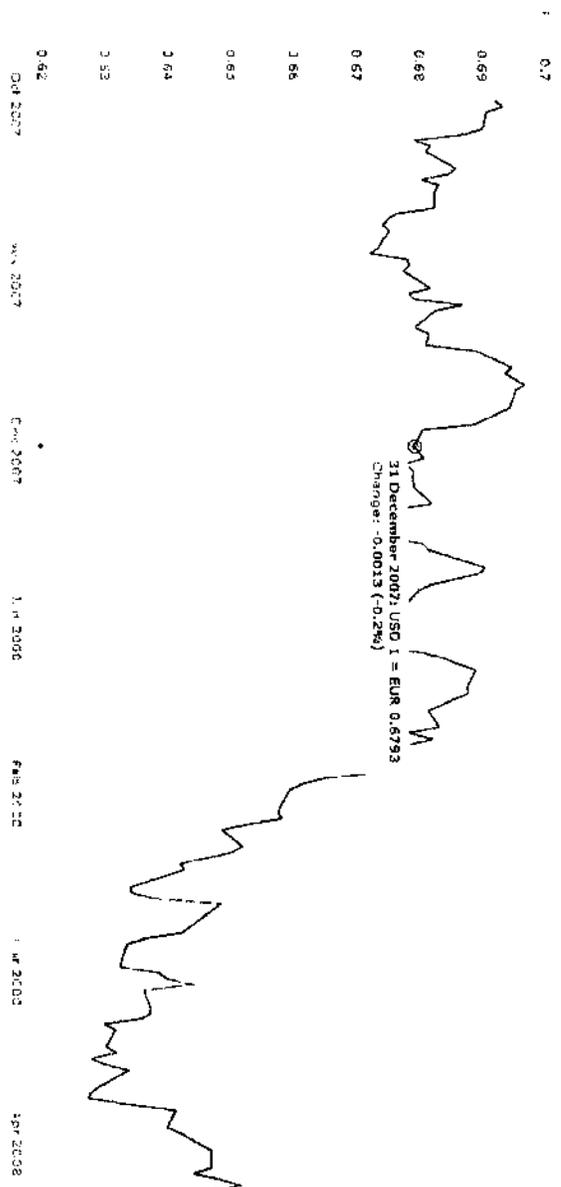
31 de diciembre 2009; TASA 0,6942 EUR/USD; FUENTE: <http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-usd.en.html>



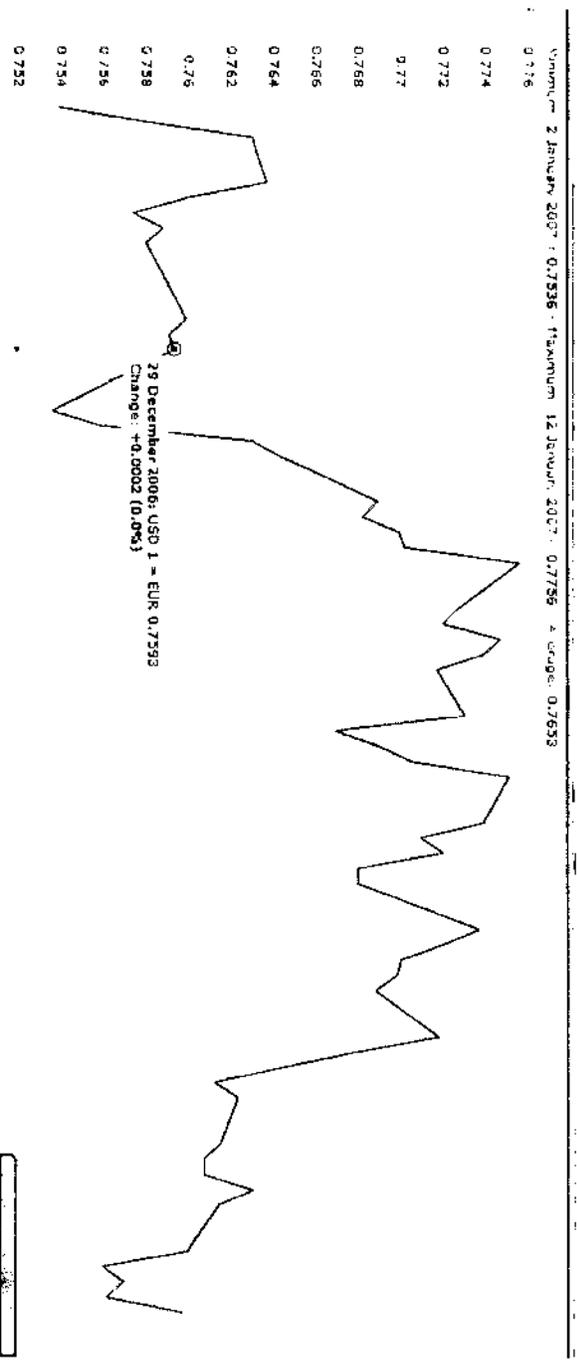
31 de diciembre 2008; TASA 0,7185 EUR/USD; FUENTE: <http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-usd.en.html>



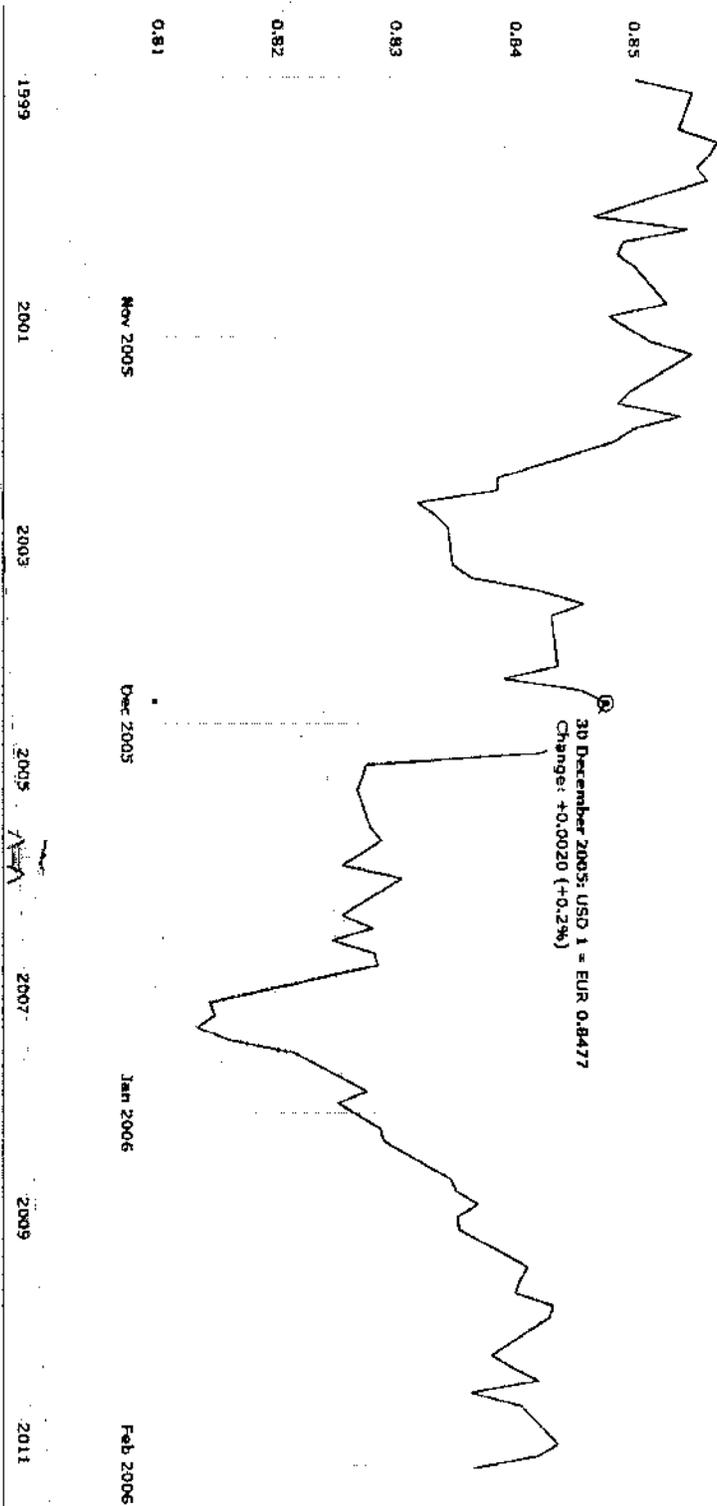
31 de diciembre 2007; TASA 0,6793 EUR/USD; FUENTE: <http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-usd.en.html>



29 de diciembre 2006; TASA 0,7593 EUR/USD; FUENTE: <http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-usd.en.html>



30 de diciembre 2005; **TASA 0,8477 EUR/USD**; FUENTE: <http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-usd.en.html>

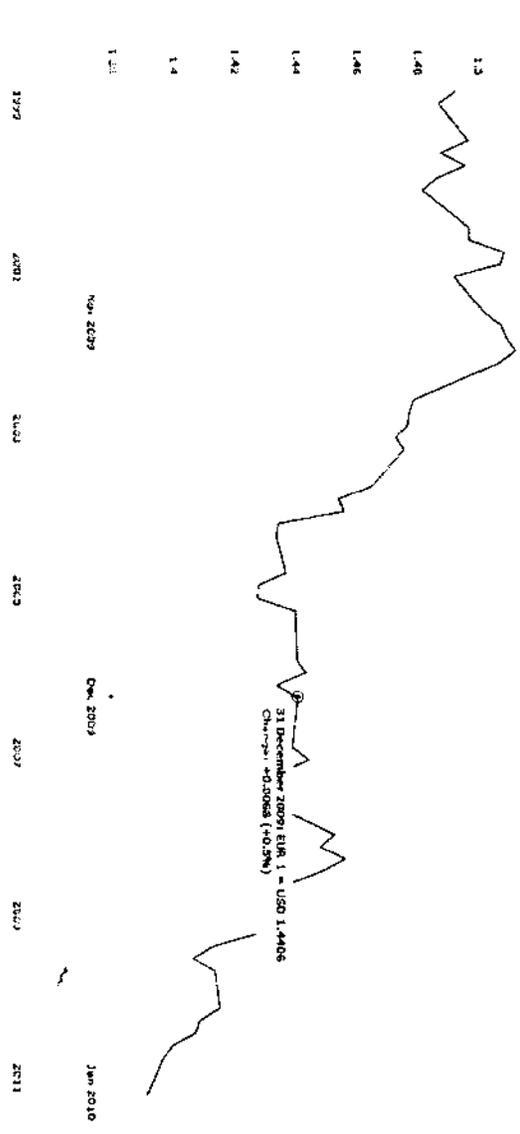


TASAS DE CAMBIO OFICIALES EUR/USD (BANCO CENTRAL EUROPEO)

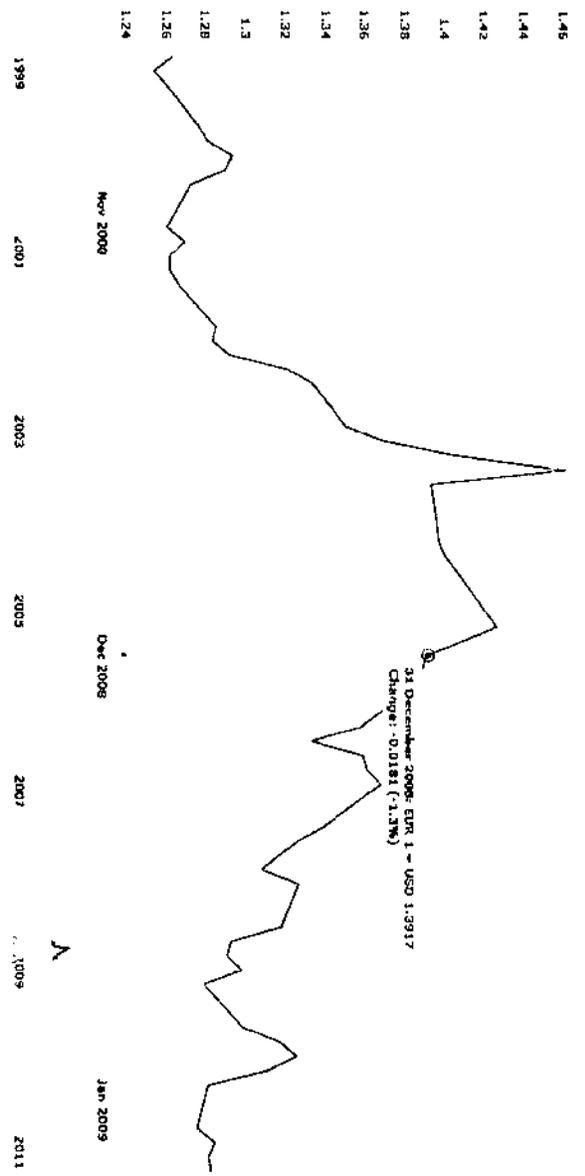


TASAS DE CAMBIO OFICIALES USD/EUR (BANCO CENTRAL EUROPEO)

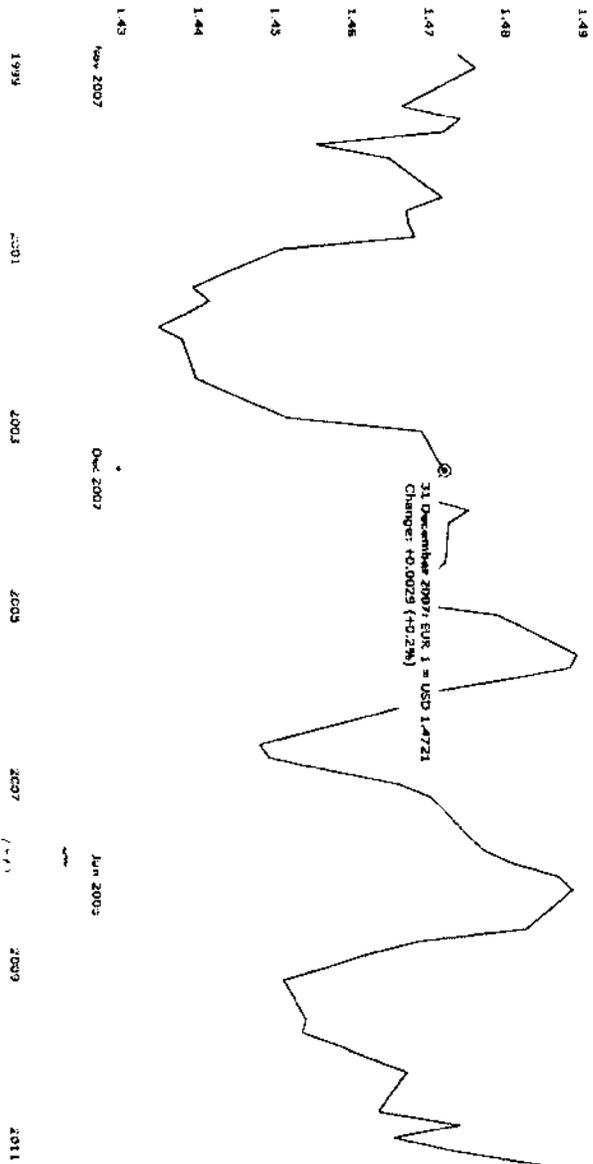
31 de diciembre 2009; TASA 1,4406 USD/EUR; FUENTE: <http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-usd.en.html>



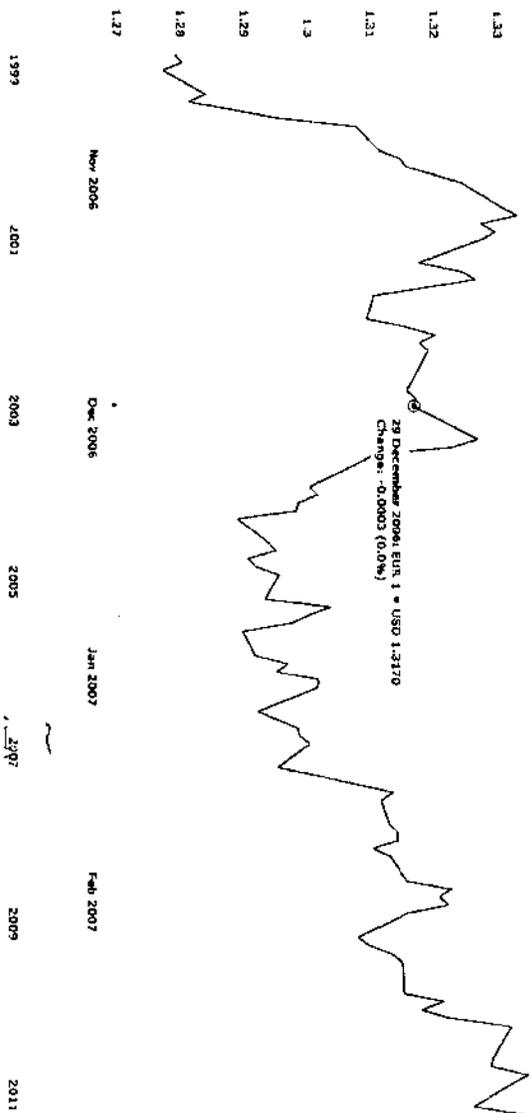
31 de diciembre 2008; TASA 1,3917 USD/EUR; FUENTE: <http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-usd.en.html>



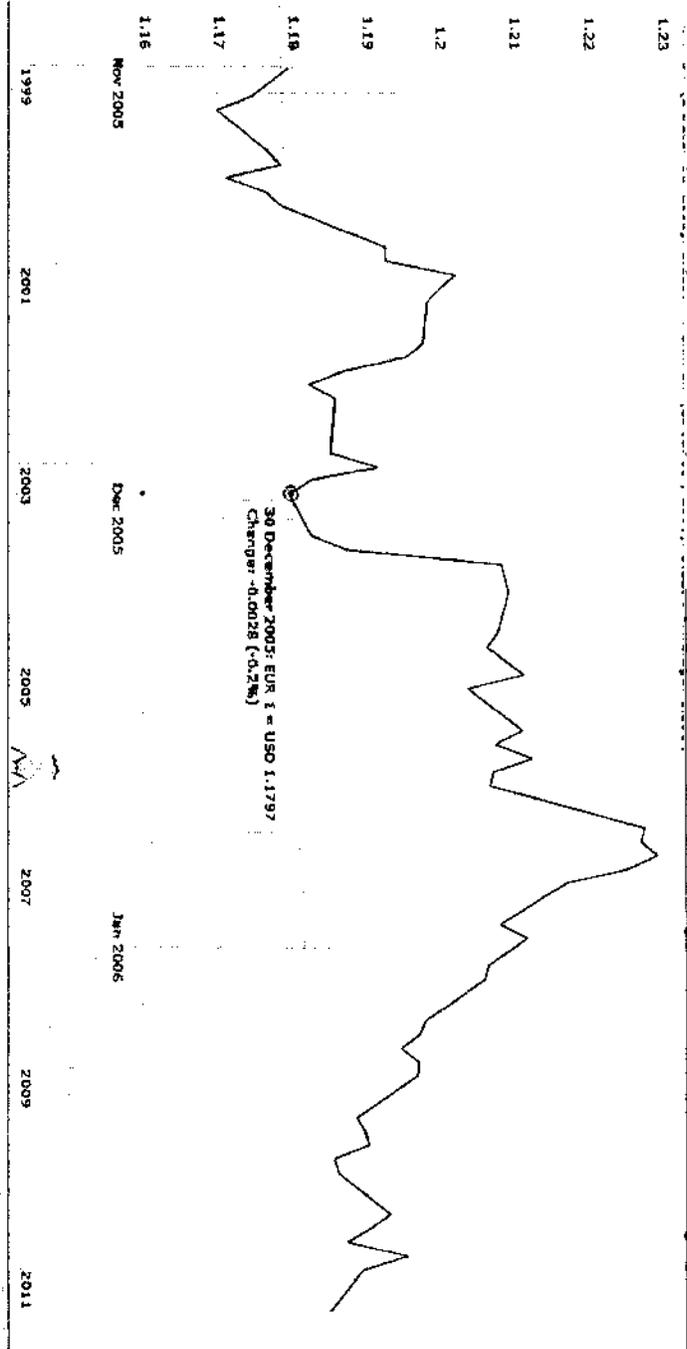
31 de diciembre 2007; TASA 1,4721 USD/EUR; FUENTE: <http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-usd.en.html>

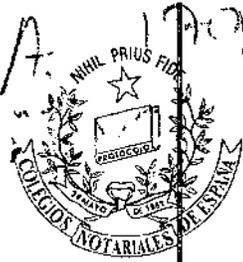


29 de diciembre 2006; TASA 1,3170 USD/EUR; FUENTE: <http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-usd.en.html>



30 de diciembre 2005: TASA 1,1797 USD/EUR. FUENTE: <http://www.ech.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-usd.en.html>





Accionistas presentes: José Calavera Ruiz; Enrique González Valle; Juan M^a Cortés Bretón; Lorenzo Sanz Pérez; Jaime A. Fernández Gómez; Hnos. Gortázar Rotaeché; Begonia Rotaeché, Justo Díaz Lozano; Fernando Blanco García; Claudio Corral Folgado; Gonzalo María Estévez; Ramón Alvarez Cabal; Pedro López Sánchez; José M^a Luzón Cánovas; Raquel Rodríguez Escribano; José Tapia Menéndez; Jorge Ley Urzaiz, Fernando Gortázar Roateche

Accionistas representados: por Enrique González Valle: María Hijosa y Leticia, Luz y Luis Benito; por Jaime Fernández Germán González Isabel y Alberto Blanco Zorroza; por Juan M^a Cortés: Francisco Hostalet Alba

Reunidos en el domicilio social de la Compañía, siendo las 19:00 horas del día 23 de junio de 2.010 los Accionistas al margen relacionados, que representan el 100% del capital social, del que a los presentes corresponde el 88,59% y a los representados el 11,41%, queda constituida, en segunda convocatoria, la Junta General Ordinaria de Instituto Técnico de Materiales y Construcciones S.A., (INTEMAC), que había sido legalmente convocada, con el asesoramiento en Derecho del Sr. Letrado Asesor del Órgano Colegiado, mediante anuncios insertos en el periódico EXPANSIÓN y en el BORME de los días 14 y 20 de mayo pasados, respectivamente, siendo el texto de dicha convocatoria el siguiente

“INSTITUTO TECNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A.
(INTEMAC)



El Consejo de Administración, con la intervención del Señor Letrado Asesor del indicado órgano, convoca a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 22 de junio, a las diecinueve horas, en su domicilio social, sito en la calle Mario Roso de Luna nº 29, edificio 12, de esta Capital, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales individuales de INSTITUTO TECNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. (INTEMAC) (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como de las consolidadas con sus sociedades dependientes (Memoria, Balance y Cuenta de pérdidas y ganancias) e Informes de Gestión tanto de INTEMAC como de su grupo consolidado de sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre aplicación de resultados.

Cuarto.- Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre retribución de los Administradores para el ejercicio de 2010, de conformidad con el art. 25° de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre fijación del valor de las acciones a efectos del artículo 8° de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre reelección del Auditor de Cuentas para el ejercicio 2.010.

Séptimo.- Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre facultar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones durante el ejercicio de 2010 por parte de la Sociedad y/o por parte de sus sociedades dependientes y dentro de los límites y formas establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas

Octavo.- Renovación estatutaria del Consejo (elección o reelección de cuatro Consejeros)

Noveno.- Ruegos y Preguntas

Décimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la propia Junta, o designación de Interventores.

De no reunirse en primera convocatoria el quórum previsto en los Estatutos, la Junta se celebrará, en segunda convocatoria, el siguiente día 23, en los mismos lugar y hora.

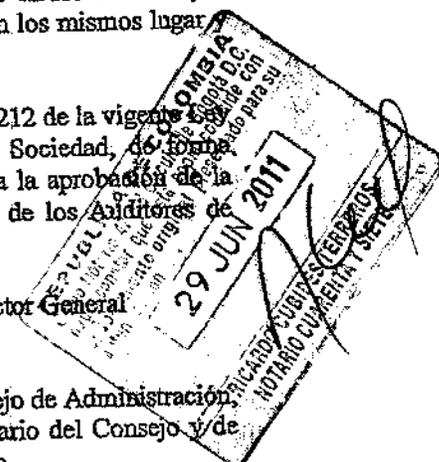
Se recuerda a los Srs. Accionistas el contenido del artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, en cuya virtud podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, a 6 de mayo de 2.010. -Lorenzo Sanz Pérez- Director General

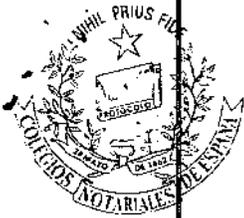
Preside Don Enrique González Valle, Presidente del Consejo de Administración, estando asistido de Don José Manuel de la Jara y Ayala, Secretario del Consejo y de esta Junta General, además de Letrado Asesor del indicado Órgano.

Seguidamente se entra en el examen del orden del día.

1º Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales individuales de INSTITUTO TECNICO DE MATERIALOES Y CONSTRUCCIONES, S.A. (INTEMAC) (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como de las consolidadas con sus Sociedades dependientes (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e Informe de Gestión tanto de INTEMAC como de su grupo consolidado de sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.010.-



[Handwritten signature]



Por el Consejero y Director General, Sr. Sanz Pérez, se da lectura a lo respectivos documentos que presenta el Consejo de Administración después de haberlos aprobado, provisionalmente, en sesión de 23 de abril pasado.

Terminada la lectura y tras un amplio debate, incluidos comentarios sobre el Informe del Auditor, son sometidos a votación los extremos contenidos en este punto del orden del día, siendo aprobados por unanimidad.

Asimismo y por unanimidad, se faculta expresamente al Sr. Director General, D. Lorenzo Sanz Pérez, para que, en nombre de la Compañía y con las más amplias facultades, proceda a comparecer ante el Registro Mercantil y a depositar en el mismo las Cuentas y demás documentos, que determinan el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas y 365 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil.

2º) Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.-

La Junta General, por unanimidad, aprueba la gestión social.

3º) Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre aplicación de resultados

D. Lorenzo Sanz, Director General, expone lo siguiente:

Base de reparto

Beneficio del ejercicio de 2009 antes de impuestos	264.078
Impuesto de Sociedades	-80.362
Beneficio provisional del ejercicio 2010 después de Impuestos	183.716

Distribución:

A dividendo activo	0
A reservas voluntarias	183.716

Se aclara que el beneficio de INTEMAC antes de UTEs y de impuestos es de 253.200,00 €; que el beneficio de las UTEs antes de impuestos es de 10.878,00 €, lo que implica que el beneficio del ejercicio de 2009 antes de impuestos, sea de 264.076,00 €.

Previo el oportuno debate, se acuerda, por unanimidad, que los 183.716,00 € pasen íntegramente, a la cuenta de reservas voluntarias.



4º) Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre retribución de los Administradores para el ejercicio de 2009, de conformidad con el art. 25 de los Estatutos Sociales.-

Por el Sr. Secretario se recuerda a los Srs. Accionistas el contenido del art. 25 de los Estatutos Sociales, con su nueva redacción acordada el pasado año 2006 y cuyo texto literalmente dice:

“Art.º 25º.- El cargo de administrador será retribuido. La Junta General, sin relación alguna con los beneficios sociales, determinará para cada ejercicio la remuneración de los miembros del Consejo de Administración, que consistirá en una cantidad fija bajo la denominación de dieta, que se abonará en el momento, forma y proporción que el propio Consejo determine”.

A la vista de ello y, previo el oportuno debate, se acuerda, por unanimidad: que hasta nuevo acuerdo en contrario, la dieta a abonar a cada Sr. Consejero sea de 2.700,00 euros anuales, que les serán hechos efectivos cuando la liquidez y tesorería de la Sociedad lo permita. No siéndoles abonada a estos en tanto en cuanto la totalidad de la plantilla no esté al corriente en el cobro de sus retribuciones salariales.

5º) Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre fijación del valor de las acciones a efectos del artículo 8º de los Estatutos Sociales.-

Previo el oportuno debate, se acuerda, por unanimidad, que el precio de las acciones a efectos del art. 8º de los Estatutos y para el ejercicio de 2010, sea al cambio de 473,90%, o lo que es lo mismo a 289,08 € por acción .

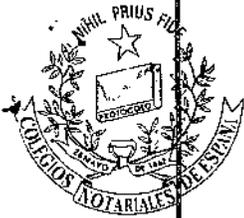
6º) Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre reelección del Auditor de Cuentas para el ejercicio 2.009.-

Se acuerda, por unanimidad, reelegir como Auditor de Cuentas, para el ejercicio de 2009, a HORWATH AUDITORES ESPAÑA, S.R.L., con domicilio en Plaza de Manuel Gómez Moreno nº 2 (Edificio Alfredo Mahou) y en la calle José Abascal nº 43, de esta Capital, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 19695, libro 0, folio 59, Sección 8, hoja M-346497, así como en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el nº S-1620 y con C.I.F. nº B-83887125.

Esta reelección les será comunicada en debida forma para que, por escrito, manifiesten si aceptan el cargo y toman posesión del mismo, declarando no estar incurso en las incompatibilidades establecidas en las leyes 19/1988, de 12 de julio y 12/1995, de 11 de mayo, y en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de la Comunidad de Madrid y demás disposiciones legales de aplicación

Asimismo, por unanimidad, se acuerda facultar a D. Enrique González Valle y a D. José Manuel de la Jara y Ayala, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Junta General y del Consejo de Administración, para que, en nombre de la Sociedad, de forma solidaria e indistinta, con las más amplias facultades, eleven a escritura pública los acuerdos antes transcritos, hasta lograr su inscripción en el Registro Mercantil.





Se hace constar que los acuerdos antes reseñados han sido tomados con el asesoramiento en Derecho del Sr. Secretario, Letrado en ejercicio, perteneciente al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, quien desempeña las funciones de Letrado asesor del Órgano Colegiado, de conformidad con la Ley 39/1.975, de 31 de Octubre.

7º) Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre facultar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones durante el ejercicio de 2.009 por parte de la Sociedad y/o por parte de sus Sociedades dependientes y dentro de los límites y formas establecidos en el artículo 75 de la ley de Sociedades Anónimas.-

Previo el oportuno debate, se acuerda, por unanimidad, la propuesta del Consejo de Administración tomada en sesión de 23 de abril pasado, autorizando al mencionado Consejo para llevar a cabo, durante el ejercicio de 2010, la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad que sumadas a las que pueda tener en cartera no sobrepasen el límite del 20% del nominal del Capital Social, por un precio mínimo equivalente al valor nominal de cada acción y un precio máximo de 289,08 € por acción, y siempre con respeto riguroso de lo establecido en el artículo 75 de la ley de Sociedades Anónimas.

8º) Renovación estatutaria del Consejo (elección o reelección de cuatro Consejeros).-

El Sr. Secretario comunica a la Junta que por los Estatutos Sociales, les corresponde cesar a los Consejeros D. José Calavera Ruiz, D. Fernando Blanco García, D. Fernando de Gortázar Rotaache y D. Juan María Cortés Bretón. Asimismo les indica que el Consejo de Administración, en su sesión de 23 de abril pasado, acordó, por unanimidad, proponer a la Junta General la reelección de todos y cada uno de ellos.

Previos el oportuno debate y votación, por unanimidad, son elegidos Consejeros los siguientes Señores:

- D. José Calavera Ruiz, nacido el día 23 de octubre de 1.931, casado, Dr. Ingeniero de Caminos, de nacionalidad española vecino de Madrid, calle de Príncipe de Vergara nº 204, provisto de N.I.F. 3.555-J

- D. Fernando Blanco García, nacido el 22 de junio de 1.927, casado, Ingeniero Técnico de C.C., de nacionalidad española, vecino de Madrid, Juan Alvarez Mendizábal nº 91, provisto de N.I.F. 6.449-D

- D. Juan María Cortés Bretón, nacido el día 30 de mayo de 1.948, casado, Ingeniero de Caminos, de nacionalidad española, vecino de Madrid, calle Sextante nº 37-C, provisto de N.I.F. 50017434-R

- D. Fernando de Gortázar y Rotaache, nacido el 10 de octubre de 1.956, casado, Abogado, de nacionalidad española, vecino de Madrid, Bárbara de Braganza nº 12, provisto de N.I.F. 669.641-L



El mandato de los Consejeros designados será de cuatro años, conforme al art. 20 de los Estatutos Sociales en relación con el art. 144 del Reglamento del Registro Mercantil.

Los designados, presentes en este acto, aceptan los cargos y toman posesión de los mismos, declarando no estar incurso en las incompatibilidades establecidas en la Ley 12/1.995, de 11 de mayo, y en la Ley 14/1.995, de 21 de abril, de la Comunidad de Madrid, y demás disposiciones legales de aplicación.

Se faculta a D. Enrique González Valle y a D. José Manuel de la Jara y Ayala, Presidente y Secretario de la Junta General y del Consejo de Administración, respectivamente, para que, en nombre de la Sociedad, de forma solidaria e indistinta, con las más amplias facultades, eleven a escritura pública el acuerdo adoptado esta sesión, y antes transcrito, hasta lograr su inscripción en el Registro Mercantil.

Se hace constar que dichos acuerdos han sido tomados con el asesoramiento en Derecho del Sr. Secretario, Letrado en ejercicio, perteneciente al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, quien desempeña las funciones de Letrado Asesor del Órgano Colegiado, de conformidad con la Ley 39/1.975 de 31 de octubre.

9º) Ruegos y Preguntas.-

- a) A propuesta del Sr. Presidente, se hace constar en acta el agradecimiento al personal de la Compañía, sin cuyo concurso y entrega no se habrían alcanzado los resultados obtenidos.
- b) El Sr. Presidente informa a los reunidos sobre las negociaciones que se han mantenido para la constitución, con terceras personas, de una sociedad dedicada al mundo de la tasación, denominada I VALORACIONES, S.A., cuya presidencia va a ostentar D. José Calavera Ruiz y a cuyo Consejo se incorporará D. Enrique González Valle, con la idea de ser sustituido a corto plazo por D. Fernando de Gortázar y Rotasche.
- c) El Sr. Presidente informa que hay un gran interés en vender la autocartera de 650 acciones porque ello permitirá a la Sociedad disponer de una mayor liquidez.
- d) Sin perjuicio de lo anterior, se notifica las ventas de acciones acordadas entre el Sr. Calavera y el Sr. Fernández Gómez; el Sr. Corral y el Sr. París; y el Sr. Tapia y el Sr. Roberto Barrios.
- e) La Junta General de INTEMAC, reitera colectivamente el pésame a nuestro Presidente de Honor D. José Calavera Ruiz y familia por el fallecimiento de su hijo y empleado de la Sociedad D. Rafael Calavera Vayá.

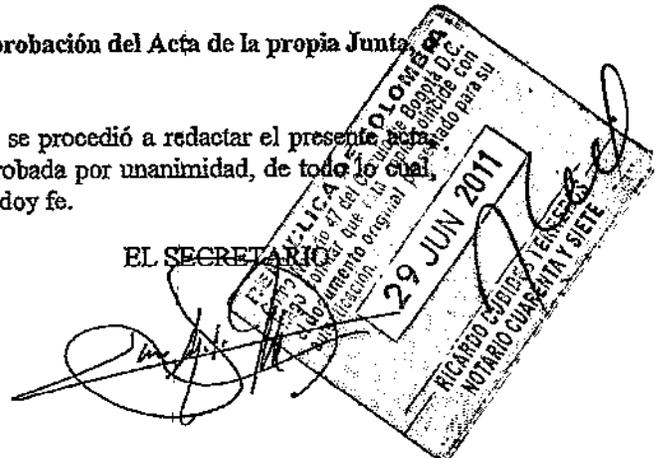
10º) Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la propia Junta designación de Interventores.

Y, no habiendo más asuntos que tratar, se procedió a redactar el presente acta que leída ante la propia Junta General, fue aprobada por unanimidad, de todo lo cual, con el Vº Bº y firma del Sr. Presidente, firmo y doy fe.

Vº Bº
EL PRESIDENTE

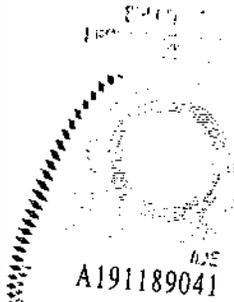


EL SECRETARIO

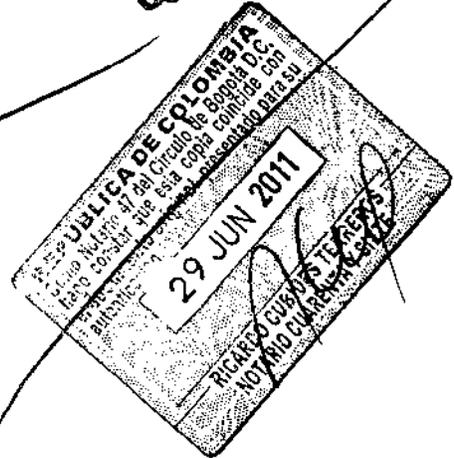
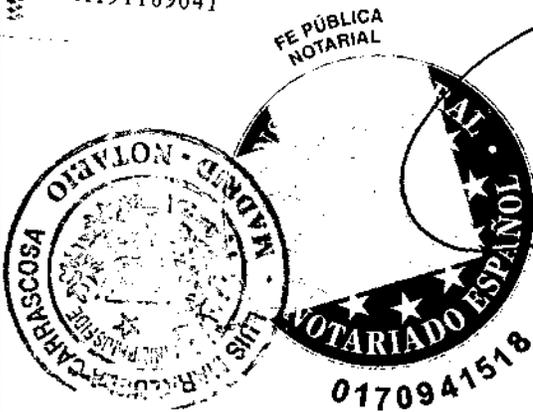




YO, LUIS MARAZUELA CARRASCOSA, NOTARIO DE MADRID Y DE SU ILUSTRE COLEGIO. -----
DOY FE: Que, según resulta del pertinente cotejo, la presente fotocopia extendida en el presente folio de papel timbrado de los Colegios Notariales de España y en tres de la misma serie y numeración correlativa posterior, es reproducción fiel y exacta del documento que tengo a la vista. Madrid a 19 de mayo de 2.011. -----



[Handwritten signature]

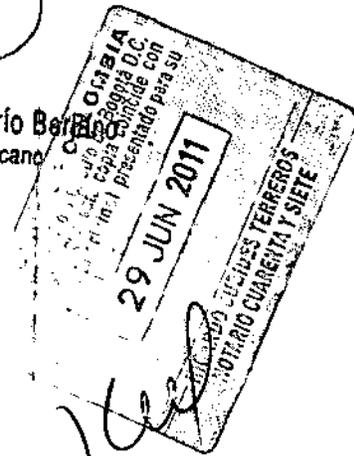


Apostille (o legalización única)
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
(Real Decreto 2433/1978, de 2 de octubre)

1. País: *España*
El presente documento público
2. Ha sido firmado por *D. Luis*
Lacort y de la Carrascosa
3. Actuando en calidad de *NOTARIO*
4. Se halla sellado/timbrado con *el de su Notaría*
CERTIFICADO **19 MAYO 2011**
5. En Madrid
6. El _____
7. Por el Decano del Colegio Notarial de Madrid
8. Con el número **37830**
9. Sello/timbre:
10. Firma: 



[Signature]
Don Manuel Gerardo Tarrío Bermejo
Firma delegada del Decano



0171009922

**SECTOR 3
FORMATO 2
CAPITAL DE TRABAJO (en SMMLV*)
Interesados Colombianos y Extranjeros**

Nombre del Interesado CONSORCIO ECO-AMÉRICAS

Nombre de los Miembros que conforman el Interesado: SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTÉCNIA S.A., LV. INGENIEROS CONSULTORES S.A., ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S., EUROCONSULT S.A., INSTITUTO TÉCNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.A.

Nombre del(las) MAP(S): SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTÉCNIA S.A.

Capital de Trabajo de la Estructura Plural

	Corfe a 31-dic-2009
(+) Activo corriente	235.170,74
(-) Pasivo corriente	110.773,27
(=) Capital de trabajo	124.397,47

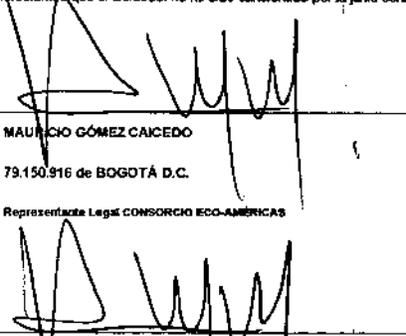
Para estructuras Plurales solamente:

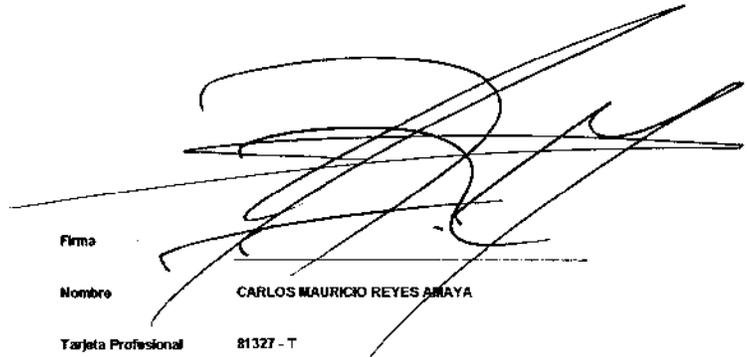
Capital de Trabajo de los miembros de la Estructura Plural

# de Miembro	3
Nombre del Miembro de la Estructura Plural	ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S.
MAP [Si; No]	SI
Para MAPs solamente: Indicar si dicho MAP acredita la experiencia solicitada al menos a un MAP [Si; No]	NO
Porcentaje de Participación en la estructura plural (%; con dos decimales)	20,00%
(+) Activo corriente	20,12
(-) Pasivo corriente	-
(=) Capital de trabajo	20,12

* Presentar la Información en SMMLV del 2009 a 2010, de acuerdo con el RUP en firma presentado o los Estados Financieros presentados, según corresponda.

Para Interesados colombianos o miembros colombianos de Estructuras Plurales: Los abajo firmantes hacemos constar que los datos consignados en el presente formato son verídicos por cuanto la empresa cumple con lo dispuesto en las normas contables que le regulan y nos sometemos a lo dispuesto en el artículo 43 De la Ley 222 de 1995, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. Así mismo, manifestamos que el Contador no ha sido sancionado por la Junta Central de contadores y cuenta con el certificado de inscripción vigente a la Fecha de Cierre.

Nombre MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
 Identificación 79.150.916 de BOGOTÁ D.C.
 Cargo Representante Legal CONSORCIO ECO-AMÉRICAS
 Firma 
 Nombre MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
 Identificación 79.150.916 de BOGOTÁ D.C.
 Cargo Representante Legal ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S.

Firma 
 Nombre CARLOS MAURICIO REYES AMAYA
 Tarjeta Profesional 81327 - T
 Cargo Contador ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S.

Instrucciones:

- (1) El nombre del MAP corresponde al Miembro del Interesado que acredita la experiencia de este Formato únicamente.
- (2) El Formato 2 deberá ser suscrito por el representante legal del Interesado, por el representante legal del Miembro de la Estructura Plural (según corresponda) y por el contador, revisor fiscal o quien corresponda en la jurisdicción aplicable (según corresponda).
 En el evento en que los auditores o los revisores fiscales del Interesado o de cualquiera de sus Miembros no pudieran suscribir el Formato 2, este deberá estar suscrito, en reemplazo del auditor o revisor fiscal, por el vicepresidente financiero o su equivalente (y a falta de éste únicamente por el representante legal y el contador), pero en todo caso, deberá acompañarse una certificación o una comunicación del revisor fiscal o auditor o de un abogado autorizado para actuar en la jurisdicción de origen del Interesado o del Miembro de la Estructura Plural en la que se señale la imposibilidad de suscribir el Formato por limitación legal o por falta de autorización legal expresa.
- (3) En caso de Estructuras Plurales, el Formato deberá estar suscrito por cada uno de los representantes legales del(os) miembro(s) que acrediten el Capital de Trabajo.

**SECTOR 3
FORMATO 2
CAPITAL DE TRABAJO (en SMMLV*)
Interesados Colombianos y Extranjeros**

Nombre del Interesado CONSORCIO ECO AMÉRICAS

Nombre de los Miembros que conforman el Interesado: SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTÉCNIA S.A., I.V. INGENIEROS CONSULTORES S.A., ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S., EUROCONSULT S.A., INSTITUTO TÉCNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.A.

Nombre del(los) MAP(S): SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTÉCNIA S.A.

Capital de Trabajo de la Estructura Plural

Corte a 31-dic-2009	
(+) Activo corriente	235.170,74
(-) Pasivo corriente	110.773,27
(=) Capital de trabajo	124.397,47

Para estructuras Plurales solamente:

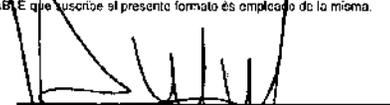
Capital de Trabajo de los miembros de la Estructura Plural

# de Miembro	4	
Nombre del Miembro de la Estructura Plural	EUROCONSULT S.A.	
MAP [Si, No]	SI	
Para MAPs solamente: Indicar si dicho MAP acredita la experiencia solicitada al menos a un MAP [Si, No]	NO	
Porcentaje de Participación en la estructura plural (%; con dos decimales)	20,00%	
(+) Activo corriente		110 876,39
(-) Pasivo corriente		33 666,69
(=) Capital de trabajo		77 209,70

* Presentar la información en SMMLV del 2009 o 2010, de acuerdo con el RUP en firme presentado o los Estados Financieros presentados, según corresponda.

Para Interesados extranjeros o miembros extranjeros de Estructuras Plurales: El abajo firmante, hago constar que los datos consignados en el presente Formato son verdaderos por cuanto la empresa cumple con lo dispuesto en las normas contables que la regulan y está sometida a la ley aplicable de la jurisdicción de su incorporación. El AUDITOR CONTABLE abajo firmante hago constar que (i) tengo la condición de AUDITOR CONTABLE conforme a la jurisdicción de origen del Interesado o miembro extranjero de la Estructura Plural; y (ii) Tengo el número de registro que aparece al pie de mi firma expedido por la entidad pública que agrupa a los AUDITORES DE CUENTAS en la jurisdicción de origen del Interesado o miembro extranjero de la Estructura Plural.

El suscrito Representante Legal del miembro extranjero de la Estructura Plural declaro que el AUDITOR CONTABLE que suscribe el presente Formato es un contratista de la sociedad que represento y el AUDITOR CONTABLE ha sido designado como tal por el órgano competente de la sociedad. Se anexa certificación de la empresa que efectúa la auditoría mediante la cual se certifica que el AUDITOR CONTABLE que suscribe el presente formato es empleado de la misma.

Firma 
 Nombre MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
 Identificación 79.150.916 de BOGOTÁ D.C.
 Cargo Representante Legal CONSORCIO ECO AMÉRICAS
 Firma 
 Nombre MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
 Identificación 79.150.916 de BOGOTÁ D.C.
 Cargo Apoderado de EUROCONSULT S.A.

Firma 
 Nombre M V AUDITORES S.L. JUSTO ESTIVAL-FAILE OJEDA
 Tarjeta Profesional No ROAC (Registro Oficial de Auditores de Cuentas): S-312
 Cargo AUDITOR CONTABLE EUROCONSULT S.A.

Instrucciones:

- (1) El nombre del MAP corresponde al Miembro del Miembro que acredita la experiencia de este Formato únicamente.
- (2) El Formato 2 deberá ser suscrito por el representante legal del Interesado, por el representante legal del Miembro de la Estructura Plural (según corresponda) y por el contador, revisor fiscal o quien corresponda en la jurisdicción aplicable (según corresponda). En el evento en que los auditores o los revisores fiscales del Interesado o de cualquiera de sus Miembros en las Estructuras Plurales no pudiesen suscribir el Formato 2, esto deberá estar suscrito, en reemplazo del auditor o revisor fiscal, por el vicepresidente financiero o su equivalente (y a falta de éste únicamente por el representante legal y el contador), pero en todo caso, deberá acompañarse una certificación o una comunicación del revisor fiscal o auditor o de un abogado autorizado para ejercer en la jurisdicción de origen del Interesado o del Miembro de la Estructura Plural en la que se señale la imposibilidad de suscribir el Formato por limitación legal o por falta de autorización legal expresa.
- (3) En el caso de Estructuras Plurales el Formato deberá ser suscrito por cada uno de los representantes legales de(los) miembro(s) que acrediten el Capital de Trabajo.

FORMATO 1

CERTIFICADO DE EXPERIENCIA Y CAPACIDAD

Madrid, 11 de Abril de 2011

1. INSTRUCCIONES

- 1.1 Las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia y las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, que de conformidad con lo establecido en el Decreto 4881 de 2008 no se deben inscribir en el RUP, deberán acreditar el cumplimiento de los Requisitos Habilitantes a través del diligenciamiento del presente Formato 1, el cual deberá estar acompañado de las respectivas certificaciones de conformidad con lo establecido en el numeral 3.4.4 del Documento de Convocatoria.
- 1.2 En el presente Formato 1 se deberá señalar la información sobre la capacidad jurídica, capacidad financiera y de organización de los Interesados.
- 1.3 En el caso de Estructuras Plurales, cada uno de los miembros de la Estructura Plural deberá adjuntar como parte de la Manifestación de Interés su correspondiente Formato 1.
- 1.4 El Formato 1 deberá ser suscrito por el representante legal del Interesado, por el representante legal del miembro de la Estructura Plural (según corresponda) y por el contador o revisor fiscal (según corresponda). En todo caso, se dará aplicación al numeral 3.4.4 y 3.7.5 del Documento de Convocatoria.
- 1.5 Si se acreditan Requisitos Habilitantes de terceros de conformidad con el numeral 3.3. del Documento de Convocatoria, la información del Formato 1 corresponderá a la sociedad cuyos Requisitos Habilitantes se están acreditando (controlada o matriz o controlada por la matriz, según corresponda) y el Formato deberá estar suscrito de acuerdo con el numeral 3.7.5 del Documento de Convocatoria.
- 1.6 En relación con las cifras consignadas en el Formato 1, a través de las cuales los Interesados demuestren la capacidad financiera exigida en el numeral 3.4.4(b) del Documento de Convocatoria, las mismas deben ser verificables en los Estados Financieros.
- 1.7 Los documentos que se anexen como soporte documental se deberán presentar en original y debidamente suscritos por el responsable de la información que en los mismos conste y se presumirán auténticos. Podrán ser presentados igualmente en fotocopia autenticada por autoridad competente. No será admisible la presentación de información en copias simples. Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en el Documento de Convocatoria.
- 1.8 Relacione los datos de identificación del Interesado o MAP que diligencia el formulario.

- 1.9 Así mismo indique la información del representante legal. Para las facultades del representante legal, indíquelas según la autorización o poder que se las haya concedido, y anexe el documento legal idóneo y auténtico del mismo, que acredite tal calidad y diligencia.
- 1.10 Deberá acreditar que como parte de sus actividades empresariales realiza las actividades exigidas en el Documento de Convocatoria.
- 1.11 En relación con la Capacidad Financiera (Cf): Recuerde utilizar el punto (.) para separar miles y la coma (,) para separar decimales; las cifras se deben expresar en pesos. Indique la fecha de corte a la cual corresponde la información que relaciona.

Adicionalmente, deberá acreditar la condición de contador público, revisor fiscal o quien corresponda en la jurisdicción aplicable, de acuerdo con los requisitos previstos en la ley aplicable al Interesado o miembro de la Estructura Plural. Escriba los siguientes datos tomándolos de los Estados Financieros con corte de 31 de diciembre de 2009 que anexa: Razón de Endeudamiento: Determine e indique el endeudamiento en porcentaje, el cual resulta de dividir el pasivo total sobre el activo total. Índice de Liquidez: Determine e indique la liquidez en número de veces, la cual resulta de dividir el activo corriente sobre el pasivo corriente. Patrimonio: Relacione el patrimonio en Pesos constantes. Capacidad financiera (Cf): Se encuentra compuesta por el valor máximo de Razón de Endeudamiento y mínimos de Índice de Liquidez y de Patrimonio, indique cada uno de los valores solicitados.

- 1.12 En relación con la Capacidad de Organización (Co), los Interesados deberán transcribir en SMMLV, los ingresos brutos operacionales de los dos (2) mejores años de los últimos cinco (5) años. El promedio aritmético de los dos (2) mejores años de ingresos brutos operacionales, corresponderá al valor de la Capacidad de Organización correspondiente.
- 1.13 Finalmente relacione el número total de documentos que utilizó para calificarse los cuales debe anexar al formulario y están relacionados con la información sobre la capacidad jurídica, y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los Interesados.

FORMATO 1

CERTIFICADO DE EXPERIENCIA Y CAPACIDAD

Madrid, 18 de enero de 2011

2. IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL INTERESADO O MIEMBRO DE LA ESTRUCTURA PLURAL: **INSTITUTO TÉCNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.A.**

MAP: SI NO

REQUISITO(S) HABILITANTE(S) QUE ACREDITA: **EXPERIENCIA**

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: **CALLE MARIO ROSO DE LUNA 29**

CIUDAD Y PAÍS: **MADRID 28022 (ESPAÑA).**

TELÉFONO: **034913277400** FAX: **034913277421**

CORREO ELECTRÓNICO: **intemac@intemac.es**

NOTIFICACIONES:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: **CALLE 103 No.45 A - 29**

CIUDAD Y PAÍS: **BOGOTÁ (COLOMBIA).**

TELÉFONO: **634 8996** FAX: **634 8996**

CORREO ELECTRÓNICO: **licitaciones@estructuradorcolombia.com**

3. REPRESENTACIÓN LEGAL

NOMBRES DEL(LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES): **JAIME ANTONIO FERNANDEZ GOMEZ; MAURICIO GÓMEZ CAICEDO**

Documento de identificación:

C.C: C.E: _____ Pasaporte: _____ País: **España** No. **9724262-T**

C.C: C.E: _____ Pasaporte: _____ País: **Colombia** No. **79.150.916**

49

1 Este campo denominado "Requisito Habilitante que Acredita" solamente deberá ser diligenciado por quien haya marca una equis [X] en el "sí" frente a "MAP" los demás campos deberá ser diligenciados por todos los Interesado y miembros de Estructuras Plurales sin importar si tienen o no la condición de MAP.

Facultades del representante legal:

JAIME ANTONIO FERNANDEZ GOMEZ: Facultades del representante legal según acuerdo escritura otorgada ante Notario de Madrid, PALOMA MOZO GARCIA, el 16 de diciembre de 2010, numero 2.407 de su protocolo. Inscripción Registro Mercantil 114 que se adjuntan al final de este documento

1.- Requir la Sociedad con las más amplias atribuciones para organizar o vigilar todos los servicios de la misma y de sus dependencias y llevar la dirección técnica y administrativa de los negocios sociales.

2.- Representar a la Compañía frente a toda clase de personas o entidades, públicas o privadas, individuales o colectivas y con relación a toda clase de asuntos o negocios que afecten o interesen, directa o indirectamente, a la Sociedad, interviniendo en tal representación con plenitud de facultades

3.- Representar a la Compañía, también con plenitud de facultades, ante todos los Juzgados y Tribunales de cualquier grado o Jurisdicción, incluso el Tribunal Constitucional, Centros, Organismos o Tribunales de naturaleza administrativa, Corporaciones o Comisiones, Sindicatos y, en general, ante toda clase de Centros, Oficinas, Dependencias y Organismos del Estado o de las Comunidades Autónomas, Provincia, Municipio o de las Corporaciones, Asociaciones y Fundaciones públicas o privadas, usando o desistiendo sin limitación de todas las facultades, acciones, recursos o derechos, concedidos por las Leyes o Disposiciones en vigor y contrayendo obligaciones, modificándolas, novándolas, sustituyéndolas, librándolas o extinguiéndolas de cualquier forma o manera autorizada por el Derecho, Incluso transigiendo o comprometiendo en arbitraje. Se le facilita expresamente para contestar interrogatorios en juicio ante cualquier Jurisdicción.

4.- Delegar y sustituir las facultades de este poder a favor de otra u otras personas cuando lo juzque preciso con carácter especial o general. Y revocar dichos poderes en legal forma, cuando lo estime necesario.

5.- Otorgar poderes a favor de Abogados y Procuradores con todas las facultades que sean necesarias para su actuación y revocados cuando proceda.

6.- Celebrar con la Administración Pública y con cualquiera persona o entidad pública o privada, autonómica o paraestatal, toda clase de contratos, aceptando las condiciones que estime más convenientes para el interés social y acudir a concursos y subastas, haciendo ofertas, suscribiendo proposiciones, constituyendo y cancelando depósitos y fianzas y aceptando adjudicaciones provisionales y definitivas.

Comparecer ante Notario y firmar con otras Entidades la constitución de Uniones Temporales de Empresas (U.T.E.) así como la disolución y liquidación de las mismas, haciendo extensivo este apoderamiento a la facultad de designar cargos de administración y gerencia de dichas Uniones Temporales de Empresas, incluso al desempeño personal de los mismos.

7.- Ordenar pagos y efectuar cobros; liquidar cuentas y fijar y finiquitar saldos, y percibir cantidades que sean debidas a la Sociedad por cualquier título y por cualquier persona o entidad sin exceptuar las que haya de cobrar o retirar la Sociedad del Banco de España, de la Caja General de Depósitos, o de cualquier otra caja pública, estatal, autonómica, paraestatal, así como de las provinciales y municipales. Constituir o retirar o cancelar depósitos de toda clase, de metálico, de efectos, de valores, de títulos o de cualquier otra clase de cosas muebles, en cualquier persona, entidad u organismo, público o privado, incluso en la Caja General de Depósitos, obrando al efecto con plenitud de facultades en nombre de la Compañía, o

bien realizar la mismas operaciones como depositario a favor de terceros. Recibir en nombre de la Sociedad todo lo que le sea entregado o deba entregarse; reclamar de terceras personas lo que conceptúe deba serles reclamado a favor de la Sociedad o perseguir los bienes sobre los que la Compañía pueda ostentar algún derecho o pretensión, firmando toda clase de documentos al efecto

8. Abrir cuentas corrientes de efectivo en establecimientos bancarios y firmar cheques y órdenes de transferencias para los movimientos de fondos de las mismas. Por tanto, podrá representar sin limitación alguna a la Compañía frente a toda clase de Bancos y Banqueros, oficiales o privados, institutos de crédito y cajas de ahorro, incluso el Banco de España, para la realización de todas las operaciones o negocios de cualquier clase que están autorizados por el Código de Comercio o por cualquier otra disposición general o por los propios Estatutos o Reglamentos de todas las Instituciones, o bien los que puedan concertarse por acuerdo de las partes dentro del margen otorgado por las Leyes a la voluntad de los contratantes.

9.- Girar, aceptar, endosar, protestar, negociar, avalar, cobrar y pagar letras de cambio y cualquier otra clase de documento de giro o descuento. Celebrar con cualquier persona o entidad contratos de cuentas corrientes, simples o de crédito, con o sin garantía, abriéndolas, siquiéndolas, comprobándolas, cerrándolas o modificándolas en cualquier forma y usando libremente cheques, pagarés, mandatos de pago o cualquier otro documentos análogo, todo ello en nombre de la Compañía.

10.- Obtener y conceder toda clase de préstamos o créditos simples, pignoraticios o con fianza personal en relación con cualquier persona o entidad, suscribiendo todos los documentos necesarios para su validez y eficacia o para su modificación, prórroga o extinción total o parcial, actuando con plenas facultades en representación de la Compañía, incluso para avalar o afianzar solidariamente a terceros ante Bancos, Cajas de Ahorro y Entidades de Crédito para garantizar el buen fin y el completo pago de las obligaciones asumidas por tales terceros frente a dichos acreedores, tanto en lo relativo al capital, como a los intereses, comisiones, gastos e impuestos, firmando pólizas de crédito y cuantos documentos sean precisos con entera libertad en lo relativo a pactos y condiciones.

11.- Expedir y retirar mercancías de toda clase de estaciones de ferrocarriles y administraciones de empresas de transporte; hacer deje de cuentas y reclamaciones por averías, pérdidas, extravíos y retrasos y percibir indemnizaciones.

12.- Organizar e inspeccionar la contabilidad de la Sociedad.

13.- El nombramiento del personal directivo, sus facultades, emolumentos y retribuciones. Asimismo, nombrar el resto del personal y determinar sus funciones, sueldos y demás retribuciones.

14.- Ejercer las facultades disciplinarias que la legislación laboral atribuyen al jefe de la empresa.

15.- Adquirir, arrendar, vender y contratar toda clase de bienes muebles y arrendar bienes inmuebles, así cómo transmitir o ceder los derechos de la Compañía sobre plazas de aparcamiento en aparcamientos para residentes de promoción municipal, todo ello mediante los pactos y condiciones que tenga por más convenientes.

UC

MAURICIO GÓMEZ CAICEDO:

1.- Presentar propuestas y ofertas técnico-económicas con entidades públicas y privadas dentro del territorio colombiano, así como para representarla judicial y extrajudicialmente, conforme lo dispone el Artículo 22.4 del Estatuto General de CONTRATACIÓN (Ley 80 de 1993).

2.- Establecer pactos y condiciones con otras sociedades, físicas o jurídicas, consorcios, uniones temporales, uniones transitorias de empresas o cualquier otra forma de asociación necesarias para presentar propuestas en territorio colombiano.

3.- Presentar cuanta otra documentación sea menester para la presentación de propuestas y ofertas técnico-económicas y su adjudicación.

4.- En general, y para el mejor ejercicio de las facultades anteriores llevar a cabo, firmar, suscribir y formalizar cuantos actos, escritos, instancias y documentos públicos o privados sean necesarios para la presentación de ofertas y hasta la completa terminación del procedimiento de licitación o de los trabajos o servicios que le sean encomendados.

4. CLASIFICACIÓN:

Certifico que como parte de las actividades que desarrollo como parte de mi objeto empresarial se encuentran: **La consultoría en materia de infraestructura para el transporte vial y la Interventoría de proyectos.**

5. CALIFICACIÓN:

5.1 Capacidad Financiera

Nombre del MAP que acredita la Capacidad Financiera (valores de Razón de Endeudamiento, Índice de Liquidez, Patrimonio): _____

Fecha de corte de la información relacionada: _____

40

(a) Razón de Endeudamiento

$$\text{Endeudamiento} = \left(\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}} \right) = \frac{\$ \text{_____}}{\$ \text{_____}} * 100 = \text{_____} \%$$

(b) Índice de Liquidez

$$\text{Liquidez} = \left(\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} \right) = \frac{\$ \text{_____}}{\$ \text{_____}} = \text{_____}$$

(c) Patrimonio

Patrimonio en \$: _____

Nombre de los miembros del Interesado (valores de Razón de Endeudamiento e Índice de Liquidez):
INSTITUTO TÉCNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.A.

[Cada uno de los miembros del Interesado deberá acreditar estos indicadores]

Fecha de corte de la información relacionada: 31 de diciembre de 2009

(d) Razón de Endeudamiento

$$\text{Endeudamiento} = \frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}} = \frac{\$ 35.355.495.222,78}{\$ 47.577.101.028,2} * 100 = \underline{74,31 \%}$$

(e) Índice de Liquidez

$$\text{Liquidez} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} = \frac{\$ 31.046.005.718,29}{\$ 26.514.993.613,82} = \underline{1,17}$$

(f) Patrimonio

Patrimonio en COP\$: 12.221.605.805,42

Patrimonio en SMMLV (del respectivo año del patrimonio acreditado): 24.595,70

5.2 Capacidad de Organización (Co)

[Los miembros del Interesado que contribuyan a determinar la Capacidad de Organización, deberán completar la tabla que se adjunta a continuación. De esta forma, para determinar la Capacidad de Organización del Interesado se tomará en consideración durante el proceso de evaluación, el porcentaje de participación de cada miembro del Interesado, de acuerdo con lo establecido en los numerales 3.4.3 (c) y el 3.4.4 (c) del Documento de Convocatoria. Al menos un MAP deberá acreditar el mínimo establecido en los mencionados numerales.]

Nombre del miembro del Interesado: INSTITUTO TÉCNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.A.

MAP: {SI}

Porcentaje de participación: 20 %

Indicar los dos mejores años de los últimos cinco años considerados: primer año considerado 2008 y segundo año considerado 2009.

	Ingreso Bruto Operacional en Pesos	SMMLV	Ingreso Bruto Operacional expresado en SMMLV	Copiar los dos mayores valores	
2005	COP \$57.518.950.393	COP \$ 381.500,00	150.770,51		
2006	COP \$ 72.291.347.361	COP \$ 408.000,00	177.184,67		
2007	COP \$ 77.651.064.978	COP \$ 433.700,00	179.043,26		
2008	COP \$ 85.938.633.664,28	COP \$ 461.500,00	186.215,89	186.215,89	
2009	COP \$ 75.414.813.266,17	COP \$ 496.900,00	151.770,60	151.770,60	
				337.986,49	Total de los dos mayores
					Valores
				168.993,25	Promedio (Total/2)

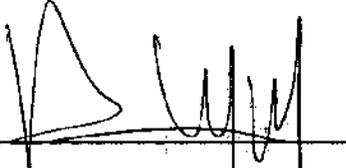
Co= (Ingresos brutos operacionales del primer año considerado 186.215,89 SMMLV + ingresos brutos operacionales del segundo año considerado 151.770,60 SMMLV)/2

Co= 168.993,25 SMMLV

NOTA: Los ingresos brutos operacionales deberán expresarse en SMMLV correspondientes al mismo año de la facturación de dichos ingresos. Se deberán anexar los Estados Financieros en copia auténtica de los años diferentes a 2009 que se relacionen como los dos (2) mejores de los últimos cinco (5) años.

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO ES CIERTA Y QUE CONOZCO LAS SANCIONES LEGALES QUE ACARREARÍA CUALQUIER INFORMACIÓN O DOCUMENTO NO AJUSTADO A LA REALIDAD.

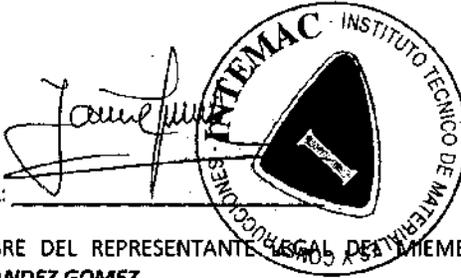
FIRMA:



NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL INTERESADO: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN NO. 79.150.916

FIRMA:



NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL MIEMBRO DE LA ESTRUCTURA PLURAL: JAIME ANTONIO FERNANDEZ GOMEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN NO. 9724262-T

 **Crowe Horwath**
Horwath Auditores España, S.L. - CIF: B-83887125
Plza. Carlos Trias Bertrán, 4 - Planta 1ª, oficina 2
28020 Madrid (España)

FIRMA: HORWATH AUDITORES ESPAÑA, S.L.

No. ROAC (Registro Oficial de Auditores de Cuentas): 5-1620

NOMBRE DEL AUDITOR DE CUENTAS: JOSÉ Ma. GREDILLA BASTOS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN NO. 652.812A

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL
INSTITUTO TÉCNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A.

ACTIVO	EJERCICIO 2009		EJERCICIO 2009 EN US\$		EJERCICIO 2009 EN COP\$		EJERCICIO 2008		EJERCICIO 2008 EN US\$		EJERCICIO 2008 EN COP\$	
	€	\$	€	\$	€	\$	€	\$	€	\$	€	\$
A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.613.343,31	\$ 8.086.708,62	16.531.092.365,00	\$ 16.531.092.365,00	6.276.930,00	\$ 8.735.603,82	19.599.143.381,71	\$ 19.599.143.381,71	25.995,15	\$ 391.611,87	878.616.475,51	\$ 878.616.475,51
I. Inmovilizado intangible												
1. Desarrollo												
2. Concesiones												
3. Patentes, licencias, marcas y similares												
4. Fondo de comercio												
5. Aplicaciones informáticas												
6. Investigador												
7. Otro inmovilizado intangible												
II. Inmovilizado material												
1. Terrenos y construcciones												
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material												
3. Inmovilizado en curso y anticipos												
III. Inversiones inmobiliarias												
1. Terrenos y construcciones												
2. Construcciones												
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo												
1. Instrumentos de patrimonio												
2. Créditos a empresas												
3. Valores representativos de deuda												
4. Derivados												
5. Otros activos financieros												
6. Otras inversiones												
V. Inversiones financieras a largo plazo												
1. Instrumentos de patrimonio												
2. Créditos e terceros												
3. Valores representativos de deuda												
4. Derivados												
5. Otros activos financieros												
6. Otras inversiones												
VI. Activos por impuesto diferido												
VII. Deudas comerciales no corrientes												
B) ACTIVO CORRIENTE	10.542.212,61	\$ 15.187.139,27	31.046.005.718,29	\$ 31.046.005.718,29	11.556.078,00	\$ 16.082.594,38	36.082.747.930,91	\$ 36.082.747.930,91	263.585,00	\$ 379.720,55	690.257.434,58	\$ 690.257.434,58
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta												
II. Existencias												
1. Comerciales												
2. Materias primas y otros aprovisionamientos												
3. Productos en curso												
4. De ciclo largo de producción												

5/2/09

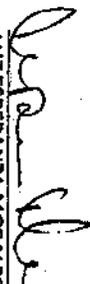
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2009		EJERCICIO 2009 EN US\$		EJERCICIO 2009 EN COP\$		EJERCICIO 2008		EJERCICIO 2008 EN US\$		EJERCICIO 2008 EN COP\$	
	€	\$	€	\$	€	\$	€	\$	€	\$	€	\$
A) PATRIMONIO NETO	4.150.067 €	\$ 5.978.586,46	4.327.600 €	\$ 6.022.727,16	4.327.600 €	\$ 6.022.727,16	4.327.600 €	\$ 6.022.727,16	4.327.600 €	\$ 6.022.727,16	4.327.600 €	\$ 6.022.727,16
A-1) Fondos propios	4.315.777 €	\$ 6.217.308,29	4.321.480 €	\$ 6.014.203,95	4.321.480 €	\$ 6.014.203,95	4.321.480 €	\$ 6.014.203,95	4.321.480 €	\$ 6.014.203,95	4.321.480 €	\$ 6.014.203,95
I. Capital	915.000 €	\$ 1.318.148,99	915.000 €	\$ 1.273.405,55	915.000 €	\$ 1.273.405,55	915.000 €	\$ 1.273.405,55	915.000 €	\$ 1.273.405,55	915.000 €	\$ 1.273.405,55
1. Capital estructurado	915.000 €	\$ 1.318.148,99	915.000 €	\$ 1.273.405,55	915.000 €	\$ 1.273.405,55	915.000 €	\$ 1.273.405,55	915.000 €	\$ 1.273.405,55	915.000 €	\$ 1.273.405,55
2. (Capital no exigido)	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
II. Prima de emisión	67.637 €	\$ 97.437,86	67.637 €	\$ 94.130,42	67.637 €	\$ 94.130,42	67.637 €	\$ 94.130,42	67.637 €	\$ 94.130,42	67.637 €	\$ 94.130,42
III. Reservas	3.380.901 €	\$ 4.870.525,93	3.389.917 €	\$ 4.689.774,50	3.389.917 €	\$ 4.689.774,50	3.389.917 €	\$ 4.689.774,50	3.389.917 €	\$ 4.689.774,50	3.389.917 €	\$ 4.689.774,50
1. Legal y estatutarias	182.000 €	\$ 253.629,80	182.000 €	\$ 254.681,11	182.000 €	\$ 254.681,11	182.000 €	\$ 254.681,11	182.000 €	\$ 254.681,11	182.000 €	\$ 254.681,11
2. Otras reservas	3.197.901 €	\$ 4.606.896,14	3.188.677 €	\$ 4.435.093,39	3.188.677 €	\$ 4.435.093,39	3.188.677 €	\$ 4.435.093,39	3.188.677 €	\$ 4.435.093,39	3.188.677 €	\$ 4.435.093,39
II. Otros activos líquidos equivalentes	503.682 €	\$ 725.618,69	892.512 €	\$ 1.228.192,00	892.512 €	\$ 1.228.192,00	892.512 €	\$ 1.228.192,00	892.512 €	\$ 1.228.192,00	892.512 €	\$ 1.228.192,00
1. Tesorería	503.682 €	\$ 725.618,69	892.512 €	\$ 1.228.192,00	892.512 €	\$ 1.228.192,00	892.512 €	\$ 1.228.192,00	892.512 €	\$ 1.228.192,00	892.512 €	\$ 1.228.192,00
2. Otros activos líquidos equivalentes	600.992 €	\$ 725.618,69	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
TOTAL ACTIVO (A + B)	16.155.664 €	\$ 23.273.849,34	17.833.008 €	\$ 24.818.198,21	17.833.008 €	\$ 24.818.198,21	17.833.008 €	\$ 24.818.198,21	17.833.008 €	\$ 24.818.198,21	17.833.008 €	\$ 24.818.198,21
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	11.700 €	\$ 16.855,02	12.800 €	\$ 17.535,42	12.800 €	\$ 17.535,42	12.800 €	\$ 17.535,42	12.800 €	\$ 17.535,42	12.800 €	\$ 17.535,42
1. Instrumentos de patrimonio	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
2. Créditos a empresas	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
3. Valores representativos de deuda	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4. Derivados	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5. Otros activos financieros	11.700 €	\$ 16.855,02	12.800 €	\$ 17.535,42	12.800 €	\$ 17.535,42	12.800 €	\$ 17.535,42	12.800 €	\$ 17.535,42	12.800 €	\$ 17.535,42
6. Otras inversiones	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
V. Inversiones financieras a corto plazo	11.700 €	\$ 16.855,02	12.800 €	\$ 17.535,42	12.800 €	\$ 17.535,42	12.800 €	\$ 17.535,42	12.800 €	\$ 17.535,42	12.800 €	\$ 17.535,42
1. Instrumentos de patrimonio	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
2. Créditos a empresas	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
3. Valores representativos de deuda	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4. Derivados	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5. Otros activos financieros	11.700 €	\$ 16.855,02	12.800 €	\$ 17.535,42	12.800 €	\$ 17.535,42	12.800 €	\$ 17.535,42	12.800 €	\$ 17.535,42	12.800 €	\$ 17.535,42
6. Otras inversiones	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
VI. Perforaciones a corto plazo	503.682 €	\$ 725.618,69	892.512 €	\$ 1.228.192,00	892.512 €	\$ 1.228.192,00	892.512 €	\$ 1.228.192,00	892.512 €	\$ 1.228.192,00	892.512 €	\$ 1.228.192,00
1. Tesorería	503.682 €	\$ 725.618,69	892.512 €	\$ 1.228.192,00	892.512 €	\$ 1.228.192,00	892.512 €	\$ 1.228.192,00	892.512 €	\$ 1.228.192,00	892.512 €	\$ 1.228.192,00
2. Otros activos líquidos equivalentes	600.992 €	\$ 725.618,69	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	16.155.664 €	\$ 23.273.849,34	17.833.008 €	\$ 24.818.198,21	17.833.008 €	\$ 24.818.198,21	17.833.008 €	\$ 24.818.198,21	17.833.008 €	\$ 24.818.198,21	17.833.008 €	\$ 24.818.198,21
1. Tesorería	16.155.664 €	\$ 23.273.849,34	17.833.008 €	\$ 24.818.198,21	17.833.008 €	\$ 24.818.198,21	17.833.008 €	\$ 24.818.198,21	17.833.008 €	\$ 24.818.198,21	17.833.008 €	\$ 24.818.198,21
2. Otros activos líquidos equivalentes	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propio)	175.342 €	252.397,69	516.367.761,09	46.090 €	64.143,46	143.911.615,35
V. Resultados de ejercicios anteriores	66.136 €	(80.869,52)	(165.375.900,56)	€	€	€
VI. Remanente	66.136 €	(80.869,52)	(165.375.900,56)	€	(64.143,46)	(143.911.615,35)
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores)	€	€	€	€	€	€
VI. Otras aportaciones de socios	€	264.682,71	541.031.446,90	15.116 €	21.036,94	47.198.263,78
VII. Resultado del ejercicio	483.777 €	€	€	€	€	€
VIII. (Dividendo a cuenta)	€	€	€	€	€	€
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	€	€	€	€	€	€
A-2) Ajustes por cambios de valor	209.599 €	(293.298,95)	(599.570.521,14)	€	€	€
I. Activos financieros disponibles para la venta	209.599 €	€	€	€	€	€
II. Operaciones de cobertura	203.597 €	(293.298,95)	(599.570.521,14)	€	€	€
III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos	€	€	€	€	€	€
IV. Diferencia de conversión	€	€	€	€	€	€
V. Otros	€	€	€	€	€	€
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	€	54.578,57	111.571.152,36	€	8.517,20	19.109.114,47
B) PASIVO NO CORRIENTE	€	€	€	€	€	€
I. Provisiones a largo plazo	€	4.324.612,01	8.840.501.808,96	€	1.223.522,84	2.745.083.619,43
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	€	€	€	€	€	€
2. Actuaciones por reestructuraciones	€	€	€	€	€	€
3. Provisiones por reestructuración	€	€	€	€	€	€
4. Otras provisiones	€	€	€	€	€	€
II. Deudas a largo plazo	€	4.324.613,45	8.840.504.553,88	€	1.223.522,84	2.745.083.619,43
1. Obligaciones y otros valores negociables	€	€	€	€	€	€
2. Deudas con entidades de crédito	2.787.903,52	3.787.903,52	7.743.346.011,89	€	657.427,97	1.474.998.824,05
3. Acreedores por arrendamiento financiero	243.410,98	243.410,98	497.588.020,85	€	566.094,87	1.270.084.795,39
4. Derivados	€	293.298,95	599.570.521,14	€	€	€
5. Otros pasivos financieros	€	€	€	€	€	€
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	€	€	€	€	€	€
IV. Pasivos por impuesto diferido	€	€	€	€	€	€
V. Periodificaciones a largo plazo	€	€	€	€	€	€
VI. Acreedores comerciales no corrientes	€	€	€	€	€	€
VII. Deuda con características espaciales a largo plazo	€	€	€	€	€	€
C) PASIVO CORRIENTE	9.803.649 €	12.970.850,86	26.514.993.613,82	12.626.251 €	17.571.854,21	39.424.260.734,94
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	€	€	€	€	€	€
II. Provisiones a corto plazo	€	€	€	€	€	€
III. Deudas a corto plazo	3599.842 €	5.185.932,34	10.601.238.458,51	6.619.690 €	9.204.258,82	20.650.583.038,27
1. Obligaciones y otros valores negociables	€	€	€	€	€	€
2. Deudas con entidades de crédito	3.334.093 €	4.803.918,35	9.820.314.014,96	€	8.790.467,42	19.722.204.805,03
3. Acreedores por arrendamiento financiero	483.777 €	382.013,98	780.924.443,55	297.329 €	413.791,39	928.378.233,24
4. Derivados	€	€	€	€	€	€
5. Otros pasivos financieros	€	€	€	€	€	€
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	207.276 €	298.601,80	610.410.763,23	210.657 €	297.360,38	667.154.764,98
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	5.199.526 €	7.486.115,28	15.303.341.447,17	5.798.904 €	8.070.335,01	18.106.522.931,70
1. Proveedores	€	€	€	€	€	€
a) Proveedores a largo plazo	€	€	€	€	€	€

52

b) Proveedores, empresas del grupo y asociadas									
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	2.361.979 €	\$	3.388.260,92	\$	6.926.384.610,33	\$	3.090.027,82	\$	6.932.755.506,01
3. Acreedores varios	400.893 €	\$	664.106,51	\$	1.357.586.449,82	\$	685.060,19	\$	1.536.994.161,92
4. Personal remuneraciones pendientes de pago	35.743 €	\$	51.491,37	\$	105.260.193,70	\$	-	\$	-
5. Pasivos por impuesto corriente	847.645 €	\$	1.221.118,82	\$	2.496.247.717,09	\$	1.333.289,01	\$	2.991.353.883,38
6. Otras deudas con las administraciones públicas	1.500.155 €	\$	2.167.137,68	\$	4.417.852.476,22	\$	2.967.958,01	\$	6.645.419.370,38
7. Anticipos de clientes	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
VI. Ferrecciones a corto plazo	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
VII. Deuda con características especiales a corto plazo	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	16.155.664 €	\$	23.273.849,34	\$	47.577.101.028,20	\$	24.818.198,21	\$	55.681.861.312,62

Tasa de Cambio a 31 Diciembre de: 2009: US\$/Euro 1,4406 TRM: COP\$ 2.044,33 - 2008: US\$/Euro 1,3917 TRM: COP\$ 2.243,59
 La conversión de los Estados Financieros de Euros a Pesos Colombianos es el resultado de multiplicar el valor del Euro por la Tasa de Cambio a Dolares certificado por el European Central Bank, y este resultado multiplicado por la TRM en Colombia certificada por el Banco de la Republica de Colombia a la fecha de Corte.


LUZ ESPERANZA MORALES ROJAS
 CONTADOR PÚBLICO
 C.C. 51.921.650
 T.P. 90177-1

WTA

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS NORMAL
INSTITUTO TÉCNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A.

	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2009 EN US\$	EJERCICIO 2009 EN COP\$	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2008 EN US\$	EJERCICIO 2008 EN COP\$
A) OPERACIONES CONTINUADAS						
1. Ingreso neto de la cifra de negocios	25.608.462 €	\$ 36.891.550,00	\$ 75.414.813,266,17	27.523.224 €	\$ 38.304.072,34	\$ 85.938.633,664,28
a) Ventas	25.608.462 €	\$ 36.891.550,00	\$ 75.414.813,266,17	27.523.224 €	\$ 38.304.072,34	\$ 85.938.633,664,28
b) Prestaciones de servicios	-	-	-	-	-	-
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-	-	-	-	-	-
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	23.192 €	\$ (5.939.870,24)	\$ (12.142.461,141,97)	30.602 €	\$ (5.381.235,11)	\$ (12.073.285,275,74)
4. Aportaciones netas	258.865 €	\$ (370.068,53)	\$ (756.503,185,90)	380.467 €	\$ (529.495,94)	\$ (1.187.971.806,44)
a) Consumo de mercancías	3.866.307 €	\$ (5.568.801,81)	\$ (11.385.955,956,07)	3.466.196 €	\$ (4.851.739,16)	\$ (10.885.313.469,30)
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-	-	-	-	-	-
c) Trabajos realizados por otras empresas	-	-	-	-	-	-
d) Deterioro de mercaderías, materias primas / otros aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
5. Otros ingresos de explotación	66.644 €	\$ 95.964,13	\$ 196.172.748,32	67.088 €	\$ 23.781,37	\$ 53.355.645,11
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	66.644 €	\$ 95.964,13	\$ 196.172.748,32	67.088 €	\$ 23.781,37	\$ 53.355.645,11
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	-	-	-	-	-
6. Gastos de personal	13.991.127 €	\$ (20.153.617,36)	\$ (41.202.717.683,25)	15.333.668 €	\$ (21.240.284,10)	\$ (47.878.848,007,48)
a) Sueldos, salarios y estímulos	11.052.464 €	\$ (15.922.179,49)	\$ (32.548.596.971,23)	12.054.898 €	\$ (16.775.926,82)	\$ (37.638.301.664,14)
b) Indemnizaciones	2.938.663 €	\$ (4.233.437,88)	\$ (8.654.120.712,02)	3.278.770 €	\$ (4.564.357,28)	\$ (10.240.546.343,34)
c) Seguridad social a cargo de la empresa	-	-	-	-	-	-
d) Retenciones a largo plazo mediante sistemas de aportación o prestación definida	-	-	-	-	-	-
e) Retenciones mediante instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-
f) Otros gastos sociales	-	-	-	-	-	-
g) Provisiones	-	-	-	-	-	-
7. Otros gastos de explotación	5.809.115 €	\$ (8.368.610,99)	\$ (17.107.365.642,13)	7.096.797 €	\$ (9.876.612,77)	\$ (22.159.069.648,70)
a) Servicios exteriores	5.591.073 €	\$ (8.054.499,69)	\$ (16.465.249.894,84)	7.094.107 €	\$ (9.872.869,10)	\$ (22.150.670.381,06)
b) Tributos	77.794 €	\$ (112.070,04)	\$ (228.096.928,32)	55.862 €	\$ (77.743,15)	\$ (174.423.750,42)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	140.248 €	\$ (202.042,71)	\$ (413.021.763,89)	53.127 €	\$ 73.936,85	\$ 165.883.974,59
d) Otros gastos de gestión corriente	-	-	-	-	-	-
8. Amortización del inmovilizado	843.767 €	\$ (1.215.516,32)	\$ (2.484.794.932,12)	811.006 €	\$ (1.128.677,09)	\$ (2.532.288.642,26)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y	-	-	-	-	-	-
10. Exceso de provisiones	668 €	\$ 962,32	\$ 1.967.205,03	15.496 €	\$ 21.565,78	\$ 48.384.777,43
11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado	1.295 €	\$ 1.865,58	\$ 3.813.668,43	-	-	-
a) Deterioro y pérdidas	-	-	-	-	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	1.295 €	\$ 1.865,58	\$ 3.813.668,43	-	-	-
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	-	-	-	-	-	-
13. Otros resultados	-	-	-	-	-	-

2011

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	909.847 €	\$ 1.310.725,58	\$ 2.679.424.543,57	547.374 €	\$ 761.780,43	\$ 1.709.122.945,17
14. Ingresos financieros	12.397 €	\$ 17.859,12	\$ 36.508.144,85	27.032 €	\$ 37.620,44	\$ 84.404.833,72
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	- €	- \$	- \$	- €	- \$	- \$
a 1) En empresas del grupo y asociados	- €	- \$	- \$	- €	- \$	- \$
a 2) En terceros	- €	- \$	- \$	- €	- \$	- \$
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	12.397 €	\$ 17.859,12	\$ 36.508.144,85	27.032 €	\$ 37.620,44	\$ 84.404.833,72
b 1) De empresas del grupo y asociadas	- €	- \$	- \$	- €	- \$	- \$
b 2) De terceros	12.397 €	\$ 17.859,12	\$ 36.508.144,85	27.032 €	\$ 37.620,44	\$ 84.404.833,72
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	- €	- \$	- \$	- €	- \$	- \$
15. Gastos financieros	688.148 €	\$ (948.128,00)	\$ (1.938.191.700,91)	521.850 €	\$ (726.258,67)	\$ (1.629.426.697,17)
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	- €	- \$	- \$	- €	- \$	- \$
b) Por deudas con terceros	688.148 €	\$ (948.128,00)	\$ (1.938.191.700,91)	521.850 €	\$ (726.258,67)	\$ (1.629.426.697,17)
c) Por actualización de provisiones	- €	- \$	- \$	- €	- \$	- \$
16. Variación de valor razonable en los instrumentos	- €	- \$	- \$	- €	- \$	- \$
a) Cartera de negociación y otros	- €	- \$	- \$	- €	- \$	- \$
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	- €	- \$	- \$	- €	- \$	- \$
17. Diferencias de cambio	- €	- \$	- \$	- €	- \$	- \$
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	- €	- \$	- \$	- €	- \$	- \$
19. Deterioros y pérdidas	- €	- \$	- \$	- €	- \$	- \$
a) Resultados por enajenaciones y otros	- €	- \$	- \$	- €	- \$	- \$
b) Otros ingresos y gastos de carácter financiero	- €	- \$	- \$	- €	- \$	- \$
a) Incorporación al activo de gastos financieros	- €	- \$	- \$	- €	- \$	- \$
b) Ingresos financieros devueltos de contratos de acreedores	- €	- \$	- \$	- €	- \$	- \$
c) Resto de ingresos y gastos	- €	- \$	- \$	- €	- \$	- \$
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + 20) Ingresos sobre beneficios	645.769 €	\$ (930.294,81)	\$ (1.901.736.564,58)	494.818 €	\$ (888.638,24)	\$ (1.543.021.863,44)
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDEnte DE OPERACIONES	264.662,71 €	\$ 264.662,71	\$ 541.031.446,90	15.116 €	\$ 21.036,94	\$ 47.198.263,78
B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS	183.717 €	\$ 183.717 €	\$ 183.717 €	183.717 €	\$ 183.717 €	\$ 183.717 €
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	183.717 €	\$ 183.717 €	\$ 183.717 €	183.717 €	\$ 183.717 €	\$ 183.717 €
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	183.717 €	\$ 264.662,71	\$ 541.031.446,90	15.116 €	\$ 21.036,94	\$ 47.198.263,78

Tasas de Cambio a 31 Diciembre de 2009: US\$/Euro 1,4405 TRM; COP\$/Euro 2.044,23 - 2008: US\$/Euro 1,3917 TRM; COP\$/Euro 2.243,55
 La conversión de los Estados Financieros de Euro a Pesos Colombianos es el resultado de multiplicar el valor del Euro por la Tasa de Cambio a Dólares certificado por el European Central Bank, y este resultado multiplicado por la TRM en Colombia
 emitida por el Banco de la República de Colombia a la fecha de Corte.

LUZ ESPERANZA MORALES ROJAS
 CONTADOR PÚBLICO
 C.C. 51.921.650
 T.P. 90177-1

**SECTOR 3
FORMATO 2
CAPITAL DE TRABAJO (en SMMLV)
Interesados Colombianos y Extranjeros**

Nombre del Interesado **CONSORCIO ECO-AMÉRICAS**

Nombre de los Miembros que conforman el Interesado: **SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA S.A., I.V. INGENIEROS CONSULTORES S.A., ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S., EUROCONSULT S.A., INSTITUTO TÉCNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.A.**

Nombre del(los) MAP(S): **SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA S.A.**

Capital de Trabajo de la Estructura Plural

	Corte a 31-dic-2009
(+) Activo corriente	235.170,74
(-) Pasivo corriente	110.773,27
(-) Capital de trabajo	124.397,47

Para estructuras Plurales solamente:

Capital de Trabajo de los miembros de la Estructura Plural

# de Miembro	5
Nombre del Miembro de la Estructura Plural	INSTITUTO TÉCNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.A.
MAP (Si; No)	SI
Para MAPs solamente: Indicar si dicho MAP acredita la experiencia solicitada al menos a un MAP (Si; No)	NO
Porcentaje de Participación en la estructura plural (%; con dos decimales)	20,00%
(+) Activo corriente	62.479,38
(-) Pasivo corriente	53.360,67
(-) Capital de trabajo	9.118,56

* Presentar la información en SMMLV del 2009 o 2010, de acuerdo con el RUP en firme presentado o los Estados Financieros presentados, según corresponda.

Para Interesados extranjeros o miembros extranjeros de Estructuras Plurales: El abajo firmante, hago constar que los datos consignados en el presente Formato son verídicos por cuanto la empresa cumple con lo dispuesto en las normas contables que la regulan y está sometida a la ley aplicable de la jurisdicción de su incorporación. El AUDITOR CONTABLE abajo firmante hago constar que (i) tengo la condición de AUDITOR CONTABLE conforme a la jurisdicción de origen del Interesado o miembro extranjero de la Estructura Plural; y (ii) Tengo el número de registro que aparece al pie de mi firma expedido por la entidad pública que agrupa a los AUDITORES DE CUENTAS en la jurisdicción de origen del Interesado o miembro extranjero de la Estructura Plural.

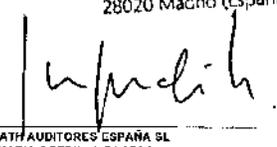
El suscrito Representante Legal del miembro extranjero de la Estructura Plural declara que el AUDITOR CONTABLE que suscribe el presente Formato es un contratista de la sociedad que representa y el AUDITOR CONTABLE ha sido designado como tal por el órgano competente de la sociedad. Se anexa certificación de la empresa que efectúa la auditoría mediante la cual se certifica que el AUDITOR CONTABLE que suscribe el presente formato es empleado de la misma.

Nombre: **MAURICIO GÓMEZ CAicedo**
Identificación: **79.150.916 de BOGOTÁ D.C.**
Cargo: Representante Legal CONSORCIO ECO-AMÉRICAS

Firma: 
Nombre: **JAIME ANTONIO FERNÁNDEZ GÓMEZ**
Identificación: **9724262-T**
Cargo: Representante Legal INSTITUTO TÉCNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.A.



Crowe Horwath
Horwath Auditores España, S.L. • CIF: B-83887125
Plza. Carlos Trias Bertran, 4 • Planta 1ª, oficina 2
28020 Madrid (España)

Firma: 
Nombre: **HORWATH AUDITORES ESPAÑA SL
JOSE MARIA GREDILLA BASTOS**
Tarjeta Profesional: **No ROAC (Registro Oficial de Auditores de Cuentas): S-1620**
Cargo: **AUDITOR CONTABLE INSTITUTO TÉCNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.A.**

Instrucciones:

- (1) El nombre del MAP es responsabilidad del interesado que acredita la experiencia de este Formato únicamente.
- (2) El Formato 2 deberá ser suscrito por el representante legal del interesado, por el representante legal del Miembro de la Estructura Plural (según corresponda) y por el contador, revisor fiscal o quien corresponda en la jurisdicción aplicable (según corresponda).
- En el evento en que los auditores o los revisores fiscales del interesado o de cualquiera de sus Miembros en las Estructuras Plurales no pueden suscribir el Formato 2, éste deberá estar suscrito, en reemplazo del auditor o revisor fiscal, por el representante financiero o su equivalente (y) e (ii) de ésta únicamente por el representante legal y el contador), pero en todo caso, deberá acompañarse una certificación o una nominación del representante legal o su equivalente o de un abogado a jurisdicción para ejercer en la jurisdicción de origen del Interesado o del Miembro de la Estructura Plural en la que se señale la responsabilidad de suscribir el Formato por jurisdicción legal o por falta de autorización legal expresa.
- (3) En caso de Estructuras Plurales, el Formato 2 deberá estar suscrito por cada uno de los representantes legales (titulares miembros) que acreditan el Capital de Trabajo.

32



CONSORCIO ECO-AMERICAS

ANEXO 10

Calle 103 No. 45 A – 29 (Bogotá D.C.)
(57)(1) 634 89 96
licitaciones@estructuradorcolombia.com



SECTOR 3
FORMATO 2
CAPITAL DE TRABAJO (en SMMLV*)
Interesados Colombianos y Extranjeros

Nombre del Interesado CONSORCIO ECO-AMÉRICAS

Nombre de los Miembros que conforman el Interesado: SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTÉCNIA S.A., I.V. INGENIEROS CONSULTORES S.A., ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S., EUROCONSULT S.A., INSTITUTO TÉCNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.A.

Nombre del(los) MAP(S): SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTÉCNIA S.A.

Capital de Trabajo de la Estructura Plural

	Corte a 31-dic-2009
(+) Activo corriente	235.170,74
(-) Pasivo corriente	110.773,27
(=) Capital de trabajo	124.397,47

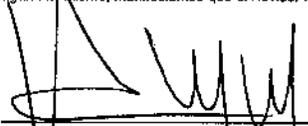
Para estructuras Plurales solamente:

Capital de Trabajo de los miembros de la Estructura Plural

# de Miembro	2
Nombre del Miembro de la Estructura Plural	I.V. INGENIEROS CONSULTORES S.A.
MAP (Si; No)	SI
Para MAPs solamente: Indicar si dicho MAP acredita la experiencia solicitada al menos a un MAP [Si; No]	NO
Porcentaje de Participación en la estructura plural (%; con dos decimales)	20,00%
(+) Activo corriente	12.610,40
(-) Pasivo corriente	7.055,77
(=) Capital de trabajo	5.554,63

* Presentar la información en SMMLV del 2009 o 2010, de acuerdo con el RUP en firme presentado o los Estados Financieros presentados, según corresponda.

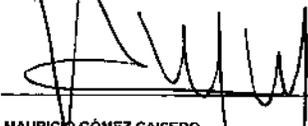
Para Interesados colombianos o miembros colombianos de Estructuras Plurales: Los abajo firmantes hacemos constar que los datos consignados en el presente formato son verídicos por cuanto la empresa cumple con lo dispuesto en las normas contables que la regulan y nos sometemos a lo dispuesto en el artículo 43 De la Ley 222 de 1995, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. Asimismo, manifestamos que el Revisor Fiscal no ha sido sancionado por la junta central de contadores y cuentan con el certificado de inscripción vigente a la Fecha de Cierre.

Firma 

Nombre MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

Identificación 79.150.916 de BOGOTÁ D.C.

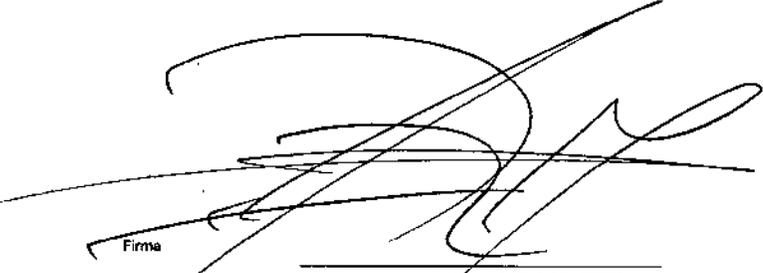
Cargo Representante legal CONSORCIO ECO-AMÉRICAS

Firma 

Nombre MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

Identificación 79.150.916 de BOGOTÁ D.C.

Cargo Representante Legal y Apoderado I.V. INGENIEROS CONSULTORES S.A.

Firma 

Nombre CR FINANCIAL & LEGAL SERVICES COLOMBIA LTDA.
CARLOS MAURICIO REYES AMAYA

Tarjeta Profesional 81327 - T

Cargo Revisor Fiscal
I.V. INGENIEROS CONSULTORES S.A.

Instrucciones:

- (1) El nombre del MAP corresponde al Miembro del Interesado que acredite la experiencia de este Formato únicamente.
- (2) El Formato 2 deberá ser suscrito por el representante legal del Interesado, por el representante legal del Miembro de la Estructura Plural (según corresponda) y por el contador, revisor fiscal o quien corresponda en la jurisdicción aplicable (según corresponda).
En el evento en que los auditores o los revisores fiscales del Interesado o de cualquiera de sus Miembros en las Estructuras Plurales no pudiesen suscribir el Formato 2, este deberá estar suscrito, en reemplazo del auditor o revisor fiscal, por el vicepresidente financiero o su equivalente (y a falta de éste únicamente por el representante legal y el contador), pero en todo caso, deberá acompañarse una certificación o una comunicación del revisor fiscal o auditor o de un abogado autorizado para ejercer en la jurisdicción de origen del Interesado o del Miembro de la Estructura Plural en la que se señale la imposibilidad de suscribir tal Formato por limitación legal o por falta de autorización legal expresa.
- (3) En caso de Estructuras Plurales, el Formato deberá estar suscrito por cada uno de los representantes legales del(los) miembro(s) que acrediten el Capital de Trabajo.

SECTOR 3
FORMATO 2
CAPITAL DE TRABAJO (en SMMLV*)
Interesados Colombianos y Extranjeros

Nombre del Interesado CONSORCIO ECO-AMÉRICAS

Nombre de los Miembros que conforman el Interesado: SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTÉCNIA S.A., I.V. INGENIEROS CONSULTORES S.A., ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S., EUROCONSULT S.A., INSTITUTO TÉCNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.A.

Nombre del(los) MAP(S): SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTÉCNIA S.A.

Capital de Trabajo de la Estructura Plural

	Corte a 31-dic-2009
(+) Activo corriente	235.170,74
(-) Pasivo corriente	110.773,27
(=) Capital de trabajo	124.397,47

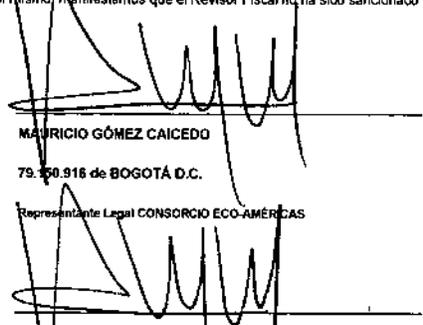
Para estructuras Plurales solamente:

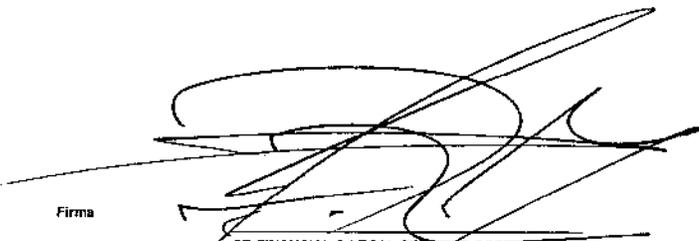
Capital de Trabajo de los miembros de la Estructura Plural

# de Miembro	1
Nombre del Miembro de la Estructura Plural	SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTÉCNIA S.A.
MAP [Si; No]	Si
Para MAPs solamente: Indicar si dicho MAP acredita la experiencia solicitada al menos a un MAP [Si; No]	Si
Porcentaje de Participación en la estructura plural (%; con dos decimales)	20,00%
(+) Activo corriente	49.184,44
(-) Pasivo corriente	16.689,98
(=) Capital de trabajo	32.494,46

* Presentar la información en SMMLV del 2009 o 2010, de acuerdo con el RUP en firme presentado o los Estados Financieros presentados, según corresponda.

Para Interesados colombianos o miembros colombianos de Estructuras Plurales: Los abajo firmantes hacemos constar que los datos consignados en el presente formato son verídicos por cuanto la empresa cumple con lo dispuesto en las normas contables que la regulan y nos sometemos a lo dispuesto en el artículo 43 De la Ley 222 de 1995, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. Así mismo, manifestamos que el Revisor Fiscal no ha sido sancionado por la junta central de contadores y cuentan con el certificado de inscripción vigente a la Fecha de Cierre.

Nombre MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
 Identificación 79.150.916 de BOGOTÁ D.C.
 Cargo Representante Legal CONSORCIO ECO-AMÉRICAS
 Firma 
 Nombre MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
 Identificación 79.150.916 de BOGOTÁ D.C.
 Cargo Representante Legal y Apoderado SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTÉCNIA S.A.

Firma 
 Nombre CR FINANCIAL & LEGAL SERVICES COLOMBIA LTDA. CARLOS MAURICIO REYES AMAYA
 Tarjeta Profesional 81327 - T
 Cargo Revisor Fiscal SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTÉCNIA S.A.

Instrucciones:

- (1) El nombre del MAP corresponde al Miembro del Interesado que acredite la experiencia de este Formato únicamente.
- (2) El Formato 2 deberá ser suscrito por el representante legal del Interesado, por el representante legal del Miembro de la Estructura Plural (según corresponda) y por el contador, revisor fiscal o quien corresponda en la jurisdicción aplicable (según corresponda).
 En el evento en que los auditores o los revisores fiscales del interesado o de cualquiera de sus Miembros en las Estructuras Plurales no pudiesen suscribir el Formato 2, este deberá estar suscrito, en reemplazo del auditor o revisor fiscal, por el vicepresidente financiero o su equivalente (y a falta de éste únicamente por el representante legal y el contador), pero en todo caso, deberá acompañarse una certificación o una comunicación del revisor fiscal o auditor o de un abogado autorizado para ejercer en la jurisdicción de origen del Interesado o del Miembro de la Estructura Plural en la que se señale la imposibilidad de suscribir el Formato por limitación legal o por falta de autorización legal expresa.
- (3) En caso de Estructuras Plurales, el Formato deberá estar suscrito por cada uno de los representantes legales del(los) miembro(s) que acreditan el Capital de Trabajo.

b) Dependencia que tramita el expediente. Dirección General de Ferrocarriles
c) Número de expediente: 200130840.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
b) Descripción del objeto: Construcción de dos puestos de adelantamiento de trenes (PAET) y otras actuaciones para el aumento de capacidad de circulación de los tramos Lleida-Plana de Huesca-Monzon-Roda de Bará e instalaciones de seguridad y comunicaciones.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 267 de 7 de noviembre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: Importe total: 1.594.562,52 euros

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Auxiliar de Técnica y Control, Sociedad Anónima», y «Gabinete de Estudios Técnicos Ingeniería, Sociedad Anónima» en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.416.397,95 euros.

Madrid, 18 de enero de 2002.—El Secretario de Estado, P. D. (Resolución de 23 de noviembre de 2000, «Boletín Oficial del Estado» de 26 de enero de 2001), la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias.—3.531.

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para el control y vigilancia de las obras del proyecto «Línea Barcelona-Ripoll. Tramo Vic-Burgos. Renovación de vía y electrificación» y «Línea Barcelona-Ripoll. Tramo Vic-Ripoll. Supresión de paso a nivel y sustitución de puente metálicos» (200130660).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de Estado de Infraestructuras
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Ferrocarriles
c) Número de expediente: 200130660.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Línea Barcelona-Ripoll. Tramo Vic-Burgos. Renovación de vía y electrificación» y «Línea Barcelona-Ripoll. Tramo Vic-Ripoll. Supresión de paso a nivel y sustitución de puente metálico».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 235, de 1 de octubre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: Importe total: 618.743,35 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Payma Cotas, Sociedad Anónima».

d) Importe de la adjudicación: 470.238,31 euros.

Madrid, 23 de enero de 2002.—El Secretario de Estado de Infraestructuras.—P. D. (Resolución de 23 de noviembre de 2000 «Boletín Oficial del Estado» del 26). la Secretaria de Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias.—3.534

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para la realización del estudio de demanda y rentabilidad de las alternativas de trazado a alta velocidad en el corredor Atlántico Ferrol-Tui (200130790).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de Estado de Infraestructuras
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Ferrocarriles
c) Número de expediente: 200130790

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio de demanda y rentabilidad de las alternativas de trazado a alta velocidad en el corredor Atlántico Ferrol-Tui.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 268, de 8 de noviembre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: Importe total: 180.303,63 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Eurocontrol, Sociedad Anónima», y «Steer Davies Gleave» en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 153.258,09 euros.

Madrid, 23 de enero de 2002.—El Secretario de Estado, P. D. (Resolución de 23 de noviembre de 2000, «Boletín Oficial del Estado» de 26 de enero de 2001), la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias.—3.532

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para la realización del estudio «Pragnosis de demanda y rentabilidad de las alternativas del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad a Toledo» (200130780).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de Estado de Infraestructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Ferrocarriles
c) Número de expediente: 200130780

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Pragnosis de demanda y rentabilidad de las alternativas del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad a Toledo».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 268, de 8 de noviembre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: Importe total: 174.223,79 euros

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 2001
b) Contratista: «Estudios, Proyectos y Planificación, Sociedad Anónima» (EPYPSA)

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 159.920,85 euros

Madrid, 23 de enero de 2002.—El Secretario de Estado, P. D. (Resolución de 23 de noviembre de 2000, «Boletín Oficial del Estado» de 26 de enero de 2001), la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias.—3.533.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), de 28 de enero de 2002, por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia que se cita. PC 022/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF).
c) Número de expediente: PC 022/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para la redacción del proyecto y control de las obras de plataforma del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Venta del Moro-Caudete de las Fuentes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 29 de octubre de 2001, y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de 31 de octubre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: Importe total: 3.300.000,00 euros

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «I. V. Ingenieros Consultores, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.671.987,55

Madrid, 28 de enero de 2002.—El Presidente del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), Juan Carlos Barrón Benavente.—3.542.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), de 28 de enero de 2002, por la que se anuncia la adjudicación del contrato de obras que se cita. ON 032/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF).
c) Número de expediente: ON 032/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto constructivo

13-2

AL5112014



12/30/17

FRANCISCO BADIA ESCRIBANA
NOTARIO
Calle de Sta. Catalina, 2-3
Tel. 96 561 33 56 - Fax 96 394 83 1
46001 VALENCIA

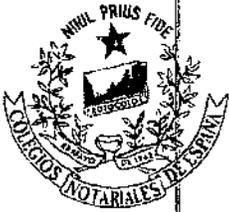
...del ... del ...
... de Valencia con residencia
... la Capital, conforme a lo dispuesto en
el Art. 251 del Reglamento Notarial:
SOY FE: Que la ... del ...
... con la publicación ... de fecha ... de
... de 2.000, ... 1.010, la cual
reproduce para la expedición de este
TESTAMENTO que queda anejado al N.º 560 de
... Indicador ...
... a ... de junio de dos mil
...



[Handwritten signature]

FE. Dada en
NOTARIA

017



= FOLIO HABILITADO PARA LEGALIZACIONES POR EL ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE VALENCIA =

Este follo ha quedado unido con el sello de este Ilustre Colegio Notarial, al Testimonio expedido por

D. FRANCISCO BADIA ESCRICHE

Notario de VALENCIA

el día 16/06/2011

Apostille (ó Legalización única)

(Convention de la Haya du 5 octobre 1961)
(Real Decreto 2433/1978, de 2 de octubre)

- 1.- País: España
El presenta documento público
- 2.- Ha sido firmado por *D. FRANCISCO BADIA ESCRICHE*
- 3.- Actuando en calidad de *NOTARIO*
- 4.- Se halla sellado/timbrado con *SU SELLO*

CERTIFICADO

- 5.- En Valencia
- 6.- El *17 junio 2011*
- 7.- Por el Decano del Colegio Notarial de Valencia
- 8.- Con el número **008723**, 2011

- 9.- Sello/Timbre:
- 10.- Firma:



D. César Beida Casanova
Decano

NIHIL PRIUS FIDE
A131440036



4350/8

13

11/2010



FORMA ELEGIDA PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

AJ1716062



D. ANTONIO VICENTE SÁNCHEZ, como Director de Obra de las obras de plataforma del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Venta del Moro-Caudete de las Fuentes, del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ADIF,

CERTIFICA



- i. Que la empresa i.v. **Ingenieros Consultores S.A.** fue adjudicatara de la totalidad, durante todas las fases, del *Contrato de Consultoría y asistencia para la redacción del proyecto y control de las obras de plataforma del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Venta del Moro-Caudete de las Fuentes, con nº de expediente PC 022/01.*
- ii. Que los antecedentes del contrato mencionado en el Apartado I de este certificado han sido:
 - a. Adjudicación del contrato PC 022/01 de consultoría y asistencia y disponibilidad del gasto según adjudicación definitiva acordada por el Consejo de Administración del GIF de 28 de diciembre de 2001.
 - b. Firma del contrato: 5 de enero de 2002
 - c. Valor inicial del contrato: 2.671.987,55 Euros
 - d. Importe y firma del Modificado nº1: 880.020,35 Euros (09 de febrero de 2006).
 - e. Importe y firma del Modificado nº2: 315.556,20 Euros (28 de septiembre de 2007)
 - f. Fecha de terminación del Contrato: 15 de julio de 2008
 - g. Valor abonado del contrato en la fecha de terminación: 3.781.378,97 Euros
 - h. Valor y fecha de la liquidación: 86.185,13 Euros (27 de agosto de 2008)
 - i. Valor total del contrato facturado final: 3.867.564,10 Euros



III. Que desde la adjudicación del contrato hasta el inicio de los trabajos de redacción del proyecto constructivo y posterior control y vigilancia de las obras, se produjo una paralización en la ejecución de este contrato debido a los siguientes motivos:

- a. Obtención por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) de la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, emitida por el Ministerio de Medio Ambiente para la ejecución de las obras.

Una vez se iniciaron los trabajos de redacción del proyecto constructivo, no se produjo ninguna paralización hasta la finalización de la totalidad del contrato.

IV. Que el contrato se encuentra finalizado, habiendo cumplido todos los requisitos exigidos por el Adif, por lo cual no ha habido declaración alguna de incumplimiento, imposición de multas o sanciones, así como tampoco proceso de efectividad de garantías.



Madrid, 26 de mayo de 2011

Por ADIF:
EL DIRECTOR DE OBRA



Fdo.: Antonio Vicente Sánchez

11/2010



Yo, **SALVADOR MORATAL MARGARIT**, Notario del Ilustre Colegio de Valencia, con residencia en su capital, DOY FE: _____

De que la reproducción xerográfica que antecede extendida en dos folios de papel de Timbre del Estado, exclusivo para documentos notariales, serie AJ, números 1716062 y el anterior en orden correlativo, ha sido cotejada por mí y es reproducción fiel y exacta de su original. _____

Al presente Testimonio le corresponden las hojas nº 2127 a la 2128, en mi Libro Indicador Sección 2ª. _____

Y a instancias de parte interesada, expido el presente **Testimonio** en dicho folio y en el del presente de la misma clase y serie, en Valencia, a ocho de junio de dos mil once.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]

Decreto (6 Ley de unificación) (Ley de unificación)
(Comisión de la Ley de unificación 1931)
(Decreto de la Ley de unificación, 6 de octubre)

Notario D. Salvador Moratal
Margalit

Notario Notario
Notario Notario con M sello

CERTIFICADO

8 Junio 2011

008183

10. Times

D. César Belda Casanova
Decano

FE PÚBLICA
NOTARIAL



SECTOR 3
 FORMATO 3A
 Experiencia en Diseño de Infraestructura Vial o Experiencia de Interventoría de Diseño de Infraestructura Vial

Nombre del Interesado: **CONSORCIO ECO-AMERICAS**

Nombre de los Miembros que conforman el Interesado: **SONCORES, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA S.A., IY, INGENIEROS CONSULTORES S.A.S., EUROCONSULT S.A., INSTITUTO TECNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.A.**

Nombre del(los) MAP(S): **IY, INGENIEROS CONSULTORES S.A.**

Indicar si los contratos que se acreditan son en Diseño o en Supervisión o Interventoría de Diseño: **Diseño de Infraestructura Vial**

Contrato No.	Objeto del Contrato	Fecha de suscripción (2)	Fecha de inicio del contrato (3)	Fecha de Terminación del contrato (4)	Fecha de liquidación del contrato (5)	Valor Total del Contrato (6)	% de participación del MAP en la Estructura Total al momento de la suscripción del contrato (7)	% de participación del MAP en la Estructura Total al momento de la terminación del contrato (7)	Entidad Contratante					
									Nombre	Persona Contacto	Email	Dirección	Tel/Fax	País
1	Consultoría y Asistencia Técnica para la Selección del Proyecto (Diseño de Infraestructura Vial) y control de las Obras (Interventoría de construcción de Infraestructura Vial) de Plataforma del Nuevo Acaso Ferroviario de Alta Velocidad de Leones María - Casanare la Mancha - Contratación y ejecución - según los términos de los Modelos de Suministro - según los términos de los Modelos - Contrato de las 2 obras con el mismo adjudicatario.	26-06-01	15-ago-05	31-11-06	27-ago-08	8.022.35	100%	100%	ADIF - Administrador de Infraestructuras Ferroviarias	D. Antonio Vicente Sánchez - Director de Obras	antonio.vicente.sanchez@adif.es	C/ Juan 46 Edificio 17.1.2 MADRID 28045	3492774600	ESPAÑA
2														
3														
4														

[Handwritten signature]
 Firma del Interesante Legitimado
 Nombre: **MALVARDO GÓMEZ CACEDO**
 Identifica: **VI 194316 en BOGOTÁ D.C.**

Instrucciones: (1) El nombre del(los) MAP(S) corresponde a ellos; miembros del interesado que acreditan la experiencia de este Formato únicamente.
 (2) Corresponde a la fecha de suscripción del contrato, como la fecha de conversión y el contrato, la cual debe estar comprendida dentro del plazo señalado en el Documento de Concesión.
 (3) Corresponde a la fecha de suscripción del contrato, que puede corresponder o no a la fecha de suscripción del contrato mismo.
 (4) Corresponde a la fecha de liquidación del contrato.
 (5) Corresponde al valor del contrato de Diseño de Infraestructura Vial o de Supervisión o Interventoría de Diseño de Infraestructura Vial, según la modalidad que acredite.
 (6) Corresponde al valor del contrato de Diseño de Infraestructura Vial o de Supervisión o Interventoría de Diseño de Infraestructura Vial o Supervisión o Interventoría de Diseño de Infraestructura Vial (según la modalidad que acredite). (c) Los valores superiores deberán incluir los montos de los Retornos y el Contrato Principal (en caso de ser aplicables) al valor del contrato o al de la obra, según corresponda.
 (7) Para acreditar experiencia obtenida bajo formas de asociación debe tenerse una participación mínima del 20% en la referida forma de asociación al momento de la suscripción del contrato y al momento de la terminación del contrato, conforme a lo señalado en el numeral 3.1.1 (c) caso en el cual se valore el 100% de la experiencia. Para los fines de esta forma de asociación, se deberá incluir en esta casilla el porcentaje real de participación en la forma de asociación y se valorará la experiencia por el 100% únicamente cuando dicho porcentaje sea igual o superior al 20% y no menor.

Nota: Con base en el numeral 3.2.3 (a) 1) del Documento de Concesión para diligenciar las Formas 3A y 3B que acreditan sus requisitos habilitantes de experiencia general, para la conversión de moneda se ha tomado como tasa de referencia la tasa del día de la adjudicación oficial del contrato (28 de diciembre de 2001), en el caso de referirse las obligaciones dinerarias.

67

12/2010



FRANCISCO BADIA ESCRICHE
NOTARIO
 Monjas de Sta. Catalina, 8-3°
 Tel. 96 351 33 66 - Fax 96 394 03 32
 46002 VALENCIA.

BOE núm. 148

Miércoles 21 junio 2000

21775

I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA

11533 REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La disposición final única, apartado 2, de la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, autoriza al Gobierno para que en el plazo de seis meses a partir de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» elabore un texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, incluyendo la facultad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales, al que se incorporen las modificaciones que en el texto de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se introducen por la propia Ley 53/1999, antes citada y por la disposición adicional primera de la Ley 9/1996, de 15 de enero, por la que se adoptan medidas extraordinarias, excepcionales y urgentes en materia de abastecimientos hidráulicos como consecuencia de la persistencia de la sequía; por el artículo 2 de la Ley 11/1996, de 27 de diciembre, de Medidas de Disciplina Presupuestaria; por los artículos 72, 148 y 149 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; por el artículo 77 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; por el artículo 56 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y por el artículo 30 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro.

Por otra parte, la Decisión de la Comisión Europea (1999/C 379/08), publicada en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas», número C 379, de 31 de diciembre, y releyada en la Orden del Ministro de Hacienda de 10 de febrero de 2000, impone nuevas alteraciones en el texto de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas al tener que ser sustituidas, a partir del 1 de enero de 2000, las cifras que figuran en la misma, para aplicación de las Directivas comunitarias y del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, por las cifras que en euros, derechos especiales de giro y pesetas se incorporan a las disposiciones reseñadas. Además, el artículo 30 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, establece que, desde el 1 de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre del año 2001, los importes monetarios utilizados como expresiones finales en las normas que a partir de dicha fecha se dicten, deberán hacer constar a continuación el importe equivalente en la unidad de cuenta euro al tipo de conversión,

Además, la facultad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que se refunden justifican otras modificaciones que se inspiran en diversos criterios, tales como la introducción de determinadas precisiones terminológicas y aclaraciones del texto que tienen como finalidad contribuir a la aclaración de sus preceptos, corrigiendo errores de concordancia, ajustando la numeración de los artículos, y coordinando los preceptos y las remisiones y referencias entre artículos.

En consecuencia, se ha elaborado un texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que se incorpora como anexo a este Real Decreto Legislativo y que tiene por objeto, en cumplimiento del mandato legal, recoger las modificaciones que han quedado detalladas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de junio de 2000

DISPONGO:

Artículo único.

Se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que se inserta a continuación.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a la presente Ley y, en particular, las siguientes:

1. La Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.
2. La Ley 53/1999, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, excepto su disposición adicional segunda, que conserva su vigencia.
3. La disposición adicional primera de la Ley 9/1996, de 15 de enero, por la que se adoptan medidas excepcionales y urgentes en materia de abastecimientos hidráulicos como consecuencia de la persistencia de la sequía.
4. El artículo 2 de la Ley 11/1996, de 27 de diciembre, de Medidas de Disciplina Presupuestaria.
5. Los artículos 72, 148 y 149 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
6. El artículo 77 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
7. El artículo 56 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Disposición final única.

El presente Real Decreto Legislativo y el texto refundido que aprueba entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 16 de junio de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Hacienda,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

ANEXO

Texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas

LIBRO I

De los contratos de las Administraciones
Públicas en general

TÍTULO I

Disposiciones generales

CAPÍTULO I

Del ámbito de aplicación de la Ley

Artículo 1. *Ámbito de aplicación subjetiva.*

1. Los contratos que celebren las Administraciones públicas se ajustarán a las prescripciones de la presente Ley.

2. Se entiende por Administraciones Públicas a los efectos de esta Ley:

- a) La Administración General del Estado.
- b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
- c) Las entidades que integran la Administración Local.

3. Deberán asimismo ajustar su actividad contractual a la presente Ley los organismos autónomos en todo caso y las restantes entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones públicas, siempre que en aquéllas se den los siguientes requisitos:

a) Que hayan sido creadas para satisfacer específicamente necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil.

b) Que se trate de entidades cuya actividad esté mayoritariamente financiada por las Administraciones públicas u otras entidades de derecho público, o bien, cuya gestión se halle sometida a un control por parte de estas últimas, o cuyos órganos de administración, de dirección o de vigilancia estén compuestos por miembros más de la mitad de los cuales sean nombrados por las Administraciones públicas y otras entidades de derecho público.

4. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entienda sin perjuicio de lo establecido en la disposición final primera.

Artículo 2. *Adjudicación de determinados contratos de derecho privado.*

1. Las entidades de derecho público no comprendidas en el ámbito definido en el artículo anterior que-

darán sujetas a las prescripciones de esta Ley relativas a la capacidad de las empresas, publicidad, procedimientos de licitación y formas de adjudicación, respecto de los contratos en los que concurren los siguientes requisitos:

a) Que se trate de contratos de obras y de contratos de consultoría y asistencia y de servicios relacionados con los primeros, siempre que su importe, con exclusión del impuesto sobre el Valor Añadido, sea igual o superior a 89.152.164,5 pesetas (5.358.153 euros equivalentes a 5.000.000 de derechos especiales de giro), si se trata de contratos de obras, o a 35.660.846 pesetas (214.326 euros equivalentes a 200.000 derechos especiales de giro), si se trata de cualquier otro contrato de los mencionados.

b) Que la principal fuente de financiación de los contratos proceda de transferencias o aportaciones de capital provenientes directa o indirectamente de las Administraciones Públicas.

2. Queden sujetos a las prescripciones a que se refiere el apartado anterior los contratos de obras de la clase 50, grupo 502, de la Nomenclatura General de Actividades Económicas de las Comunidades Europeas (NACE), los de construcción relativos a hospitales, equipamientos deportivos, recreativos o de ocio, edificios escolares o universitarios y a edificios de uso administrativo, y los contratos de consultoría y asistencia y de servicios que estén relacionados con los contratos de obras mencionados, cuando sean subvencionados directamente por la Administración con más del 50 por 100 de su importe, siempre que éste, con exclusión del impuesto sobre el Valor Añadido, sea igual o superior a 83.193.000 pesetas (5.000.000 de euros), si se trata de contratos de obras, o a 33.277.200 pesetas (200.000 euros), si se trata de cualquier otro contrato de los mencionados.

Artículo 3. *Negocios y contratos excluidos.*

1. Quedan fuera del ámbito de la presente Ley:

a) La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral.

b) Las relaciones jurídicas derivadas de la prestación por parte de la Administración de un servicio público que los administrados tienen la facultad de utilizar mediante el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general a los usuarios.

c) Los convenios de colaboración que celebre la Administración General del Estado con la Seguridad Social, las Comunidades Autónomas, las entidades locales, sus respectivos organismos autónomos y las restantes entidades públicas o cualquiera de ellos entre sí.

d) Los convenios de colaboración que, con arreglo a las normas específicas que los regulan, celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su objeto no esté comprendido en los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales. Quedarán asimismo excluidos de la presente Ley los convenios que sean consecuencia del artículo 296 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

e) Los acuerdos que celebre el Estado con otros Estados o con entidades de derecho internacional público.

f) Los contratos de suministro relativos a actividades directas de los organismos autónomos de las Administraciones públicas de carácter comercial, industrial, financiero o análogo, si los bienes sobre los que versan han sido adquiridos con el propósito de devolverlos, con o sin transformación, al tráfico jurídico matrimonial, de acuerdo con sus fines peculiares, y siempre que tales

12/2010



BOE núm. 148

Miércoles 21 junio 2000

21777

organismos actúen en ejercicio de competencias específicas a ellos atribuidas por la Ley.

g) Los contratos y convenios derivados de acuerdos internacionales celebrados de conformidad con el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, relativos a obras o suministros destinados a la realización o explotación en común de una obra o relativos a los contratos regulados en el Título IV, Libro II de esta Ley, destinados a la realización o explotación en común de un proyecto.

h) Los contratos y convenios efectuados en virtud de un acuerdo internacional celebrado en relación con el estacionamiento de tropas.

i) Los contratos y convenios efectuados por el procedimiento específico de una organización internacional.

j) Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación.

k) Los contratos relacionados con la compraventa y transferencia de valores negociables o de otros instrumentos financieros y los servicios prestados por el Banco de España. Se entienden asimismo excluidos los contratos relacionados con la instrumentación de operaciones financieras de cualquier modalidad realizadas para financiar las necesidades previstas en las normas presupuestarias aplicables, tales como préstamos, créditos u otras de naturaleza análoga, así como los contratos relacionados con instrumentos financieros derivados concertados para cubrir los riesgos de tipo de interés y de cambio derivados de los anteriores.

2. Los supuestos contemplados en el apartado anterior se regularán por sus normas especiales, aplicándose los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Artículo 4. Libertad de pactos.

La Administración podrá concertar los contratos, pactos y condiciones que tenga por conveniente, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración y deberá cumplirlos a tenor de los mismos, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas por la legislación básica en favor de aquélla.

Artículo 5. Carácter administrativo y privado de los contratos.

1. Los contratos que celebre la Administración tendrán carácter administrativo o carácter privado.

2. Son contratos administrativos:

a) Aquéllos cuyo objeto directo, conjunta o separadamente, sea la ejecución de obras, la gestión de servicios públicos y la realización de suministros, los de consultoría y asistencia o de servicios, excepto los contratos comprendidos en la categoría 6 del artículo 206 referente a contratos de seguros y bancarios y de inversiones y, de los comprendidos en la categoría 26 del mismo artículo, los contratos que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos.

b) Los de objeto distinto a los anteriormente expresados, pero que tengan naturaleza administrativa especial por resultar vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante, por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquélla o por declararlo así una ley.

3. Los restantes contratos celebrados por la Administración tendrán la consideración de contratos privados y, en particular, los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, propiedades incorpóreas y valores negociables, así como los contratos compren-

didados en la categoría 6 del artículo 206 referente a contratos de seguros y bancarios y de inversiones y, de los comprendidos en la categoría 26 del mismo artículo, los contratos que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos.

Artículo 6. Contratos mixtos.

Quando un contrato administrativo contenga prestaciones correspondientes a otro u otros administrativos de distinta clase se atenderá, para su calificación y aplicación de las normas que lo regulen, al carácter de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista económico.

Artículo 7. Régimen jurídico de los contratos administrativos.

1. Los contratos administrativos se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. No obstante, los contratos administrativos especiales, que se definen en el artículo 5.2, párrafo b), se regirán por sus propias normas con carácter preferente.

2. El orden jurisdiccional contencioso administrativo será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en los contratos administrativos.

Artículo 8. Contratos administrativos especiales.

1. Los contratos administrativos especiales se adjudicarán de conformidad con lo dispuesto en el Libro I de esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7.1.

2. En el pliego de cláusulas administrativas particulares se hará constar:

- Su carácter de contratos administrativos especiales.
- Las garantías provisionales y definitivas.
- Las prerrogativas de la Administración a que se refiere el artículo 59.1.
- El alcance de las prórrogas, sin que puedan producirse las mismas por mutuo consentimiento tácito.
- Las causas específicas de resolución que se establezcan expresamente.
- La competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de las cuestiones que puedan suscitarse en relación con los mismos.

3. Serán causa de resolución, además de las establecidas en el artículo 111, las siguientes:

- La suspensión, por causa imputable a la Administración, de la iniciación del contrato por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo, salvo que en el pliego se señale otro menor.
- El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un año acordada por la Administración, salvo que en el pliego se señale otro menor.
- Las modificaciones del contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por 100 del precio primitivo del contrato, impuesto sobre el Valor Añadido excluido, o representen una alteración sustancial del mismo.

Artículo 9. Régimen jurídico de los contratos privados.

1. Los contratos privados de las Administraciones públicas se regirán en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas administrativas específicas, por la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo y en cuanto a sus efectos y extinción, por las normas de derecho privado. A los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, propiedades incorpóreas y valores negociables se les aplicarán, en primer lugar, en cuanto a su preparación y adjudicación, las normas de la legislación patrimonial de las correspondientes Administraciones públicas.

2. Los contratos comprendidos en la categoría 6 del artículo 206 referente a contratos de seguros y bancarios y de inversiones y, de los comprendidos en la categoría 26 del mismo artículo, los contratos que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos, se adjudicarán conforme a las normas contenidas en los capítulos II y III del Título IV, Libro II, de esta Ley.

3. El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en los contratos privados. No obstante, se considerarán actos jurídicos separables los que se dicten en relación con la preparación y adjudicación del contrato y, en consecuencia, podrán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de acuerdo con la normativa reguladora de dicha jurisdicción.

CAPÍTULO II**De la Junta Consultiva de Contratación Administrativa****Artículo 10. Junta Consultiva de Contratación Administrativa.**

1. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa es el órgano consultivo específico de la Administración General del Estado, de sus organismos autónomos y demás entidades públicas estatales, en materia de contratación administrativa. Estará adscrita al Ministerio de Hacienda. Su composición y régimen se establecerán reglamentariamente.

2. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa promoverá, en su caso, las normas o medidas de carácter general que considere procedentes para la mejora del sistema de contratación en sus aspectos administrativos, técnicos y económicos.

3. Las Comunidades Autónomas podrán crear, asimismo, Juntas Consultivas de Contratación Administrativa, con competencias en sus respectivos ámbitos territoriales.

CAPÍTULO III**Disposiciones comunes a los contratos de las Administraciones públicas****Artículo 11. Requisitos de los contratos.**

1. Los contratos de las Administraciones públicas se ajustarán a los principios de publicidad y concurrencia, salvo las excepciones establecidas por la presente Ley y, en todo caso, a los de igualdad y no discriminación.

2. Son requisitos para la celebración de los contratos de las Administraciones públicas, salvo que expresamente se disponga otra cosa en la presente Ley, los siguientes:

- La competencia del órgano de contratación.
- La capacidad del contratista adjudicatario.

- La determinación del objeto del contrato.
- La fijación del precio.
- La existencia de crédito adecuado y suficiente, si del contrato se derivan obligaciones de contenido económico para la Administración.
- La tramitación de expediente, al que se incorporarán los pliegos en los que la Administración establezca las cláusulas que han de regir el contrato a celebrar y el importe del presupuesto del gasto.
- La fiscalización previa de los actos administrativos de contenido económico, relativos a los contratos, en los términos previstos en la Ley General Presupuestaria o en las correspondientes normas presupuestarias de las distintas Administraciones Públicas sujetas a esta Ley.
- La aprobación del gasto por el órgano competente para ello.
- La formalización del contrato.

Artículo 12. Órganos de contratación.

1. Los Ministros y los Secretarios de Estado son los órganos de contratación de la Administración General del Estado y están facultados para celebrar en su nombre los contratos, en el ámbito de su competencia.

Los representantes legales de los organismos autónomos y demás entidades públicas estatales y los Directores generales de las distintas entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, son los órganos de contratación de unos y otros, pudiendo fijar los titulares de los departamentos ministeriales a que se hallen adscritos, la cuantía, a partir de la cual, será necesaria su autorización para la celebración de los contratos.

En los departamentos ministeriales en los que coexistan varios órganos de contratación, la competencia para celebrar los contratos de suministro y de consultoría y asistencia y de servicios que afectan al ámbito de más de un órgano de contratación, corresponderá al Ministro, salvo en los casos en que la competencia se atribuya a la Junta de Contratación y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 182, párrafo g), y 210, párrafo f), de esta Ley para la contratación de bienes y servicios declarados de uniformidad obligatoria para su utilización específica por los servicios de un determinado departamento ministerial.

2. No obstante, el órgano de contratación necesitará la autorización del Consejo de Ministros, en los siguientes supuestos:

- Cuando el presupuesto sea igual o superior a 2.000.000.000 de pesetas (12.020.242,09 euros).
- En los contratos de carácter plurianual cuando se modifiquen los porcentajes o el número de anualidades legalmente previstos a los que se refiere el artículo 61 de la Ley General Presupuestaria.
- Cuando el pago de los contratos se concierte mediante el sistema de arrendamiento financiero o mediante el sistema de arrendamiento con opción de compra y el número de anualidades supere el previsto en el artículo 14,4.

En los contratos que, de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior, requieran la autorización del Consejo de Ministros, ésta se producirá con carácter previo a la aprobación del expediente de contratación que, al igual que la aprobación del gasto, corresponderá al órgano de contratación.

El Consejo de Ministros podrá reclamar discrecionalmente el conocimiento y autorización de cualquier otro contrato. Igualmente, el órgano de contratación, a través del Ministro correspondiente, podrá elevar un contrato no comprendido en las letras precedentes a la consideración del Consejo de Ministros.

12/2010



BOE núm. 148

Miércoles 21 junio 2000

21779

... Cuando el Consejo de Ministros autorice la celebración del contrato deberá autorizar igualmente su modificación cuando sea causa de resolución y la resolución misma, en su caso.

3. Las facultades de contratación podrán ser objeto de desconcentración mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, podrán constituirse Juntas de Contratación en los departamentos ministeriales y sus organismos autónomos y entidades de derecho público, así como en las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, que actuarán como órganos de contratación, con los límites cuantitativos o referentes a las características de los contratos que determine el titular del departamento en los siguientes contratos:

a) En los contratos de obras comprendidas en los párrafos b) y c) del artículo 123.1.

b) En los contratos de suministro que se refieran a bienes consumibles o de fácil deterioro por el uso, salvo en los supuestos previstos en el artículo 183.1.

c) En los contratos de consultoría y asistencia y en los de servicios, excepto en los supuestos previstos en el artículo 199.

d) En los contratos de suministro, de consultoría y asistencia y de servicios, distintos de los atribuidos a la competencia de la Junta con arreglo a las dos letras anteriores que afecten a más de un órgano de contratación, también salvo en los supuestos previstos en los artículos 183.1 y 199.

Las Juntas de Contratación tendrán la composición que reglamentariamente se determine debiendo figurar necesariamente entre sus vocales un funcionario, de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación, y un interventor.

5. Excepcionalmente, cuando el contrato resulte de interés para varios departamentos ministeriales y, por razones de economía y eficacia la tramitación del expediente deba efectuarse por un único órgano de contratación, los demás departamentos interesados podrán contribuir a su financiación, en los términos en que se determine reglamentariamente y con respeto a la normativa presupuestaria, mediante convenios o protocolos de actuación.

6. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones públicas que intervengan en los procedimientos de contratación deberán abstenerse o podrán ser recusados, en los términos previstos en los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 13. Objeto de los contratos.

El objeto de los contratos deberá ser determinado y su necesidad para los fines del servicio público correspondiente se justificará en el expediente de contratación.

Artículo 14. Precio de los contratos.

1. Los contratos tendrán siempre un precio cierto, que se expresará en moneda nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria octava, y se abonará al contratista en función de la prestación realmente efectuada y de acuerdo con lo convenido. Cuando las condiciones establecidas en el contrato impliquen pagos en moneda extranjera habrá de expresarse, además del precio total en moneda nacional, el importe máximo de aquélla y la clase de divisas de que se trate.

En todo caso los órganos de contratación cuidarán de que el precio de los contratos sea el adecuado al mercado.

2. Se prohíbe el pago aplazado del precio en los contratos, excepto en los supuestos en que el sistema de pago se establezca mediante la modalidad de arrendamiento financiero o mediante el sistema de arrendamiento con opción de compra y en los casos que una Ley lo autorice expresamente.

3. La financiación de los contratos por la Administración se ajustará al ritmo requerido en la ejecución de la prestación, debiendo adoptarse a este fin por el órgano de contratación las medidas que sean necesarias al tiempo de la programación de las anualidades y durante el periodo de ejecución.

4. Lo establecido en el apartado 3 de este artículo no será de aplicación en los contratos cuyo pago se establezca mediante la modalidad de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra, en cuyo caso el límite máximo para su pago será de cuatro años a partir de la adjudicación del contrato, salvo que se acuerde otro límite mayor cuando así sea autorizado por el Consejo de Ministros.

TÍTULO II

De los requisitos para contratar con la Administración

CAPÍTULO I

De la capacidad y solvencia de las empresas

Artículo 15. Capacidad de las empresas.

1. Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, requisito este último que será sustituido por la correspondiente clasificación en los casos en que con arreglo a esta Ley sea exigible.

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades, se podrá tener en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, o de la correspondiente clasificación, en su caso, de la persona jurídica dominante, siempre y cuando ésta acredite que tiene efectivamente a su disposición los medios de dichas sociedades necesarios para la ejecución de los contratos.

2. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea, deberán acreditar su inscripción en un registro profesional o comercial cuando este registro sea exigido por la legislación del Estado respectivo. Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

3. En los casos en que sea necesario justificar la solvencia económica, financiera, técnica o profesional, los órganos de contratación precisarán en el anuncio los criterios de selección en función de los medios de acreditación que vayan a ser utilizados de entre los reseñados en los artículos 16 a 19.

Artículo 16. *Solvencia económica y financiera.*

1. La justificación de la solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes:

- a) Informe de instituciones financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
- b) Tratándose de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o extracto de las mismas, en el supuesto de que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados en donde aquellas se encuentren establecidas.
- c) Declaración relativa a la cifra de negocios global y de las obras, suministros, servicios o trabajos realizados por la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.

2. Si por razones justificadas un empresario no puede facilitar las referencias solicitadas, podrá acreditar su solvencia económica y financiera por cualquier otra documentación considerada como suficiente por la Administración.

Artículo 17. *Solvencia técnica en los contratos de obras.*

En los contratos de obras la solvencia técnica del empresario podrá ser justificada por uno o varios de los medios siguientes:

- a) Títulos académicos y experiencia del empresario y de los cuadros de la empresa y, en particular, del o de los responsables de las obras.
- b) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años acompañada de certificados de buena ejecución para las más importantes.
- c) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que dispondrá el empresario para la ejecución de las obras.
- d) Declaración sobre los efectivos personales medios anuales de la empresa, indicando, en su caso, grado de estabilidad en el empleo de los mismos y la importancia de sus equipos directivos durante los tres últimos años.
- e) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras.

Artículo 18. *Solvencia técnica en los contratos de suministro.*

En los contratos de suministro la solvencia técnica de los empresarios se acreditará por uno o varios de los siguientes medios:

- a) Por relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años, indicándose su importe, fechas y destino público o privado, a la que se incorporarán los correspondientes certificados sobre los mismos.
- b) Descripción del equipo técnico, medidas empleadas por el suministrador para asegurar la calidad y los medios de estudio e investigación de la empresa.
- c) Indicación de los técnicos o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente de aquéllos encargados del control de calidad, así como, en su caso, grado de esta-

bilidad en el empleo del personal integrado en la empresa.

d) Muestras, descripciones y fotografía de los productos a suministrar.

e) Certificaciones establecidas por los institutos o servicios oficiales u homologados encargados del control de calidad y que acrediten la conformidad de artículos bien identificados con referencia a ciertas especificaciones o normas.

f) Control efectuado por la Administración o en su nombre por un organismo oficial competente del Estado en el cual el empresario está establecido, siempre que medie acuerdo de dicho organismo, cuando los productos a suministrar sean complejos o a título excepcional deban responder a un fin particular; este control versará sobre las capacidades de producción y, si fuera necesario, de estudio e investigación del empresario, así como sobre las medidas empleadas por este último para controlar la calidad.

Artículo 19. *Solvencia técnica o profesional en los restantes contratos.*

En los demás contratos regulados por esta Ley la solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que podrá acreditarse, según el objeto del contrato, por uno o varios de los medios siguientes:

- a) Las titulaciones académicas y profesionales de los empresarios y del personal de dirección de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato.
- b) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.
- c) Una descripción del equipo técnico y unidades técnicas participantes en el contrato, estén o no integrados directamente en la empresa del contratista, especialmente de los responsables del control de calidad.
- d) Una declaración que indique el promedio anual de personal, con mención, en su caso, del grado de estabilidad en el empleo y la plantilla del personal directivo durante los últimos tres años.
- e) Una declaración del material, instalaciones y equipo técnico de que disponga el empresario para la realización del contrato.
- f) Una declaración de las medidas adoptadas por los empresarios para controlar la calidad, así como de los medios de estudio y de investigación de que dispongan.
- g) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin especial, un control efectuado por el órgano de contratación o en nombre de éste por un organismo oficial u homologado competente del Estado en el que esté establecido el empresario, con el acuerdo de dicho organismo sobre la capacidad técnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de investigación de que disponga y sobre las medidas de control de la calidad.

Artículo 20. *Prohibiciones de contratar.*

En ningún caso podrán contratar con la Administración las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:

- a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de falsedad, contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, cohecho, malversación, tráfico de influencias, revelación de secretos, uso de informa-

12/2010



BOE núm. 148

Miércoles 21 junio 2000

21781

ción privilegiada, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores o por delitos relativos al mercado y a los consumidores. La prohibición de contratar alcanza a las personas jurídicas cuyos administradores o representantes, vigente su cargo o representación, se encuentren en la situación mencionada por actuaciones realizadas en nombre o a beneficio de dichas personas jurídicas o en las que concurran las condiciones, cualidades o relaciones que requiera la correspondiente figura de delito para ser sujeto activo del mismo.

b) Haber sido declaradas en quiebra, en concurso de acreedores, insolvente fallido en cualquier procedimiento o sujeto a intervención judicial; haber iniciado expediente de quita y espera o de suspensión de pagos o presentado solicitud judicial de quiebra o de concurso de acreedores, mientras, en su caso, no fueran rehabilitadas.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

d) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de disciplina de mercado, en materia profesional o en materia de integración laboral de minusválidos o muy grave en materia social, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones en el orden social o en materia de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre prevención de riesgos laborales.

e) Estar incurso la persona física o los administradores de la persona jurídica en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de los altos cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma.

La prohibición alcanza igualmente a los cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva y descendientes de las personas a que se refiere el párrafo anterior, siempre que, respecto de los últimos, dichas personas ostenten su representación legal.

Las disposiciones a las que se refiere este apartado serán aplicables a las Comunidades Autónomas y a las Entidades locales en los términos que respectivamente les sean aplicables.

i) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determine.

g) Haber incurrido en falsedad grave al facilitar a la Administración las declaraciones exigibles en cumplimiento de las disposiciones de esta Ley o de sus normas de desarrollo.

h) Haber incumplido las obligaciones impuestas al empresario por los acuerdos de suspensión de las clasificaciones concedidas o de la declaración de inhabilitación para contratar con cualquiera de las Administraciones públicas.

i) Si se trata de empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea, no hallarse inscritos, en su caso, en un Registro profesional o comercial en las condiciones previstas por la legislación del Estado donde están establecidos.

j) Haber sido sancionado como consecuencia del correspondiente expediente administrativo en los términos previstos en el artículo 82 de la Ley General Presupuestaria y en el artículo 80 de la Ley General Tributaria.

k) No hallarse debidamente clasificadas, en su caso, conforme a lo dispuesto en esta Ley o no acreditar la suficiente solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

Artículo 21. Procedimiento para su declaración y efectos.

1. Las prohibiciones de contratar contenidas en los párrafos b), e), f), i), j) y k) del artículo anterior se apreciarán de forma automática por los órganos de contratación y subsistirán mientras concurran las circunstancias que en cada caso las determinan.

La prohibición de contratar por las causas previstas en el párrafo a) del artículo anterior se apreciará de forma automática por los órganos de contratación. No obstante, el alcance de la prohibición se determinará en el procedimiento que, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este artículo, deberá necesariamente instruirse.

En los restantes supuestos, la prohibición de contratar requerirá su previa declaración mediante procedimiento cuya resolución fijará expresamente la Administración a la que afecte y su duración.

La declaración de la prohibición para contratar en los supuestos a) que se refieren los párrafos a), d), g), h) y j) del artículo anterior o la apreciación de la misma en las causas de los párrafos b), e) y f) producirá la suspensión de las clasificaciones que hayan sido concedidas a las empresas durante el plazo de duración de la prohibición o mientras subsista la causa determinante de su apreciación, sin que, en consecuencia, proceda la tramitación del expediente a que hace referencia el artículo 33.1.

2. El alcance de la prohibición se apreciará en la forma que reglamentariamente se determine atendiendo, en su caso, a la existencia de dolo o manifiesta mala fe en el empresario y a la entidad del daño causado a los intereses públicos y no excederá de cinco años, con carácter general, o de ocho para prohibiciones que tengan por causa la existencia de condena mediante sentencia firme. En todo caso, se estará a los pronunciamientos que sobre dichos extremos, en particular sobre la duración de la prohibición de contratar, contenga la sentencia o resolución firme y en tal supuesto, las prohibiciones de contratar se aplicarán de forma automática por los órganos de contratación.

3. La competencia para declarar la prohibición de contratar en los supuestos contemplados en los párrafos a), en el caso de condena por sentencia firme, y d) del artículo anterior corresponderá al Ministro de Hacienda, que dictará resolución a propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y revestirá carácter general para todas las Administraciones públicas. En los supuestos previstos en los párrafos c) y g) del artículo anterior la competencia corresponderá a la Administración contratante y en el del párrafo h) del propio artículo, a la misma Administración que hubiese acordado la suspensión de la clasificación o declarado la prohibición infringida, con eficacia limitada a su propio ámbito, y sin perjuicio, en el caso de ser éste autonómico o local, de su posterior comunicación a la Administración General del Estado para que, a la vista del daño causado a los intereses públicos, declare la prohibición con carácter general.

4. A los efectos de la aplicación de este artículo, las autoridades y órganos competentes notificarán, a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, todas las sanciones y resoluciones firmes recaídas en los procedimientos correspondientes, a fin de que se puedan instruir los expedientes previstos en este artículo y en el artículo 33.1 o adoptarse la resolución que pro-

ceda. Asimismo, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa podrá recabar de dichas autoridades y órganos cuantos datos y antecedentes sean precisos a los mismos efectos.

5. La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la Administración señaladas en el artículo anterior, en relación con las situaciones indicadas en sus distintas letras, podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa según los casos y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

Artículo 22. *Efectos de la falta de capacidad, solvencia y de las prohibiciones de contratar.*

Las adjudicaciones de contratos en favor de personas que carezcan de la capacidad de obrar o de solvencia y de las que se hallen comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 20 serán nulas de pleno derecho. Sin perjuicio de ello, el órgano de contratación podrá acordar que el empresario continúe la ejecución del contrato, bajo las mismas cláusulas, por el tiempo indispensable para evitar perjuicios al interés público correspondiente.

Artículo 23. *Empresas extranjeras no comunitarias.*

1. Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Comunidad Europea, además de acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme a la legislación de su Estado y su solvencia económica y financiera, técnica o profesional, deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma sustancialmente análoga.

En los contratos de obras, de suministro, de consultoría y asistencia y de servicios, de cuantía igual o superior a la señalada en los artículos 135.1, 177.2, y 203.2, deberá prescindirse del informe sobre reciprocidad a que se refiere el párrafo anterior en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.

2. Tratándose de contratos de obras será necesario, además, que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

Artículo 24. *Uniones de empresarios.*

1. La Administración podrá contratar con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación a su favor.

Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante la Administración y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes

mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.

La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

2. Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurren en la unión empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberán acreditar su clasificación y los últimos, en defecto de ésta, su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

CAPÍTULO II

De la clasificación y registro de las empresas

SECCIÓN 1.ª DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 25. *Supuestos de clasificación.*

1. Para contratar con las Administraciones públicas la ejecución de contratos de obras o de contratos de servicios a los que se refiere el artículo 196.8, en ambos casos por presupuesto igual o superior a 20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros), será requisito indispensable que el empresario haya obtenido previamente la correspondiente clasificación. Se exceptúan de este requisito los contratos comprendidos en las categorías 6 y 21 del artículo 208 y, de los comprendidos en la categoría 26 del mismo artículo, los contratos que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos.

Este requisito será exigido igualmente al cesionario de un contrato en el caso en que hubiese sido exigido al cedente.

Por Real Decreto podrá exceptuarse la clasificación para determinados grupos y subgrupos de los contratos de obras y de servicios en los que este requisito sea exigible o acordar la exigencia de clasificación en grupos y subgrupos de los contratos de obras, consultoría y asistencia y servicios, cuando, según las disposiciones vigentes, tal requisito no sea exigible habida cuenta las circunstancias especiales concurrentes en los citados grupos y subgrupos.

El límite establecido en el párrafo primero de este apartado podrá ser elevado o disminuido para cada tipo de contrato por el Ministro de Hacienda previa audiencia de las Comunidades Autónomas con arreglo a las exigencias de la coyuntura económica.

2. No obstante lo establecido en el párrafo primero del apartado 1 de este artículo, para los empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea, será suficiente que acrediten, en su caso, ante el órgano de contratación correspondiente su solvencia económica y financiera, técnica o profesional, conforme a los artículos 16, 17 y 19, así como su inscripción en el Registro al que se refiere el artículo 20, párrafo ii, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 79.

3. Excepcionalmente, cuando así sea conveniente para los interesados públicos, la contratación con personas que no estén clasificadas podrá ser autorizada por el Consejo de Ministros, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en el ámbito de la Administración General del Estado. En el ámbito de las Administraciones de las Comunidades Autónomas dicha autorización será otorgada por los órganos competentes.

4. A efectos de la clasificación se determinarán reglamentariamente, en relación con el objeto de los contratos, los grupos generales y subgrupos en que podrán subdividirse aquéllos conforme a su peculiar naturaleza.



12/2010

BOE núm. 148

Miércoles 21 junio 2000

21783

5. Cuando, tramitado un procedimiento de adjudicación de un contrato de los que se refiere el apartado 1 de este artículo, no haya concurrido ninguna empresa clasificada, el órgano de contratación podrá excluir el requisito de clasificación previa en el siguiente procedimiento que, para la adjudicación del mismo contrato se convoque, con precisión en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el anuncio, en su caso, de los criterios de selección en función de los medios de acreditación que vayan a ser utilizados de entre los especificados en los artículos 16 a 19 de esta Ley.

Artículo 26. Excepciones de clasificación y certificados comunitarios de clasificación.

1. En los supuestos del artículo 11 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, no será exigible clasificación como contratistas a las Universidades para ser adjudicatarias de contratos con las Administraciones Públicas.

2. Los certificados de clasificación o documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Comunidad Europea en favor de sus propios empresarios constituyen una presunción de capacidad frente a los diferentes órganos de contratación en relación con los párrafos b) y c) del artículo 16.1; párrafos b) y d) del artículo 17; párrafo a) del artículo 18; párrafo a) del artículo 19 y párrafos a), b), d) e i) del artículo 20.

Artículo 27. Criterios de clasificación.

La clasificación de las empresas se hará con arreglo a sus características fundamentales determinadas según lo establecido en los artículos 16, 17, 18 y 19 e indicará la categoría de los contratos a cuya adjudicación puedan concurrir u optar por razón de su objeto y la cuantía de los mismos.

Artículo 28. Competencia para la clasificación.

1. Los acuerdos sobre clasificación y revisión de clasificaciones se adoptarán por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, a través de Comisiones clasificadoras que, por delegación permanente de aquella, entenderán en cuantos expedientes se relacionan con la clasificación de las empresas, produciendo tales acuerdos efectos ante cualquier órgano de contratación. Las Comisiones clasificadoras, cuya composición se determinará reglamentariamente, estarán integradas por los representantes de la Administración y de las organizaciones empresariales más representativas en los distintos sectores afectados por la contratación administrativa.

2. Los acuerdos de clasificación y revisión adoptados por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa podrán ser objeto de recurso de alzada ante el Ministro de Hacienda.

3. Los acuerdos sobre clasificación y revisión de clasificaciones para los contratos que celebren los órganos de contratación de las Comunidades Autónomas, sus organismos autónomos y demás entidades públicas podrán adoptarse por los correspondientes órganos de dichas Comunidades, respecto de las empresas domiciliadas en el territorio de las mismas, que aplicarán las mismas reglas y criterios establecidos en esta Ley y sus disposiciones de desarrollo.

Para que estos acuerdos surtan efectos ante órganos de contratación de la Administración General del Estado o de Comunidades Autónomas distintas de las que los adopta habrán de ser objeto de inscripción en el Registro Oficial de Empresas Clasificadas a que se refiere el apartado 1 del artículo 34.

4. En relación con los contratos que celebren los órganos de contratación de las Entidades locales, sus

organismos autónomos y demás entidades públicas, surtirán efecto las clasificaciones acordadas por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, por la Comunidad Autónoma respectiva o por otra Comunidad Autónoma, siempre que, en este último caso, se haya practicado la inscripción a que se refiere el apartado anterior en el Registro Oficial de Empresas Clasificadas.

Artículo 29. Duración y revisión de las clasificaciones.

La clasificación de las empresas se acordará por un plazo de dos años y se efectuará en función de los elementos personales, materiales, económicos y técnicos de que dispongan respecto de la actividad en que la soliciten y, en su caso, de la experiencia en trabajos realizados directamente en el último quinquenio.

Las clasificaciones acordadas serán revisables a petición de los interesados o de oficio por la Administración en cuanto dejen de ser actuales las bases tomadas para establecerlas.

Artículo 30. Denegación de clasificaciones.

Podrá denegarse la clasificación de aquellas empresas de las que, a la vista de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son una continuación, transformación, fusión o sucesión de otras empresas respecto de las cuales se haya acordado la suspensión de su clasificación o su inhabilitación para contratar de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 21.

Artículo 31. Clasificación de las uniones de empresas.

1. Las uniones temporales de empresarios, a las que se refiere el artículo 24, serán clasificadas en la forma que reglamentariamente se determine, mediante la acumulación de las características de cada uno de los que integran la unión temporal expresadas en sus respectivas clasificaciones.

2. En todo caso, será requisito básico para la acumulación de las citadas características que todas las empresas que concurran en la unión temporal hayan obtenido previamente clasificación como empresa de obras o de servicios, en relación con el contrato al que opten, sin perjuicio de lo establecido para los empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea en el artículo 25.2.

Artículo 32. Comprobación de los elementos de la clasificación.

1. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa podrá solicitar en cualquier momento de las empresas clasificadas o pendientes de clasificación los documentos que estime necesarios para comprobar las declaraciones y hechos manifestados en los expedientes que tramite.

2. También podrá solicitar informes de cualquiera de los órganos de las Administraciones públicas sobre estos extremos.

SECCIÓN 2.ª DE LA SUSPENSIÓN DE LAS CLASIFICACIONES

Artículo 33. Suspensión de las clasificaciones.

1. El Ministro de Hacienda, a propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y previa formación de expediente administrativo con audiencia del interesado, podrá disponer la suspensión de las clasificaciones acordadas.

2. Será causa de suspensión por tiempo no superior a un año la infracción grave de las condiciones establecidas en el contrato que no den lugar a resolución.

3. Serán causas de suspensión por tiempo no superior a cinco años las siguientes:

a) Falsedad grave en las informaciones o declaraciones a los órganos competentes de la Administración, por la naturaleza del contrato, o a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

b) El incurrir en los supuestos previstos en los párrafos a), c), d) y j) del artículo 20.

c) Haberse exigido al contratista consultor el pago de las indemnizaciones previstas en los artículos 218 y 219 o en las respectivas normas de otras Administraciones públicas.

4. Producirán la suspensión indefinida, en tanto subsistan, las causas siguientes:

a) La disminución notoria y continuada de las garantías financieras, económicas o técnicas del empresario que hagan peligrosa para los intereses públicos su colaboración con la Administración, sin perjuicio de que haya tenido lugar la revisión de clasificaciones acordadas con anterioridad.

b) El incurrir en alguno de los supuestos previstos en el párrafo b) del artículo 20.

c) Estar el empresario incurso en alguna de las circunstancias señaladas en los párrafos e) y f) del artículo 20.

5. En la suspensión de la clasificación de empresarios que sean personas jurídicas, por las causas de origen procesal penal previstas en esta Ley, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 20, párrafo a).

6. La suspensión de la clasificación implicará la pérdida de todos los derechos derivados de la misma en tanto aquélla subsista.

7. Cuando la clasificación haya sido acordada por un órgano de las Comunidades Autónomas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 28.3, la suspensión de las clasificaciones por las causas y con los efectos previstos en este artículo corresponderá igualmente a los órganos de dicha Comunidad Autónoma.

8. Para la efectividad de los acuerdos de suspensión de las clasificaciones de empresas, la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas se darán mutuo conocimiento de los acuerdos adoptados y procederán a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en los respectivos diarios oficiales en la forma que reglamentariamente se determine.

SECCIÓN 3.ª DEL REGISTRO OFICIAL DE EMPRESAS CLASIFICADAS

Artículo 34. Registro Oficial de Empresas Clasificadas.

1. El Registro Oficial de Empresas Clasificadas dependerá del Ministerio de Hacienda. El acceso al Registro será público.

Dicho Registro se llevará por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y en el mismo serán inscritos todos los empresarios que hayan sido clasificados por la misma a los fines establecidos en esta Ley.

En la inscripción se expresará el contenido de la clasificación respectiva, así como cuantas incidencias se produzcan durante su vigencia.

2. Las Comunidades Autónomas podrán crear, asimismo, sus propios Registros Oficiales de Empresas Clasificadas.

3. A los efectos de lo previsto en el apartado 3 del artículo 28, las Comunidades Autónomas, que pretendan dar efecto general a sus acuerdos de clasificación y revisión de las clasificaciones, remitirán los respectivos

expedientes a la Comisión de Clasificación que corresponda de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa que, por el procedimiento y dentro del plazo que reglamentariamente se establezcan, dictará acuerdo sobre la inscripción o denegación de la misma que será notificado a la empresa y a la Comunidad Autónoma.

El desarrollo reglamentario a que se refiere el párrafo anterior establecerá, con carácter previo a la adopción del acuerdo denegatorio por la Comisión de Clasificación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, un trámite específico para que la Comunidad Autónoma pueda formular observaciones y aportar justificaciones sobre el acuerdo de clasificación por ella adoptado y que se pretende surta efectos ante órganos de contratación de la Administración General del Estado o de Comunidades Autónomas distintas.

En ningún caso el acuerdo denegatorio de la citada Comisión de Clasificación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa podrá basarse en motivos distintos al de no haber aplicado la Comunidad Autónoma las reglas y criterios a que se refiere el apartado 3 del artículo 28.

4. El Registro Oficial de Empresas Clasificadas dependiente del Ministerio de Hacienda y los Registros Oficiales de Empresas Clasificadas de las Comunidades Autónomas, en el desarrollo de su actividad y en sus relaciones recíprocas, facilitarán a las otras Administraciones la información que éstas precisen sobre el contenido de los respectivos Registros.

CAPÍTULO III

De las garantías exigidas para los contratos con la Administración

SECCIÓN 1.ª DE LA PRESTACIÓN DE LAS GARANTÍAS SEGÚN LAS DISTINTAS CLASES DE CONTRATOS

Artículo 35. Garantías provisionales.

1. En los contratos comprendidos en esta Ley será requisito necesario para acudir a los procedimientos abiertos o restringidos de cuantía igual o superior a la fijada en los artículos 135.1, 177.2, y 203.2, según el tipo de contrato de que se trata, el acreditar la constitución previa, a disposición del correspondiente órgano de contratación, de una garantía provisional equivalente al 2 por 100 del presupuesto del contrato, entendiéndose por tal el establecido por la Administración como base de la licitación, salvo en los supuestos en que no se haya hecho previa fijación del presupuesto, en los que se determinará estimativamente por el órgano de contratación. Dicha garantía habrá de ser constituida:

e) En metálico o en valores públicos o privados, con sujeción, en cada caso, a las condiciones reglamentariamente establecidas. El metálico, los valores o los certificados correspondientes, se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales en la forma y con las condiciones que reglamentariamente se establezcan.

b) Mediante aval prestado, en la forma y condiciones reglamentarias, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España y presentado ante el correspondiente órgano de contratación.

c) Por contrato de seguro de caución celebrado en la forma y condiciones que reglamentariamente se establezcan, con entidad aseguradora autorizada para operar



12/2010



BOE núm. 148

Miércoles 21 junio 2000

21785

en el ramo de caución, debiendo entregarse el certificado del contrato al correspondiente órgano de contratación.

En los contratos de cuantía inferior a la señalada en este apartado, así como en los contratos administrativos especiales y en los contratos privados, la exigencia de garantía provisional será potestativa para el órgano de contratación.

2. La garantía provisional será devuelta a los interesados inmediatamente después de la propuesta de adjudicación del contrato en los casos en los que la forma de adjudicación sea la subasta o de la adjudicación, cuando aquélla sea por concurso. La garantía será retenida al empresario incluido en la propuesta de adjudicación o al adjudicatario e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación.

3. En los supuestos de presunción de temeridad, a los que se refieren los artículos 83.2, párrafo b), y 86.3 será retenida la garantía a los empresarios comprendidos en la misma, así como al mejor postor o al que presente la oferta más ventajosa de los que no lo estén, hasta que se dicte el acuerdo de adjudicación.

4. En caso de no formalización del contrato por causas imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en el artículo 54.

5. En el procedimiento negociado cuando se interese la oferta de alguno o de algunos empresarios, cualquiera que sea la cuantía del contrato, el órgano de contratación podrá exigir de los mismos la constitución de una garantía provisional que surtirá sus efectos hasta el momento de la adjudicación.

6. La constitución de la garantía global a que se refiere el apartado 2 del artículo siguiente eximirá de la constitución de la garantía provisional, produciendo aquella los efectos inherentes a ésta última.

Artículo 36. Garantías definitivas, especiales y complementarias.

1. Los adjudicatarios de los contratos regulados en esta Ley están obligados a constituir una garantía definitiva por el importe del 4 por 100 del importe de adjudicación, a disposición del órgano de contratación, cualquiera que haya sido el procedimiento y la forma de adjudicación del contrato, que habrá de constituirse:

a) En la misma clase de bienes y en los establecimientos señalados en el apartado 1, párrafo a), del artículo anterior.

b) Mediante aval prestado en la forma y condiciones reglamentarias, por las entidades indicadas en el apartado 1, párrafo b), del artículo precedente y constituido en los establecimientos señalados en el apartado 1, párrafo a), del mismo artículo.

c) Por contrato de seguro de caución celebrado en la forma y condiciones que reglamentariamente se determinen, con las entidades referidas en el apartado 1, párrafo c), del artículo anterior, debiendo entregarse la póliza en los establecimientos señalados en el apartado 1, párrafo a), del mismo artículo.

Cuando el precio del contrato se determine en función de precios unitarios el importe de la garantía a constituir será del 4 por 100 del presupuesto base de licitación.

En los contratos privados será facultativa para el órgano de contratación la exigencia de la garantía definitiva.

2. Alternativamente a lo establecido en el apartado anterior el contratista podrá constituir una garantía global con referencia a todos los contratos que celebre con una Administración pública o con uno o varios órganos de contratación sin especificación singular para cada contrato, en alguna de las modalidades previstas en los párrafos b) y c) del artículo 35.1.

La garantía global deberá ser depositada en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones Provinciales de Hacienda o en las cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales contratantes, según la Administración ante la que ha de surtir efecto.

La garantía global responderá, en todos los contratos a celebrar o celebrados con una Administración pública o con uno o varios órganos de contratación, genérica y permanentemente, del mantenimiento de las proposiciones y de la formalización del contrato, en el supuesto de garantía provisional, hasta el 2 por 100 del presupuesto del contrato y en el supuesto de garantía definitiva, del cumplimiento por el adjudicatario de las obligaciones de todos los contratos hasta el 4 por 100, o porcentaje mayor que proceda según esta Ley, del importe de adjudicación o del presupuesto base de licitación, cuando el precio se determine en función de precios unitarios, sin perjuicio de que la indemnización de daños y perjuicios a favor de la Administración que, en su caso, pueda producirse, se ejercite sobre el resto de la garantía global.

La correspondiente caja o establecimiento, a efectos de la constitución de garantías y a solicitud de los interesados, emitirá certificación comprensiva de la existencia de la garantía global y de la suficiencia de la misma en el plazo máximo de tres días hábiles desde la presentación de la solicitud del interesado, procediéndose a inmovilizar el importe de la garantía a constituir. En el caso de garantías provisionales, si el solicitante no resultase adjudicatario, se dejará sin efecto dicha inmovilización y, caso contrario, se incrementará la misma hasta cubrir el importe de la garantía definitiva, especial, o complementaria correspondiente, sin perjuicio del reajuste a que hubiere lugar en los términos del artículo 42 de esta Ley. En el caso de garantías definitivas, una vez producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato o resuelto éste sin culpa del contratista, se procederá a la liberación del saldo inmovilizado.

Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de las reglas generales de esta Ley en cuanto a responsabilidad de las garantías, cancelación o devolución de las mismas en relación con la inmovilización o incautación del importe de las respectivas garantías.

3. En casos especiales el órgano de contratación podrá establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares que, además de la garantía a que se refiere el apartado primero, se preste una complementaria que no podrá superar el 6 por 100 del importe de adjudicación del contrato, pudiéndose alcanzar una garantía total de hasta un 10 por 100 del citado importe. A todos los efectos, dicha garantía tendrá la consideración de garantía definitiva.

4. En el supuesto de adjudicación a un empresario cuya proposición hubiera estado incurso inicialmente en presunción de temeridad, a la que se refieren los artículos 83.2, párrafo b), y 86.3, el órgano de contratación exigirá al contratista la constitución de una garantía definitiva por el 20 por 100 del importe de adjudicación o del presupuesto base de licitación, cuando el precio se determine en función de precios unitarios que sustituirá a la del 4 por 100 prevista en el apartado 1, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el apartado precedente y para cuya cancelación se estará a lo dispuesto en el artículo 47.5.

5. El pliego de cláusulas administrativas particulares podrá asimismo establecer un sistema de garantías complementarias, de hasta un 16 por 100 del precio del contrato, en función de la desviación a la baja de la oferta seleccionada de la que se defina como oferta

media y de la aproximación de aquella al umbral a partir del cual las ofertas deben ser consideradas como anormalmente bajas.

6. En ningún caso las garantías aplicadas conforme a lo dispuesto en este artículo podrán superar por acumulación el porcentaje del 20 fijado en el apartado 4.

Artículo 37. Garantía definitiva en determinados contratos.

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en los contratos de consultoría y asistencia, en los de servicios y en los contratos administrativos especiales la garantía definitiva podrá ser dispensada cuando así se haga constar en el pliego de cláusulas administrativas particulares, debiendo motivarse en el expediente de contratación las causas de tal dispensa.

Artículo 38. Garantías en contratos de gestión de servicios públicos.

1. En los contratos de gestión de servicios públicos el importe de las garantías provisionales o definitivas se fijará en cada caso por el órgano de contratación en el pliego de cláusulas administrativas, a la vista de la naturaleza, importancia y duración del servicio de que se trate.

2. En estos contratos, el Consejo de Ministros queda facultado para acordar en casos especiales la exención de las correspondientes garantías.

Artículo 39. Excepciones a la constitución de garantías.

No será necesaria la constitución de garantía provisional o definitiva en los siguientes contratos de suministro:

a) Los concertados con empresas concesionarias de servicios públicos referentes a suministros de la clase señalada en el artículo 172.1. párrafo a).

b) Aquéllos en los que el contratista entregue inmediatamente los bienes consumibles o de fácil deterioro antes del pago del precio, salvo que exista plazo de garantía y en los de arrendamiento y sus modalidades de arrendamiento financiero y arrendamiento con opción de compra.

c) Cuando la empresa suministradora sea extranjera y garantice el cumplimiento del contrato de acuerdo con las prácticas comerciales internacionales.

Artículo 40. Otras excepciones a la constitución de garantías.

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, sólo quedan exceptuados del requisito de constitución de garantía provisional o definitiva, en su caso, las entidades que tengan reconocida esta excepción por las leyes estatales o las disposiciones autonómicas correspondientes, limitada en este último supuesto al respectivo ámbito competencial.

SECCIÓN 2.ª DE LA CONSTITUCIÓN Y EFECTOS DE LAS GARANTÍAS

Subsección 1.ª De la constitución y reajuste de garantías

Artículo 41. Constitución de garantías.

1. El adjudicatario deberá acreditar en el plazo de quince días, contados desde que se le notifique la adjudicación del contrato, la constitución de la garantía definitiva. De no cumplirse este requisito por causas impu-

tables al adjudicatario, la Administración declarará resuelto el contrato.

2. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo en caso contrario en causa de resolución.

3. La garantía definitiva en los contratos de consultoría y asistencia, en los de servicios y en los contratos administrativos especiales podrá llevarse a cabo en forma de retención del precio.

Artículo 42. Reajuste de garantías.

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato experimente variación el precio del mismo se reajustará la garantía en el plazo señalado en el artículo anterior contado desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, para que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de su modificación.

Subsección 2.ª De las responsabilidades a que se afecten las garantías

Artículo 43. Extensión de las garantías.

1. La garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicación y de la proposición del adjudicatario hasta la formalización del contrato.

2. Las garantías definitivas responderán de los siguientes conceptos:

a) De las penalidades impuestas al contratista en razón de la ejecución del contrato, en especial las comprendidas en el artículo 95, cuando no puedan deducirse de las certificaciones.

b) De las obligaciones derivadas del contrato, de los gastos originados a la Administración por demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o en el supuesto de incumplimiento del mismo, sin resolución.

c) De la incautación que pueda decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con lo establecido en el mismo o con carácter general en esta Ley.

d) Además, en el contrato de suministro la garantía definitiva responderá de la inexistencia, de vicios o defectos de los bienes suministrados durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato.

Artículo 44. Cancelación de garantías.

La garantía no será devuelta o canjeada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate o resuelto éste sin culpa del contratista.

Artículo 45. Preferencia en la ejecución de garantías.

1. Para hacer efectiva la garantía definitiva, la Administración contratante tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título en que se funde su pretensión.

2. Cuando la garantía no sea bastante para satisfacer las responsabilidades a las que está afectada, la Administración procederá al cobro de la diferencia mediante el procedimiento administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en las respectivas normas de recaudación.

12/2010



BOE núm. 148

Miércoles 21 junio 2000

21787

Artículo 46. Garantías prestadas por terceros.

1. Las personas o entidades distintas del contratista que presten garantías a favor de éste no podrán utilizar el beneficio de excusión a que se refieren el artículo 1830 y concordantes del Código Civil.

2. El avalista o asegurador será considerado parte interesada en los procedimientos que afecten a la garantía prestada en los términos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. En el contrato de seguro de caución:

a) Tendrá la condición de tomador del seguro el contratista y la de asegurado la Administración contratante.

b) La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligación caso de que el asegurado deba hacer efectiva la garantía.

c) El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

Subsección 3.ª De la devolución de la garantía definitiva**Artículo 47. Devolución y cancelación de las garantías definitivas.**

1. Aprobada la liquidación del contrato, si no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía y transcurrido el plazo de la misma, en su caso, se dictará acuerdo de devolución de aquélla o de cancelación del aval.

2. En el supuesto de recepción parcial sólo podrá el contratista solicitar la devolución o cancelación de la parte proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

3. En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o cancelación de la garantía prestada por el cedente hasta que no se halle formalmente constituida la del cesionario.

4. Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 43.

5. En los casos de las garantías especiales y complementarias previstas en el artículo 36, apartados 3, 4 y 5 y en el artículo 83.5, una vez practicada la recepción del contrato, se procederá a sustituir la garantía en su día constituida por otra por el importe a que se refiere el artículo 36.1, que será cancelada de conformidad con los apartados 1 y 4 del presente artículo.

TÍTULO III**De las actuaciones relativas a la contratación****CAPÍTULO I****De los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas****Artículo 48. Pliegos de cláusulas administrativas generales.**

1. Ajustándose en su contenido a los preceptos de esta Ley y de sus disposiciones de desarrollo, el Consejo

de Ministros, a iniciativa de los Ministerios interesados y a propuesta del Ministro de Hacienda, podrá aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales para la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales, previo dictamen del Consejo de Estado.

2. Cuando se trate de pliegos generales para la adquisición de bienes y servicios de tecnologías para la información la propuesta al Consejo de Ministros corresponderá conjuntamente al Ministro de Hacienda y al Ministro de Administraciones Públicas.

3. En los mismos términos, las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local aprobarán, en su caso, los pliegos de cláusulas administrativas generales, de acuerdo con sus normas específicas, siendo asimismo preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva, si lo hubiera.

Artículo 49. Pliegos de cláusulas administrativas particulares.

1. Deberán aprobarse, previa o conjuntamente a la autorización del gasto y siempre antes de la perfección y, en su caso, licitación del contrato, los pliegos de cláusulas administrativas particulares que incluirán los pactos y condiciones definidoras de los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.

2. La aprobación de dichos pliegos corresponderá al órgano de contratación competente.

3. El órgano de contratación competente podrá asimismo establecer modelos tipo de pliegos particulares de general aplicación a los contratos de naturaleza análoga.

4. En los supuestos de los dos apartados anteriores, en la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales se requerirá el informe previo del Servicio Jurídico respectivo, que en el caso de pliegos de modelos tipo hará innecesario el del pliego particular correspondiente.

5. Los contratos se ajustarán al contenido de los pliegos particulares, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos.

6. Las Administraciones públicas facilitarán las copias de los pliegos o condiciones de los contratos a todos los interesados que lo soliciten.

Artículo 50. Cláusulas contrarias a los pliegos generales.

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa informará con carácter previo todos los pliegos particulares en que se proponga la inclusión de estipulaciones contrarias a lo previsto en los correspondientes pliegos generales.

Artículo 51. Pliegos de prescripciones técnicas.

1. Serán elaborados con anterioridad a la autorización del gasto los pliegos y documentos que contengan las prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la ejecución de la prestación, de conformidad con los requisitos que para cada contrato establece la presente Ley, correspondiendo su aprobación al órgano de contratación competente.

2. Previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro correspondiente, podrá establecer los pliegos de prescripciones técnicas generales a que

hayan de ajustarse la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales.

Artículo 52. Orden para el establecimiento de prescripciones técnicas y prohibiciones.

1. Sin perjuicio de las instrucciones o reglamentos técnicos nacionales obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el derecho comunitario, las prescripciones técnicas serán definidas por referencia a normas nacionales que transpongan normas europeas, a documentos de idoneidad técnica europeos o especificaciones técnicas comunes, fijándose reglamentariamente los casos en que pueda prescindirse de los mismos. A falta de los anteriores, las prescripciones técnicas podrán definirse por referencia a normas nacionales que transpongan normas internacionales, a normas nacionales o a otras normas.

2. Salvo que esté justificado por el objeto del contrato, no podrán incluirse en el pliego especificaciones técnicas que mencionen productos de una fabricación o procedencia determinada o procedimientos especiales que tengan por efecto favorecer o eliminar determinadas empresas o determinados productos. Especialmente no se indicarán marcas, patentes o tipos, ni se aludirá a un origen o producción determinado. Sin embargo, cuando no exista posibilidad de definir el objeto del contrato a través de especificaciones suficientemente precisas e inteligibles, se admitirá tal indicación si se acompañan las palabras «o equivalentes».

3. En los contratos sometidos a esta Ley no podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de las especificaciones técnicas relativas a dichos contratos siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

CAPÍTULO II

De la perfección y formalización de los contratos

Artículo 53. Perfección de los contratos.

Los contratos se perfeccionan mediante la adjudicación realizada por el órgano de contratación competente, cualquiera que sea el procedimiento o la forma de adjudicación utilizados.

Artículo 54. Formalización de los contratos.

1. Los contratos de la Administración se formalizarán en documento administrativo dentro del plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público, pudiendo, no obstante, elevarse a escritura pública cuando lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

2. Salvo las excepciones establecidas en esta Ley, será requisito necesario para su formalización la prestación por el empresario de las garantías previstas en la misma como salvaguarda de los intereses públicos.

3. Cuando por causas imputables al contratista no pudiese formalizarse el contrato dentro del plazo indicado la Administración podrá acordar la resolución del mismo, siendo trámite necesario la audiencia del interesado y cuando se formule oposición por el contratista, el informe del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva. En

tal supuesto procederá la incautación de la garantía provisional y la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pueda ocasionar, con independencia de que pueda solicitar la resolución del contrato al amparo del artículo 111, párrafo d).

4. No se podrá iniciar la ejecución del contrato sin la previa formalización, excepto en los casos previstos en los artículos 71 y 72.

Artículo 55. Contratación verbal.

La Administración no podrá contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia.

Artículo 56. Contratos menores.

En los contratos menores, que se definirán exclusivamente por su cuantía de conformidad con los artículos 121, 176 y 201, la tramitación del expediente sólo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente que reúna los requisitos reglamentariamente establecidos y en el contrato menor de obras, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de la existencia de proyecto cuando normas específicas así lo requieran.

Estos contratos no podrán tener una duración superior a un año, ni ser objeto de prórroga ni de revisión de precios.

Artículo 57. Remisión de contratos al Tribunal de Cuentas.

1. Dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato, para el ejercicio de la función fiscalizadora, se remitirá por el órgano de contratación al Tribunal de Cuentas u órgano de fiscalización correspondiente de la Comunidad Autónoma, una copia certificada del documento mediante el que se hubiere formalizado el contrato, acompañada de un extracto del expediente del que se derive, siempre que la cuantía del contrato exceda de 100.000.000 de pesetas (801.012,10 euros), tratándose de obras y de gestión de servicios públicos; de 75.000.000 de pesetas (450.759,08 euros), tratándose de suministros, y de 25.000.000 de pesetas (150.253,03 euros), en los de consultoría y asistencia, en los de servicios y en los contratos administrativos especiales.

2. Igualmente se comunicarán al Tribunal de Cuentas u órgano de fiscalización correspondiente de la Comunidad Autónoma las modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos y extinción de los contratos indicados.

3. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de las facultades del Tribunal de Cuentas o, en su caso, de los correspondientes órganos de fiscalización de las Comunidades Autónomas para reclamar a las distintas Administraciones públicas cuantos datos, documentos y antecedentes estime pertinentes con relación a los contratos de cualquier naturaleza y cuantía.

Artículo 58. Datos estadísticos.

En el mismo plazo señalado en el artículo anterior se remitirá por el órgano de contratación a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda la información sobre los contratos que reglamentariamente se determine, a efectos del cumplimiento de la normativa internacional. Asimismo se informará



12/2010



BOE núm. 148

Miércoles 21 junio 2000

21789

a la mencionada Junta de los casos de modificación, prórroga o variación del plazo y extinción normal o anormal de los mismos.

CAPÍTULO III

De las prerrogativas de la Administración

Artículo 59. Prerrogativas de la Administración.

1. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.

Los acuerdos correspondientes pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.

En el correspondiente expediente se dará audiencia al contratista.

2. En la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales, los acuerdos a que se refiere el apartado anterior deberán ser adoptados previo informe del Servicio Jurídico correspondiente, salvo en los casos previstos en los artículos 41 y 96.

3. No obstante lo anterior, será preceptivo el informe del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos de:

a) Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por parte del contratista.

b) Modificaciones del contrato, cuando la cuantía de las mismas, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 por 100 del precio primitivo del contrato y éste sea igual o superior a 1.000.000.000 de pesetas (6.010.121,04 euros).

Artículo 60. Recursos y arbitraje.

1. Contra todos los acuerdos que pongan fin a la vía administrativa procederá el recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.

2. El sometimiento a arbitraje se sujeción a los requisitos establecidos en la Ley General Presupuestaria o en las correspondientes normas de otras Administraciones públicas.

CAPÍTULO IV

De la invalidez de los contratos.

Artículo 61. Invalidez de los contratos.

Los contratos regulados en la presente Ley serán inválidos cuando lo sea alguno de sus actos preparatorios o el de adjudicación por concurrir en los mismos alguna de las causas de derecho administrativo o de derecho civil a que se refieren los artículos siguientes.

Artículo 62. Causas de nulidad de Derecho administrativo.

Son causas de nulidad de Derecho administrativo las siguientes:

a) Las indicadas en el artículo 62.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

b) La falta de capacidad de obrar o de la solvencia económica, financiera, técnica o profesional, debidamente acreditada, o el estar incurso el adjudicatario en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades señaladas en el artículo 20 de esta Ley.

c) La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Ley General Presupuestaria y las demás normas de igual carácter de las restantes Administraciones públicas sujetas a esta Ley, salvo los supuestos de emergencia.

Artículo 63. Causas de anulabilidad de derecho administrativo.

Son causas de anulabilidad de derecho administrativo las demás infracciones del ordenamiento jurídico y en especial de las reglas contenidas en la presente Ley, de conformidad con el artículo 63 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 64. Declaración de nulidad.

1. La declaración de nulidad de los contratos por las causas expresadas en el artículo 62 podrá ser acordada por el órgano de contratación, de oficio o a instancia de los interesados, de conformidad con los requisitos y plazos establecidos en el artículo 102 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En los supuestos de nulidad y anulabilidad, en relación con la suspensión de la ejecución de los actos de los órganos de contratación, se estará a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Artículo 65. Efectos de la declaración de nulidad.

1. La declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la adjudicación, cuando sea firme, llevará en todo caso consigo la del mismo contrato que entrará en fase de liquidación, debiendo restituirse las partes recíprocamente las cosas que hubiesen recibido en virtud del mismo y si esto no fuese posible se devolverá su valor. La parte que resulte culpable deberá indemnizar a la contraria de los daños y perjuicios que haya sufrido.

2. La nulidad de los actos que no sean preparatorios sólo afectará a éstos y sus consecuencias.

3. Si la declaración administrativa de nulidad de un contrato produjese un grave trastorno al servicio público, podrá disponerse en el mismo acuerdo la continuación de los efectos de aquél y bajo sus mismas cláusulas, hasta que se adopten las medidas urgentes para evitar el perjuicio.

Artículo 66. Causas de invalidez de derecho civil.

La invalidez de los contratos por causas reconocidas en el derecho civil, en cuanto resulten de aplicación a la contratación administrativa, se sujeción a los requisitos y plazos de ejercicio de las acciones establecidos en el ordenamiento civil, pero el procedimiento para hacerlas valer se someterá a lo previsto en los artículos anteriores para los actos y contratos administrativos anulables.

CAPÍTULO V

De las actuaciones administrativas preparatorias de los contratos

Artículo 67. Expediente de contratación.

1. A los contratos cuya adjudicación se rige por la presente Ley procederá la tramitación del expediente de contratación que se iniciará por el órgano de contratación justificando la necesidad de la misma. Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas particulares que hayan de regir el contrato, con precisión del plazo de duración del contrato y, cuando estuviere prevista, de su posible prórroga y alcance de la misma que, en todo caso, habrá de ser expresa, sin que pueda prorrogarse el contrato por consentimiento tácito de las partes.

2. Al expediente se incorporarán, siempre que el contrato origine gastos para la Administración, el certificado de existencia de crédito o documento que legalmente le sustituya, la fiscalización de la Intervención y la aprobación del gasto, salvo en el supuesto excepcional previsto en el artículo 85, párrafo a), en los términos previstos en la Ley General Presupuestaria o en las correspondientes normas presupuestarias de las restantes Administraciones públicas sujetas a esta Ley.

Artículo 68. Fraccionamiento del objeto del contrato.

1. El expediente deberá abarcar la totalidad del objeto del contrato y comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para ello.

2. No podrá fraccionarse un contrato con objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad, el procedimiento o la forma de adjudicación que corresponda.

3. Cuando el objeto admita fraccionamiento, justificándolo debidamente en el expediente, podrá praverse en el mismo la realización independiente de cada una de sus partes, mediante su división en lotes, siempre que éstas sean susceptibles de utilización o aprovechamiento separado o así lo exija la naturaleza del objeto.

Artículo 69. Aprobación del expediente

1. Completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha resolución comprenderá también la aprobación del gasto, salvo el supuesto excepcional previsto en el artículo 85, párrafo a), o que las normas de desconcentración, en su caso, hubiesen establecido lo contrario.

2. En los contratos cuya financiación haya de realizarse con aportaciones de distinta procedencia, aunque se trate de órganos de una misma Administración pública, se tramitará un solo expediente por el órgano de contratación al que corresponda la adjudicación del contrato, debiendo acreditarse en aquél la plena disponibilidad de todas las aportaciones y el orden de su abono, con inclusión de una garantía para su efectividad.

3. Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación del contrato y su formalización correspondiente, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos podrán comprometerse créditos con las limitaciones que se determinen en las normas presupuestarias de las distintas Administraciones públicas sujetas a esta Ley.

4. Cuando el contrato se formalice en ejercicio anterior al de la iniciación de la ejecución, el pliego de cláusulas administrativas particulares deberá someter la adjudicación a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

CAPÍTULO VI

De la tramitación de los expedientes de contratación

Artículo 70. Clases de expedientes.

1. Los expedientes de contratación podrán ser ordinarios, urgentes o de emergencia.

2. La tramitación de los expedientes de urgencia seguirá el mismo procedimiento que los ordinarios con las particularidades que se señalan en el artículo siguiente.

3. En la tramitación de los expedientes de emergencia se seguirá el procedimiento excepcional que señala el artículo 72.

Artículo 71. Tramitación urgente.

1. Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes de contratos cuya necesidad sea inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. A tales efectos el expediente deberá contener la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación y debidamente motivada.

2. Los expedientes calificados de urgentes se sujetarán a las siguientes normas:

a) Preferencia para su despacho por los distintos órganos administrativos, fiscalizadores y asesores que participen en la tramitación previa, que dispondrán de un plazo de cinco días para emitir los respectivos informes.

Cuando la complejidad del expediente o cualquier otra causa igualmente justificada impida el despacho en el plazo antes indicado, los órganos administrativos, fiscalizadores y asesores lo pondrán en conocimiento del órgano de contratación que hubiese declarado la urgencia. En tal caso el plazo quedará prorrogado hasta diez días.

b) Acordada la apertura del procedimiento de adjudicación, los plazos establecidos en esta Ley para la licitación y adjudicación del contrato se reducirán a la mitad. No obstante, cuando hayan de publicarse los anuncios en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas», en el procedimiento abierto se observarán los plazos establecidos en los artículos 137, 178 y 207, en el procedimiento restringido, los de los artículos 138, 179 y 207 y en el procedimiento negociado con publicidad, los de los artículos 140, 181 y 207.

c) La Administración podrá acordar el comienzo de la ejecución del contrato aunque no se haya formalizado éste, siempre que se haya constituido la garantía definitiva correspondiente.

d) El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a dos meses desde la fecha de adjudicación, quedando resuelto el contrato en caso contrario, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administración contratante y al contratista y así se hiciera constar en la correspondiente resolución motivada.

Artículo 72. Tramitación de emergencia.

1. Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catas-

12/2010



BOE núm. 148

Miércoles 21 junio 2000

21791

tróficós, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional se estará al siguiente régimen excepcional:

a) El órgano de contratación competente, sin obligación de tramitar expediente administrativo, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido, satisfacer la necesidad sobrevenida o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente. El acuerdo correspondiente se acompañará de la oportuna retención de crédito o documentación que justifique la iniciación del expediente de modificación de crédito. De dichos acuerdos se dará cuenta en el plazo máximo de sesenta días, al Consejo de Ministros si se trata de la Administración General del Estado, de sus organismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales.

b) Simultáneamente, por el Ministerio de Hacienda, si se trata de la Administración General del Estado, o por los representantes legales de los organismos autónomos y entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, se autorizará el libramiento de los fondos precisos para hacer frente a los gastos, con carácter de a justificar.

c) Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, se procederá a cumplimentar los trámites necesarios para la fiscalización y aprobación del gasto.

2. La gestión del resto de la actividad necesaria para completar el objetivo propuesto por la Administración, pero que ya no tenga carácter de emergencia, se contratará conforme a lo establecido en esta Ley.

CAPÍTULO VII

De la adjudicación de los contratos

SECCIÓN 1.ª DE LOS PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

Artículo 73. Procedimientos de adjudicación.

1. La adjudicación de los contratos podrá llevarse a cabo por procedimiento abierto, restringido o negociado.

2. En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una proposición.

3. En el procedimiento restringido sólo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios seleccionados expresamente por la Administración, previa solicitud de los mismos.

4. En el procedimiento negociado el contrato será adjudicado al empresario justificadamente elegido por la Administración, previa consulta y negociación de los términos del contrato con uno o varios empresarios, de conformidad con lo establecido en el artículo 92.3.

Artículo 74. Subasta y concurso.

1. Tanto en el procedimiento abierto como en el restringido la adjudicación podrá efectuarse por subasta o por concurso.

2. La subasta versará sobre un tipo expresado en dinero, con adjudicación al licitador que, sin exceder de aquél, oferte el precio más bajo.

3. En el concurso la adjudicación recaerá en el licitador que, en su conjunto, haga la proposición más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios que se hayan establecido en los pliegos, sin atender exclusivamente al precio de la misma y sin perjuicio del derecho de la Administración a declararlo desierto.

Artículo 75. Utilización de los procedimientos y formas de adjudicación.

1. Los órganos de contratación utilizarán normalmente la subasta y el concurso como formas de adjudicación. El procedimiento negociado sólo procederá en los casos determinados en el Libro II de la presente Ley para cada clase de contrato.

2. En todo caso, deberá justificarse en el expediente la elección del procedimiento y forma utilizados.

SECCIÓN 2.ª NORMAS GENERALES DE PROCEDIMIENTO

Subsección 1.ª Disposiciones comunes

Artículo 76. Cómputo de plazos.

Todos los plazos establecidos en esta Ley, salvo que en la misma se indique que son de días hábiles, se entenderán referidos a días naturales.

Artículo 77. Cuantía de los contratos en relación con el impuesto sobre el Valor Añadido.

Siempre que en el texto de esta Ley se haga alusión al importe o cuantía de los contratos, se entenderá que en los mismos está incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo indicación expresa en contrario. Las referencias al Impuesto sobre el Valor Añadido deberán entenderse realizadas al Impuesto General Indirecto Canario o al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación, en los territorios en que estas figuras impositivas rijan.

Artículo 78. Publicidad de las licitaciones.

1. Todos los procedimientos para la adjudicación de los contratos, con excepción de los procedimientos negociados, se anunciarán en el «Boletín Oficial del Estado». Estos últimos también serán objeto de anuncio en dicha publicación, cuando por razón de su cuantía estén sujetos a publicidad en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas». No obstante, las Comunidades Autónomas, entidades locales y sus organismos autónomos y entidades de derecho público, cuando se trate de contratos que por su cuantía no hayan de publicarse en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas», podrán sustituir la publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» por la que realicen en los respectivos diarios o boletines oficiales.

2. En los procedimientos abiertos la publicación se efectuará con una antelación mínima de quince días al señalado como el último para la admisión de proposiciones. No obstante, en los contratos de obras, dicho plazo será de veintiséis días.

En los procedimientos restringidos el plazo será de diez días anteriores al último para la recepción de las solicitudes de participación y el plazo para la presentación de proposiciones será de quince días desde la fecha del envío de la invitación escrita.

En los procedimientos negociados con publicidad los plazos de recepción de solicitudes de participación deberán coincidir con los resultantes respecto de la fecha del envío del anuncio del contrato a la Oficina de Publicaciones de la Comunidad Europea y que se especifican en los artículos 140.2, 181.2 y 209.2.

3. Los procedimientos relativos a los contratos regulados en el Libro II, Títulos I, III y IV de esta Ley, se anunciarán, además, en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» en los casos y plazos que se señalan en su articulado y conforme al procedimiento y modelo

oficial establecidos por la Comunidad Europea y podrán serlo voluntariamente en los demás supuestos.

El envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» deberá preceder a cualquier otra publicidad. En todo caso esta última publicidad deberá indicar la fecha de aquel envío y no contener indicaciones distintas a las incluidas en dicho anuncio.

Artículo 79. *Proposiciones de los interesados.*

1. Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento de la licitación pública. Se sujetarán al modelo que se establezca en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Su presentación presume la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas sin salvedad alguna.

2. Deberán ir acompañadas, en sobre aparte, de los siguientes documentos:

a) Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su representación.

b) Los que acrediten la clasificación de la empresa, en su caso, o justifiquen los requisitos de su solvencia económica, financiera y técnica o profesional y una declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar, conforme a los artículos 15 a 20.

La declaración responsable a que se refiere el párrafo anterior comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba exigirse antes de la adjudicación a los que vayan a resultar adjudicatarios del contrato, a cuyo efecto se les concederá un plazo máximo de cinco días hábiles.

c) El resguardo acreditativo de la garantía provisional cuando la misma sea exigible conforme a los preceptos de esta Ley.

d) Para las empresas extranjeras la declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, a fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

3. Cuando sea necesaria la presentación de otros documentos con arreglo a esta Ley deberán mencionarse en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el correspondiente anuncio de licitación.

4. Si durante la tramitación de los procedimientos abiertos y restringidos y antes de la adjudicación se produce la extinción de la personalidad jurídica de una empresa licitadora o candidata por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares para poder participar en el procedimiento de adjudicación.

Artículo 80. *Proposiciones simultáneas.*

En las licitaciones, cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 87 de la presente Ley sobre admisibilidad de variantes. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

Artículo 81. *Mesa de contratación.*

1. Salvo en los supuestos previstos en el artículo 12.4, el órgano de contratación para la adjudicación de los contratos por procedimiento abierto o restringido estará asistido por una Mesa constituida por un Presidente, los vocales, que se determinen reglamentariamente, y un Secretario, designados por el órgano de contratación, el último entre funcionarios del propio órgano de contratación o, en su defecto, entre personal a su servicio. En el procedimiento negociado la constitución de la Mesa será potestativa para el órgano de contratación.

En la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades de derecho público y Entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, deberán figurar necesariamente entre los vocales un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un interventor.

2. La Mesa de contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato.

3. Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa de contratación deberá motivar su decisión.

Subsección 1.ª *De las subastas*

Artículo 82. *Propuestas de adjudicación.*

1. En las subastas la Mesa de contratación calificará previamente los documentos presentados en tiempo y forma y procederá, en acto público, a la apertura de las ofertas admitidas y a la propuesta al órgano de contratación de la adjudicación del contrato al postor que oferte el precio más bajo.

2. La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del empresario proponente, frente a la Administración, mientras no se le haya adjudicado el contrato por acuerdo del órgano de contratación.

Artículo 83. *Adjudicación y bajas temerarias.*

1. En las subastas la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de veinte días a contar desde el siguiente al de apertura, en acto público, de las ofertas recibidas.

De no dictarse el acuerdo de adjudicación dentro del plazo señalado en el párrafo precedente el empresario tendrá derecho a retirar su proposición y a que se le devuelva o cancele la garantía que hubiese prestado.

2. El acuerdo del órgano de contratación se acordará a la propuesta, excepto en los casos siguientes:

a) Cuando la Mesa de contratación haya efectuado la propuesta con infracción del ordenamiento jurídico, en cuyo caso la convocatoria quedará sin efecto. Se exceptúa el supuesto de que la infracción afecte exclusivamente al licitador en cuyo favor se realiza la propuesta, en el que la adjudicación deberá tener lugar en favor del siguiente postor no afectado por la infracción. Previamente a la resolución que se adopta, será preceptivo el dictamen del Servicio Jurídico del órgano de contratación.

b) Cuando el órgano de contratación presuma fundadamente que la proposición no pueda ser cumplida como consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias. En estos casos se solicitará informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa cuando las circunstancias concurrentes así lo aconsejen.

12/2010



BOE núm. 148

Miércoles 21 junio 2000

21793

La Mesa de contratación notificará aquella circunstancia a los interesados y el plazo indicado en el párrafo primero del apartado 1 de este artículo se ampliará al doble.

3. El carácter desproporcionado o temerario de las bajas se apreciará de acuerdo con los criterios objetivos que se establezcan reglamentariamente y su declaración requerirá la previa solicitud de información a todos los licitadores supuestamente comprendidos en ella, así como el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

A los efectos del párrafo anterior no podrán ser consideradas las diversas proposiciones que se formulen individualmente por sociedades pertenecientes a un mismo grupo, en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

4. El órgano de contratación, a la vista de los informes mencionados, acordará la adjudicación a favor de la proposición con precio más bajo que pueda ser cumplida a satisfacción de la Administración y, en su defecto, al mejor postor no incurso en temeridad, justificando su decisión ante el Comité Consultivo para los Contratos Públicos de la Comisión de las Comunidades Europeas, si el anuncio de la licitación hubiese sido publicado en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

5. Cuando la adjudicación se realice en favor del empresario cuya proposición hubiera estado incurso inicialmente en presunción de temeridad, se exigirá al mismo una garantía definitiva del 20 por 100 del importe de adjudicación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36.4.

Artículo 84. Adjudicación en supuestos de resolución.

1. Cuando se acuerde la resolución del contrato porque el adjudicatario no cumple las condiciones necesarias para llevar a cabo la formalización del mismo, la Administración podrá adjudicar el contrato al licitador o licitadores siguientes a aquél, por orden de sus ofertas, siempre que ello fuese posible, antes de proceder a una nueva convocatoria, contando con la conformidad del nuevo adjudicatario.

2. El mismo procedimiento podrá seguir la Administración cuando la finalidad de la adjudicación sea la de continuar la ejecución de un contrato ya iniciado y que ha sido declarado resuelto.

Subsección 3ª. Del concurso

Artículo 85. Supuestos de aplicación del concurso.

Se adjudicarán por concurso aquellos contratos en los que la selección del empresario no se efectúe exclusivamente en atención a la oferta cuyo precio sea más bajo y, en particular, en los siguientes casos:

a) Aquellos cuyos proyectos o presupuestos no hayan podido ser establecidos previamente por la Administración y deban ser presentados por los licitadores.

b) Cuando el órgano de contratación considere que la definición de la prestación aprobada por la Administración es susceptible de ser mejorada por otras soluciones técnicas, a proponer por los licitadores mediante la presentación de variantes, o por reducciones en su plazo de ejecución.

c) Aquellos para la realización de los cuales facilite la Administración materiales o medios auxiliares cuya buena utilización exija garantías especiales por parte de los contratistas.

d) Aquellos que requieran el empleo de tecnología especialmente avanzada o cuya ejecución sea particularmente compleja.

Artículo 86. Criterios para la adjudicación del concurso.

1. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares del concurso se establecerán los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación, tales como el precio, la fórmula de revisión, en su caso, el plazo de ejecución o entrega, el coste de utilización, la calidad, la rentabilidad, el valor técnico, las características estéticas o funcionales, la posibilidad de repuestos, el mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio postventa u otros semejantes, de conformidad a los cuales el órgano de contratación acordará aquella.

2. Los criterios a los que se refiere el apartado anterior se indicarán por orden decreciente de importancia y por la ponderación que se les atribuya, y podrán concretar la fase de valoración de las proposiciones en que operarán los mismos y, en su caso, el umbral mínimo de puntuación que en su aplicación pueda ser exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo.

3. En los contratos que se adjudiquen por concurso podrán expresarse en el pliego de cláusulas administrativas particulares los criterios objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o temerarias.

Si el precio ofertado es uno de los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación, se deberán expresar en el pliego de cláusulas administrativas particulares los límites que permitan apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o temerarias.

4. En los supuestos contemplados en el apartado anterior, se estará a lo dispuesto, para las subastas, en el artículo 83, en lo que concierne a la tramitación de las proposiciones y garantía a constituir, sin que las proposiciones de carácter económico que formulan individualmente sociedades pertenecientes a un mismo grupo, en las condiciones que reglamentariamente determinen, puedan ser consideradas a efectos de establecer el precio de referencia para valorar las ofertas económicas e identificar las que deben considerarse como desproporcionadas o temerarias.

Artículo 87. Admisibilidad de variantes.

1. El órgano de contratación sólo podrá tomar en consideración las variantes o alternativas que ofrezcan los licitadores cuando el pliego de cláusulas administrativas particulares haya previsto expresamente tal posibilidad. En este supuesto, el pliego precisará sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada la presentación de variantes o alternativas.

2. La circunstancia de autorización de variantes se hará constar, además, en el anuncio de licitación del contrato.

Artículo 88. Adjudicación de los contratos.

1. La Mesa de contratación calificará previamente los documentos presentados en tiempo y forma, procederá, en acto público, a la apertura de las proposiciones presentadas por los licitadores y las elevará, con el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, al órgano de contratación que haya de efectuar la adjudicación del contrato.

2. La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más ventajosa, mediante la aplicación de los criterios esta-

77

blecidos en el artículo 86, sin atender necesariamente el valor económico de la misma, o declarar desierto el concurso, motivando en todo caso su resolución con referencia a los criterios de adjudicación del concurso que figuren en el pliego.

Artículo 89. Plazo de adjudicación.

1. El órgano de contratación, previos los informes técnicos correspondientes, adjudicará el contrato en el plazo máximo de tres meses a contar de la apertura de las proposiciones, salvo que se establezca otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

2. De no dictarse el acuerdo de adjudicación dentro de plazo, los empresarios admitidos a concurso tendrán derecho a retirar su proposición y a que se les devuelva o cancele la garantía que hubiesen prestado.

Artículo 90. Aplicación subsidiaria de las normas de la subasta.

Los preceptos relativos a la celebración de la subasta regirán también para el concurso, excepto en lo que sea exclusivamente aplicable a aquella forma de adjudicación.

SECCIÓN 3.ª DEL PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO

Artículo 91. Normas para la aplicación del procedimiento restringido.

1. En el procedimiento restringido se aplicarán las normas generales de esta Ley, con las especialidades siguientes:

a) Con carácter previo al anuncio del procedimiento restringido la Administración deberá haber elaborado y justificado en el pliego de cláusulas administrativas particulares, los criterios objetivos con arreglo a los cuales el órgano de contratación habrá de cursar las invitaciones a participar en el procedimiento, de entre los establecidos en los artículos 16 a 19, según corresponda a cada contrato.

b) El órgano de contratación podrá señalar los límites inferior y superior dentro de los que se sitúe el número de empresas que proyecta invitar en virtud de las características del contrato, debiéndolos indicar en el anuncio. En este caso, la cifra más baja no será inferior a cinco y la más alta no superior a veinte.

c) Las solicitudes de participación deberán ir acompañadas de la documentación que acredite la personalidad del empresario y, en su caso, su representación, la clasificación o el cumplimiento de las condiciones de solvencia económica, financiera y técnica o profesional que se determinen en el anuncio.

d) El órgano de contratación, una vez comprobada la personalidad y solvencia del empresario, seleccionará a los concurrentes e invitará a los admitidos, simultáneamente y por escrito, a presentar sus proposiciones en el plazo que en cada caso se señale en la propia invitación, que no podrá ser inferior al que para cada clase de contrato se señala en esta Ley. En el escrito de invitación se indicará al candidato el lugar, día y hora de la apertura de proposiciones.

e) Los empresarios seleccionados presentarán sus proposiciones acompañadas del documento acreditativo de la constitución de la garantía provisional.

2. Una vez presentadas las proposiciones la adjudicación se efectuará según las normas generales de esta Ley.

SECCIÓN 4.ª DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

Artículo 92. Solicitud de ofertas en el procedimiento negociado.

1. Cuando se utilice el procedimiento negociado será necesario solicitar la oferta de empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, sin que su número sea inferior a tres, siempre que ello sea posible, fijando con la seleccionada el precio del mismo y dejando constancia de todo ello en el expediente.

2. Cuando se hubiera constituido Mesa de contratación, esta última elevará al órgano de contratación propuesta de adjudicación, siendo de aplicación lo dispuesto con carácter general en el artículo B1.

3. En el pliego de cláusulas administrativas particulares se determinarán los aspectos económicos y técnicos que, en su caso, hayan de ser objeto de negociación con las empresas.

En todo caso, deberá dejarse constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de contratación.

SECCIÓN 5.ª DE LA NOTIFICACIÓN

Artículo 93. Notificación y publicidad de las adjudicaciones.

1. La adjudicación del contrato, una vez acordada por el órgano de contratación y cualquiera que sea el procedimiento seguido y la forma de adjudicación empleada, será notificada a los participantes en la licitación y después de formalizada se comunicará al Registro Público de Contratos al que se refiere el artículo 118, a los efectos previstos en el artículo 58.

2. Cuando el importe de la adjudicación sea igual o superior a 10.000.000 de pesetas (60.101,21 euros) se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» o en los respectivos Diarios o Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas y Entidades locales, en plazo no superior a cuarenta y ocho días a contar de la fecha de adjudicación del contrato, un anuncio en el que se dé cuenta de dicha adjudicación. Además, en los contratos sujetos a publicidad obligatoria en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» y en los de consultoría y asistencia y en los de servicios de cuantía igual o superior a la prevista en el artículo 203.2, comprendidos en las categorías 17 a 27 de las enumeradas en el artículo 206, deberá enviarse al citado Diario Oficial y al Boletín Oficial del Estado, en el mismo plazo señalado, un anuncio en el que se dé cuenta del resultado de la licitación, sin que en estos supuestos exista la posibilidad de sustituir la publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» por la que Comunidades Autónomas y Entidades locales puedan realizar en sus respectivos Diarios o Boletines Oficiales.

3. Para los contratos de gestión de servicios públicos, la publicidad de las adjudicaciones en el «Boletín Oficial del Estado» o en los respectivos Diarios o Boletines Oficiales será obligatoria cuando el presupuesto de gastos de primer establecimiento sea igual o superior a 10.000.000 de pesetas (60.101,21 euros) o su plazo de duración exceda de cinco años.

4. Excepcionalmente podrá omitirse el anuncio del resultado de la adjudicación cuando la divulgación de la información relativa a la celebración del contrato constituya un obstáculo a la aplicación de la legislación, sea contraria al interés público, perjudique los intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas o pueda perjudicar la competencia leal entre ellas y en los casos previstos en los artículos 141, párrafo f); 159.2.

12/2010



BOE núm. 148

Miércoles 21 junio 2000

21795

párrafo c); 182, párrafo h), y 210, párrafo g), de esta Ley, justificando debidamente estas circunstancias en el expediente.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, el órgano de contratación comunicará a todo candidato o licitador rechazado que lo solicita, en el plazo de quince días a partir de la recepción de la solicitud, los motivos del rechazo de su candidatura o de su proposición y las características de la proposición del adjudicatario determinantes de la adjudicación a su favor, observándose respecto de la comunicación lo dispuesto en el apartado anterior.

6. Lo mismo procederá en los casos en los que se ha decidido renunciar a un contrato ofertado o a reiniciar el procedimiento. Informará también a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

Artículo 96. *Resolución por demora y prórroga de los contratos.*

1. En el supuesto a que se refiere el artículo anterior, si la Administración optase por la resolución, ésta deberá acordarse por el órgano de contratación sin otro trámite preceptivo que la audiencia del contratista y, cuando se formule oposición por parte de éste, el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva.

2. Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se concederá por la Administración un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.

Artículo 97. *Indemnización de daños y perjuicios.*

1. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.

2. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites señalados en las leyes. También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma en el contrato de obras o en el de suministro de fabricación.

3. Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción del hecho, al órgano de contratación para que éste, oído el contratista, se pronuncie sobre a cual de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción.

4. La reclamación de aquéllos se formulará, en todo caso, conforme al procedimiento establecido en la legislación aplicable a cada supuesto.

Artículo 98. *Principio de riesgo y ventura.*

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido para el de obras en el artículo 144.

Artículo 99. *Pago del precio.*

1. El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos en esta Ley y en el contrato y con arreglo al precio convenido.

2. El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcialmente mediante abonos a cuenta.

3. El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la ejecución del contrato y que estén comprendidas en el objeto del mismo, en las condiciones señaladas en los respectivos pliegos, debiéndose asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía.

4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, sin perjuicio del plazo especial establecido en el apartado 4 del artículo 110, y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de dos meses, el interés legal del dinero incrementado en 1,5 puntos, de las cantidades adeudadas.

CAPÍTULO VIII

De la ejecución y modificación de los contratos

SECCIÓN 1.ª DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS

Artículo 94. *Efectos de los contratos.*

Los efectos de los contratos administrativos se regirán por la presente Ley, sus disposiciones de desarrollo y por los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, generales y particulares.

Artículo 95. *Demora en la ejecución.*

1. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.

2. La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.

3. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 20 por cada 100.000 pesetas (0,12 por 601,01 euros) del precio del contrato.

El órgano de contratación podrá acordar la inclusión en el pliego de cláusulas administrativas particulares de unas penalidades distintas a las enumeradas en el párrafo anterior cuando, atendiendo a las especiales características del contrato, se considere necesario para su correcta ejecución y así se justifique en el expediente.

4. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

5. La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

6. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

5. Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en esta Ley.

6. Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.

7. Sin perjuicio de lo establecido en las normas tributarias y de la Seguridad Social, los abonos a cuenta que procedan por la ejecución del contrato, sólo podrán ser embargados en los siguientes supuestos:

a) Para el pago de los salarios devengados por el personal del contratista en la ejecución del contrato y de las cuotas sociales derivadas de los mismos.

b) Para el pago de las obligaciones contraídas por el contratista con los subcontratistas y suministradores referidas a la ejecución del contrato.

Artículo 100. Transmisión de los derechos de cobro.

1. Los contratistas que, conforme al artículo anterior, tengan derecho de cobro frente a la Administración, podrán ceder el mismo conforme a Derecho.

2. Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la Administración, será requisito imprescindible la notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión.

3. Una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el mandamiento de pago habrá de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la cesión se ponga en conocimiento de la Administración, los mandamientos de pago a nombre del contratista surtirán efectos liberatorios.

SECCIÓN 2.ª DE LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS

Artículo 101. Modificaciones de los contratos.

1. Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones por razón de interés público en los elementos que lo integran, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente.

2. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 54.

3. En las modificaciones de los contratos, aunque fueran sucesivas, que impliquen aislada o conjuntamente alteraciones en cuantía igual o superior al 10 por 100 del precio primitivo del contrato, siempre que éste sea igual o superior a 1.000.000.000 de pesetas (8.010.121,04 euros) con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, será preceptivo, además del informe a que se refiere el apartado 2 del artículo 59 y de la fiscalización previa en los términos del apartado 2, párrafo g), del artículo 11, el informe de contenido presupuestario de la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. A tal efecto, los órganos de contratación remitirán el expediente correspondiente a la modificación propuesta, al que se incorporarán los siguientes documentos:

a) Una memoria explicativa suscrita por el director facultativo de la obra que justifique la desviación producida que motiva la modificación, con expresión de las circunstancias no previstas en la aprobación del pliego de prescripciones técnicas y, en su caso, en el proyecto correspondiente, documento que será expedido,

en los contratos distintos a los de obras por el servicio encargado de la dirección y ejecución de las prestaciones contratadas.

b) Justificación de la improcedencia de la convocatoria de una nueva licitación por las unidades o prestaciones constitutivas de la modificación.

c) En los contratos de obras, informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos sobre la adecuación de la modificación propuesta.

La Dirección General de Presupuestos emitirá su informe en el plazo de quince días hábiles.

Lo establecido en este apartado será también de aplicación en las modificaciones consistentes en la sustitución de unidades objeto del contrato por unidades nuevas en contratos cuyo importe de adjudicación sea igual o superior a 1.000.000.000 de pesetas (8.010.121,04 euros) y las modificaciones afecten al 30 por 100 o más del precio primitivo del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, independientemente de las repercusiones presupuestarias a que dieran lugar las modificaciones.

Artículo 102. Suspensión de los contratos.

1. Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquella tuviera lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 99, se levantará un acta en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél.

2. Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste.

TÍTULO IV

De la revisión de precios en los contratos de la Administración

CAPÍTULO ÚNICO

Disposiciones generales

Artículo 103. Revisión de precios.

1. La revisión de precios en los contratos regulados en esta Ley tendrá lugar en los términos establecidos en este Título cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe y haya transcurrido un año desde su adjudicación, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por 100, ni el primer año de ejecución, contando desde dicha adjudicación, pueden ser objeto de revisión.

2. En ningún caso tendrá lugar la revisión de precios en los contratos cuyo pago se concierte mediante el sistema de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción a compra a que se refiere el artículo 14, ni en los contratos menores.

3. El pliego de cláusulas administrativas particulares deberá detallar la fórmula o sistema de revisión aplicable y, en resolución motivada, podrá establecerse la improcedencia de la misma que igualmente deberá hacerse constar en dicho pliego.

Artículo 104. Sistema de revisión de precios.

1. La revisión de precios se llevará a cabo mediante los índices o fórmulas de carácter oficial que determine el órgano de contratación. No obstante, en los contratos de obras y en los de suministro de fabricación el Consejo de Ministros, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, aprobará fórmulas tipo

h) En estos contratos se procurará incluir estipulaciones tendentes a preservar los intereses de la Administración ante posibles incumplimientos del contratista y a autorizar las modificaciones del contrato que puedan hacerse convenientes.

2. En los contratos con empresas españolas se incluirán cláusulas de sumisión a los Tribunales españoles.

3. En los contratos con empresas extranjeras se procurará, cuando las circunstancias lo aconsejen, la incorporación de cláusulas tendentes a resolver las discrepancias que puedan surgir mediante fórmulas sencillas de arbitraje. En estos contratos se podrá transigir previa autorización del Consejo de Ministros.

4. Las reglas contenidas en este artículo no obstan para que, en los contratos que se celebren y ejecuten en los restantes Estados miembros de la Comunidad Europea y cuya cuantía sea igual o superior a los límites señalados en el artículo 135, en el artículo 177.2 y en el artículo 203.2, deban cumplirse las normas de esta Ley referentes a la publicidad comunitaria y procedimientos y formas de adjudicación de los contratos.

5. En los contratos que sean consecuencia de la aplicación de las disposiciones del artículo 296 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea que celebre el Ministerio de Defensa con empresas extranjeras, así como los que se requieran para el cumplimiento de misiones de paz en las que participen las Fuerzas Armadas españolas, que se celebren y ejecuten en el extranjero, la formalización de los contratos corresponderá al Ministro de Defensa.

TÍTULO VIII

Del registro público de contratos

CAPÍTULO ÚNICO

Disposiciones generales

Artículo 118. Registro Público de Contratos.

1. Para permitir el conocimiento de los contratos celebrados por las distintas Administraciones públicas y de sus adjudicatarios, se llevará un Registro Público de Contratos por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, así como por los órganos correspondientes de las restantes Administraciones Públicas, manteniéndose la debida coordinación entre los mismos.

2. El Registro Público de Contratos de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa constituirá el soporte de la estadística sobre contratación pública para fines estatales.

3. Reglamentariamente se determinará la forma en que se comunicarán los datos sobre los contratos adjudicados y sus modificaciones, prórrogas y cumplimiento al Registro Público de Contratos de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y la forma en que se harán públicos los datos aportados al citado Registro a los efectos previstos en los apartados anteriores.

Artículo 119. Recomendaciones a los órganos de contratación.

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa podrá exponer directamente a los órganos de contratación o formular con carácter general las recomendaciones pertinentes, si de los estudios sobre contratación administrativa o de un contrato particular se dedujeran conclusiones de interés para la Administración.

LIBRO II

De los distintos tipos de contratos administrativos

TÍTULO I

Del contrato de obras

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

SECCIÓN 1.ª DE LA PREPARACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS

Artículo 120. Objeto del contrato.

A los efectos de esta Ley se entiende por contrato de obras el celebrado entre la Administración y un empresario cuyo objeto sea:

a) La construcción de bienes que tengan naturaleza inmueble, tales como carreteras, ferrocarriles, puertos, canales, presas, edificios, fortificaciones, aeropuertos, bases navales, defensa del litoral y señalización marítima, monumentos, instalaciones varias, así como cualquier otra análoga de ingeniería civil.

b) La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, como dragados, sondeos, prospecciones, inyecciones, corrección del impacto medioambiental, regeneración de playas, actuaciones urbanísticas u otros análogos.

c) La reforma, reparación, conservación o demolición de los definidos en las letras anteriores.

Artículo 121. Contratos menores.

Tendrán la consideración de contratos menores aquellos cuya cuantía no exceda de 5.000.000 de pesetas (30.050,61 euros).

Artículo 122. Proyecto de obras.

La adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa elaboración, supervisión, en su caso, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto, que definirá con precisión el objeto del contrato.

En el supuesto de adjudicación conjunta de proyecto y obra la ejecución de ésta quedará condicionada a la supervisión, aprobación y replanteo del proyecto por la Administración.

Artículo 123. Clasificación de las obras.

1. A los efectos de elaboración de los proyectos se clasificarán las obras, según su objeto y naturaleza, en los grupos siguientes:

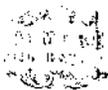
- Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación.
- Obras de reparación simple.
- Obras de conservación y mantenimiento.
- Obras de demolición.

2. Son obras de primer establecimiento las que dan lugar a la creación de un bien inmueble.

3. El concepto general de reforma abarca el conjunto de obras de ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de un bien inmueble ya existente.

4. Se consideran como obras de reparación las necesarias para enmendar un menoscabo producido en

12/2010



BOE num. 148

Miércoles 21 junio 2000

21799

óste concertar con terceros la realización parcial del mismo.

2. La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que en todo caso se dé conocimiento por escrito a la Administración del subcontrato a celebrar, con indicación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.

No obstante, para los contratos de carácter secreto o reservado, o cuando su ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales, de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias, o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado, la subcontratación requerirá siempre autorización expresa del órgano de contratación.

b) Que las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no excedan del porcentaje que, superior al 50 por 100 del importe de adjudicación, se fije en el pliego de cláusulas administrativas particulares. En el supuesto de que tal previsión no figure en el pliego, el contratista podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del indicado 50 por 100 del importe de adjudicación.

c) Que el contratista se obligue a abonar a los subcontratistas y suministradores el pago del precio pactado con unos y otros en los plazos y condiciones que no sean más desfavorables que los establecidos en el artículo 99.4 para las relaciones entre Administración y contratista.

3. Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato.

4. En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 20, con excepción de su párrafo k), de la presente Ley o que estén incurso en la suspensión de clasificaciones.

Artículo 116. Pagos a subcontratistas y suministradores.

La celebración de subcontratos y de contratos de suministros derivados de un contrato administrativo deberá cumplir los siguientes requisitos:

1. El contratista se obligará a abonar a los subcontratistas o suministradores, el precio pactado en los plazos y condiciones que se indican a continuación.

2. Los plazos fijados serán determinados desde la fecha de aprobación por el contratista principal de la factura emitida por el subcontratista o el suministrador, con indicación de su fecha y del período a que correspondan.

3. La aprobación o conformidad deberá otorgarse en un plazo máximo de treinta días, desde la presentación de la factura. Dentro del mismo plazo deberán formularse, en su caso, los motivos de disconformidad a la misma.

4. Salvo lo que se dispone en el siguiente apartado 5, el contratista deberá abonar las facturas en el plazo de sesenta días desde su conformidad a las mismas. En caso de demora en el pago, el subcontratista o el suministrador tendrá derecho al cobro de intereses. El tipo de interés que se aplicará a las cantidades adeudadas será el legal del dinero, incrementado en 1,5 puntos.

5. Cuando el plazo de pago se convenga más allá de los sesenta días establecidos en el número anterior, dicho pago se instrumentará mediante un documento que lleve aparejada la acción cambiaria; y cuando el plazo de pago supere los ciento veinte días, podrá además exigirse por el subcontratista o suministrador que dicho pago se garantice mediante aval.

Los subcontratos y los contratos de suministros a que se refiere el párrafo anterior tendrán en todo caso naturaleza privada.

TÍTULO VII

De la contratación en el extranjero

CAPÍTULO ÚNICO

Disposiciones generales

Artículo 117. Contratos celebrados en el extranjero.

1. A los contratos que se celebren y ejecuten en el extranjero, sin perjuicio de tener en cuenta los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que, en su aplicación, puedan presentarse, se les aplicarán las siguientes reglas:

a) En la Administración General del Estado la formalización de estos contratos corresponderá al Ministro de Asuntos Exteriores, que la ejercerá a través de las representaciones diplomáticas o consulares y que podrá delegarla en favor de otros órganos, funcionarios o personas particulares. En los Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social la formalización de estos contratos corresponde a sus representantes legales o a las personas en quienes los mismos deleguen. El artículo 12 será de aplicación en cuanto a la tramitación, autorización en su caso, adjudicación, modificación y resolución de los mismos.

En los demás Organismos y Entidades sujetas a esta Ley, la formalización de los contratos corresponderá a sus legítimos representantes.

b) Sin perjuicio de los requisitos de capacidad que puedan exigir las leyes del Estado en que se celebre el contrato, para determinar las condiciones de capacidad y solvencia de las empresas españolas y de las pertenecientes al resto de Estados miembros de la Comunidad Europea se estará a lo dispuesto en esta Ley.

c) El pliego de cláusulas administrativas particulares podrá ser sustituido por el propio cláusulado del contrato.

d) Los contratos podrán adjudicarse por procedimiento negociado, debiendo conseguirse, siempre que sea posible, tres ofertas, al menos, de empresas capaces de cumplir los mismos.

e) La formalización se llevará a cabo mediante documento fehaciente, remitiendo los datos de estos contratos a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa a los efectos previstos en el artículo 118, sin perjuicio de la obligación de la remisión al Tribunal de Cuentas prevista en el artículo 57. En cuanto a los contratos menores, se estará a lo dispuesto con carácter general para los mismos en esta Ley.

f) Al adjudicatario se le exigirá una garantía análoga a la prevista en esta Ley para asegurar la ejecución del contrato, siempre que ello sea posible y adecuado a las condiciones del Estado en que se efectúa la contratación y, en su defecto, la que sea usual y autorizada en dicho Estado.

g) El pago del precio se condicionará a la entrega por el contratista de la prestación convenida, salvo que se oponga a ello el derecho o las costumbres del Estado, en cuyo supuesto se deberá exigir garantía que cubra el anticipo.

12/2010



BOE núm. 148

Miércoles 21 junio 2000

21797

según el contenido de las diferentes prestaciones comprendidas en los contratos.

2. Las fórmulas tipo reflejarán la participación en el precio del contrato de la mano de obra y de los elementos básicos

Estas fórmulas deberán ser publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» y serán revisables cada dos años, como mínimo. De entre las fórmulas tipo el órgano de contratación, en el pliego de cláusulas administrativas particulares, determinará las que considere más adecuadas al respectivo contrato, sin perjuicio de que, si ninguna de las mismas coincide con las características del contrato, se propongan las fórmulas especiales, que deberán ser igualmente aprobadas por el Consejo de Ministros.

3. El índice o fórmula de revisión aplicados al contrato será invariable durante la vigencia del mismo y determinará la revisión de precios en cada fecha respecto de la fecha final de plazo de presentación de ofertas en la subasta y en el concurso y la de la adjudicación en el procedimiento negociado.

4. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobará los índices mensuales de precios, debiendo ser publicados los mismos en el «Boletín Oficial del Estado».

Los índices reflejarán las oscilaciones reales del mercado y podrán ser únicos para todo el territorio nacional o determinarse por zonas geográficas.

Artículo 105. Coeficiente de revisión

Las fórmulas de revisión servirán para calcular, mediante la aplicación de índices de precios, los coeficientes de revisión en cada fecha respecto a la fecha y períodos determinados en el artículo 104.3, aplicándose sus resultados a los importes líquidos de las prestaciones realizadas que tengan derecho a revisión.

Artículo 106. Procedimiento de revisión.

Cuando se utilicen fórmulas de revisión de precios en los contratos de obras y suministro de fabricación, se procederá a la revisión mediante la aplicación del coeficiente resultante de aquéllas sobre el precio líquido de la prestación realizada.

Artículo 107. Revisión en casos de demora en la ejecución.

Cuando la cláusula de revisión se aplique sobre períodos de tiempo en los que el contratista hubiese incurrido en mora, y sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los índices de precios que habrán de ser tenidos en cuenta serán aquellos que hubiesen correspondido a las fechas establecidas en el contrato para la realización de la prestación en plazo, salvo que los correspondientes al período real de ejecución produzcan un coeficiente inferior, en cuyo caso se aplicarán estos últimos.

Artículo 108. Pago del importe de la revisión.

El importe de las revisiones que procedan se hará efectivo mediante el abono o descuento correspondiente en las certificaciones o pagos parciales o, excepcionalmente, en la liquidación del contrato, cuando no hayan podido incluirse en dichas certificaciones o pagos parciales.

TÍTULO V

De la extinción de los contratos

CAPÍTULO I

Disposición general

Artículo 109. Extinción de los contratos.

Los contratos se extinguirán por cumplimiento o por resolución.

CAPÍTULO II

Del cumplimiento de los contratos

Artículo 110. Cumplimiento de los contratos y recepción.

1. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto.

2. En todo caso su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de las características del objeto del contrato. A la Intervención de la Administración correspondiente le será comunicado, cuando dicha comunicación sea preceptiva, el acto para su asistencia potestativa al mismo en sus funciones de comprobación de la inversión.

3. En los contratos se fijará un plazo de garantía a contar de la fecha de recepción o conformidad, transcurrido el cual sin objeciones por parte de la Administración, salvo los supuestos en que se establezca otro plazo en esta Ley o en otras normas, quedará extinguida la responsabilidad del contratista.

Se exceptúan del plazo de garantía aquellos contratos en que por su naturaleza o características no resulte necesario, lo que deberá justificarse debidamente en el expediente de contratación, consignándolo expresamente en el pliego.

4. Excepto en los contratos de obras, que se regirán por lo dispuesto en el artículo 147.3, dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato y abonarse, en su caso, el saldo resultante. Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir el interés legal del dinero incrementado en 1,5 puntos, a partir de los dos meses siguientes a la liquidación.

CAPÍTULO III

De la resolución de los contratos

Artículo 111. Causas de resolución.

Son causas de resolución del contrato:

- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.
- La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de acreedores o de insolvente fallido en cualquier procedimiento, o el acuerdo de quita y espera.

c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.

d) La falta de prestación por el contratista de la garantía definitiva o las especiales o complementarias de aquélla en plazo en los casos previstos en la Ley y la no formalización del contrato en plazo.

e) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista y el incumplimiento del plazo señalado en el artículo 71.2, párrafo d).

f) La falta de pago por parte de la Administración en el plazo de ocho meses, conforme al artículo 99.6.

g) El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales.

h) Aquellas que se establezcan expresamente en el contrato.

i) Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en el articulado de esta Ley.

Artículo 112. Aplicación de las causas de resolución.

1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento en la forma que reglamentariamente se determine.

2. La declaración de quiebra, de concurso de acreedores, de insolvente o de fallido en cualquier procedimiento originará siempre la resolución del contrato.

En los restantes casos de resolución de contrato el derecho para ejercitarla será potestativo para aquella parte a la que no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma, sin perjuicio de que en los supuestos de modificaciones en más del 20 por 100 previstos en los artículos 149, párrafo e); 192, párrafo c), y 214, párrafo c), la Administración también pueda instar la resolución.

3. Cuando la causa de resolución sea la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual la Administración podrá acordar la continuación del contrato con sus herederos o sucesores.

4. La resolución por mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar cuando no concorra otra causa de resolución imputable al contratista y siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

5. En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista continuará el contrato con la entidad absorbente o resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo.

6. En los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramos de la misma continuará el contrato con la entidad resultante o beneficiaria, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que la entidad resultante o beneficiaria mantenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicación.

7. En la quita y espera y en la suspensión de pagos la Administración potestativamente continuará el contrato si el contratista prestare las garantías suficientes a juicio de aquélla para la ejecución del mismo.

8. Si la causa de resolución fuera la falta de prestación de garantías complementarias, la resolución afectará a la totalidad del contrato.

9. En el supuesto de demora a que se refiere el párrafo e) del artículo anterior, si las penalidades a que diere lugar la demora en el cumplimiento del plazo alcanzasen un múltiplo del 5 por 100 del importe del contrato, se estará a lo dispuesto en el artículo 95.4.

10. El incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por parte de la Administración originará la resolución de aquél sólo en los casos previstos en esta Ley.

Artículo 113. Efectos de la resolución.

1. En los supuestos de no formalización del contrato en plazo por causas imputables al contratista se estará a lo dispuesto en el artículo 54.3.

2. Cuando obedezca a mutuo acuerdo los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado entre la Administración y el contratista.

3. El incumplimiento por parte de la Administración de las obligaciones del contrato determinará para aquélla, con carácter general, el pago de los daños y perjuicios que por tal causa se irroguen al contratista.

4. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada.

5. En todo caso, el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía constituida.

TÍTULO VI

De la cesión de los contratos y de la subcontratación

CAPÍTULO ÚNICO

Disposiciones generales

SECCIÓN 1.ª DE LA CESIÓN DE LOS CONTRATOS

Artículo 114. Cesión de los contratos.

1. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato.

2. Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que el órgano de contratación autorice expresamente y con carácter previo la cesión.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato, o realizada la explotación al menos durante el plazo de una quinta parte del tiempo de duración del contrato si éste fuese de gestión de servicios públicos.

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia exigible de conformidad con los artículos 15 a 20, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente.

d) Que se formalice la cesión, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.

3. El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondieran al cedente.

4. La Administración no autorizará la cesión del contrato en favor de personas incursas en suspensión de clasificaciones o inhabilitadas para contratar.

SECCIÓN 2.ª DE LA SUBCONTRATACIÓN

Artículo 115. Subcontratación.

1. Salvo que el contrato disponga lo contrario o que por su naturaleza y condiciones se deduzca que ha de ser ejecutado directamente por el adjudicatario, podrá

12/2010



BOE núm. 148

Miércoles 21 junio 2000

21801

Un bien inmueble por causas fortuitas o accidentales. Cuando afecten fundamentalmente a la estructura resistente tendrán la calificación de gran reparación y, en caso contrario, de reparación simple.

5. Si el menoscabo se produce en el tiempo por el natural uso del bien, las obras necesarias para su enmienda tendrán el carácter de conservación. Las obras de mantenimiento tendrán el mismo carácter que las de conservación.

6. Son obras de demolición las que tengan por objeto el derribo o la destrucción de un bien inmueble.

Artículo 124. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración.

1. Los proyectos de obras deberán comprender, al menos:

- a) Una memoria en la que se describa el objeto de las obras, que recogerá los antecedentes y situación previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la justificación de la solución adoptada, detallándose los factores de todo orden a tener en cuenta.
- b) Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede perfectamente definida, así como los que delimiten la ocupación de terrenos y la restitución de servidumbres y demás derechos reales, en su caso, y servicios afectados por su ejecución.
- c) El pliego de prescripciones técnicas particulares donde se hará la descripción de las obras y se regulará su ejecución, con expresión de la forma en que ésta se llevará a cabo, de la medición de las unidades ejecutadas y el control de calidad y de las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista.
- d) Un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los precios unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles precisos para su valoración.
- e) Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste.
- f) Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra.
- g) Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o reglamentario.
- h) El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud, en los términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras.

2. No obstante, para los proyectos de obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación, inferiores a 20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros) y para los restantes proyectos enumerados en el artículo anterior, se podrá simplificar, refundir o incluso suprimir alguno o algunos de los documentos anteriores, en la forma que reglamentariamente se determine, siempre que la documentación resultante sea suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras que comprende.

3. Salvo cuando resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que la obra se va a ejecutar.

4. En los contratos de concesión de obras públicas se acompañarán los estudios económicos y administrativos sobre régimen de utilización y tarifas que hayan de aplicarse.

5. Cuando la elaboración del proyecto haya sido contratada íntegramente por la Administración de acuerdo con el artículo 196.2, párrafo a), el autor o autores del mismo incurrirán en responsabilidad en los términos

establecidos en los artículos 217 a 219. En el supuesto de que la prestación se llevara a cabo en colaboración con la Administración y bajo su supervisión, de acuerdo con el artículo 196.2, párrafo b), las responsabilidades se limitarán al ámbito de la colaboración.

Artículo 125. Presentación del proyecto por el empresario.

1. La contratación conjunta de elaboración de proyecto y ejecución de las obras correspondientes tendrá carácter excepcional y sólo podrá aplicarse en los siguientes supuestos:

- a) Cuando el sistema constructivo pudiera resultar determinante de las características esenciales del proyecto.
- b) Cuando las características de las obras permitan anticipar diversos tratamientos de trazado, diseño y presupuesto.

2. En todo caso, la licitación de este tipo de contrato requerirá la redacción previa por la Administración del correspondiente anteproyecto o documento similar y sólo, cuando por causas justificadas fuera conveniente al interés público, podrá limitarse a redactar las bases técnicas a que el proyecto deba ajustarse.

3. El contratista presentará el proyecto al órgano de contratación para su supervisión, aprobación y replanteo. Si la Administración observare defectos o referencias de precios inadecuados en el proyecto recibido requerirá su subsanación del contratista, en los términos del artículo 217, sin que, hasta tanto, y una vez se proceda a nueva supervisión, aprobación y replanteo del proyecto, pueda iniciarse la ejecución de obra. En el supuesto de que el órgano de contratación y el contratista no llegaren a un acuerdo sobre los precios, el último quedará exonerado de ejecutar las obras, sin otro derecho frente al órgano de contratación que el pago de los trabajos de redacción del correspondiente proyecto.

4. En los casos a que se refiere este artículo, la orden de iniciación del expediente y la reserva de crédito correspondiente fijarán el importe estimado máximo que el futuro contrato puede alcanzar. No obstante, no se procederá a la fiscalización del gasto, a su aprobación, así como a la adquisición del compromiso generado por el mismo, hasta que no se conozca el importe y las condiciones del contrato de acuerdo con la proposición seleccionada, circunstancias que serán recogidas en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares.

5. Cuando se trate de la elaboración de un proyecto de obras singulares de infraestructuras hidráulicas o de transporte, cuya entidad o complejidad no permita establecer el importe estimativo de la realización de las obras, la previsión del precio máximo a que se refiere el apartado anterior se limitará exclusivamente al proyecto. La ejecución de la obra quedará supeditada al estudio por parte de la Administración de la viabilidad de su financiación y a la tramitación del correspondiente expediente de gasto. En el supuesto de que la Administración renunciara a la ejecución de la obra o no se pronunciara en un plazo de tres meses, salvo que el pliego de cláusulas administrativas particulares estableciera otro mayor, el contratista tendrá derecho al pago del precio del proyecto incrementado en el 5 por 100 como compensación.

Artículo 126. Obras a tanto alzado.

Excepcionalmente, cuando la naturaleza de la obra lo permita, se podrá establecer el sistema de retribución a tanto alzado, sin existencia de precios unitarios, en las circunstancias y condiciones que reglamentariamente se determinen.

Artículo 127. Instrucciones técnicas.

Los proyectos deberán sujetarse a las instrucciones técnicas que sean de obligado cumplimiento para las respectivas Administraciones públicas.

Artículo 128. Supervisión de proyectos.

Antes de la aprobación del proyecto, cuando su cuantía sea igual o superior a 50.000.000 de pesetas (300.506,05 euros), los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario, así como la normativa técnica, que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto. La responsabilidad por la aplicación incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos se exigirá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.5. En los proyectos de cuantía inferior a la señalada, el informe tendrá carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o estanquidad de la obra, en cuyos supuestos el informe de supervisión será igualmente preceptivo.

Artículo 129. Replanteo del proyecto.

1. Aprobado el proyecto, y previamente a la tramitación del expediente de contratación de la obra, se procederá a efectuar el replanteo del mismo, el cual consistirá en comprobar la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución, que será requisito indispensable para la adjudicación en todos los procedimientos. Asimismo, se deberán comprobar cuantos supuestos figuren en el proyecto elaborado y sean básicos para el contrato a celebrar.

2. En la tramitación de los expedientes de contratación referentes a obras de infraestructuras hidráulicas, de transporte y de carreteras, se dispensará del requisito previo de disponibilidad de los terrenos, si bien la ocupación efectiva de aquéllos deberá ir precedida de la formalización del acta de ocupación.

3. En los casos de cesión de terrenos o locales por Entidades públicas, será suficiente para acreditar la disponibilidad de los terrenos la aportación de los acuerdos de cesión y aceptación por los órganos competentes.

4. Una vez realizado el replanteo se incorporará el proyecto al expediente de contratación.

SECCIÓN 2.ª DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**Artículo 130. Concepto del contrato de concesión.**

1. Se considera como contrato de concesión de obras públicas aquel en el que, siendo su objeto alguno de los contenidos en el artículo 120, la contraprestación a favor del adjudicatario consista en el derecho a explotar la obra o en dicho derecho acompañado del de percibir un precio.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6, el contrato de concesión de obras públicas queda sujeto a las normas de publicidad de los contratos de obras, con las especialidades previstas en el artículo 139.

El concesionario deberá ajustarse en la explotación de la obra a lo establecido en el artículo 161.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 15 a 20 en cuanto a capacidad, solvencia y prohibiciones de contratar de los empresarios, los que concurran, individualmente o conjuntamente con otros, a la licitación de una concesión de obra pública podrán hacerlo con

el compromiso de constituir una sociedad, que será la titular de la concesión, en el plazo y con los requisitos y condiciones que establezca el pliego de cláusulas administrativas particulares, sin ser de aplicación los límites establecidos en el artículo 282 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1584/1989, de 22 de diciembre, y en el artículo 185 del Código de Comercio.

Artículo 131. Subcontratación parcial en las concesiones de obras públicas.

En el contrato de concesión de obras públicas, la Administración podrá imponer al concesionario que subcontrate con terceros un porcentaje de los contratos de obras objeto de la concesión que represente, al menos, un 30 por 100 del valor total de dichas obras, debiendo preverse que los licitadores puedan incrementarlo haciendo constar su cifra en el contrato. Alternativamente, podrán invitar a éstos para que señalen en sus ofertas el porcentaje mínimo que vayan a subcontratar con terceros.

Artículo 132. Contratos de las Administraciones Públicas como concesionarias.

En los contratos a que se refiere el artículo 130, cuando el concesionario sea alguna de las Administraciones públicas deberá, para aquellas obras que han de ser ejecutadas por terceros, acomodarse íntegramente a lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 133. Contratos de los concesionarios particulares.

1. El concesionario de un contrato de obras públicas deberá someter los contratos que celebre con un tercero a las normas de publicidad establecidas en el artículo 135.2, salvo cuando mediare cualquiera de las circunstancias siguientes:

a) Que el precio del contrato sea inferior a 891 521,645 pesetas (5.358,153 euros, equivalentes a 5.000.000 de derechos especiales de giro), con exclusión del impuesto sobre el Valor Añadido.

b) Que el procedimiento utilizado para su adjudicación sea el negociado sin publicidad.

2. A efectos de lo establecido en el apartado anterior, no se considerarán terceros aquellas empresas que se hayan agrupado para obtener la concesión, ni las empresas vinculadas a ellas.

Artículo 134. Empresas vinculadas.

1. Se entiende por empresas vinculadas aquellas en las que el concesionario pueda ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante o aquellas que puedan ejercerla sobre él o que, del mismo modo que el concesionario, estén sometidas a la influencia dominante de otra empresa por razón de propiedad, participación financiera o normas que la regulen.

2. Se presumirá que existe influencia dominante cuando una empresa, directa o indirectamente, con relación a otra:

a) Esté en posesión de la mayoría del capital suscrito.

b) Disponga de la mayoría de los votos inherentes a las participaciones emitidas por la empresa.



12/2010



BOE núm. 148

Miércoles 21 junio 2000

21803

c) Pueda designar más de la mitad de los miembros del órgano de administración, dirección o control de la empresa.

3. Las empresas que presenten ofertas para la concesión y que se hallen en las circunstancias expresadas anteriormente deberán acompañar a aquéllas una lista exhaustiva de las empresas vinculadas.

SECCIÓN 3.ª DE LA PUBLICIDAD DENTRO DEL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS

Artículo 135. Supuestos de publicidad.

1. En cada ejercicio presupuestario, los órganos de contratación darán a conocer, mediante un anuncio indicativo, las características básicas de los contratos de obras que tengan proyectado celebrar en los próximos doce meses, cualquiera que sea el procedimiento de adjudicación que apliquen y cuyo importe, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, sea igual o superior a 891.521.645 pesetas (5.358.153 euros, equivalentes a 5.000.000 derechos especiales de giro).

Este anuncio se enviará lo antes posible a partir de su programación a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas y, para que surta el efecto de reducción de plazos previsto en los artículos 137 y 138, deberá haberse enviado a la citada Oficina con una antelación mínima de cincuenta y dos días y máxima de doce meses, a partir de la fecha del envío del anuncio del contrato al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

2. Además, toda contratación de obras del indicado importe, por procedimiento abierto, restringido o negociado del artículo 140 deberá ser anunciada en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

3. Para el cálculo de la cifra señalada se tomará en consideración, además del valor de la obra, el de los suministros necesarios para su ejecución puestos a disposición del empresario por parte de la Administración.

Artículo 136. División por lotes.

1. Cuando la obra esté dividida en varios lotes y cada lote constituya un contrato, el importe de cada uno se tendrá en cuenta para la determinación de la cuantía a efectos del artículo anterior. No obstante, cuando el importe acumulado de los lotes sea igual o superior a la cifra indicada en el artículo anterior, se aplicarán a todos los lotes, a los efectos de publicidad, las disposiciones del mismo.

2. Sin embargo, el órgano de contratación podrá considerar solamente el importe individualizado de cada lote cuando sea inferior a 166.386.000 pesetas (1.000.000 de euros) con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, siempre que el importe acumulado de dichos lotes no sea superior al 20 por 100 del importe acumulado de todos los lotes en los que esté dividida la obra.

Subsección 1.ª Del procedimiento abierto en el contrato de obras

Artículo 137. Plazos para la presentación de proposiciones.

En el procedimiento abierto, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a cincuenta y dos días, a contar desde la fecha del envío del anuncio del contrato a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.

Si, en los plazos previstos, se hubiese enviado el anuncio indicativo a que se refiere el artículo 135.1, el plazo de presentación de proposiciones se reducirá a treinta y seis días, como norma general, sin que, en ningún caso, esta reducción pueda ser inferior a veintidós días.

Subsección 2.ª Del procedimiento restringido en el contrato de obras

Artículo 138. Plazos.

1. En el procedimiento restringido, el plazo de recepción de las solicitudes de participación será fijado de forma que no sea inferior a treinta y siete días, a partir de la fecha del envío del anuncio.

2. El plazo de presentación de las proposiciones no podrá ser inferior a cuarenta días, a contar desde la fecha del envío de la invitación escrita, el cual podrá ser reducido a veintiséis días si la Administración hubiese publicado el anuncio indicativo al que se refiere el párrafo primero del artículo 135.1.

3. En casos de urgencia, el plazo de presentación de las solicitudes de participación y el de las ofertas podrá ser reducido a quince días y diez días, respectivamente, a partir de la fecha del envío del anuncio o de la invitación.

Artículo 139. Plazos en las concesiones de obras públicas.

1. En las concesiones de obras públicas, en el procedimiento restringido, el plazo para la presentación de candidaturas no podrá ser inferior a cincuenta y dos días desde la fecha del envío del anuncio.

2. En los contratos celebrados por los concesionarios de obras públicas, que no sean la Administración, a los que se refiere el artículo 133, también en el procedimiento restringido, el plazo de recepción de las solicitudes de participación no será inferior a treinta y siete días y el de recepción de las ofertas de cuarenta días, a partir de la fecha del envío del anuncio o de la invitación a presentar una oferta, respectivamente.

Subsección 3.ª Del procedimiento negociado en el contrato de obras

Artículo 140. Procedimiento negociado y publicidad comunitaria.

1. El órgano de contratación podrá acordar la aplicación del procedimiento negociado respecto a las obras en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias, que deberán justificarse en el expediente:

a) Cuando las proposiciones u ofertas económicas en los procedimientos abiertos o restringidos sean irregulares o inaceptables, siempre que no se modifiquen sustancialmente las condiciones originales del contrato. En este caso, el órgano de contratación no publicará el anuncio de licitación al que se refiere el apartado 2 de este artículo si se incluyen en el procedimiento negociado a todos los licitadores que, con ocasión del anterior procedimiento abierto o restringido, hubiesen sido admitidos a la licitación.

b) Cuando las obras se realicen únicamente con fines de investigación, experimentación o perfeccionamiento y no con objeto de obtener una rentabilidad o de cubrir los costes de investigación o de desarrollo.

c) En casos excepcionales, cuando se trate de obras cuya naturaleza o riesgos no permitan determinar previamente el precio global.

2. En estos supuestos, cuando la cuantía del contrato, con exclusión del impuesto sobre el Valor Añadido,

sea igual o superior a 891.521.645 pesetas (5.358.153 euros, equivalentes a 5.000.000 derechos especiales de giro), el órgano de contratación deberá publicar un anuncio en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» y el plazo de recepción de las solicitudes no será inferior a treinta y siete días, a partir de la fecha del envío del anuncio, que se reducirán a quince en caso de urgencia.

Artículo 141. *Procedimiento negociado sin publicidad.*

Podrá utilizarse el procedimiento negociado sin publicidad previa cuando concorra alguna de las circunstancias siguientes, que habrán de justificarse en el expediente:

a) Cuando el contrato no llegare a adjudicarse en un procedimiento abierto o restringido por falta de licitadores o porque los presentados no hayan sido admitidos a licitación, siempre que no se modifiquen las condiciones originales del contrato, salvo el precio, que no podrá ser aumentado en más de un 10 por 100. En este supuesto, cuando la cuantía del contrato sea igual o superior al límite señalado en el primer párrafo del artículo 135.1 se remitirá un informe a la Comisión de las Comunidades Europeas, a petición de ésta.

b) Cuando a causa de su especificidad técnica, artística o por motivos relacionados con la protección de derechos de exclusiva, la ejecución de las obras sólo pueda encomendarse a un determinado empresario

c) Cuando una imperiosa urgencia, resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo, demande una pronta ejecución que no pueda lograrse por el procedimiento de urgencia regulado en el artículo 71 o por aplicación de los plazos de publicidad en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» previstos para los casos de urgencia.

d) Cuando se trate de obras complementarias que no figuren en el proyecto ni en el contrato, pero que resulte necesario ejecutar como consecuencia de circunstancias imprevisibles y su ejecución se confíe al contratista de la obra principal, de acuerdo con los precios que rigen para el contrato primitivo o que, en su caso, fuesen fijados contradictoriamente.

Para la aplicación de lo establecido en el párrafo anterior, deberán concurrir los siguientes requisitos respecto del contrato principal:

1. Que las obras no puedan separarse técnica o económicamente del contrato primitivo sin causar inconvenientes mayores a la Administración o que, aunque se puedan separar de la ejecución de dicho contrato, sean estrictamente necesarias para su ejecución.

2. Que las obras complementarias a ejecutar definidas en el correspondiente proyecto estén formadas, al menos, en un 50 por 100 del presupuesto, por unidades de obra del contrato principal.

3. Que el importe acumulado de las obras complementarias no supere el 20 por 100 del precio primitivo del contrato.

Las demás obras complementarias que no reúnan los requisitos exigidos en los párrafos precedentes habrán de ser objeto de contratación independiente.

e) Cuando se trate de la repetición de obras similares a otras adjudicadas por procedimiento abierto o restringido, siempre que las primeras sean conformes al proyecto base y se hayan incluido en el anuncio del citado procedimiento abierto o restringido y computado su importe para fijar la cuantía total del contrato.

Únicamente se podrá recurrir a este procedimiento durante un periodo de tres años, a partir de la formalización del contrato inicial.

f) Los declarados secretos o reservados o cuando su ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado. En este último supuesto, en la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales se requerirá declaración expresa de que concurre tal requisito, correspondiendo realizarla al titular del Departamento ministerial respectivo, sin que a estos efectos dicha competencia pueda ser delegada.

g) Los de presupuesto inferior a 10.000.000 de pesetas (60.101,21 euros).

CAPÍTULO II

De la ejecución y modificación del contrato de obras

SECCIÓN 1.ª DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS

Artículo 142. *Comprobación del replanteo.*

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización, salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado, que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato.

Artículo 143. *Ejecución de las obras y responsabilidad del contratista.*

1. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste diere al contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

2. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.

Artículo 144. *Fuerza mayor.*

1. En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del contratista, éste tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios que se le hubieran producido.

2. Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes:

a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica.

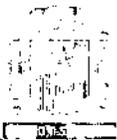
b) Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros semejantes.

c) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones graves del orden público.

Artículo 145. *Certificaciones y abonos a cuenta.*

1. A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al

12/2010



BOE núm. 148

Miércoles 21 junio 2000

21805

rines al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden.

2. El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se señalen en los respectivos pliegos de cláusulas administrativas particulares y conforme al régimen y los límites que con carácter general, se determinen reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía.

SECCIÓN 2.ª DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS

Artículo 146. *Modificación del contrato de obras.*

1. Serán obligatorias para el contratista las modificaciones en el contrato de obras que, con arreglo a lo establecido en el artículo 101, produzcan aumento, reducción o supresión de las unidades de obra o sustitución de una clase de fábrica por otra, siempre que ésta sea una de las comprendidas en el contrato. En caso de supresión o reducción de obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna, sin perjuicio de lo que se establece en el artículo 149, párrafo e).

2. Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicación de las mismas serán fijados por la Administración, a la vista de la propuesta del director facultativo de las obras y de las observaciones del contratista a esta propuesta en trámite de audiencia, por plazo mínimo de tres días hábiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. La contratación con otro empresario podrá realizarse por el procedimiento negociado sin publicidad, siempre que su importe no exceda del 20 por 100 del precio primitivo del contrato.

3. Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con carácter de urgencia, con las siguientes actuaciones:

- Redacción del proyecto y aprobación del mismo.
- Audiencia del contratista, por plazo mínimo de tres días.
- Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos complementarios precisos.

4. Cuando la tramitación de un modificado exija la suspensión temporal parcial o total de la ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el Ministro, si se trata de la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales, podrá acordar que continúen provisionalmente las mismas tal y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que el importe máximo previsto no supere el 20 por 100 del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación.

El expediente a tramitar al efecto exigirá exclusivamente las siguientes actuaciones:

- Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde figurará el importe aproximado de la modificación, así como la descripción básica de las obras a realizar.
- Audiencia del contratista.
- Conformidad del órgano de contratación.
- Certificado de existencia de crédito.

En el plazo de seis meses deberá estar aprobado técnicamente el proyecto y en el de ocho meses el expediente del modificado.

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades de obra previstas en el contrato, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas. La autorización del Ministro para iniciar provisionalmente las obras, que no podrá ser objeto de delegación, implicará en el ámbito de la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos y Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social la aprobación del gasto, sin perjuicio de los ajustes que deban efectuarse en el momento de la aprobación del expediente del gasto.

CAPÍTULO III

De la extinción del contrato de obras

SECCIÓN 1.ª DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRAS

Artículo 147. *Recepción y plazo de garantía.*

1. A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en el artículo 110.2 concurrirá un facultativo designado por la Administración, representante de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato.

2. Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

3. El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares, atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año, salvo casos especiales.

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 148, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, aplicándose a este último lo dispuesto en el artículo 99.4. En el caso de que el

informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.

4. No obstante, en aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad práctica como las de sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosos o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan el concepto de mera conservación como los de dragados no se exigirá plazo de garantía.

5. Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato.

6. Siempre que por razones excepcionales de interés público, debidamente motivadas en el expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurren dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción de las obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan.

Artículo 148. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años, a contar desde la recepción.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

SECCIÓN 2.ª DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS

Artículo 149. Causas de resolución.

Son causas de resolución del contrato de obras, además de las señaladas en el artículo 111, las siguientes.

a) La demora en la comprobación del replanteo, conforme al artículo 142.

b) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a seis meses por parte de la Administración.

c) El desistimiento o la suspensión de las obras por un plazo superior a ocho meses acordada por la Administración.

d) Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por la Administración que afecten al presupuesto de la obra, al menos, en un 20 por 100.

e) Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato, en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por 100 del precio primitivo del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, o representen una alteración sustancial del proyecto inicial.

Artículo 150. Alteración sustancial y suspensión de la iniciación de la obra.

1. En relación con el párrafo a) del artículo anterior se considerará alteración sustancial, entre otras, la modi-

ficación de los fines y características básicas del proyecto inicial, así como la sustitución de unidades que afecten, al menos, al 30 por 100 del precio primitivo del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido.

2. En la suspensión de la iniciación de las obras por parte de la Administración, cuando ésta dejare transcurrir seis meses, a contar de la misma, sin dictar acuerdo sobre dicha situación y notificarlo al contratista, éste tendrá derecho a la resolución del contrato.

Artículo 151. Efectos de la resolución.

1. La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. Será necesaria la citación de éste, en el domicilio que figure en el expediente de contratación, para su asistencia al acto de comprobación y medición.

2. Si se demorase la comprobación del replanteo, según el artículo 142, dando lugar a la resolución del contrato, el contratista sólo tendrá derecho a una indemnización equivalente al 2 por 100 del precio de la adjudicación.

3. En el supuesto de suspensión de la iniciación de las obras por parte de la Administración por tiempo superior a seis meses, el contratista tendrá derecho a percibir, por todos los conceptos, una indemnización del 3 por 100 del precio de adjudicación.

4. En caso de desistimiento o suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho al 6 por 100 del precio de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, entendiéndose por obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones y las que hasta la fecha de notificación de la suspensión se hubieran ejecutado.

CAPÍTULO IV

De la ejecución de las obras por la propia Administración

Artículo 152. Supuestos.

1. La ejecución de obras por la Administración podrá verificarse por los propios servicios de la misma a través de sus medios personales o reales o con la colaboración de empresarios particulares, siempre que en este último caso su importe sea inferior a 891.521.645 pesetas (5.358.153 euros, equivalentes a 5.000.000 derechos especiales de giro), con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, cuando concorra alguna de estas circunstancias:

a) Que la Administración tenga montadas fábricas, arsenales, maestranzas o servicios técnicos o industriales, suficientemente aptos para la realización de la obra proyectada, en cuyo caso deberá normalmente utilizarse este sistema de ejecución.

b) Que la Administración posea elementos auxiliares utilizables en la obra y cuyo empleo suponga una economía superior al 5 por 100 del importe del presupuesto de aquélla o una mayor celeridad en su ejecución, justificándose, en este caso, las ventajas que se sigan de la misma.

c) Que no haya habido ofertas de empresarios para la ejecución de obras en licitación previamente efectuada.

d) Cuando se trate de la ejecución de obras que se consideren de emergencia con arreglo a lo previsto en esta Ley.

12/2010



BOE núm. 148

Miércoles 21 junio 2000

21807

e) Cuando se trate de la ejecución de obras en las que, dada su naturaleza, sea imposible la fijación previa de un precio cierto o la de un presupuesto por unidades simples de trabajo.

f) Cuando sea necesario relevár al contratista de realizar algunas unidades de obra por no haberse llegado a un acuerdo en los precios contradictorios correspondientes.

g) Las obras de mera conservación y mantenimiento en los términos definidos en el artículo 123.5 de esta Ley.

h) Excepcionalmente, la ejecución de obras definidas en virtud de un anteproyecto, cuando no se aplique el artículo 85, párrafo a).

i) En los supuestos del artículo 111, párrafo d).

2. Fuera de los supuestos de los párrafos d), g) y h) del apartado 1 de este artículo será inexcusable la redacción del correspondiente proyecto. El contenido de este tipo de proyectos se fijará reglamentariamente.

3. Cuando la ejecución de las obras se efectúe mediante contratos de colaboración con empresarios particulares, estos contratos tendrán carácter administrativo, pero no constituirán contrato de obras, ya que la ejecución de las mismas estará a cargo del órgano gestor de la Administración. La selección del empresario colaborador se efectuará por los procedimientos y formas de adjudicación establecidos en los artículos 73 y 74 de esta Ley.

4. En los supuestos de los párrafos a) y b) del apartado 1 de este artículo no podrá sobrepasarse en la contratación con colaboradores el 50 por 100 del importe total del proyecto.

Artículo 153. Autorización para la ejecución de obras.

La autorización de la ejecución de obras y, en su caso, la aprobación del proyecto en la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales corresponderá al órgano competente para la aprobación del gasto.

TÍTULO II

Del contrato de gestión de servicios públicos

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 154. Régimen general.

1. Los contratos mediante los que las Administraciones públicas encomienden a una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio público se regularán por la presente Ley y por las disposiciones especiales del respectivo servicio.

2. No serán aplicables las disposiciones de este Título a los supuestos en que la gestión del servicio público se efectúe mediante la creación de Entidades de Derecho público destinadas a este fin ni a aquellos en que la misma se atribuya a una sociedad de Derecho privado en cuyo capital sea exclusiva la participación de la Administración o de un ente público de la misma.

Artículo 155. Poderes de la Administración y ámbito del contrato.

1. La Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato, los servicios de su competencia, siempre que tengan un contenido económico que los

haga susceptibles de explotación por empresarios particulares. En ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.

2. Antes de proceder a la contratación de un servicio público, deberá haberse determinado su régimen jurídico básico que atribuya las competencias administrativas, que determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados y que declare expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la Administración respectiva como propia de la misma.

3. En todo caso, la Administración conservará los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios de que se trata.

4. El contrato expresará con claridad el ámbito de la gestión, tanto en el orden funcional como en el territorial.

5. Estos contratos se regularán por la presente Ley, salvo lo establecido en los artículos 95, 96, 102 y 110 y por las disposiciones especiales del respectivo servicio, en cuanto no se opongan a ella.

Artículo 156. Modalidades de la contratación.

La contratación de la gestión de los servicios públicos adoptará cualquiera de las siguientes modalidades:

a) Concesión, por la que el empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura, siendo aplicable en este caso lo previsto en el apartado 3 del artículo 130 de la presente Ley.

b) Gestión interesada, en cuya virtud la Administración y el empresario participarán en los resultados de la explotación del servicio en la proporción que se establezca en el contrato.

c) Concierto con persona natural o jurídica que venga realizando prestaciones análogas a las que constituyen el servicio público de que se trate.

d) Sociedad de economía mixta en la que la Administración participe, por sí o por medio de una entidad pública, en concurrencia con personas naturales o jurídicas.

Artículo 157. Duración.

El contrato de gestión de servicios públicos no podrá tener carácter perpetuo o indefinido, fijándose necesariamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares su duración y la de las prórrogas de que pueda ser objeto, sin que pueda exceder el plazo total, incluidas las prórrogas, de los siguientes períodos:

a) Cincuenta años en los contratos que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio público.

b) Veinticinco años en los contratos que comprendan la explotación de un servicio público no relacionado con la prestación de servicios sanitarios.

c) Diez años en los contratos que comprendan la explotación de un servicio público cuyo objeto consista en la prestación de servicios sanitarios siempre que no estén comprendidos en el párrafo a).

CAPÍTULO II

De las actuaciones administrativas preparatorias del contrato de gestión de servicios públicos

Artículo 158. Actuaciones preparatorias del contrato.

1. Todo contrato de gestión de servicios públicos ira precedido de la aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares y del de prescripciones técnicas, especificando el régimen jurídico básico regulador del servicio a que se refiere el artículo 155 y los Regla-

mentos especiales reguladores del mismo, así como los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo y, en su caso, las tarifas que hubieren de percibirse de los usuarios, los procedimientos para su revisión y el canon o participación que hubiera de satisfacerse a la Administración, cuando así procediera.

2. En los contratos que comprenden la ejecución de obras, la tramitación del expediente irá precedida de la elaboración y aprobación administrativa del anteproyecto de explotación y de las obras precisas, con especificación de las prescripciones técnicas relativas a su realización. En tal supuesto serán de aplicación los preceptos establecidos en esta Ley para la concesión de obras públicas.

3. En los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria motivada por supuestos de urgencia, por importe inferior a 2.000.000 de pesetas (12.020,24 euros), las disposiciones de esta Ley no serán de aplicación a la preparación y adjudicación del contrato.

Para acreditar la existencia de los contratos a que se refiere este apartado, bastará, además de la justificación de la urgencia a cumplimentar, la determinación del objeto de la prestación, la fijación del precio a satisfacer por la misma y la designación por el órgano de contratación de la empresa que efectuará la correspondiente prestación.

CAPÍTULO III

De los procedimientos y formas de adjudicación del contrato de gestión de servicios públicos

Artículo 159. *Procedimientos y formas de adjudicación.*

1. Los contratos de gestión de servicios públicos ordinariamente se adjudicarán por procedimiento abierto o restringido, mediante concurso. En ambos procedimientos se cumplirán los plazos señalados en el artículo 78.

2. El procedimiento negociado sólo podrá tener lugar, previa justificación razonada en el expediente y acuerdo del órgano de contratación, en los supuestos siguientes:

- Aquellos servicios respecto a los que no sea posible promover concurrencia en la oferta.
- Cuando una imperiosa urgencia, resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo, demande una pronta ejecución que no pueda lograrse por el procedimiento de urgencia regulado en el artículo 71.
- Los declarados secretos o reservados o cuando su ejecución daba ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado. En estos casos será necesario que el servicio no pueda realizarse directamente por la Administración y, en el último supuesto, en la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales, se requerirá declaración expresa de que concurre tal requisito, correspondiendo realizarla al titular del Departamento ministerial respectivo, sin que a estos efectos dicha competencia pueda ser delegada.

d) Los de gestión de servicios cuyo presupuesto de gastos de primer establecimiento se prevea inferior a 5.000.000 de pesetas (30.050,61 euros) y su plazo de duración sea inferior a cinco años.

e) Los anunciados a concurso que no llegaren a adjudicarse por falta de licitadores o porque las proposiciones presentadas no se hayan declarado admisibles,

siempre que no se modifiquen en forma sustancial las condiciones originales del contrato y la adjudicación se efectúe por precio no superior al que haya sido objeto de la licitación primera, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, párrafo b), de este artículo.

f) Los relativos a la prestación de asistencia sanitaria concertados con medios ajenos, derivados de un Convenio de colaboración entre las Administraciones Públicas o de un contrato marco, siempre que éste haya sido adjudicado con sujeción a las normas de esta Ley.

CAPÍTULO IV

De la ejecución y modificación del contrato de gestión de servicios públicos

SECCIÓN 1.ª DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Artículo 160. *Ejecución del contrato.*

El contratista está obligado a organizar y prestar el servicio con estricta sujeción a las características establecidas en el contrato y dentro de los plazos señalados en el mismo, y, en su caso, a la ejecución de las obras conforme al proyecto aprobado por el órgano de contratación.

Artículo 161. *Obligaciones generales.*

El contratista estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones, con carácter general:

- Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el abono, en su caso, de la contraprestación económica comprendida en las tarifas aprobadas.
- Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía a los que se refiere el artículo 155.
- Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración.
- Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, respecto de las empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre contratación pública de la Organización Mundial del Comercio, en los contratos de suministro consecuencia del de gestión de servicios públicos.

Artículo 162. *Prestaciones económicas.*

El contratista tiene derecho a las contraprestaciones económicas previstas en el contrato y a la revisión de las mismas, en su caso, en los términos que el propio contrato establezca.

SECCIÓN 2.ª DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Artículo 163. *Modificación y sus efectos.*

1. La Administración podrá modificar, por razones de interés público, las características del servicio contratado y las tarifas que han de ser abonadas por los usuarios.

2. Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la Administración deberá compensar al contratista de manera que se mantenga el

12/2010



BOE núm. 148

Miércoles 21 junio 2000

21809

equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados como básicos en la adjudicación del contrato.

3. En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al desarrollo del servicio carezcan de trascendencia económica, el contratista no tendrá derecho a indemnización por razón de los mismos.

CAPÍTULO V

De los efectos y extinción del contrato de gestión de servicios públicos

SECCIÓN 1.ª DEL CUMPLIMIENTO Y EFECTOS DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Artículo 164. Reversión.

1. Cuando finalice el plazo contractual, el servicio revertirá a la Administración, debiendo el contratista entregar las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el estado de conservación y funcionamiento adecuados.

2. Durante un período prudencial anterior a la reversión, que deberá fijarse en el pliego, el órgano competente de la Administración adoptará las disposiciones encaminadas a que la entrega de los bienes se verifique en las condiciones convenidas.

Artículo 165. Falta de entrega de contraprestaciones económicas y medios auxiliares.

Si la Administración no hiciera efectiva al contratista la contraprestación económica o no entregare los medios auxiliares a que se obligó en el contrato dentro de los plazos previstos en el mismo y no procediese la resolución del contrato o no la solicitase el contratista, éste tendrá derecho al interés legal de las cantidades o valores económicos que aquéllos signifiquen, de conformidad con lo establecido en el artículo 99.

Artículo 166. Incumplimiento del contratista.

Si del incumplimiento por parte del contratista se derivase perturbación grave y no reparable por otros medios en el servicio público y la Administración no decidiese la resolución del contrato, podrá acordar la intervención del mismo hasta que aquélla desaparezca. En todo caso, el contratista deberá abonar a la Administración los daños y perjuicios que efectivamente le haya irrogado.

SECCIÓN 2.ª DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Artículo 167. Causas de resolución.

Son causas de resolución del contrato de gestión de servicios públicos, además de las señaladas en el artículo 111, con la excepción de sus párrafos e) y f), las siguientes:

- La demora superior a seis meses por parte de la Administración en la entrega al contratista de la contraprestación o de los medios auxiliares a que se obligó según el contrato.
- El rescate del servicio por la Administración.
- La supresión del servicio por razones de interés público.
- La imposibilidad de la explotación del servicio como consecuencia de acuerdos adoptados por la Administración con posterioridad al contrato.

Artículo 168. Aplicación de las causas de resolución.

1. Cuando la causa de resolución sea la muerte o incapacidad sobrevinida del contratista, la Administra-

ción podrá acordar la continuación del contrato con sus herederos o sucesores, salvo disposición expresa en contrario de la legislación específica del servicio.

2. Por razones de interés público, la Administración podrá acordar el rescate del servicio para gestionarlo directamente.

Artículo 169. Efectos de la resolución.

1. En los supuestos de resolución, la Administración abonará, en todo caso, al contratista el precio de las obras e instalaciones que, ejecutadas por éste, hayan de pasar a propiedad de aquélla, teniendo en cuenta su estado y el tiempo que restare para la reversión.

2. Con independencia de lo dispuesto en el artículo 113, el incumplimiento por parte de la Administración o del contratista de las obligaciones del contrato producirá los efectos que según las disposiciones específicas del servicio puedan afectar a estos contratos.

3. En el supuesto del artículo 167, párrafo a), el contratista tendrá derecho al abono del interés legal de las cantidades debidas o valores económicos convenidos, a partir del vencimiento del plazo previsto para su entrega, así como de los daños y perjuicios sufridos.

4. En los supuestos de los párrafos b), c) y d) del artículo 167, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, la Administración indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que se le irroguen, incluidos los beneficios futuros que deje de percibir, atendiendo a los resultados de la explotación en el último quinquenio y a la pérdida del valor de las obras e instalaciones que no hayan de revertir a aquélla, habida cuenta de su grado de amortización.

CAPÍTULO VI

De la subcontratación del contrato de gestión de servicios públicos

Artículo 170. De la subcontratación.

En el contrato de gestión de servicios públicos, la subcontratación sólo podrá recaer sobre prestaciones accesorias.

TÍTULO III

Del contrato de suministro

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

SECCIÓN 1.ª NORMAS GENERALES PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO

Artículo 171. Concepto.

A los efectos de esta Ley, se entenderá por contrato de suministro el que tenga por objeto la compra, el arrendamiento financiero, el arrendamiento, con o sin opción de compra, o la adquisición de productos o bienes muebles, salvo los relativos a propiedades incorpóreas y valores negociables, que se regirán por la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas aplicable a cada caso.

Artículo 172. Contratos considerados como de suministro.

1. En todo caso, se considerarán incluidos en el artículo anterior los contratos siguientes:

- Aquéllos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y

por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud el tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades de la Administración.

b) La adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas y la cesión del derecho de uso de estos últimos, así como de equipos y sistemas de telecomunicaciones.

c) Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la Administración, aun cuando ésta se obligue a aportar, total o parcialmente, los materiales precisos.

2. No obstante lo expresado en el apartado anterior, la adquisición de programas de ordenador a medida se considerará contrato de servicios.

3. Por otra parte, también tendrá la consideración de suministro el mantenimiento de equipos y sistemas para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas cuando se contrate conjuntamente con la adquisición o el arrendamiento.

Artículo 173. Tratamiento de la información y telecomunicaciones.

A los efectos de aplicación de esta Ley, se entenderá:

a) Por equipos para el tratamiento de la información, las máquinas o conjuntos de máquinas y dispositivos, interconectados o no, capaces de realizar las operaciones necesarias para preparar la utilización de la información a fines determinados.

b) Por programa de ordenador, toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado cualquiera que fuese su forma de expresión y fijación.

c) Por programación, el conjunto de tareas de concepción, análisis, escritura y prueba de programas, así como las labores de preparación precisas para la puesta en marcha de un servicio y la realización de cuantos trabajos se detallan en el correspondiente pliego de cláusulas particulares.

d) Por sistemas para el tratamiento de la información, los sistemas compuestos de equipos y programas capaces de realizar las funciones de entrada, proceso, almacenamiento, salida y control de la información, con el fin de llevar a cabo una secuencia de operaciones con datos.

e) Por equipos y sistemas de telecomunicaciones se entienden el conjunto de dispositivos que permiten la transferencia, transporte e intercambio de información conforme a determinadas reglas técnicas y a través de medios electrónicos, informáticos y telemáticos.

Artículo 174. Arrendamiento y prórroga.

1. En el contrato de arrendamiento, el arrendador o empresario asumirá durante el plazo de vigencia del contrato la obligación del mantenimiento del objeto del mismo. Las cantidades que, en su caso, deba satisfacer la Administración en concepto de canon de mantenimiento se fijarán separadamente de las constitutivas del precio del arriendo.

2. En el contrato de arrendamiento no se admitirá la prórroga tácita y la prórroga expresa no podrá extenderse a un período superior a la mitad del contrato inmediatamente anterior.

Artículo 175. Contratos de fabricación y aplicación de normas y usos vigentes en comercio internacional.

1. A los contratos de fabricación, a los que se refiere el artículo 172.1, párrafo c), se les aplicarán directamente las normas generales y especiales del contrato de obras que el órgano de contratación determine en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares, salvo las relativas a su publicidad que se acomodarán, en todo caso, al contrato de suministro.

2. Los contratos que se celebren con empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la Comunidad Europea cuando su objeto se fabrique o proceda de fuera del territorio nacional y los de suministro que sean consecuencia de la aplicación de las disposiciones del artículo 296 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, que celebre el Ministerio de Defensa con empresas extranjeras, se regirán por la presente Ley, sin perjuicio de lo que se convenga entre las partes, de acuerdo con las normas y usos vigentes en el comercio internacional.

Artículo 176. Contratos menores.

Los contratos comprendidos en este Título tendrán la consideración de contratos menores cuando su cuantía no exceda de 2.000.000 de pesetas (12.020,24 euros) con excepción de aquéllos a los que se refiere el artículo 183.1.

SECCIÓN 2.ª DE LA PUBLICIDAD DENTRO DEL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD EUROPEA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

Artículo 177. Supuestos de publicidad.

1. Los órganos de contratación darán a conocer, mediante un anuncio indicativo, los contratos totales por grupos de productos cuyo importe, con exclusión del impuesto sobre el Valor Añadido, sea igual o superior a 124.789.500 pesetas (750.000 euros) y que tengan previsto celebrar durante los doce meses siguientes.

Este anuncio se enviará lo antes posible a partir de su programación a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas y, para que surta el efecto de reducción de plazos previsto en los artículos 178 y 179, deberá haberse enviado a la citada Oficina con una antelación mínima de cincuenta y dos días y máxima de doce meses, a partir de la fecha del envío del anuncio del contrato al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

2. Además, en los casos de procedimiento abierto, restringido o negociado del artículo 181, deberá publicarse un anuncio en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas», cuando la cuantía del contrato de suministro, con exclusión del impuesto sobre el Valor Añadido, sea igual o superior a 35.660.846 pesetas (214.326 euros, equivalentes a 200.000 derechos especiales de giro) o a 23.179.566 pesetas (139.312 euros, equivalentes a 130.000 derechos especiales de giro), cuando en este último supuesto sea adjudicado por los órganos de contratación de la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales. No obstante, no tendrán que publicarse en el citado Diario los contratos que sean consecuencia de la aplicación de las disposiciones del artículo 296 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

12/2010



BOE num. 148

Miércoles 21 junio 2000

21811

Artículo 178. Plazos de presentación de proposiciones en el procedimiento abierto.

En el procedimiento abierto, el plazo de presentación de proposiciones no podrá ser inferior a cincuenta y dos días, a partir de la fecha del envío del anuncio del contrato a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.

Si, en los plazos previstos, se hubiese enviado el anuncio indicativo a que se refiere el artículo 177.1, el plazo de presentación de proposiciones se reducirá a treinta y seis días, como norma general, sin que, en ningún caso, esta reducción pueda ser inferior a veintidós días.

Artículo 179. Plazos en el procedimiento restringido.

1. En el procedimiento restringido, el plazo de recepción de las solicitudes de participación no podrá ser inferior a treinta y siete días, a partir de la fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

2. El plazo de recepción de ofertas no podrá ser inferior a cuarenta días, a partir de la fecha de envío de la invitación escrita, el cual podrá ser reducido a veintiséis días si la Administración hubiese publicado el anuncio indicativo a que se refiere el párrafo primero del artículo 177.1.

3. Los plazos señalados en los dos apartados precedentes podrán ser reducidos en los casos de urgencia a quince y diez días, respectivamente.

CAPÍTULO II

De los procedimientos y formas de adjudicación del contrato de suministro

SECCIÓN 1.ª DE LAS FORMAS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

Artículo 180. Subasta y concurso.

1. La subasta como forma de adjudicación del contrato de suministro sólo podrá utilizarse en aquellas adquisiciones de escasa cuantía en las que los productos a adquirir estén perfectamente definidos por estar normalizados y no ser posible variar los plazos de entrega, ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato, quedando por consiguiente el precio como único factor determinante de la adjudicación.

2. En los demás casos, el contrato de suministro se adjudicará por concurso, salvo que, a tenor de lo dispuesto en los artículos siguientes, pueda utilizarse el procedimiento negociado.

SECCIÓN 2.ª DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO

Artículo 181. Procedimiento negociado y publicidad comunitaria.

1. El órgano de contratación podrá acordar la aplicación del procedimiento negociado en el supuesto de que las proposiciones u ofertas económicas en los procedimientos abiertos o restringidos sean irregulares o inaceptables, siempre que no se modifiquen sustancialmente las condiciones iniciales del contrato. En este caso, el órgano de contratación no publicará el anuncio de licitación a que se refiere el siguiente apartado si se incluyen en el procedimiento negociado a todos los licitadores que, con ocasión del anterior procedimiento abierto o restringido, hubiesen sido admitidos a licitación.

2. Cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a los límites señalados en el artículo 177.2, el órgano de contratación deberá publicar un anuncio en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» y el plazo de recepción de las solicitudes de participación no podrá ser inferior a treinta y siete días, a partir de la fecha del envío del anuncio, que se reducirán a quince en caso de urgencia.

Artículo 182. Procedimiento negociado sin publicidad.

Podrá utilizarse el procedimiento negociado sin publicidad previa cuando concurre alguna de las circunstancias siguientes, que habrán de justificarse en el expediente:

a) Cuando el contrato no llegare a adjudicarse en un procedimiento abierto o restringido por falta de licitadores o porque los presentados no hayan sido admitidos a licitación, siempre que no se modifiquen las condiciones originales del contrato, salvo el precio, que no podrá ser aumentado en más de un 10 por 100. En este supuesto se remitirá un informe a la Comisión de las Comunidades Europeas, a petición de ésta, cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a los límites señalados en el artículo 177.2.

b) Cuando los productos de que se trate se fabriquen exclusivamente para fines de experimentación, estudio o desarrollo, no aplicándose esta condición a la producción en serie destinada a establecer la viabilidad comercial del producto o recuperar los costos de investigación y desarrollo.

c) Cuando, a causa de su especificidad técnica o artística, o por razones relacionadas con la protección de derechos exclusivos, tan sólo pueda encomendarse la fabricación o suministro del producto en cuestión a un único proveedor.

d) Cuando una imperiosa urgencia, resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo, demande una pronta ejecución que no pueda lograrse por el procedimiento de urgencia regulado en el artículo 71 o por aplicación de los plazos de publicidad en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» previstos para los casos de urgencia.

e) Las entregas complementarias efectuadas por el proveedor inicial que constituyan, bien una reposición de suministros o instalaciones de uso corriente o bien una extensión de los suministros o instalaciones existentes, cuando un cambio de proveedor obligaría a la Administración o adquirir material que posea características técnicas diferentes, dando lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso y mantenimiento desproporcionadas.

La duración de tales contratos, así como la de los contratos renovables, no podrá, como regla general, ser superior a tres años.

f) Los que sean consecuencia de la aplicación de las disposiciones del artículo 296 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, que deba celebrar el Ministerio de Defensa con empresas extranjeras, cuando no existan empresas nacionales capacitadas para ejecutarlo.

g) Los que se refieren a bienes cuya uniformidad haya sido declarada necesaria para su utilización común por la Administración, siempre que la adopción del tipo de que se trate se haya efectuado, previa e independientemente, en virtud de concurso, de acuerdo con lo previsto en el presente Título.

En este supuesto se tendrá en cuenta para la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales que

la uniformidad a que el mismo se refiere habrá de ser declarada por la Dirección General del Patrimonio del Estado, excepto cuando se trate de bienes de utilización específica por los servicios de un determinado Departamento ministerial, en cuyo caso corresponderá efectuarlo al mismo, previo informe de la indicada Dirección General.

h) Los declarados secretos o reservados o cuando su ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales, conforme a la legislación vigente o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado. En este último supuesto, en la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales se requerirá declaración expresa de que concurre tal requisito, correspondiendo realizarla al titular del Departamento ministerial respectivo, sin que a estos efectos dicha competencia pueda ser delegada.

i) Los de bienes de cuantía inferior a 5.000.000 de pesetas (30.050,61 euros), límite que se eleva a 8.000.000 de pesetas (48.080,97 euros), para los supuestos comprendidos en el artículo 172.1, párrafo c).

j) La adquisición de bienes muebles que integran el Patrimonio Histórico Español, previa su valoración por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español u organismo reconocido al efecto de las Comunidades Autónomas, que se destinen a museos, archivos o bibliotecas.

k) Los de adquisición de productos consumibles, perecederos o de fácil deterioro, de cuantía inferior a 10.000.000 de pesetas (60.101,21 euros).

l) En las adjudicaciones de los contratos que sean consecuencia de un acuerdo o contrato marco, siempre que este último haya sido adjudicado con sujeción a las normas de esta Ley.

CAPÍTULO III

De las normas especiales de contratación del suministro

Artículo 183. Contratación centralizada de bienes.

1. En el ámbito de la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales, el Ministro de Hacienda podrá declarar de adquisición centralizada el mobiliario, material y equipo de oficina y otros bienes. En relación con los citados bienes, la Dirección General del Patrimonio del Estado celebrará los concursos para la adopción de tipo y, en su caso, los acuerdos o contratos marco. Reglamentariamente se fijará el procedimiento para la adquisición de los referidos bienes.

2. La adquisición de equipos y sistemas para el tratamiento de la información y sus elementos complementarios o auxiliares corresponderá a la Dirección General del Patrimonio del Estado, oídos los Departamentos ministeriales en cuanto sus necesidades, con las excepciones previstas en esta Ley y las que se fijen reglamentariamente.

Artículo 184. Procedimiento en los contratos para el tratamiento de la información.

En la contratación de equipos o sistemas para el tratamiento de la información, cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares del concurso, éste podrá resolverse en dos fases:

En la primera se procederá a la selección previa de las ofertas que, a juicio de la Mesa de contratación, resulten más ventajosas para la Administración.

La segunda tendrá por objeto seleccionar de entre aquéllas la oferta que deba ser propuesta como adjudicataria, una vez que se haya comprobado la adecuación de la oferta a los trabajos previstos como básicos en el pliego de cláusulas.

Los que presenten ofertas seleccionadas para la segunda fase, que desarrollen los trabajos preparatorios y pruebas que se prescriban y que no resulten adjudicatarios del concurso, recibirán la compensación económica prevista en el pliego particular.

CAPÍTULO IV

De la ejecución y modificación del contrato de suministro

SECCIÓN 1.ª DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

Artículo 185. Entrega y recepción.

1. El contratista estará obligado a entregar los bienes objeto de suministro en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas. La mora del contratista no precisará de previa intimación por parte de la Administración.

2. Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en mora al recibirlos.

3. Cuando el acto formal de la recepción de los bienes, de acuerdo con las condiciones del pliego, sea posterior a su entrega, la Administración será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra.

Artículo 186. Pago del precio.

El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio de los suministros efectivamente entregados y formalmente recibidos por la Administración con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato.

Artículo 187. Pago en metálico y en otros bienes.

1. Cuando razones técnicas o económicas debidamente justificadas en el expediente lo aconsejen, podrá establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares que el pago del precio total de los bienes a suministrar consista parte en dinero y parte en la entrega de otros bienes de la misma clase, sin que, en ningún caso, el importe de éstos pueda superar el 50 por 100 del precio total. A estos efectos, el compromiso de gasto correspondiente se limitará al importe que del precio total del contrato no se satisfaga mediante la entrega de bienes al contratista, sin que tenga aplicación lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley General Presupuestaria, en el artículo 146.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, o en las normas presupuestarias de las distintas Administraciones públicas sujetas a esta Ley.

2. La entrega de los bienes por la Administración se acordará por el órgano de contratación, por el mismo procedimiento que se siga para la adjudicación del contrato de suministro, implicando dicho acuerdo por sí solo la baja en el inventario y, en su caso, la defaectación de los bienes de que se trate.

3. En este supuesto el importe que del precio total del suministro corresponda a los bienes entregados por

12/2010



BOE núm. 148

Miércoles 21 junio 2000

21813

La Administración será un elemento económico a valorar para la adjudicación del contrato y deberá consignarse expresamente por los empresarios en sus ofertas.

Artículo 188. *Facultades de la Administración en el proceso de fabricación.*

La Administración tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso de fabricación o elaboración del producto que haya de ser entregado como consecuencia del contrato, pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos y pruebas de los materiales que se vayan a emplear, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido.

SECCIÓN 2.ª DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

Artículo 189. *Modificación del contrato de suministro.*

Cuando como consecuencia de las modificaciones del contrato de suministro se produzcan aumento, reducción o supresión de las unidades de bienes que integran el suministro o la sustitución de unos bienes por otros, siempre que los mismos estén comprendidos en el contrato, estas modificaciones serán obligatorias para el contratista, sin que tenga derecho alguno en caso de supresión o reducción de unidades o clases de bienes a reclamar indemnización por dichas causas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 192, párrafo c).

CAPÍTULO V

De la extinción del contrato de suministro

SECCIÓN 1.ª DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

Artículo 190. *Gastos de entrega y recepción.*

1. Salvo pacto en contrario, los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido serán de cuenta del contratista.

2. Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado.

Artículo 191. *Vicios o defectos durante el plazo de garantía.*

1. Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados tendrá derecho la Administración a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuese suficiente.

2. Durante este plazo de garantía tendrá derecho el contratista a conocer y ser oído sobre la aplicación de los bienes suministrados.

3. Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e imputables al contratista y exista la presunción de que la reposición o reparación de dichos bienes no serán bastantes para lograr aquel fin, podrá, antes de expirar dicho plazo, rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista y quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

4. Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados 1 y 3 de este artículo, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes suministrados.

SECCIÓN 2.ª DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

Artículo 192. *Causas de resolución.*

Son causas de resolución del contrato de suministro, además de las señaladas en el artículo 111, las siguientes.

a) La suspensión, por causa imputable a la Administración, de la iniciación del suministro por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el contrato para la entrega, salvo que en el pliego se señale otro menor.

b) El desistimiento o la suspensión del suministro por un plazo superior al año acordada por la Administración, salvo que en el pliego se señale otro menor.

c) Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por 100 del precio primitivo del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, o representen una alteración sustancial de la prestación inicial.

Artículo 193. *Efectos de la resolución.*

1. La resolución del contrato dará lugar a la recíproca devolución de los bienes y del importe de los pagos realizados, y, cuando no fuera posible o conveniente para la Administración, habrá de abonar ésta el precio de los efectivamente entregados y recibidos de conformidad.

2. En el supuesto de suspensión de la iniciación del suministro por tiempo superior a seis meses, sólo tendrá derecho el contratista a percibir una indemnización del 3 por 100 del precio de la adjudicación.

3. En el caso de desistimiento o de suspensión del suministro por plazo superior a un año por parte de la Administración, el contratista tendrá derecho al 6 por 100 del precio de las entregas dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial.

CAPÍTULO VI

De la fabricación de bienes muebles por parte de la Administración

Artículo 194. *Supuestos.*

1. La fabricación de bienes muebles por la Administración podrá verificarse por los propios servicios de la misma mediante sus medios personales o reales o con la colaboración de empresarios particulares, siempre que en este último caso su importe sea inferior a los límites fijados en el artículo 177.2, cuando concorra alguna de estas circunstancias:

a) Que la Administración tenga montadas fábricas, arsenales, maestranzas o servicios técnicos o industriales, suficientemente aptos para la realización del suministro, en cuyo caso deberá normalmente utilizarse este sistema de ejecución.

b) Que la Administración disponga de elementos personales y materiales utilizables para la realización del suministro y cuyo empleo suponga una economía superior al 20 por 100 del presupuesto del mismo o una mayor celeridad en su ejecución, justificándose en este caso las ventajas que se sigan de la misma.

c) Que no haya habido ofertas de empresarios para el suministro en licitación previamente convocada.

d) Cuando se trate de suministros que se consideren de emergencia con arreglo a la presente Ley.

e) Cuando se trate de suministros en los que por su naturaleza sea imposible la fijación previa de un precio cierto.

f) En el supuesto del artículo 111, párrafo d).

2. Cuando la fabricación del bien mueble se efectúe mediante contratos de colaboración con empresarios particulares, estos contratos tendrán carácter administrativo, pero no constituirán contrato de suministro, ya que la fabricación de los bienes estará a cargo del órgano gestor de la Administración. La selección del empresario colaborador se efectuará por los procedimientos establecidos en los artículos 73 y 74 de esta Ley.

3. Se exceptúan de las limitaciones precedentemente indicadas aquellos suministros que, por razones de defensa o de interés militar, resulte conveniente que se ejecuten por la Administración.

Artículo 195. Autorización para la fabricación de bienes muebles.

La autorización de la fabricación de bienes muebles y, en su caso, la aprobación del proyecto, en la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales, corresponderá al órgano competente para la aprobación del gasto.

TÍTULO IV

De los contratos de consultoría y asistencia y de los de servicios

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 196. Concepto.

1. Los contratos de consultoría y asistencia y los de servicios que celebre la Administración se regirán por la presente Ley.

2. Son contratos de consultoría y asistencia aquellos que tengan por objeto:

a) Estudiar y elaborar informes, estudios, planes, anteproyectos, proyectos de carácter técnico, organizativo, económico o social, así como la dirección, supervisión y control de la ejecución y mantenimiento de obras, instalaciones y de la implantación de sistemas organizativos.

b) Llevar a cabo, en colaboración con la Administración y bajo su supervisión, las siguientes prestaciones:

1.ª Investigación y estudios para la realización de cualquier trabajo técnico.

2.ª Asesoramiento para la gestión de bienes públicos y organización de servicios del mismo carácter.

3.ª Estudio y asistencia en la redacción de proyectos, anteproyectos, modificación de unos y otros, dirección, supervisión y control de la ejecución y mantenimiento de obras e instalaciones y de la implantación de sistemas organizativos.

4.ª Cualesquiera otras prestaciones directas o indirectamente relacionadas con las anteriores y en las que también predominan las de carácter intelectual, en particular los contratos que la Administración celebre con

profesionales, en función de su titulación académica, así como los contratos para el desarrollo de actividades de formación del personal de las Administraciones públicas.

3. Son contratos de servicios aquellos en los que la realización de su objeto sea:

a) De carácter técnico, económico, industrial, comercial o cualquier otro de naturaleza análoga, siempre que no se encuentren comprendidos en los contratos de consultoría y asistencia o en alguno de los regulados en otros Títulos de este Libro.

b) Complementario para el funcionamiento de la Administración.

c) De mantenimiento, conservación, limpieza y reparación de bienes, equipos e instalaciones.

d) Los programas de ordenador desarrollados a medida para la Administración, que serán de libre utilización por la misma.

e) La realización de encuestas, tomas de datos y otros servicios análogos.

No podrán celebrarse contratos de servicios con empresas de trabajo temporal, salvo el supuesto expresado en el párrafo e) y sólo cuando se precise la puesta a disposición de la Administración de personal con carácter eventual. En tal supuesto, vencido el plazo a que se refiere el artículo 198.3, no podrá producirse la consolidación como personal de las Administraciones Públicas de las personas que, procedentes de las citadas empresas, realicen los trabajos que constituyan el objeto del contrato, sin que sea de aplicación, a tal efecto, lo establecido en el artículo 7.2 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.

4. No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.

Artículo 197. Requisitos de capacidad y compatibilidad.

1. En estos contratos, además de las condiciones generales exigidas por esta Ley, las empresas adjudicatarias deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y se acredite debidamente y disponer de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.

2. Los contratos de consultoría y asistencia que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución de obras e instalaciones, salvo que los pliegos dispongan expresa y justificadamente lo contrario, no podrán adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los correspondientes contratos de obras ni a las empresas a éstas vinculadas en el sentido en que son definidas en el artículo 134.

Artículo 198. Duración.

1. Los contratos de consultoría y asistencia y los de servicios no podrán tener un plazo de vigencia superior a dos años con las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias de las Administraciones públicas, si bien podrá preverse en el mismo contrato su modificación y su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél, sin que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de cuatro años, ni éstas puedan ser concertadas aislada o conjuntamente por un plazo superior al fijado originariamente.

2. No obstante lo dispuesto anteriormente, los contratos regulados en este Título que sean complemen-

12/2010



BOE núm. 148

Miércoles 21 junio 2000

21815

tarios de contratos de obras o de suministro podrán tener un plazo superior de vigencia que, en ningún caso, excederá del plazo de duración del contrato principal, salvo en los contratos que comprenden trabajos relacionados con la liquidación del contrato principal, cuyo plazo final excederá al del mismo en el tiempo necesario para realizarlos. La iniciación del contrato complementario a que se refiere este apartado quedará en suspenso, salvo causa justificada derivada de su objeto y contenido, hasta que comience la ejecución del correspondiente contrato de obras.

Solamente tendrán el concepto de contratos complementarios aquellos cuyo objeto se considere necesario para la correcta realización de la prestación o prestaciones objeto del contrato principal.

3. Los contratos a los que se refiere el párrafo último del apartado 3 del artículo 196 en ningún caso podrán superar el plazo de seis meses, extinguiéndose a su vencimiento sin posibilidad de prórroga.

4. Los contratos para la defensa jurídica y judicial de la Administración tendrán la duración precisa para atender adecuadamente sus necesidades.

Artículo 199. Contratación centralizada.

Los contratos de servicios podrán ser declarados de contratación centralizada en la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183.1. Asimismo, podrá el servicio llevarse a cabo por la propia Administración con la colaboración de empresas, aplicándose en este caso y en lo procedente el artículo 194.

Artículo 200. Régimen de contratación para actividades docentes.

1. En los contratos regulados en este Título que tengan por objeto la prestación de actividades docentes en centros del sector público desarrolladas en forma de cursos de formación o perfeccionamiento del personal al servicio de la Administración o cuando se trate de seminarios, coloquios, mesas redondas, conferencias, colaboraciones o cualquier otro tipo similar de actividad, siempre que dichas actividades sean realizadas por personas físicas, las disposiciones de esta Ley no serán de aplicación a la preparación y adjudicación del contrato.

2. En esta clase de contratos podrá establecerse el pago parcial anticipado, previa constitución de garantía por parte del contratista, sin que pueda autorizarse su cesión.

3. Para acreditar la existencia de los contratos a que se refiere este artículo, bastará la designación o nombramiento por autoridad competente.

Artículo 201. Contratos menores.

Los contratos comprendidos en este Título tendrán la consideración de contratos menores cuando su cuantía no exceda de 2.000.000 de pesetas (12.020,24 euros), salvo en los contratos a que se refiere el artículo 196.3, concertados con empresas de trabajo temporal en los que no existirá esta categoría de contratos.

CAPÍTULO II

De las actuaciones administrativas preparatorias de estos contratos

Artículo 202. Justificación del contrato y determinación del precio.

1. Al expediente de contratación deberá incorporarse un informe del servicio interesado en la celebración

del contrato, en el que se justifique debidamente la insuficiencia, la falta de adecuación o la conveniencia de no ampliación de los medios personales y materiales con que cuenta la Administración para cubrir las necesidades que se trata de satisfacer a través del contrato.

2. En el pliego de cláusulas administrativas particulares se establecerá el sistema de determinación del precio de estos contratos que podrá consistir en precios referidos a componentes de la prestación, unidades de obra, unidades de tiempo o en aplicación de honorarios por tarifas, en un tanto alzado cuando no sea posible o conveniente su descomposición o en una combinación de varias de estas modalidades.

CAPÍTULO III

De la publicidad dentro del ámbito de la Comunidad Europea y del procedimiento y formas de adjudicación de estos contratos

SECCIÓN 1.ª DE LA PUBLICIDAD DE ESTOS CONTRATOS

Artículo 203. Supuestas de publicidad.

1. Los órganos de contratación darán a conocer, mediante un anuncio indicativo, los contratos que tengan proyectado celebrar durante los doce meses siguientes en cada una de las categorías 1 a 16 de las enumeradas en el artículo 206, siempre que su importe, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, sea igual o superior a 124.789.500 pesetas (750.000 euros).

Este anuncio se enviará lo antes posible a partir de su programación a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas y, para que surta el efecto de reducción de plazos previsto en el artículo 207, apartados 1 y 3, deberá haberse enviado a la citada Oficina con una antelación mínima de cincuenta y dos días y máxima de doce meses a partir de la fecha del envío del anuncio del contrato al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

2. Además, cuando el contrato también esté comprendido en las categorías 1 a 16 de las enumeradas en el artículo 206, deberá publicarse un anuncio en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» cuando hayan de adjudicarse por procedimiento abierto, por procedimiento restringido o por procedimiento negociado con publicidad comunitaria, siempre que su cuantía, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, sea igual o superior a las siguientes cifras:

a) 33.277.200 pesetas (200.000 euros) en los contratos de la categoría 8 y en los contratos de la categoría 5 consistentes en servicios de difusión de emisiones de televisión y de radio, en servicios de conexión y en servicios integrados de telecomunicaciones.

b) 23.179.568 pesetas (139.312 euros, equivalentes a 130.000 derechos especiales de giro), en los restantes contratos de las categorías 1 a 16 del artículo 206, cuando hayan de adjudicarse por los órganos de contratación de la Administración General del Estado, incluidos los de sus Organismos autónomos.

c) 35.660.846 pesetas (214.326 euros, equivalentes a 200.000 derechos especiales de giro) en el mismo supuesto del párrafo b), cuando hayan de adjudicarse por los restantes órganos de contratación.

Artículo 204. División por lotes.

Cuando exista división en varios lotes, a efectos de la determinación de la cuantía a que se refiere el artículo

anterior, se aplicarán las reglas establecidas en el artículo 136, sustituyendo la cifra de 166.386.000 pesetas (1.000.000 de euros) que figura en su apartado 2 por la de 13.310.880 pesetas (80.000 euros).

Artículo 205. Excepción de publicidad comunitaria.

No obstante lo dispuesto en el artículo 203, no será obligatoria la publicación del anuncio indicativo ni del anuncio de licitación en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas», cualquiera que sea su cuantía, en los siguientes contratos:

- a) Los relativos al desarrollo, producción de programas y tiempo de difusión en medios audiovisuales y los de telefonía de voz, télex, radiotelefonía móvil, buscapersonas y comunicación por satélite.
- b) Los de investigación y desarrollo remunerados íntegramente por el órgano de contratación, siempre que sus resultados no se reserven exclusivamente para la utilización en el ejercicio de la actividad del propio órgano de contratación.
- c) Los que sean consecuencia de la aplicación de las disposiciones del artículo 296 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

Artículo 206. Categorías de los contratos.

Para la aplicación del artículo 203, los contratos se agrupan en las siguientes categorías:

1. Mantenimiento y reparación.
2. Transporte por vía terrestre, excluido el transporte por ferrocarril e incluidos los furgones blindados y mensajería, excepto el transporte por correo.
3. Transporte aéreo de pasajeros y carga, excepto transporte por correo.
4. Transporte de correo por vía terrestre y aérea, excepto transporte por ferrocarril.
5. Telecomunicación.
6. Servicios financieros:
 - a) Servicios de seguros.
 - b) Servicios bancarios y de inversiones.
7. Informática y servicios conexos.
8. Investigación y desarrollo.
9. Contabilidad, auditoría y teneduría de libros.
10. Investigación de estudios y encuestas de opinión pública.
11. Consultoría de dirección y conexos, excepto arbitraje y conciliación.
12. Arquitectura, ingeniería, planificación urbana y arquitectura paisajística. Consultoría en ciencia y tecnología. Ensayos y análisis técnicos.
13. Publicidad.
14. Limpieza de edificios y administración de bienes inmuebles.
15. Edición e imprenta.
16. Alcantarillado y eliminación de desperdicios. Saneamiento y similares.
17. Hostelería y restaurante.
18. Transporte por ferrocarril.
19. Transporte fluvial y marítimo.
20. Transporte complementario y auxiliar.
21. Servicios jurídicos.
22. Colocación y selección de personal.
23. Investigación y seguridad, excepto furgones blindados.
24. Educación y formación profesional.
25. Sociales y de salud.
26. Esparcimiento, culturales y deportivos.
27. Otros.

Artículo 207. Plazos en el procedimiento abierto, restringido y negociado.

1. En el procedimiento abierto el plazo de presentación de proposiciones no podrá ser inferior a cincuenta y dos días a contar desde la fecha del envío del anuncio del contrato a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.

Si, en los plazos previstos, se hubiese enviado el anuncio indicativo a que se refiere el artículo 203.1, el plazo de presentación de proposiciones se reducirá a treinta y seis días, como norma general, sin que, en ningún caso, esta reducción pueda ser inferior a veintidós días.

2. En el procedimiento restringido y en el negociado del artículo 209 el plazo de recepción de solicitudes de participación no podrá ser inferior a treinta y siete días a partir de la fecha del envío del anuncio.

3. El plazo de presentación de las proposiciones, en el procedimiento restringido, no podrá ser inferior a cuarenta días a contar desde la fecha del envío de la invitación escrita, el cual podrá ser reducido a veintidós días si se hubiese publicado el anuncio indicativo a que se refiere el artículo 203.1.

4. En caso de urgencia, los plazos señalados en los dos apartados anteriores para la recepción de solicitudes de participación y para la presentación de las proposiciones podrán ser reducidos a quince y diez días, respectivamente, a partir de la fecha del envío del anuncio o de la invitación.

SECCIÓN 2.ª DE LOS PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

Artículo 208. Procedimientos y formas de adjudicación.

1. Los contratos de consultoría y asistencia y los de servicios se adjudicarán por procedimiento abierto, restringido o negociado, este último únicamente en los supuestos señalados en los artículos 209 y 210.

2. La subasta como forma de adjudicación sólo podrá utilizarse en contratos de escasa cuantía en los que su objeto esté perfectamente definido técnicamente y no sea posible introducir modificaciones de ninguna clase en el mismo, quedando el precio como único factor determinante de la adjudicación.

3. El concurso será la forma normal de adjudicación de estos contratos, salvo lo establecido en los citados artículos 209 y 210.

Artículo 209. Procedimiento negociado y publicidad comunitaria.

1. El órgano de contratación podrá acordar la aplicación del procedimiento negociado respecto de los contratos en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias, que deberán justificarse en el expediente:

a) Cuando las proposiciones u ofertas económicas en los procedimientos abiertos o restringidos sean irregulares o inaceptables, siempre que no se modifiquen sustancialmente las condiciones originales del contrato. En este caso, el órgano de contratación no publicará el anuncio de licitación al que se refiere el apartado 2 de este artículo si se incluyen en el procedimiento negociado a todos los licitadores que, con ocasión del anterior procedimiento abierto o restringido, hubiesen sido admitidos a la licitación.

b) Cuando la naturaleza del contrato, especialmente en los de carácter intelectual y en los comprendidos en la categoría 6 de las enumeradas en el artículo 206, no permita establecer sus condiciones para adjudicarlo por procedimiento abierto o restringido.

12/2010



BOE núm. 148

Miércoles 21 junio 2000

21817

c) En casos excepcionales, cuando se trate de contratos cuya naturaleza o riesgos no permitan determinar previamente el precio global.

2. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, cuando la cuantía del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, sea igual o superior a las cuantías fijadas en el artículo 203, según categorías y órganos de contratación, estos últimos deberán publicar un anuncio en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» aplicándose el plazo previsto en el artículo 207.2.

Artículo 210. Procedimiento negociado sin publicidad.

Podrá utilizarse el procedimiento negociado sin publicidad previa en los siguientes supuestos que habrán de ser justificados debidamente en el expediente:

a) Cuando el contrato no llegare a adjudicarse en un procedimiento abierto o restringido por falta de licitadores o porque los presentados no hayan sido admitidos a licitación, siempre que no se modifiquen las condiciones originales del contrato, salvo el precio que no podrá ser aumentado en más de 10 por 100. En este supuesto, se remitirá un informe a la Comisión de las Comunidades Europeas, a petición de ésta, cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a los límites señalados en el artículo 203.2.

b) Cuando por razones técnicas o artísticas o relacionadas con la protección de derechos exclusivos tan sólo pueda encomendarse el objeto del contrato a un único empresario.

c) Cuando una imperiosa urgencia, resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo, demande una pronta ejecución que no pueda lograrse por el procedimiento de urgencia regulado en el artículo 71 o por aplicación de los plazos de publicidad en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» previstos para los casos de urgencia.

d) Los estudios, servicios o trabajos complementarios que no figuren en el proyecto, ni en el contrato, pero que resulte necesario ejecutar como consecuencia de circunstancias imprevistas y su ejecución se confíe al contratista principal de acuerdo con los precios que rigen para el contrato inicial o, en su caso, fuesen fijados contradictoriamente.

Para la aplicación de lo establecido en el párrafo anterior deberán concurrir los siguientes requisitos respecto del contrato principal:

1. Que los estudios, servicios o trabajos no puedan separarse técnica o económicamente del contrato principal sin causar graves inconvenientes a la Administración o que, aunque se puedan separar de la ejecución del contrato inicial, sean estrictamente necesarios para las fases ulteriores.

2. Que el importe acumulado de los estudios, servicios o trabajos complementarios no superen el 20 por 100 del importe del contrato primitivo.

Los demás estudios, servicios o trabajos que no reúnan los requisitos exigidos en los párrafos precedentes habrán de ser objeto de contratación independiente.

e) Cuando se trate de la repetición de estudios, servicios o trabajos similares a otros adjudicados por procedimiento abierto o restringido, siempre que los primeros se hayan incluido en el anuncio del citado procedimiento abierto o restringido y computado su importe para fijar la cuantía total del contrato.

Únicamente se podrá recurrir a este procedimiento durante un período de tres años a partir de la formalización del contrato inicial.

f) Los que se refieren a contratos de servicios cuya uniformidad haya sido declarada necesaria para su utilización común por la Administración, siempre que la adopción del tipo de que se trate se haya efectuado, previa e independientemente, en virtud de concurso, de acuerdo con lo previsto en este Título.

En este supuesto se tendrá en cuenta para la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales, que la uniformidad a que el mismo se refiere, habrá de ser declarada por la Dirección General del Patrimonio del Estado, excepto cuando se trate de servicios de utilización específica por los de un determinado departamento ministerial, en cuyo caso corresponderá efectuarlo al mismo, previo informe de la indicada Dirección General.

g) Los declarados secretos o reservados o cuando su ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado. En este último supuesto, en la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales se requerirá declaración expresa de que concurre tal requisito, correspondiendo realizarla al titular del departamento ministerial respectivo, sin que a estos efectos dicha competencia pueda ser delegada.

h) Los de presupuesto inferior a 5.000.000 de pesetas (30.050,61 euros).

i) Los que sean consecuencia de la aplicación de las disposiciones del artículo 296 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, que deba celebrar el Ministerio de Defensa con empresas extranjeras, cuando no existan empresas nacionales capacitadas para ejecutarlo.

Estos contratos se regirán por la presente legislación, sin perjuicio de lo que se convenga entre las partes de acuerdo con las normas y usos vigentes en el comercio internacional.

CAPÍTULO IV

De la ejecución y modificación de estos contratos

SECCIÓN 1.ª DE LA EJECUCIÓN DE ESTOS CONTRATOS

Artículo 211. Ejecución y responsabilidad del contratista.

1. El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista la Administración.

2. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

SECCIÓN 2.ª DE LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

Artículo 212. Modificación de estos contratos.

Cuando como consecuencia de las modificaciones del contrato de servicios de mantenimiento se produzcan aumento, reducción o supresión de equipos a mantener o la sustitución de unos equipos por otros, siempre que

los mismos estén contenidos en el contrato, estas modificaciones serán obligatorias para el contratista, sin que tenga derecho alguno en caso de supresión o reducción de unidades o clases de equipos a reclamar indemnización por dichas causas, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo c) del artículo 214.

CAPÍTULO V

Del cumplimiento y de la resolución de estos contratos

SECCIÓN 1.ª DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA Y DE LOS DE SERVICIOS

Artículo 213. Cumplimiento de los contratos.

1. El órgano de contratación determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

2. Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos.

3. Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 217, 218 y 219.

4. El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.

SECCIÓN 2.ª DE LA RESOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA Y DE LOS DE SERVICIOS

Artículo 214. Causas de resolución.

Son causas de resolución de los contratos de consultoría y asistencia y de los de servicios, además de las señaladas en el artículo 111, las siguientes:

a) La suspensión por causa imputable a la Administración de la iniciación del contrato por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo, salvo que en el pliego se señale otro menor.

b) El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un año acordada por la Administración, salvo que en el pliego se señale otro menor.

c) Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por 100 del precio primitivo del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, o representen una alteración sustancial del mismo.

d) Los contratos complementarios a que se refiere el artículo 198.2 quedarán resueltos, en todo caso, cuando se resuelva el contrato principal.

Artículo 215. Efectos de la resolución.

1. La resolución del contrato dará derecho al contratista, en todo caso, a percibir el precio de los estudios,

informes, proyectos, trabajos o servicios que efectivamente hubiese realizado con arreglo al contrato y que hubiesen sido recibidos por la Administración.

2. En el supuesto de suspensión de la iniciación del contrato por tiempo superior a seis meses, el contratista sólo tendrá derecho a percibir una indemnización del 5 por 100 del precio de aquél.

3. En el caso del párrafo b) del artículo anterior, el contratista tendrá derecho al 10 por 100 del precio de los estudios, informes, proyectos o trabajos pendientes de realizar en concepto de beneficio dejado de obtener.

CAPÍTULO VI

De las especialidades del contrato de elaboración de proyectos

SECCIÓN 1.ª DE LOS CONCURSOS DE PROYECTOS CON INTERVENCIÓN DE JURADO

Artículo 216. Concursos de proyectos con intervención de Jurado.

1. Se consideran concursos de proyectos los procedimientos caracterizados por la intervención de un Jurado compuesto exclusivamente por personas físicas independientes de los participantes y que, con o sin asignación de premios, tengan por objeto, mediante la correspondiente licitación, elaborar planes o proyectos principalmente en los campos de la ordenación territorial, el urbanismo, la arquitectura, la ingeniería y el procesamiento de datos.

El Jurado adoptará sus decisiones o dictámenes con total independencia, sobre la base de proyectos que le sean presentados de manera anónima y atendiendo únicamente a los criterios indicados en el anuncio de la celebración del concurso.

2. Cuando la cuantía del concurso, determinada por el importe total de los premios y pagos a los participantes, sea igual o superior a las cifras que figuran en el artículo 203.2, según las categorías de servicios y órganos de contratación, estos últimos publicarán un anuncio en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas», aplicándose los plazos previstos en el artículo 207.

3. Si el número de participantes es limitado, su selección se llevará a cabo mediante criterios objetivos, claros y no discriminatorios, indicados en el anuncio y en el pliego que defina las características y reglas del concurso.

4. La adjudicación de contratos al ganador de un concurso de proyectos, siempre que supongan una continuidad del concurso y esté previsto en sus condiciones, podrá realizarse por procedimiento negociado sin publicidad. Si existieran varios ganadores, se deberá invitar a todos a participar en la negociación.

5. Cuando la celebración del concurso del proyecto se haya anunciado en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas», deberá, asimismo, publicarse en dicho Diario su resultado, a más tardar, cuarenta y ocho días después de su resolución.

SECCIÓN 2.ª DE LA SUBSANACIÓN DE ERRORES Y RESPONSABILIDADES EN EL CONTRATO DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS

Artículo 217. Subsanación de errores y corrección de deficiencias.

1. Cuando el contrato de consultoría y asistencia consista en la elaboración íntegra de un proyecto de obra, el órgano de contratación exigirá la subsanación por el contratista de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de precep-

12/2010



BOE núm. 148

Miércoles 21 junio 2000

21819

los legales o reglamentarios que le sean imputables, otorgándole al efecto el correspondiente plazo que no podrá exceder de dos meses.

2. Si transcurrido este plazo las deficiencias no hubiesen sido corregidas, la Administración podrá, atendiendo a las circunstancias concurrentes, optar por la resolución del contrato o por conceder un nuevo plazo al contratista.

3. En el primer caso procederá la incautación de la garantía y el contratista incurrirá en la obligación de abonar a la Administración una indemnización equivalente al 25 por 100 del precio del contrato.

4. En el segundo caso, el nuevo plazo concedido para subsanar las deficiencias no corregidas será de un mes improrrogable, incurrindo el contratista en una penalidad equivalente al 25 por 100 del precio del contrato.

5. De producirse un nuevo incumplimiento, procederá la resolución del contrato con obligación por parte del contratista de abonar a la Administración una indemnización igual al precio pactado con pérdida de la garantía.

6. Cuando el contratista, en cualquier momento antes de la concesión del último plazo, renunciare a la realización del proyecto deberá abonar a la Administración una indemnización igual a la mitad del precio del contrato con pérdida de la garantía.

Artículo 218. Indemnizaciones.

1. Para los casos en que el presupuesto de ejecución de la obra prevista en el proyecto se desviare en más de un 20 por 100, tanto por exceso como por defecto, del coste real de la misma como consecuencia de errores u omisiones imputables al contratista consultor, la Administración podrá establecer, en el pliego de cláusulas administrativas particulares, un sistema de indemnizaciones consistente en una minoración del precio del contrato de elaboración del proyecto, en función del porcentaje de desviación, hasta un máximo equivalente a la mitad de aquél.

2. El baremo de indemnizaciones será el siguiente:

a) En el supuesto de que la desviación sea de más del 20 por 100 y menos del 30 por 100, la indemnización correspondiente será del 30 por 100 del precio del contrato.

b) En el supuesto de que la desviación sea de más del 30 por 100 y menos del 40 por 100, la indemnización correspondiente será del 40 por 100 del precio del contrato.

c) En el supuesto de que la desviación sea de más del 40 por 100, la indemnización correspondiente será del 50 por 100 del precio del contrato.

3. El contratista deberá abonar el importe de dicha indemnización en el plazo de un mes a partir de la notificación de la resolución correspondiente, que se adoptará, previa tramitación de expediente con audiencia del interesado.

Artículo 219. Responsabilidad por defectos o errores del proyecto.

1. Con independencia de lo previsto en los artículos anteriores, el contratista responderá de los daños y perjuicios que durante la ejecución o explotación de las obras se causen tanto a la Administración como a terceros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que el mismo haya incurrido, imputables a aquél.

2. La indemnización derivada de la responsabilidad exigible al contratista alcanzará el 50 por 100 del impor-

te de los daños y perjuicios causados, hasta un límite máximo de cinco veces el precio pactado por el proyecto y será exigible dentro del término de diez años, contados desde la recepción del mismo por la Administración, siendo a cargo de esta última, en su caso, el resto de dicha indemnización cuando deba ser satisfecha a terceros.

Disposición adicional primera. Modificaciones de cuantías, plazos y otras derivadas de los anexos de Directivas.

Se autoriza al Consejo de Ministros para que pueda modificar, mediante Real Decreto, previa audiencia de las Comunidades Autónomas y de acuerdo con la coyuntura económica, las cuantías que se indican en los artículos de esta Ley. Igualmente, se autoriza al Consejo de Ministros para acomodar las cuantías y los plazos señalados en los artículos de esta Ley a lo que, sobre su importe y duración, se haya establecido por la Comunidad Europea e introducir en su texto las oportunas modificaciones derivadas de los anexos de las Directivas comunitarias.

Disposición adicional segunda. Actualización de cifras fijadas por la Comunidad Europea.

Las cifras que en lo sucesivo se fijen por la Comisión Europea y se publiquen por Orden del Ministro de Hacienda, en euros o en derechos especiales de giro, sustituirán a las que figuran en el texto de esta Ley.

Disposición adicional tercera. Competencia para la adquisición de equipos y sistemas para el tratamiento de la información.

1. La competencia para la adquisición de equipos y sistemas para el tratamiento de la información a que se refiere el artículo 183.1, con excepción de los supuestos de adquisición centralizada, corresponde al Ministro de Defensa y a los órganos de contratación de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social, en el ámbito de sus respectivas competencias.

2. En los demás supuestos previstos en el artículo 183, también con excepción de los de adquisición centralizada, el Ministro de Hacienda podrá atribuir competencia a otros órganos de la Administración cuando las circunstancias especiales o el volumen de adquisiciones de éstos así lo aconsejen.

Disposición adicional cuarta. Terminación convencional de procedimientos.

Se celebrarán con sujeción a lo dispuesto en esta Ley los contratos que se formalicen al amparo de lo establecido en el artículo 88 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuando tengan por objeto materias reguladas en la presente Ley.

Disposición adicional quinta. Responsabilidades de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones públicas.

1. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas derivada de sus actuaciones en materia de contratación administrativa, tanto por daños causados a particulares como a la propia Administración, se exigirá con arreglo a lo dispuesto en el Título X de la Ley de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.

2. La infracción o aplicación indebida de los preceptos contenidos en la presente Ley por parte del personal al servicio de las Administraciones públicas, cuando mediare al menos negligencia grave, constituirá falta muy grave cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la normativa específica en la materia.

Disposición adicional sexta. Principios de contratación en el sector público.

Las sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de las Administraciones públicas o de sus Organismos autónomos, o Entidades de Derecho público, se ajustarán en su actividad contractual a los principios de publicidad y concurrencia, salvo que la naturaleza de la operación a realizar sea incompatible con estos principios.

Disposición adicional séptima. Normas de procedimiento.

Los procedimientos en materia de contratación administrativa se registrarán por los preceptos contenidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo, siendo de aplicación supletoria los de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición adicional octava. Contratación con empresas que tengan en su plantilla minusválidos y con entidades sin ánimo de lucro.

1. Los órganos de contratación podrán señalar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la preferencia en la adjudicación de los contratos para las proposiciones presentadas por aquellas empresas públicas o privadas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de trabajadores minusválidos no inferior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirvan de base para la adjudicación.

2. En la misma forma y condiciones podrá establecerse tal preferencia en la adjudicación de los contratos relativos a prestaciones de carácter social o asistencial para las proposiciones presentadas por entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre que su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y figuren inscritas en el correspondiente registro oficial. En este supuesto, el órgano de contratación podrá requerir de estas entidades la presentación del detalle relativo a la descomposición del precio ofertado en función de sus costes.

Disposición adicional novena. Normas específicas de Régimen Local.

1. Se fija en el 10 por 100 el límite señalado en el artículo 88.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen Local, para la utilización del procedimiento negociado en los contratos de obras, de suministro, de consultoría y asistencia y de servicios por las Entidades locales, sin que en ningún caso puedan

superarse los establecidos en los artículos 141, párrafo g); 182, párrafos i) y k), y 210, párrafo h), de la presente Ley.

2. En las Entidades locales será potestativa la constitución de Juntas de Contratación, que actuarán como órgano de contratación en los contratos de obras que tengan por objeto trabajos de reparación simple, de conservación y de mantenimiento; en los contratos de suministro que se refieran a bienes consumibles o de fácil deterioro por el uso, y en los contratos de consultoría y asistencia y en los de servicios cuando su importe no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios de la Entidad, o cuando superen esta cifra las acciones están previstas en el presupuesto del ejercicio a que corresponda y se realicen de acuerdo con lo dispuesto en las bases de ejecución de éste.

Corresponden al Pleno el acuerdo de constitución de las Juntas de Contratación y la determinación de su composición, debiendo formar parte de las mismas necesariamente el Secretario y el Interventor de la Corporación. Los límites cuantitativos, que podrán ser inferiores a los señalados en el párrafo anterior, o referentes a las características de los contratos en los que intervendrá la Junta de Contratación, como órgano de contratación, se determinarán por el Pleno a propuesta del Presidente cuando sea ésta, de acuerdo con las disposiciones vigentes, el que tenga atribuida la competencia sobre dichos contratos.

En los casos de actuación de las Juntas de Contratación se prescindirá de la intervención de la Mesa de contratación.

3. La Mesa de contratación estará presidida por el Presidente de la Corporación, o miembro de ésta en quien delegue, y formarán parte de la misma como vocales el Secretario y el Interventor y aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre funcionarios, personal laboral o concejales, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.

4. En los supuestos de modificaciones de los contratos a que hace referencia el artículo 101.3, el importe de 1.000.000.000 de pesetas (6.010.121,04 euros) se sustituirá por el que se corresponda con el 20 por 100 de los recursos ordinarios de la Entidad local, salvo que el importe resultante sea superior a la citada cuantía, en cuyo caso será ésta de aplicación. La referencia de este mismo artículo y apartado a la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda deberá entenderse hecha a la Comisión Especial de Cuentas en las Entidades locales en que existan.

5. Los consorcios a que se refieren los artículos 57 y 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, en los que la participación pública sea mayoritaria adjudicarán sus contratos conforme a lo dispuesto en esta Ley.

Disposición adicional décima. Adhesión a los sistemas de contratación centralizada de adquisición de bienes y servicios.

1. Las Comunidades Autónomas, Entidades locales, sus Organismos autónomos y antes públicos podrán adherirse al sistema de contratación centralizada establecido en los artículos 183.1 y 199, para la totalidad o para categorías de bienes y servicios, mediante acuerdos con la Dirección General del Patrimonio del Estado.

2. A los efectos establecidos en el párrafo segundo del artículo 182, párrafo g), y en el párrafo segundo del artículo 210, párrafo f), la declaración de uniformidad de los bienes y servicios de utilización específica por

24 DE 25

AL5101634

12/2010



BOE núm. 148

Miércoles 21 junio 2000

21821

Algún departamento ministerial habilitará para que otros órganos de contratación, manteniendo sus competencias de contratación, puedan adherirse a los contratos que se formalicen en virtud de los concursos para la determinación de tipo que se celebren.

Las Comunidades Autónomas y las Entidades locales podrán adherirse a tales contratos, manteniendo sus competencias de contratación mediante acuerdos con el Ministerio que haya declarado la uniformidad de tales bienes y adjudique el contrato derivado del correspondiente concurso para la determinación de tipo.

3. También, mediante los correspondientes acuerdos, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales podrán adherirse a sistemas de adquisición centralizada de otras Comunidades Autónomas y Entidades locales.

Disposición adicional undécima. Contratos celebrados en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones.

1. Los órganos de contratación que celebren contratos comprendidos en el ámbito de la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE, tendrán en cuenta, a efectos de publicidad de anuncios de estos contratos, los límites cuantitativos que se establecen en dicha Ley.

2. Las entidades públicas incluidas en el ámbito de la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, se regirán, en lo no previsto en la misma, por sus normas de contratación específicas.

El Ministerio al que estuvieran adscritas las citadas entidades podrá aprobar, cuando el régimen de contratación de las mismas sea el de Derecho privado, normas o condiciones generales de contratación, a fin de asegurar la homogeneización de ésta y el respeto a los principios de publicidad, concurrencia y no discriminación de la contratación del sector público. El repertorio de las normas o condiciones generales deberá ser informado preceptivamente por el Servicio Jurídico del Estado.

Disposición adicional duodécima. Clasificación exigible por las universidades públicas.

A efectos del apartado 3 del artículo 29, para los contratos que celebren las universidades públicas que tengan su sede en territorio de una Comunidad Autónoma surtirán efecto los acuerdos de clasificación y revisión de clasificaciones adoptados por los correspondientes órganos de la Comunidad Autónoma respectiva.

Disposición adicional decimotercera. Sustitución de letrados en las Mesas de contratación.

Para las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social podrán establecerse reglamentariamente los supuestos en que formarán parte de la Mesa de contratación letrados habilitados específicamente para ello en sustitución de quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación.

Disposición adicional decimocuarta. Retención adicional de crédito en los contratos plurianuales de obra.

En los contratos de obra de carácter plurianual, con excepción de los realizados bajo la modalidad de abono total del precio, se efectuará una retención adicional de

crédito del 10 por 100 del importe de adjudicación, en el momento en que ésta se realice. Esta retención se aplicará al ejercicio en que finalice el plazo fijado en el contrato para la terminación de la obra o al siguiente, según el momento en que se prevea realizar el pago de la certificación final.

Disposición transitoria primera. Expedientes iniciados y contratos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 53/1999, de 28 de diciembre.

Los expedientes de contratación iniciados y los contratos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, se regirán por la normativa anterior. A estos efectos, se entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria de adjudicación del contrato.

Disposición transitoria segunda. Fórmulas de revisión.

Hasta tanto que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104, se aprueben fórmulas tipo para la revisión de precios, seguirán aplicándose las aprobadas por el Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre; por el Real Decreto 2167/1981, de 20 de agosto, por el que se complementa el anterior, y por el Decreto 2341/1975, de 22 de agosto, para contratos de fabricación del Ministerio de Defensa, sin que resulte aplicable el sumando fijo (0,15) que figura en las mismas.

Disposición transitoria tercera. Determinación de cuantías por los departamentos ministeriales respecto de los Organismos autónomos adscritos a los mismos.

Hasta el momento en que los titulares de los departamentos ministeriales fijen la cuantía para la autorización establecida en el segundo párrafo del artículo 12.1 será de aplicación la cantidad de 150.000.000 de pesetas (901.518,16 euros).

Disposición transitoria cuarta. Competencias en materia de suministro de bienes de utilización común por la Administración.

El Servicio Central de Suministros y las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social continuarán ejerciendo las competencias que actualmente tienen atribuidas en materia de suministro de los bienes a que se refiere el artículo 183 de la presente Ley hasta tanto se desarrolle reglamentariamente el mismo.

Disposición transitoria quinta. Espacio Económico Europeo.

Las referencias a Estados miembros de la Comunidad Europea contenidas en los artículos 15.2; 20, párrafo i); 21.5; 23.1; 24.2; 25.2; 26.2; 31.2; 117.1, párrafo b); 117.4; 161, párrafo d), y 175.2, se extenderán a los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

Disposición transitoria sexta. Efectos de la falta de pago por la Administración.

Lo dispuesto en los apartados 4, 5 y 6 del artículo 99 se aplicará a los contratos adjudicados a partir de la entrada en vigor de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. Para los adjudicados con anterioridad continuarán apli-

cándose, en este extremo, los preceptos de la legislación de contratos del Estado, vigentes en el momento de la adjudicación.

Disposición transitoria séptima. Juntas de Compras.

Hasta tanto no se regulen las Juntas de Contratación de los diferentes departamentos ministeriales y de los organismos autónomos de conformidad con lo establecido en el artículo 12.4, las Juntas de Compras seguirán manteniendo las competencias que tengan actualmente atribuidas.

Disposición transitoria octava. Precios de los contratos en euros y en pesetas.

1. Desde el 1 de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre del año 2001, los precios de los nuevos contratos celebrados por las Administraciones públicas, cuando utilicen la peseta como unidad de cuenta, deberán hacer constar a continuación el importe equivalente en la unidad de cuenta euro al tipo de conversión, pudiendo en este caso expresar una cifra final en euros con un número de decimales no superior a seis.

2. La equivalencia utilizada para reflejar en euros los valores en distintos artículos es la de 1 euro igual a 166,386 pesetas.

Disposición final primera. Carácter de legislación básica y no básica.

1. La presente Ley constituye legislación básica dictada al amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución y, en consecuencia, es de aplicación general a todas las Administraciones Públicas comprendidas en el artículo 1, salvo los siguientes artículos o parte de los mismos:

el artículo 10.
 el artículo 12, a excepción de su apartado 6.
 el párrafo j) del artículo 20.
 el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 24.
 el artículo 32.
 el artículo 37.
 el artículo 38.
 el plazo de quince días previsto en el apartado 1 del artículo 41.
 el artículo 48.
 los apartados 3 y 4 del artículo 49.
 el artículo 50.
 el apartado 2 del artículo 51.
 el plazo de treinta días previsto en el artículo 54.
 el artículo 57 en cuanto a la posible existencia en las Comunidades Autónomas de órganos de fiscalización equivalentes al Tribunal de Cuentas.
 el apartado 2 del artículo 59.
 el apartado 2 del artículo 67.
 el apartado 2 del artículo 69.
 el párrafo a) del apartado 2 del artículo 71.
 el último inciso del párrafo a) del apartado 1 y el párrafo b) del mismo apartado del artículo 72.
 el segundo inciso del apartado 1 del artículo 79.
 el artículo 81 y cuantas referencias se hagan a la Mesa de contratación en otros artículos.
 en el artículo 83 el plazo máximo de veinte días del apartado 1, el último inciso del párrafo a) del apartado 2 en cuanto se refiere al «preceptivo dictamen del servicio jurídico del órgano de contratación», el último inciso del párrafo primero del apartado 2.b), en cuanto se refiere al «informe de la Junta Consultiva de Contratación Admi-

nistrativa» y el último inciso del apartado 3, en cuanto hace referencia al «asesoramiento técnico del servicio correspondiente».

el apartado 1 del artículo 89.

la cifra de veinte que figura en el último inciso del párrafo b) del apartado 1 del artículo 91.

el artículo 95, excepto el apartado 1.

el artículo 96, excepto los requisitos de audiencia del interesado y dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva.

el artículo 106.

el artículo 107.

el artículo 108.

el último inciso del apartado 2 del artículo 110.

los apartados 3, 6 y 7 del artículo 112.

el párrafo a) del apartado 1 del artículo 117.

el artículo 119.

el párrafo e) del apartado 1 y el apartado 5 del artículo 124.

los apartados 3, excepto su primer inciso en cuanto se refiere a la expresión «el contratista presentará el proyecto al órgano de contratación para su supervisión, aprobación y replanteo», 4 y 5 del artículo 125.

el artículo 126.

el artículo 128.

el porcentaje del 30 por 100 del artículo 131.

el último inciso del párrafo f) del artículo 141.

el plazo de un mes y el último inciso «entremiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato» del artículo 142.

el último inciso del apartado 1 del artículo 143.

el apartado 1 del artículo 145, excepto el plazo de diez días a que hace referencia el mismo.

los apartados 2, 3 y 4 del artículo 146 y los apartados 1 y 3 del artículo 147 en cuanto se refieren al «director facultativo de la obra».

el párrafo segundo del apartado 2 y el apartado 4 del artículo 147.

los párrafos a), b) y c) del artículo 149.

el artículo 151, excepto el primer inciso del apartado 1.

el artículo 152.

el artículo 153.

el último inciso del primer párrafo del apartado 2.c), del artículo 159.

el artículo 163.

el artículo 165.

el artículo 166.

el artículo 167.

el artículo 168.

el artículo 169, excepto el apartado 1.

el artículo 173.

el apartado 1 del artículo 174.

el artículo 182.g), párrafo segundo, y el artículo 182.h), último inciso.

el artículo 183.

el artículo 184.

el artículo 185, excepto el primer inciso del apartado 1.

el artículo 187.

el artículo 188.

el artículo 190.

los apartados 1, 2 y 3 del artículo 191.

los párrafos a) y b) del artículo 192.

el artículo 193, excepto el apartado 1.

el artículo 194.

el artículo 195.

el artículo 199.



12/2010



BOE núm. 148

Miércoles 21 junio 2000

21823

- 7 el apartado 1 del artículo 202 en cuanto se refiere al «servicio interesado en la celebración del contrato».
- el artículo 210.f), párrafo segundo, y el artículo 210.g), último inciso.

- el apartado 2 del artículo 211, los párrafos a), b) y d) del artículo 214, el artículo 215, excepto el apartado 1, el artículo 217, el artículo 218, el artículo 219,

la disposición adicional tercera,
la disposición adicional décima,
la disposición adicional decimo cuarta,
la disposición transitoria tercera,
la disposición transitoria cuarta, y
la disposición transitoria séptima.

2. A los mismos efectos previstos en el apartado anterior tendrán el carácter de máximos:

- a) los plazos de dos meses, cuatro meses y ocho meses previstos en el artículo 99.
- b) los porcentajes del 10 y 30 y la cifra de 1.000.000.000 de pesetas (6.010.121,04 euros) que figuran en el artículo 101.3.
- c) el plazo de un mes mencionado en los apartados 2 y 4 del artículo 110.
- d) los porcentajes del 2 del artículo 35.1 y del 4, 6, 20 y 16 que se recogen en el artículo 36, apartados 1, 3, 4 y 5 y el porcentaje del 20 que se repite en el artículo 83.5.
- e) las cuantías de los artículos 121, 176 y 201.

3. Las exigencias que para los contratos menores se establecen en el artículo 56 tendrán la consideración de mínimas a los mismos efectos.

Disposición final segunda. Referencias a las Administraciones públicas y a los órganos de la Administración General del Estado.

- 1. Cuando en el texto de la Ley se cite a la Administración o a las Administraciones públicas, se entenderá que se hace referencia a todas las Administraciones, organismos y entidades comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 1.
- 2. Asimismo, cuando se haga referencia a órganos de la Administración General del Estado deberá entenderse hecha, en todo caso, a los que correspondan de las restantes Administraciones públicas, organismos y entidades comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 1, salvo las que se hacen a los siguientes órganos:
 - a) al Ministro de Hacienda y a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en el artículo 21.
 - b) al Ministro de Hacienda, en el artículo 25, apartado 1 del artículo 33 y disposición adicional segunda.
 - c) a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en el apartado 2 y en el apartado 4 del artículo 28; en el apartado 1 del artículo 33, y en el artículo 34.
 - d) a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en los artículos 58, 117 y 118.
 - e) al Consejo de Ministros y a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en el artículo 104.1, y a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en el artículo 104.4, y
 - f) al Consejo de Ministros, en la disposición adicional primera.

Disposición final tercera. Carácter básico de las normas de desarrollo.

Las normas que, en desarrollo de esta Ley, promulgue la Administración General del Estado podrán tener carácter de básicas cuando constituyan el complemento necesario de dicho carácter respecto de los artículos que lo tienen atribuido conforme a la disposición final primera y así se señale en la propia norma de desarrollo.

Disposición final cuarta. Información sobre obligaciones de carácter laboral.

Los órganos de contratación podrán señalar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la autoridad o autoridades de las que los licitadores puedan obtener informaciones sobre las obligaciones relativas a las disposiciones sobre protección y condiciones de trabajo vigentes en el territorio en el que vayan a ejecutarse las obras o prestarse los servicios, en cuyo supuesto solicitarán a los licitadores que manifiesten si han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

11534 REAL DECRETO 686/2000, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2000, de 7 de enero, reguladora de los contratos tipo de productos agroalimentarios.

La disposición final primera de la Ley 2/2000, de 7 de enero, reguladora de los contratos tipo de productos agroalimentarios, faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la Ley.

El presente Real Decreto regula los contratos tipo de productos agroalimentarios cuyo ámbito de aplicación se extienda a más de una Comunidad Autónoma.

En los capítulos I y II del presente Real Decreto se desarrollan los procedimientos de homologación y prórroga de los contratos tipo agroalimentarios. El carácter simplificador de dichos procedimientos es uno de los elementos que deben resaltarse y que tiende a facilitar a las organizaciones representativas su participación en las propuestas de homologación de contratos tipo.

El capítulo III regula el procedimiento para la solución de las controversias que se produzcan en la interpretación y ejecución de los contratos de compraventa ajustados al contrato tipo homologado, confiando un destacado papel mediador a las comisiones de seguimiento. Sólo cuando éstas no hayan podido lograr una solución satisfactoria en el plazo establecido, podrán las partes recurrir al arbitraje.

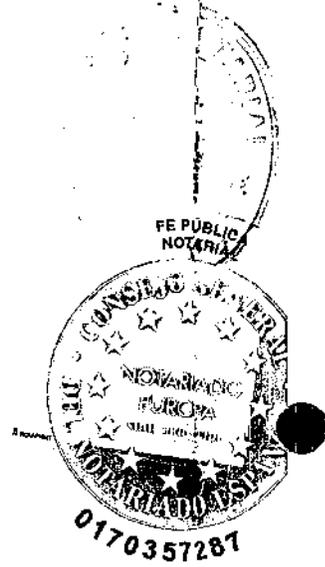
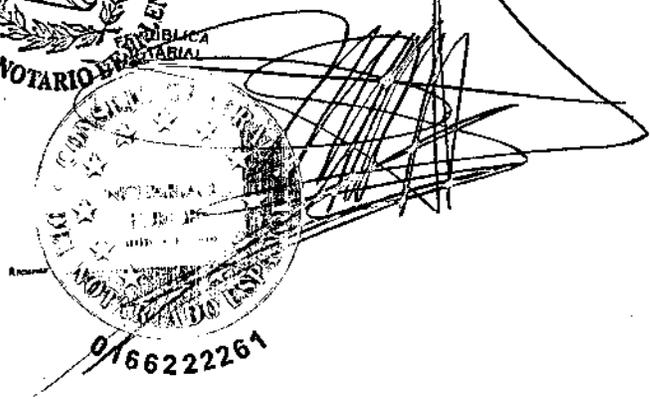
Finalmente, se dedica el capítulo IV a desarrollar el artículo 4 de la Ley relativo a las comisiones de seguimiento, que se configuran como elemento clave de los contratos tipo y suponen un nexo de unión con las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, habilitadas para proponer contratos tipo y designar en su seno a la correspondiente comisión de seguimiento.

En su tramitación han sido consultadas las Comunidades Autónomas y los sectores afectados.

NOTA

Yo, FRANCISCO BADIA ESCRICHE, Notario del Ilustre Colegio de Valencia con residencia en la Capital, conforme a lo dispuesto en el Art. 99 del Reglamento Notarial:

Doy FE: que la notaría por mí contenida, coincide exactamente con la publicación nº 148 del BOE, de fecha 21 de Junio de 2.000, desde página 21775 hasta página 21823, la cual reproduzco para la expedición de este TESTIMONIO, que queda anotado al nº 540 de mi Libro Indicador Sección Segunda, el cual queda extendido en veinticinco folios de papel timbrado EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES, los cuales número, rubro y sello, serie A1 números el del presente y sus veinticuatro siguientes correlativos. En Valencia, a dieciséis de junio de dos mil once.



SECTOR 3
FORMATO 3B
 Experiencia en Supervisión e Interventoría de Contratos de Construcción de Infraestructura Vial

Nombre del interesado **CONSORCIO ECO-INGÉNIEROS**
 Nombre de los miembros que conforman al interesado: **SONDEOR, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA S.A., IY, INGENIEROS CONSULTORES S.A., ESTRUCTURADOR S.O.LIDIA S.A.S., SURCUNIBULI S.A., INSTITUTO TÉCNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES**
 Nombre del(los) MAP(S): **IY, INGENIEROS CONSULTORES S.A.**

Contrato No.	Objeto del Contrato	Fecha de suscripción del contrato (2)	Fecha de inicio del contrato (3)	Fecha de terminación del contrato (4)	Fecha de liquidación del contrato (5)	Valor total cancelado del contrato (6)	Valor cancelado del contrato por año (7)	% de participación del MAP en la Empresa Pura al momento de la suscripción del contrato (8)	% de participación del MAP en la Empresa Pura al momento de la terminación del contrato (9)	Entidad Contratante				País	
										Nombre	Persona Contactada	Email	Dirección		Tel/Fax
1	Consultoría y Asesoría Técnica para la Reducción del Proyecto (Obra de Infraestructura Vial) y contrato de Obra (Interventoría de construcción de infraestructura vial) de la carretera del tipo "Carretera de Alto Nivel" de la Comunidad Vascongada - Región de Murcia, Tercer Versión del Plano, Clavete de las Puentes con obras de rehabilitación.	28-dic-01	1-ago-02	15-Jul-03	27-ago-03	18.904,38	9.302,19	100%	100%	ADIF - Administrador Vial de Infraestructuras Ferroviarias	D. Antonio Vázquez Director de Obra	avazquez@adif.es	C/ Tbn 4-6 Edificio T.1.2 MADRID 28015	3492774500	ESP/44
2															
3															
4															

Firma del Representante Legal del Interesado
 Nombre: **MARCOS GOMEZ GONZALEZ**
 Identificación: **78.132.874 de MADRID 28.012**

- Instrucción 43:**
- (1) El nombre del(los) MAP(S) condecorado a esta(ellas) memoria del Interesado que suscribió la experiencia de este Formulario.
 - (2) Corresponde a la fecha de suscripción del contrato entre el entidad Contratante y el contratista, la cual debe estar comprobada dentro del plazo señalado en el Documento de Contratos.
 - (3) Corresponde a la fecha de suscripción del contrato, que puede corresponder o no a la fecha de suscripción del contrato mismo.
 - (4) Corresponde a la fecha de terminación del contrato.
 - (5) Corresponde a la fecha de liquidación del contrato en caso de que el contrato hubiera sido liquidado conforme a la ley aplicable.
 - (6) El valor del contrato suscrito por año correspondiente al resultado de dividir el valor total cancelado del contrato de la duración en meses, considerando el número de meses transcurridos entre las fechas de inicio y fin de la ejecución del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 3.1.1 (c), caso en el que se valore el 100% de la experiencia. Para los efectos de esta fórmula únicamente se deberá incluir en esta celdilla la porción real de participación en la forma de asociación y no la experiencia por el 100% (Inventaría cuando dicho porcentaje sea igual o superior al 20% ya mencionado).
 - (7) El valor del contrato suscrito por año correspondiente al resultado de dividir el valor total cancelado del contrato de la duración en meses, considerando el número de meses transcurridos entre las fechas de inicio y fin de la ejecución del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 3.1.1 (c), caso en el que se valore el 100% de la experiencia. Para los efectos de esta fórmula únicamente se deberá incluir en esta celdilla la porción real de participación en la forma de asociación y no la experiencia por el 100% (Inventaría cuando dicho porcentaje sea igual o superior al 20% ya mencionado).
 - (8) El valor del contrato suscrito por año correspondiente al resultado de dividir el valor total cancelado del contrato de la duración en meses, considerando el número de meses transcurridos entre las fechas de inicio y fin de la ejecución del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 3.1.1 (c), caso en el que se valore el 100% de la experiencia. Para los efectos de esta fórmula únicamente se deberá incluir en esta celdilla la porción real de participación en la forma de asociación y no la experiencia por el 100% (Inventaría cuando dicho porcentaje sea igual o superior al 20% ya mencionado).
 - (9) El valor del contrato suscrito por año correspondiente al resultado de dividir el valor total cancelado del contrato de la duración en meses, considerando el número de meses transcurridos entre las fechas de inicio y fin de la ejecución del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 3.1.1 (c), caso en el que se valore el 100% de la experiencia. Para los efectos de esta fórmula únicamente se deberá incluir en esta celdilla la porción real de participación en la forma de asociación y no la experiencia por el 100% (Inventaría cuando dicho porcentaje sea igual o superior al 20% ya mencionado).

Nota: Con base en el numeral 3.2.3 (a) (i) del Documento de Contratos para diligenciar los formatos 3A y 3B que acreditan las requisitos habilitantes de experiencia general, para la contratación de moneda se ha tomado como base de referencia la tasa del día de la adjudicación oficial del contrato (28 de diciembre de 2001), en el cual se adaptaron las correspondientes divisas.